

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015
SOLICITANTE: CONTRALOR DE LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
DIRECCIÓN GENERAL DE
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y
DE REGISTRO PATRIMONIAL.**

**MINISTRO PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA.
SECRETARIA: CARMINA CORTÉS RODRÍGUEZ**

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día diecinueve de febrero de dos mil dieciocho.

**Vo. Bo.
SR. MINISTRO:**

**V I S T O S; y
R E S U L T A N D O:**

Cotejó:

PRIMERO. Por oficio ***** presentado el dieciséis de febrero de dos mil quince, el Ministro Presidente de este Alto Tribunal instruyó al Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que realizara una auditoría de investigación al área de la Dirección General del Canal Judicial, toda vez que existían inconformidades del Personal que trabaja en dicha área¹.

SEGUNDO. El dieciocho de febrero de dos mil quince, el encargado del Despacho de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial y la Subdirectora General de Responsabilidades Administrativas, acompañados de las testigos de asistencia, conforme al artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas los Servicios Públicos y 4 del Acuerdo General Plenario 9/2005, hicieron constar

¹ Foja 1 a 12 del Tomo I-A.

como hecho notorio que en la liga “Síntesis Informativa” publicada por la Dirección de Comunicación y vinculación Social en el Portal de Intranet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, apareció la referencia a una nota periodística titulada “Funcionarios Del Canal Judicial denuncian acoso”, publicada por el rotativo “*****”, motivo por el cual se realizó su búsqueda, así como de otras notas publicadas en distintas direcciones URL (uniform resource locator), obteniendo la impresión².

En la misma fecha, el encargado del despacho de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas, ante las testigos de asistencia, realizó constancia de que se atendieron en las instalaciones de la Contraloría a *****, por el Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, **quienes acudieron para relatar hechos relacionados con la nota periodística titulada “Funcionarios del Canal Judicial denuncian acoso”, publicada en los rotativos “*****” y “*****”**³.

El dieciocho de febrero de dos mil quince, el licenciado *****, encargado del despacho de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas, ante testigos de asistencia con adscripción a la citada dirección, constató que en las instalaciones de la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se atendieron a *****, **quienes refirieron haber acudido para relatar hechos relacionados con la nota periodística titulada “Funcionarios del Canal Judicial denuncian acoso”, publicada en ese mismo día en los rotativos “*****” y “*****”**⁴.

TERCERO. El diecinueve de febrero de dos mil quince, el encargado del Despacho de la Dirección General de

² Foja 13 del Tomo I-A.

³ Ibidem, foja 14.

⁴ Foja 14 a 20 del Tomo I-A.

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial y la Subdirectora General de Responsabilidades Administrativas, acompañados de los testigos de asistencia, conforme al artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servicios Públicos y 4 del Acuerdo General Número 9/2005, de veintiocho de marzo de dos mil cinco del Pleno de la Suprema Corte De Justicia de la Nación, relativo a los Procedimientos de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos de este Alto Tribunal y del Seguimiento de la Situación Patrimonial de éstos y de los Servidores Públicos a los que se refiere el artículo 222 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (en lo sucesivo, “el Acuerdo General 9/2005”), se percataron de que en la liga “Síntesis Informativa”, publicada por la Dirección General de Comunicación y Vinculación Social en el portal de intranet de este Alto Tribunal, aparecía la referencia a una nota periodística titulada “Hace precisiones a nota sobre Canal Judicial” y “Escándalo en el Canal Judicial”, en las fojas 15 y 16 de la sección “Suprema Corte de Justicia de la Nación”, de las cuales se obtuvo la impresión, publicada por el rotativo “*****”, lo anterior, se hizo constar en razón de que las notas se encuentran vinculadas con la instrucción del Ministro Luis María Aguilar Morales en el oficio *****⁵.

Ese mismo día, en la Oficina de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial de la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación compareció a rendir su declaración *****, la cual presentó un escrito narrando diversos hechos sucitados con ***** en el área del Canal Judicial y también fuera de las instalaciones, en la hora de la comida,

⁵ Foja 21 del Tomo I-A.

manifestando que fue testigo de los insultos que el subdirector hacía respecto a diversos empleados, señaló que no había equidad para la división de la carga de trabajo ni para los permisos para faltar a laborar, ya que se privilegiaba a los allegados del subdirector. Por último, manifestó que en una ocasión, mediante una junta le expresaron las inconformidades laborales al Director *****⁶.

CUARTO. El veinte de febrero de dos mil quince, en las oficinas que ocupa la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial de la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, compareció ***** y presentó fotografías que le envió el servidor público *****. Asimismo, manifestó que dentro del Canal Judicial se realizaban juegos de carácter sexual en los que participan los varones, señalando a los servidores públicos ***** y una persona con el apellido “*****”⁷.

QUINTO. El veintitrés de febrero de dos mil quince, el encargado del Despacho de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial y la Subdirectora General de Responsabilidades Administrativas, acompañados de los testigos de asistencia, constató que en la liga “Síntesis Informativa”, de veintiuno de febrero de dos mil quince publicada por la Dirección General de Comunicación y Vinculación Social, en el portal de internet de este Alto Tribunal, aparecía la referencia de la nota periodística titulada “Escándalo en el Canal Judicial”, publicada por el periódico “*****”, respecto de la cual se realizó su búsqueda e impresión. Lo anterior, toda vez que la nota esta vinculada con la instrucción del Ministro Luis María Aguilar Morales recibida mediante oficio ***** , de dieciséis de febrero de dos mil quince, con lo que se daría cuenta al Contralor⁸.

⁶ Fojas 22 a 35 del Tomo I-A.

⁷ Fojas 36 a 42 del Tomo I-A.

⁸ Foja 51 del Tomo I-A.

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

SEXTO. Ese mismo día, en la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial de este Alto Tribunal, se presentó ***** para realizar manifestaciones respecto a los actos ocurridos en el Canal Judicial. A continuación se procede a referir aquéllas que tienen relación con el presente procedimiento disciplinario:

- *****⁹ señaló:

1. Que en horario laboral ***** organizaba torneos de videojuegos o de dominó en su oficina, en los que participaban *****, señalando que los servidores públicos citados había ocasiones en que llegaban en estado de ebriedad.
2. Señaló que ***** abusaba de su posición y que, aparte de llegar en estado de ebriedad, se dirigía de forma inapropiada a las personas que estaban haciendo su servicio social o a las becarias, proponiéndoles situaciones indecorosas como ir a “tomar el trago” o a bailar, dichas conductas no sólo las tenía él sino fomentaba que las realizaran los servidores públicos *****.
3. Señaló que los citados servidores realizaban varios juegos con connotación sexual, en específico narró el juego nombrado “el manto sagrado”, el cual consistía en que mientras una persona se sentaba en una silla y lo tapaban con una manta negra, alrededor de él se colocaban otras personas con la finalidad de golpearlo. Manifestó que en este juego participaban los camarógrafos y gente de producción del área de *****, e indicó que tanto él como ***** participaban en la dinámica del juego sólo para proporcionar

⁹ Fojas 52 a 54 del Tomo I-A.

golpes. Asimismo, exteriorizó que en una ocasión ***** golpeó a un compañero de nombre *****, hasta el punto en el que lo hizo llorar.

- *****¹⁰ manifestó lo siguiente:

Respecto al servidor público *****, señaló que dicha persona fomentó que se consumiera alcohol en las oficinas de la redacción, y para apoyar su dicho entregó una foto en la que se aprecian varias personas dentro de una oficina y en la que se observa un envase de botella.

- A su vez *****¹¹ manifestó lo siguiente:

En una entrevista, ***** lo cuestionó sobre el área de redacción, a lo que el compareciente le respondió que si se refería a que tomaban y se drogaban en esa área, porque ***** ingería bebidas alcohólicas y ***** se drogaba, el Director expresó que investigaría sobre esos hechos.

- *****¹² expresó diversas inconformidades laborales y de trato personal que no tienen relación con el presente procedimiento administrativo.

SÉPTIMO. El veinticuatro de febrero de dos mil quince, el encargado del despacho de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial y la Subdirectora General de Responsabilidades Administrativas, acompañados de las testigos de asistencia, hicieron constar que en la liga “Síntesis Informativa”, publicada en el portal de internet de este

¹⁰ Fojas 56 a 69 del Tomo I-A

¹¹ Fojas 71 a 79 del Tomo A-I.

¹² Fojas 77 a 79 del Tomo I-A

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

Alto Tribunal, aparece la referencia a una nota periodística titulada “Ex trabajadores del canal judicial ratifican ante enviados de la SCJN casos de acoso sexual”, la cual fue publicada por el rotativo “*****”, motivo por el cual se realizó la búsqueda e impresión de la misma.

OCTAVO. Ese mismo día comparecieron ante las oficinas de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial de la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ***** para narrar diversos hechos sucedidos en el Canal Judicial. A continuación se sintetizarán los hechos relacionados con el presente procedimiento:

- *****¹³ señaló en su comparecencia lo siguiente:
 1. Por cuanto a ***** señaló que los indicios de acoso se dieron cuando se negó a tomar bebidas alcohólicas, así como a evitar ser manoseado en sus partes nobles por parte del citado subdirector de producción, acción que señala era común entre los compañeros de trabajo. Menciona que le hizo saber que no estaba de acuerdo con llevarse de esa forma, a lo cual ***** le dijo que tenía que participar en el “ritual del manto sagrado”¹⁴; el compareciente destacó que el citado servidor público es el promotor del ritual y que el Director del Canal Judicial participó en varias ocasiones empleando algún instrumento para golpear con fuerza desmedida a la persona que estuviera en la silla.

¹³ Fojas 87 a 92 del Tomo I-A.

¹⁴ El compareciente señala que consiste en sentar en una silla a una persona, cubrirla con una franela negra, posteriormente la persona es golpeada por varios compañeros incluidos ***** y el director del Canal Judicial *****.

2. Asimismo, se le culpó de haber introducido a una persona al área de camarógrafos durante un evento donde asistieron los Ministros, recibió una llamada de ***** entre las 9:45 y 10:30 de la noche, para reclamarle con gritos y amenazas por introducir a una persona, y lo cuestionó sobre cuales eran sus intenciones. Señaló que dicha llamada fue realizada por ***** en estado de ebriedad, hecho que corroboró con los testimonios de *****, quienes se encontraban esa noche en el Canal Judicial para grabar el noticiero nocturno. Al escrito anexó una serie de fotos, en el que se aprecia un conjunto de personas conviviendo¹⁵.

- ***** señaló que llevaba siete años trabajando en la Dirección General del Canal Judicial, y manifestó diversas inconformidades laborales que no tienen relación con los hechos materia del presente procedimiento disciplinario.¹⁶

NOVENO. Por auto de veinticinco de febrero de dos mil quince, el encargado del despacho de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial y la Subdirectora General de Responsabilidades Administrativas, acompañados de las testigos de asistencia, hicieron constar que en la liga “Síntesis Informativa”, publicada por la Dirección General de Comunicación y Vinculación Social en el portal de intranet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aparecía la referencia a una nota periodística intitulada “Ex trabajadores del Canal Judicial ratifican ante enviados de la SCJN casos de acoso sexual.”, en las fojas 62 y 63 de la sección “Suprema Corte de Justicia de la Nación” de dicha síntesis, de la que se obtiene su impresión, misma que fue publicada

¹⁵ Foja 94 a la 104 del Tomo I-A.

¹⁶ Fojas 105 y 106 del Tomo I-A.

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

por el rotativo “*****”, motivo por el cual se realizó la búsqueda e impresión de tal nota¹⁷.

DÉCIMO. El veintiséis de febrero de dos mil quince, en las oficinas de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial de la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se presentaron a comparecer *****, con el objetivo de narrar diversos hechos sucedidos en el Canal Judicial. A continuación se sintetizarán los hechos relacionados con el presente procedimiento:

- *****, manifestó lo siguiente:
 1. Que desde que llegó ***** al Canal Judicial, hizo a un lado a las personas que ya tenían tiempo trabajando en esa área, a él le asignaron un horario variable de seis a siete de la mañana hasta las seis o siete de la noche, y trabajando periódicamente los sábados o domingos, después de su actividad como asistente de cámaras se le asignaban tareas de mensajero y al cuidado de los vehículos asignados al canal judicial, en general se encargaba del mantenimiento de los automóviles, por lo que no se le respetaba su horario de trabajo.
 2. Respecto a *****, señala que al hacerle saber el exceso de trabajo que tenía asignado le hizo saber que sí lo tenían que poner a trabajar las veinticuatro horas que así tendría que ser, porque por eso le daban el bono.

¹⁷ Foja 111 del Tomo I-A

3. Asimismo, señala que *****, particular de *****, en una ocasión le expresó que su hijo que también trabajaba en el Canal Judicial, tenía que trabajar el doble para desquitar el trabajo que él no hacía, por lo que su hijo ***** tenía que llegar a las seis de la mañana porque el noticiero que iba a cubrir comenzaba a las siete de la mañana y por las diversas actividades adicionales que le asignaban salía entre las ocho o nueve de la noche de ese día.
4. En general, a quienes no eran parte del equipo del Director General del Canal Judicial les exigían más trabajo, incluso, señala que les asignaban las guardias de diciembre, de semana santa y de todos los días inhábiles y no se le pagaban o no le autorizaban otro día de descanso.
5. En la comparecencia narró un accidente vehicular y por el cual tuvo que faltar a trabajar, señaló que *****le hizo saber su descontento por los días que no laboró y sin importarle sus padecimientos, le volvió asignar una carga de trabajo excesiva, hasta que los doctores indicaron por escrito las actividades que podía realizar por lo que *****, me dejó de asignar algunas tareas de las que venía realizando.
6. Señaló que, en una ocasión, tuvo un percance con *****, el cual lo insultó y refirió que lo iba a matar dentro o fuera de las instalaciones del Canal Judicial, la anterior situación fue del conocimiento de *****, no sabe si tomaron cartas en el asunto, pero ***** no volvió a insultarlo.
7. Señala que en otra ocasión le expreso a *****, que no le parecía la forma en que trataban a su hijo, posteriormente, a

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

una semana de la renuncia de *****, ***** le informó que harían cambios y que sus nuevas actividades serían revisar los carros en el estacionamiento del Canal Judicial, a lo cual le hizo saber que por sus características físicas se le complicaba estar en el estacionamiento, por lo que les solicitó un oficio para poder laborar en esa área, informándole que en caso de tener un accidente y no contar con el oficio, la Suprema Corte no se responsabilizaría de esa situación¹⁸.

- ***** señaló lo siguiente:
 1. Manifestó que desde que llegaron ***** al Canal Judicial el ambiente era nocivo, pues entre los compañeros de trabajo existía un juego en el que los golpeaban; ***** se prestaba a este tipo de juegos y se llevaba con algunos camarógrafos con groserías, quienes a su vez acostumbraban a agarrarse algunas partes de su cuerpo, aclarando que él nunca participo en ninguno de esos actos.
 2. Indica que los forzaban a asistir a convivencias y comidas, y que en una ocasión escuchó que ***** llegó en estado de ebriedad y que fue detenido por las personas de seguridad¹⁹.

DÉCIMO PRIMERO. El veintisiete de febrero de dos mil quince, ante las oficinas de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial de la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se presentaron a comparecer *****, con el objetivo de narrar diversos hechos sucedidos en el Canal

¹⁸ Fojas 112 a 116 del Tomo I-A

¹⁹ Fojas 180 a 183 del Tomo I-A.

Judicial. A continuación se sintetizarán los hechos relacionados con el presente procedimiento:

- ***** en su comparecencia señaló lo siguiente:
 1. Respecto al área de producción, le tocó ser testigo de que en el espacio que ocupaba ***** y otros colaboradores, se tocaban ciertas partes de su cuerpo, utilizando un lenguaje vulgar de índole sexual. En alguna ocasión le expresó a ***** del lenguaje soez que utilizaba ***** y me le dijo que él lo iba a ver; sin embargo, no valió la pena, toda vez que ***** participaba en los juegos.
 2. A la hora del noticiero de las nueve, nunca había nadie que pudiera resolver algún problema con la información y, si cuestionaba dónde se encontraba ***** para comentar algún error, frecuentemente le decían que “en la cantina”. Comentó que la única vez que acudió a la oficina del citado ***** , la recibió con los pies encima del escritorio y con su oficina oliendo a alcohol, incluso sabe que le dicen “*****”, se quejó con ***** de esa situación y sólo le contestó que “Sí, ***** es un patán”.²⁰.
- ***** , en su comparecencia, destacó los aspectos siguientes:
 1. Señaló que los problemas comenzaron cuando entró al Canal Judicial ***** como director adjunto de contenidos, porque llegaba a laborar en estado de ebriedad, lo que comúnmente se conoce como “*crudo*”.
 2. ***** llegaba ebrio a la oficina y comenzaba a beber, traía un vaso con hielo y se servía alcohol o bien consumía cerveza. Señaló que en una ocasión ordenó a unos compañeros comprar

²⁰ Foja 189 a 195 del Tomo I-A.

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

cervezas, sin recordar el nombre de quienes eran; cuando llegaron, él cerró la puerta de la oficina e instruyó que sirvieran cerveza y alcohol a todo el personal que se encontraba allí, advirtiéndole que algunos tomaban la cerveza por temor, ignorando si la bebían o no. Asimismo, advirtió que ***** estaba en la puerta viendo quien aceptaba y quien no, respecto de lo cual estima que el hecho de no aceptar, lo tomaba como un desafío pues inmediatamente notó su molestia. Considera que el rechazar tomar fue lo que le ocasionó problemas.

3. Le hizo saber al Director General, que ***** se encerraba a “*embriagarse*”, a lo anterior, ***** confirmó que tomaba algunos tragos en su oficina.
4. Señaló que en ocasiones cuando entraba a la oficina de ***** , lo llegó a encontrar observando pornografía en su computadora y bebiendo alcohol, asimismo, señaló que ***** , compañeros camarógrafos, también les tocó ser testigos de esa situación²¹.

- ***** abundó en los hechos que había narrado en su comparecencia de un día anterior, señalando en esta ocasión que:

Las personas que participan en el juego con motivo del festejo cumpleaños, el cual señaló que se realizaba a un lado de la oficina de ***** , el cual no participaba en la dinámica; al festejado lo llamaban y lo sentaban en una silla y una vez allí le ponían una manta cubriéndolo, apagaban la luz y comenzaban a pegarle con las manos o con los pies. Sobre este punto, recordó que quienes participaban en esa práctica eran ***** , cuyos apellidos no recuerda. Señala que en

²¹ Fojas 197 a 201 del Tomo A-I.

dos ocasiones vió que ***** se asomaba por la puerta que era de vidrio y luego se iba.²².

DÉCIMO SEGUNDO. El dos de marzo de dos mil quince, el encargado del despacho de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial y la Subdirectora General de Responsabilidades Administrativas, acompañados de los testigos de asistencia, hicieron constar que en la liga “Síntesis Informativa”, del uno de marzo del citado año, publicada por la Dirección General de Comunicación y Vinculación Social en el portal de intranet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aparecía la referencia a dos notas periodísticas intituladas “El Canal Judicial, en descomposición”, en las fojas 5 a 8, así como la 33 y la 34, de la sección “Suprema Corte de Justicia de la Nación” de dicha síntesis, de la que se obtuvo su impresión, misma que fue publicada por el rotativo “*****”, motivo por el cual se realizó la búsqueda e impresión de tal nota²³.

DÉCIMO TERCERO. Ese mismo día, ***** comparecieron en las oficinas de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial de la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el objetivo de narrar diversos hechos sucedidos en el Canal Judicial.

- ***** presentó un escrito en el que realizaba aclaraciones a la declaración que rindió el diecinueve de febrero de dos mil quince, acompañando diversas documentales para apoyar su declaración, entre las que se encuentra la impresión de fotografías de frases exhibidas en la oficina de ***** , historial de conversaciones sostenidas

²² Foja 202 a 204 del Tomo A-I

²³ Foja 229 del Tomo I-A

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

entre ***** con la finalidad de demostrar el trato hostil, así como documentos respecto a su salud²⁴.

• Por su parte, *****, en lo que interesa al presente procedimiento, señaló:

1. Recordó que en una ocasión, mientras se transmitía el mundial de Sudáfrica, en dos mil diez, en la oficina de la Dirección General, ***** bebía whisky en compañía de *****, y en otras ocasiones también ingería alcohol con *****.
2. El ambiente de trabajo que se vivía durante el tiempo que laboró en el Canal Judicial era hostil, indisciplinado y poco profesional, ya que los directivos tenían prácticas adquiridas en medios de comunicación privados y que no correspondían a la seriedad de la investidura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; citó y narró como ejemplo, la actividad llamada “el manto sagrado”, señalando que en el área de la dirección de producción, a cargo de *****, cubrían por lo regular a uno de los camarógrafos o asistentes con una sábana o cualquier tipo de ropa y acto seguido se disponían a pegarle a la persona en cuestión con todo tipo de golpes, en diferentes partes del cuerpo, incluso, tocando y golpeando partes íntimas de las personas; en varias ocasiones, ***** decidía y ordenaba a quién tenían que realizarle esta práctica, incluso, él llegaba a participar en los golpes, en los empujones, aventándose contra el agredido; en esas prácticas, también vió que participó ***** y algunos camarógrafos y productores del área, aclarando que él nunca participó en esos

²⁴ Fojas 230 a 231 del Tomo A-I.

juegos que eran cotidianos, ya que incluso en los cumpleaños se celebraba el “manto sagrado”.

3. Respecto a ***** agregó que además de las anteriores practicas descritas, él se subía encima de sus compañeros camarógrafos y simulaba tener relaciones sexuales con ellos. Además, le consta que ***** y su equipo de producción tenían la costumbre de revisar páginas de internet con pornografía y/o material sugestivo, haciéndolo en los equipos de cómputo de la Corte, y realizando bromas soeces de lo que allí veían, además de tener fotos de este tipo en sus lugares de trabajo.
4. Por otra parte, señaló que también era una práctica común que en la oficina de ***** jugaran “play station” y juegos similares, él y su equipo de producción, durante la jornada de trabajo.
5. Respecto a ***** , era una práctica común y de todos conocida, que él estuviera consumiendo alcohol, por lo regular, tequila, situación que sabía y permitía ***** , ya que en diversas ocasiones llegaron a comentarlo como queja en la Dirección General. Era del conocimiento del público que durante las tardes, ***** acudía a restaurantes, bares y cantinas, ya que regresaba con aliento alcohólico; normalmente, estaba acompañado de ***** , quienes también consumían bebidas alcohólicas, todo esto, también con conocimiento y anuencia del Director General, quienes a veces, ya no regresaban a laborar en las tardes. ²⁵.

DÉCIMO CUARTO. El cuatro de marzo de dos mil quince, el encargado del despacho de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial y la Subdirectora General de Responsabilidades Administrativas, acompañados de las testigos de asistencia, hicieron constar que en la liga “Síntesis Informativa”, del uno de marzo del citado año, publicada

²⁵ Fojs 349 a 354 del Tomo I-A

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

por la Dirección General de Comunicación y Vinculación Social en el portal de intranet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aparece la referencia a dos notas periodísticas intituladas “El Canal Judicial, en descomposición”, en las fojas 5 a 8, así como la 33 y la 34, de la sección “Suprema Corte de Justicia de la Nación” de dicha síntesis, de la que se obtuvo su impresión, misma que fue publicada por el rotativo “*****”, motivo por el cual se realizó la búsqueda e impresión de tal nota²⁶.

DÉCIMO QUINTO. Por auto de esa misma fecha se tuvo por recibido el oficio *****²⁷, del Ministro Presidente de este Alto Tribunal, en el que en atención a los múltiples informes recibidos en relación con inconformidades, ordenó la práctica de una “auditoría de investigación” a la Dirección General del Canal Judicial. Por lo anterior, se advirtió que ante la Contarloría se habían tramitado diversos asuntos relacionados con el Canal Judicial, demostrándolo en la siguiente tabla:

Exped.	Etapas	Hechos	Probable Responsable
*****	Procedimiento concluido	Acoso sexual: proposiciones verbales y tocamientos lascivos	*****
*****	Investigación concluida	Acoso laboral: regaños injustificados, faltas de respeto y presión laboral	*****
*****	Investigación concluida	Acoso laboral: regaños injustificados, malos tratos inequitativos en el trabajo y presión laboral	*****
*****	Procedimiento en trámite	Almacenar y conservar en el equipo de cómputo asignado por el Alto Tribunal, imágenes	*****

²⁶ Foja 356 a 362 del Tomo I-A

²⁷ Foja 1 del Tomo I-A, oficio en el cual el Ministro Presidente ordena la investigar al área de la Dirección General del Canal Judicial.

PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 6/2015

		de sexo explícito y contenido lascivo, incluso pornográfico	
--	--	---	--

En el mismo auto se señaló que en el cuaderno de investigación C.I. ***** y en el procedimiento de responsabilidad administrativa P.R.A. *****, la Contraloría formuló a *****, en su carácter de Director General del Canal Judicial, diversas recomendaciones.

Se invocó como hecho notorio que los días dieciocho, diecinueve, veintiuno, veinticuatro y veinticinco de febrero y uno de marzo del año en curso, se publicaron en la síntesis informativa del portal de intranet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en diversas páginas web, notas informativas, con los siguientes títulos, de las cuales se obtuvo su impresión:

	Nombre del artículo	Sitio Web	Dirección URL
1	"Funcionarios del Canal Judicial denuncian Acoso"	Síntesis informativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación	http://intranet.scjn.pjf.gob.mx/Lists/Lista%20Síntesis%20Informativa/Attachments/5907/Síntesis-18febrero2015.pdf
2	"Funcionarios del Canal Judicial denuncian acoso"	*****, http://www.lajornadasanluis.com.mx	http://lajornadasanluis.com.mx/nacional/18/02/2015/funcionarios-del-canal-judicial-denuncian-acoso/%20%3Chttp://lajornadasanluis.com.mx/nacional/18/02/2015/funcionarios-del-canal-judicial-denuncian-acoso/%3E
3	"Funcionarios del Canal Judicial denuncian acoso"	"Síntesis Informativa Digital del CEN PRD" http://agendapoliticanacional.infp.prd.org.mx	http://agendapoliticanacional.infp.prd.org.mx/resumen.php?articulo_id=385008
4	"Funcionarios del Canal Judicial denuncian acoso"	*****, http://www.lajornada.unam.mx	http://www.jornada.unam.mx/2015/02/18/politica/004n2pol
5	Sin título	"Teléfono rojo. *****" http://www.quadratin.com.mx	http://www.quadratin.com.mx/opinion/Telefono-Rojo-408/
6	"Milicia y Justicia" / Revisión de cuartel militar	*****, http://www.lajornada.unam.mx	http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/01/16/milicia-y-justicia-revision-de-cualtel-militar-1049.html

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

7	Impresión de la pantalla que muestra los resultados de la búsqueda en la red social “Twitter” de las palabras “acoso canal judicial”.	“Twitter” http://www.twitter.com	
8	“El Correo Ilustrado” (hace precisiones a nota sobre el Canal Judicial).	“*****”, http://www.lajornada.unam.mx	http://www.jornada.unam.mx/2015/02/19/correo
9	“Milicia y Justicia / Mantener la Lealtad”. Escándalo en el Canal Judicial.	“*****”, http://www.lajornada.unam.mx	http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/02/20/milicia-y-justicia-mantener-la-lealtad-9781.html
10	“Ex trabajadores del Canal Judicial ratifican ante enviados de la SCJN casos de acoso sexual”.	“*****”, http://www.lajornada.unam.mx	http://www.jornada.unam.mx/2015/02/24/index.php?section=politica
11	“Ex trabajadores del Canal Judicial ratifican ante enviados de la SCJN casos de acoso sexual”.	“*****”, www.lajornadasanluis.com.mx	http://lajornadasanluis.com.mx/nacional/24/02/2015/ex-trabajadores-del-canal-judicial-ratifican-ante-enviados-de-la-scjn-casos-de-acoso-sexual/
12	“El Canal Judicial, en descomposición”	http://hemeroteca.proceso.com.mx/?page_id=397181	http://hemeroteca.proceso.com.mx/?page_id=278958&a51dc26366d99bb5fa29cea4747565fec=397239
13	“El Canal Judicial, en descomposición”	Revista “*****”	Versión impresa

Asimismo, se tuvieron por recibidas las actas de comparecencia de diversos servidores y exservidores públicos adscritos a la Dirección General del Canal Judicial, que a partir del dieciocho de febrero del dos mil quince en que se publicó la primera nota periodística de las listadas, se presentaron en la Contraloría para exponer diversas quejas relativas al trato que reciben en su área de trabajo y que denotan el clima laboral que impera.

Con lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia de responsabilidades en términos de los artículos 4 del Acuerdo 9/2005 y 47 de la Ley Federal de Responsabilidades

Administrativas de los Servidores Públicos, la Contraloría ordenó integrar el expediente y registrarlo con el número 6/2015.

Se acordó que toda vez que las investigaciones y procedimientos que se han tramitado en la Contraloría en relación con la Dirección General del Canal Judicial versan sobre probable acoso laboral o sexual y faltas de respeto en agravio de servidores públicos adscritos a esa dirección general, que en las notas periodísticas cuya impresión se obtuvo se menciona que “funcionarios” del Canal Judicial denuncian acoso, y que en las comparecencias que se han recibido en la Contraloría se hizo referencia a hechos que pudieran implicar que diversos servidores públicos de la mencionada Dirección General, entre ellos el Director General y el Subdirector General, no se conducen con buena conducta hacia las personas con las que tienen relación con motivo del cargo público que desempeñan, los cuales, podrían constituir acoso laboral, incluso acoso sexual, se proponía **iniciar investigación de responsabilidades administrativas sobre conductas probablemente constitutivas de acoso laboral, acoso sexual, faltas de respeto**, contratación de personal con el que se tienen vínculos de parentesco o interés personal y, en general de cualquier conducta que se aparte de las obligaciones que tiene todo servidor público conforme al artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos o que resulten constitutivas de infracción administrativa en términos del artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, atendiendo a las consideraciones que enseguida se precisan.

Conforme a lo anterior, se acordó que la materia de la investigación sería la comisión de conductas realizadas de manera sistemática y continua por parte de servidores públicos de la Dirección General del Canal Judicial probablemente constitutivas de acoso laboral, acoso sexual, faltas de respeto, contratación de personal con

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

el que se tienen vínculos de parentesco o interés personal o cualquier acto que implique no conducirse con buena conducta en el desempeño del cargo público conferido, así como apartarse del cumplimiento de alguna de las obligaciones previstas en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, o que resulte constitutiva de infracción en términos del artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Se solicitó un plazo de seis meses, a partir de que la Contraloría recibió el proveído del Ministro Presidente en el que autorizara la investigación en los términos que se plantean.

Respecto de los cuadernos de investigación ***** se determinó su archivo por considerar que no se contaba con elementos probatorios suficientes que acreditaran acoso laboral, sexual o faltas de respeto. Por su parte, en el diverso procedimiento de responsabilidad administrativa **P.R.A. *******, en relación con el acoso sexual ambiental, se determinó que no había elementos para iniciar procedimiento, pues aun cuando estaban acreditados los hechos que configuran el acoso sexual ambiental, no se tenían plenamente identificados los servidores públicos implicados que permitieran iniciar procedimiento.

Atento a lo anterior y con la finalidad de integrar la investigación, **la Contraloría solicitó autorización para tomar en cuenta en la presente investigación los elementos probatorios que se recabaron en los expedientes antes citados, así como los que obran en el procedimiento de responsabilidad administrativa P.R.A. *****.**

Por último, ordenó girar el oficio correspondiente para remitir el expediente a la Presidencia de este Alto Tribunal, por conducto de la Secretaría Jurídica de la Presidencia²⁸.

DÉCIMO SEXTO. El mismo día, *****, se presentaron a comparecer a las oficinas de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial de la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para denunciar actos realizados en el Canal Judicial. A continuación se sintetizan las declaraciones, en lo que interesa al presente procedimiento:

- ***** manifestó lo siguiente:

1. Agregó que en varias ocasiones, en específico los viernes, le tocó ver que ***** (el último considera que sólo para quedar bien), se iban al “Salón Corona” a comer y regresaban “encendidos” o “flameados”, con un color rojizo, oliendo a alcohol. La anterior situación se podía repetir hasta tres veces por semana, y ella lo sabía porque las personas que realizan el servicio social se quedaban a cuidar el área y veían cuando regresaban.
2. Respecto al jefe de redacción *****, manifestó que constantemente guardaba en su cajón del escritorio hasta tres botellas de refresco de toronja de la marca “Fresca” o “Squirt” que mezclaba con alguna bebida alcohólica, y olía fuertemente a alcohol; ella se percataba porque él le corregía todos los textos o

²⁸ Fojas 356 a 362 del Tomo I-A.

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

notas que se entregaban y tenían que entrar a su oficina para que les revisara el trabajo.²⁹

- Por su parte, ***** manifestó que:
 1. Advirtió que ***** llegaba en estado de ebriedad y ***** lo hizo en una ocasión, específicamente el jueves diecisiete de junio después del partido de México contra Francia, de lo percató en el momento en que los abrazó y expreso “disfrútenlo” refiriéndose a la victoria de México. Añadió que ***** sabía perfectamente sobre la conducta de ***** , lo cual, a su consideración, lo avalaba ³⁰.
- Por último, ***** refirió lo siguiente:
 1. En donde se encontraba su lugar de trabajo permitía escuchar los insultos hacía el personal, así como percatarse de como se llevaban entre los compañeros, en específico menciona a ***** , del cual no recuerda apellido. Señaló que él provocaba un ambiente vulgar al referirse con groserías y realizar tocamientos de los genitales a otros compañeros de trabajo, a quienes detenían por la espalda o de frente. Esa situación llegó al grado que tomó la decisión de hablar con la persona citada para evitar dichos comportamientos, avisándole a su superior ***** , el cual le dijo que no lo hiciera porque podría faltarle al respeto, pues ya lo habían reportado antes ***** . Derivado de lo anterior, envió a

²⁹ Fojas 363 a 365 del Tomo I-A.

³⁰ Fojas 367 a 370 del Tomo I-A

***** a la sede de Revolución, aproximadamente como dos meses, y regresó con la misma actitud.

2. Recordó que en una ocasión, aproximadamente a las nueve o nueve y media de la noche, una vez que concluyó el noticiero, entró a la oficina de ***** para preguntarle a qué hora sería su llamado, ya que su jefe ***** no se encontraba, y advirtió que lo encontró jugando dominó con *****, ***** y algunos otros compañeros que no recuerda el nombre, asimismo, señaló que tenía una botella de alcohol en el escritorio de ***** y servido un vaso, sin poder especificar algún elemento adicional, pero lo que sí recuerda es que se percibía un olor a alcohol. Señala que la anterior práctica era continua, es decir, forma parte de lo cotidiano. Que ***** conocía de esta situación ³¹.

DÉCIMO SÉPTIMO. Por oficio *****, suscrito por el Secretario Jurídico de la Presidencia, recibido en la Contraloría el cinco de marzo de dos mil quince³², en el cual se informó lo siguiente:

“Por instrucciones del Ministro Luis María Aguilar Morales, acuso de recibo de su oficio *****, de cuatro de marzo de dos mil quince, por el que remite el expediente de investigación de responsabilidades 6/2015, de cuyo contenido se desprende el acuerdo de cuatro de marzo de dos mil quince.

Atento a dicho proveído, **se toma conocimiento del inicio de la investigación aludida en relación con la Dirección Gneral del Canal Judicial, así como de la materia, plazo y trámite alrededor de la que aquella se desarrollara**”.

Por acuerdo de **cinco de marzo de dos mil quince**³³, se tuvo por recibido el oficio *****, por virtud del cual el Secretario Jurídico de la Presidencia de este Alto Tribunal remitió el cuaderno de investigación *****.

³¹ Fojas 382 a 385 del Tomo I-A.

³² Foja 387 del Tomo I-A.

³³ Fojas 388 a 393 del Tomo I-A.

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

Se acordó que la materia de la investigación sería la comisión de conductas realizadas por parte de servidores públicos de la Dirección General del Canal Judicial probablemente constitutivas de acoso laboral, acoso sexual, faltas de respeto, contratación de personal con el que se tienen vínculos de parentesco o interés personal o cualquier acto que implique no conducirse con buena conducta en el desempeño del cargo público conferido, así como apartarse del cumplimiento de alguna de las obligaciones previstas en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, o que resulte constitutiva de infracción en términos del artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Asimismo, se acordó que el plazo para llevarse a cabo la investigación, considerando que el oficio ***** fue recibido el diecisiete de febrero de dos mil quince, el plazo deberá **iniciar al día siguiente, esto es, el dieciocho de febrero y concluir el dieciocho de agosto de dos mil quince.**

Se tuvieron como hechos notorios las tres comparecencias que se realizaron el cuatro de marzo de dos mil quince, de ***** . Y toda vez que atento a quienes habían comparecido a formular queja ante la Contraloría respecto a que en la Dirección General del Canal Judicial, se consumían bebidas alcohólicas, se exhibe y se veía pornografía en los equipos de cómputo y además se realizaban juegos y tocamientos de índole sexual, la Contraloría consideró necesario constatar su existencia, por lo anterior, se ordenó la práctica de inspección en las instalaciones de la Dirección General del Canal Judicial, se instruyó al

personal autorizado para que actuando de manera conjunta o separadamente, se constituyeran a las instalaciones citadas para practicar la inspección de las oficinas de las siguientes personas:

1. *****.
2. ***** o de quien ocupe actualmente la Subdirección General del Canal Judicial.
3. *****
4. *****
5. *****
6. *****
7. *****.

Se señaló que el objeto de la inspección sería revisar las oficinas y el mobiliario a efecto de identificar imágenes u objetos de contenido sexual o de sexo explícito; localizar bebidas alcohólicas en el lugar de trabajo de los citados servidores públicos; y examinar la información que tiene bajo resguardo o que utilizan para sus actividades, así como las páginas de internet a las que tienen acceso con dichos equipos y, en su caso, las comunicaciones que intercambian mediante la cuenta de correo institucional que tengan asignada.

Se autorizó recabar documentos, objetos, bloquear equipos de cómputo y espacios de trabajo incluso con sellos de seguridad **o realizar cualquier otra acción que durante la diligencia se estimara necesaria**, relacionada con la investigación, ordenada por el Ministro Presidente de este Alto Tribunal, en el oficio *****.

Ordenó girar oficio al Director General de Tecnologías de la Información para que designara a cuatro servidores públicos adscritos a esa área, a efecto de que **auxiliaran al personal de la Contraloría** para realizar soportes informáticos de los equipos de cómputo. Por lo anterior, se acordó que al momento en que los autorizados se constituyeran en la Dirección General del Canal Judicial, tendrían que

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

comunicar al titular y a los servidores públicos citados que se ordenó una diligencia de inspección, por lo tanto, tendrían que prestar las facilidades necesarias para su desarrollo.

DÉCIMO OCTAVO. El mismo día del acuerdo anterior, ***** **se presentaron a comparecer** a las oficinas de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial de la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para denunciar actos realizados a la Dirección del Canal Judicial. Con respecto a aquéllos que tienen relación con este asunto, se manifestó lo siguiente:

- ***** señaló que:

En el área de redacción siempre olía a alcohol, incluso cuando hacía frío no podían cerrar las ventanas ni apagar el aire acondicionado, ***** no permitía que se cerraran o se apagara bajo ninguna circunstancia. A su vez, ***** los mandaba a comprar refrescos como de naranjadas y siempre tomaba en su taza y la otra la guardaba en su escritorio. Con ***** señala que nadie hablaba de cerca sólo con ***** de noticias internacionales o con ***** la “community manager”. Sobre el olor a alcohol le preguntó a ***** sobre si ***** tomaba en la oficina, a lo que asintió, señala que incluso escuchó a varios compañeros de producción que decían “ah si tu jefe el borracho”, incluso alguien llegó a expresar “pensé que ya no lo hacía”; le sorprendió que todos lo tamaran con tanta naturalidad³⁴.

³⁴ Fojas 394 a 398 del Tomo I-A.

- Por su parte, ***** abundó respecto al tema de que le habían informado que la mandarían a trabajar al edificio alterno de Revolución.³⁵

DÉCIMO NOVENO. El seis de marzo de dos mil quince, en las oficinas de la Dirección General del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se constituyó la Subdirectora General de Responsabilidades Administrativas con los testigos de asistencia, a fin de practicar inspección en las oficinas de los servidores públicos ***** o de quien ocupe actualmente la Subdirección General del Canal Judicial, *****.

Dicha diligencia se entendió con *****, informándole en ese acto que se ordenó practicar inspección en las oficinas de los servidores públicos mencionados, y que por lo tanto, deberá prestar las facilidades necesarias para su desarrollo, es decir, permitir el acceso a los equipos de cómputo oficiales que tengan asignados.³⁶

Con respecto a esta diligencia, que constituyó un importante medio de prueba en el procedimiento disciplinario que nos ocupa, se tiene lo siguiente:

- **Acta de inspección de la oficina del Director General del Canal Judicial Licenciado *******, la cual practicó la Subdirectora General de Responsabilidades Administrativas, acompañada con dos testigos de asistencia pertenecientes a la citada Dirección, así como un testigo de asistencia perteneciente a la Dirección General de Tecnologías de la Información.

³⁵ Fojas 400 a 402 del Tomo I-A

³⁶ Fojas 420 y 421 del Tomo I-A.

PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 6/2015

“... Al revisar los cajones del archivero metálico de color negro y marfil ubicado debajo de su escritorio, se aprecian diversos objetos, como documentos, artículos de papelería y personales como fichas bancarias, una chequera. (...) Dicho librero, en la parte inferior tiene cuatro gavetas con llave, al abrirlas se encuentran en ellas documentos, objetos personales, tazas sin rastro de su contenido, cuadros con fotografías personales, artículos de decoración, revistas, publicaciones y una caja.(...) se revisan dos archiveros que ahí se localizan, mismos que contienen multiplicidad de documentos, artículos personales, agendas, folders, fotos y discografía musical. En la parte superior del archivero que está junto al frigobar, se localizan termos y una licorera de metal conocida como “anforita” o “pachita”, sin olor a alcohol. Acto seguido, se abre el frigobar, en el que se aprecia la existencia de botellas pequeñas de agua, sodas y una de cristal. (...) De todo lo anterior, se obtuvo la memoria fotográfica respectiva, cuay impresión, en 58 (cincuenta y ocho) fojas se agregan a la presente acta.(...) Así mismo, se hace constar que previo a la revisión del mobiliario de la oficina a inspeccionar, el licenciado *****, proporcionó en una tarjeta su clave de acceso al equipo de computo que tiene asignado, con número de inventario *****, dicha clave es “*****” y en su presencia se apagó su computadora y el Ingeniero *****adscrito a la Dirección General de Tecnologías de la Información retiró el disco duro con número de serie ***** (se obtiene fotografía para agregarse a esta acta), acto seguido se realiza el respaldo electrónico del disco duro del referido equipo de cómputo, el cual inició a las once horas con treinta y dos minutos, a la par que la revisión del mobiliario, pero el respaldo respectivo concluyó a las trece horas con treinta minutos; hecho lo anterior, el Ingeniero *****adscrito a la Dirección General de Tecnologías de la Información volvió a instalar el referido disco duro en la mencionada computadora. En cuanto al procedimeinto para obtener el citado respaldo, el Ingeniero *****, adscrito a la Dirección General de Tecnologías de la Información explicó: Dicho respaldo se conoce como la obtención de imagen forense de la unidad de almacenamiento, el cual a su término el equipo denominado “tableau”, generó una cadena de verificación de integridad de la copia fiel del disco duro (algoritmo de digestión ***** y *****) que es la siguiente “*****” y “*****”, con la cual se hace constar que con esta imagen (entendiéndose por imagen la copia fiel del disco duro) se podrá, con posterioridad, realizar el análisis forense de su contenido. De dicha cadena de verificación se obtiene la fotografía respectiva y se agrega a la presente acta (...)”³⁷

- **Acta de inspección de la oficina del Licenciado *****,** la cual llevaron a cabo el Dictaminador II, adscrito a la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial, ante una

³⁷ Fojas 423 y 424 del Tomo I-A del expediente en el que se actúa.

testigo de asistencia adscrita a dicha Dirección General y con el Subdirector de área adscrito a la Dirección General de Tecnologías de la Información.

“(…) el personal comisionado para la presente diligencia hace constar lo siguiente:

1. El archivero horizontal que se ubica al fondo de la oficina, al que le corresponde el número de serie ***** (.....), está integrado de cinco anaqueles, en el primero se encuentran discos de música, vídeos con portadas del canal judicial, discos regrabables, artículos de limpieza, caja de Kleenez entre otros objetos; en el segundo anaquel destacan discos de música, algunos libros, consumibles alimenticios; en el tercer anaquel hay carpetas, tazas, una botella de plástico cerrada con la marca impresa de “xango” mezcla de jugos de frutas; en el cuarto anaquel, se observan carpetas, productos de imagen corporativa (carpetas, libretas, termos, material de oficina, todos con el nombre impreso del Canal Judicial), una lámpara de emergencia; en el quinto anaquel hay hojas reciclables, productos de imagen corporativa (carpetas, libretas, plumas, termos, todos con el nombre impreso del Canal Judicial) y dos cajas con el nombre del programa “Desafío Jurídico” que contiene una “USB con forma de mallette, un termo y una bolsa de tela” todo con el nombre impreso de dicho programa. En la parte superior del mencionado archivero se encuentran libros y desodorantes para el ambiente. De lado derecho del archivero, se encuentra un rota folio, un pizarrón blanco y dos cuadros con la inscripción del canal judicial en la parte superior.

2. Sobre el escritorio al le corresponde el número de inventario ***** (...), se encuentran periódicos, libros, material de papelería como plumas, lápices, una carpeta personal de trabajo, bocinas de un equipo personal de audio empotrado en la pared de lado derecho, un equipo de computo “lap top” con número de serie ***** (...) Asimismo, se hace constar que el maestro ***** adscrito a la Dirección General de Tecnologías de la Información retiró el disco duro con número de serie ***** , acto seguido se realiza el respaldo electrónico del disco duro del referido equipo de cómputo, el cual concluyó a las doce horas con diez minutos; hecho lo anterior, el maestro ***** (...) volvió a instalar el referido disco duro en la mencionada computadora.

En cuanto al procedimientos para obtener el respaldo, el maestro ***** (...) generó una cadena de verificación de integridad de la copia fiel del disco duro (algoritmo de digestión ***** y *****) que es la siguiente “*****” y “*****”, con la cual se hace constar que con esta imagen (...) se podrá, con posterioridad, relizar el análisis forense de su contenido.(...)

3. El archivero que se encuentra debajo del escritorio señalado en el punto dos, consta de tres cajones, en el tercero ubicado abajo hacia arriba destaca documentación oficial, personal, carpetas, folders de reciclaje, libretas y una película. En el segundo, se observa material de oficina, artículos personales y una bocina portátil; y, en el primero material de oficina, cables, tarjetas de presentación, dulces, herramientas y artículos de limpieza dental. Al archivero que nos ocupa le corresponde el número de serie *****(...)

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

4. En la mesa de madera a la que le corresponde el número de serie ***** (...) se encuentran seis tazas, dos vasos de vidrio, una cafetera, un recipiente de plástico anaranjado, folletos del canal judicial y seis cajas individuales selladas, correspondientes al trabajo denominado “PSdos” “*****” “el domicilio del diálogo” con diez “DVD”, cada uno. (...)

5. Sobre el archivero vertical con número de inventario ***** (...) se encuentra instalado un televisor marca “SONY BRAVIA” (...) Asimismo, dicho archivero consta de cuatro cajones, de los cuales, contando de arriba hacia abajo, en el primero destacan folletos con publicidad del canal judicial, bolsas de café, revistas, cables, un bote de plástico. En el segundo cajón se observan once carpetas con documentación oficial. En el tercer cajón puede observarse un tóner, material de imagen corporativa, papelería oficial, sobres, hojas embretadas del canal judicial y un porta teclado de escritorio. En el cuarto cajón se aprecian, entre otros objetos, cables, teclado, material de imagen corporativa, una caja de cartón vacía de una cafetere. De lado izquierdo de este archivero se encuentran fijas en la pared siete tablas de documentos informativos(...) ³⁸”

- **Acta de inspección de la oficina del Licenciado *******, la cual llevó a cabo el dictaminador I y dos testigos de asistencia, adscritos a la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial, así como un auxiliar de la Dirección General de Tecnologías de la Información.

“(...)se procede a la revisión del mobiliario localizado en esta oficina, comenzando por el archivero que se encuentra al lado izquierdo de la entrada, en la gaveta superior se observa papelería oficial del Director General del Canal Judicial en carta y media carta, así como diversos sobres, aproximadamente diez Folletos denominados “Manual de estilo del Canal Judicial” y una caja de cartón que contiene un termo promocional de dicho Canal. En la segunda gaveta se observan más folletos del “Manual de estilo”, ocho tazas promocionales del Canal Judicial, cuatro paquetes de videos cerrados de la serie “Los Juicios de la Revolución”, uno de “Expresiones” y tres más de “Pino Suárez dos. El domicilio del diálogo”, todos editados por el Canal Judicial, y un paquete semiabierto que contiene folletería del Canal Judicial. En la tercer gaveta, se observan cuatro paquetes de doce latas de refresco de la marca “Coca-cola”, catorce paquetes de vasos desechables de unicel, impresiones de diversos papeles en hojas sueltas. Finalmente, la cuarta gaveta se encuentra llena de carpetas

³⁸ Fojas 484 a 486 Tomo I-A

PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 6/2015

de piel sintética, color negra, en paquetes cerrados cada unas, que corresponde a material promocional del Canal Judicial.

En el segundo archivero localizado a la derecha de la oficina se advierte, en la primer gaveta superior, papelería del Canal Judicial, diversas carpetas de plástico vacías color blanco y negro y dieciocho “CD’s” que corresponden a la tercer temporada de programa “Desafío Jurídico” del Canal Judicial. En la segunda gaveta se observa folletos y manuales, así como diversa documentación oficial y de carácter personal, contenida en folders o carpetas. En la tercer gaveta, se observa un archivero expandible de plástico color negro y seis carpetas de plástico que contienen papelería personal del licenciado *****, folletos del Canal Judicial, así como folders y documentación oficial y personal, papelería del Canal Judicial y libretas “florete” de diversos registros del área. En la cuarta gaveta se observan organizadores de documentación color verde con documentación oficial, así como engargolados de documentación administrativa del área y sobres con documentación oficial.

Luego, en el estante con dos puertas localizado en el lado derecho, al fondo de la oficina, se localiza en cada uno de los cinco compartimentos, diversa despensa de la que se aprecian cajas con sobres de té y de “*Splenda*” cerrados, botellas de agua de doscientos cincuenta mililitros, paquetes con refrescos de lata de la marca “Coca-cola”, así como papelería consistente en discos nuevos y diversas copias en “CD” de programas del Canal Judicial. Se precisa que en el segundo compartimento, se localiza un paquete cerrado que contiene una botella de cincuenta mililitros de “Mezcal”, encima de un sombrero de charro y un vaso tequilero, todo envuelto en papel celofán, con una sarape en miniatura con la leyenda “Guadalajara”.

Acto seguido, se solicita autorización a ***** para abrir el enfriador color negro, quien autorizó su apertura y en él se observa una lata de refresco cerrada y una tapa de plástico, color blanco, que contiene una sustancia arenosa, también de color blanco y dos piezas pequeñas de un material sólido, color negro, que señaló se trataba de carbón.

Así mismo, se hace constar que presencia del licenciado *****, se apagó su computador y el licenciado *****, adscrito a la Dirección General de tecnologías de la Información retiró el disco duro con número de serie “*****”(…) acto seguido se realiza el respaldo electrónico del disco duro del referido equipo de cómputo, el cual inició a las trece horas con veintiséis minutos y concluyó a las catorce horas con veintiún minutos; hecho lo anterior, el licenciado ***** volvió a instalar el referido disco duro en la mencionada computadora.

En cuanto al procedimiento para obtener el citado respaldo, el licenciado ***** adscrito a la Dirección General de Tecnologías de la Información explicó: (...) generó una copia del disco duro (...) que es la siguiente: “*****”, con la cual se hace constar que con esta imagen (...) se podrá, con posterioridad, realizar el análisis forense de su contenido. De dicha cadena de verificación de integridad se obtiene la fotografía respectiva y se agrega a la presente acta.

Cabe señalar que para realizar el respaldo se llevó el disco duro al pasillo que lleva al área de redacción, en donde se localiza el equipo de la Dirección General de Tecnologías de la Información en donde se realizaría el proceso de respaldo, momento en el que cerró la oficina materia de esta diligencia y aproximadamente diez minutos después

PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 6/2015

se continuó con la misma. Situación similar ocurrió al momento de ir por el disco.(...)

Sobre el escritorio del licenciado *****, se localizó una bolsa de plástico color gris que contiene algunas veladoras, un teléfono oficial, una taza color verde, un timbre blanco de uso personal, un nextel de uso oficial, papelería, una agenda, un libro, un portapostit, partalápices, un “CD” intitulado “Asamblea constitutiva del CONAPRED”, una bocina así como diversos documentos de carácter oficial, una carpeta “Lefort”, color verde, también con documentos oficiales y la laptop antes referida, con una [pantalla adicional](#).

En el “robot” metálico color negro, al revisar la primer gaveta superior, se observaron dos cuadernos tamaño profesional con diversas anotaciones, así como algunos objetos personales, dentro de los cuales se encuentran una muestra de una sustancia líquida que a los sentidos se aprecia como perfume y una cadena de oro, así como una agenda y diversos engargolados con Acuerdos Generales de Administración del Alto Tribunal. En la segunda gaveta, se localizaron diversas tarjetas de atentos saludos y sus sobres, una agenda, tres tarjetas personales, pos-tits de diversos colores, dos pelotas antiestrés y varios “pins” con el logo del Canal Judicial, dos frascos de sustancia líquida de la marca “Magistral” que corresponde a limpiapizarrones, una memoria “USB” de uso oficial que contiene un archivo electrónico en formato “Word”, un tarjetero que contiene tarjetas del Canal Judicial y personales, así como fotografías tamaño infantil de carácter personal y una caja de cartón que contiene sobres pequeños para tarjetas. En la tercer gaveta, se observan objetos de limpieza general y personal, dentro de las cuales se aprecian cuatro cajas de “Kleenex”, una caja de cartón que contiene cubrebocas, tres cajas con cremas dentales, dos envases vacíos y uno que a los sentidos se apreciaba como “enjuague bucal”, un paquete de algodón, un frasco de cottonetes, un frasco de “Ambroxol” y un envase de metal que contiene un cepillo de dientes, rastrillo, calzador, crema dental, entre otros objetos personales, un envase sellado que contiene una etiqueta con la leyenda “cloruro de sodio”, una pelota antiestrés con logo del canal judicial, una botella nueva y cerrada de gel antibacteril de dos litros, así como una bolsa negra de tela que contiene memorias “USB”, mismas que se revisaron en el equipo de cómputo “SC-*****”, bajo resguardo de la maestra *****, sin embargo, no fue posible analizarlas, debido a que seis de ellas, en pantalla, se observó la leyenda “no fue posible localizar el dispositivo”, mientras que la otra memoria “USB” no contenía ningún archivo electrónico.

Posteriormente, abajo del escrito de *****, se localizaron diversos objetos apilados, por lo que se procede a su revisión y se advierte diversa documentación, engargolados, folletos y hojas que contienen información de carácter administrativo y personal, así como una caja de catón que contiene diversos obsequios para los participantes del programa “Desafío Jurídico” y cuatro carpetas color negro cerradas.

En este momento, siendo las catorce horas con treinta y un minutos, el licenciado ***** indica que ya se concluyó el respaldo de los

archivos electrónicos contenidos en el equipo con número de inventario ***** (...), en resguardo del licenciado *****, así como los correos electrónicos que se encuentran resguardados en la cuenta oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a nombre del citado servidor público configurada en el mismo equipo.

Se precisa que se tomó fotografía del disco duro modelo Toshiba, arriba señalado, así como de la pantalla del equipo de la Dirección de Tecnologías de la Información relativa al inicio y conclusión del respaldo de los archivos contenidos en el referido disco duro, de las cuales, con posterioridad, se obtendrá la impresión correspondiente.

De todo lo anterior, se obtuvo la memoria fotográfica respectiva, cuya impresión se agregará en su momento a esta acta³⁹.

En el mismo acto ***** manifestó que respecto a los refrescos encontrados en su oficina, son parte de la despensa que se provee a la Dirección General del Canal Judicial para la atención de invitados y que por la facilidad de tenerlos a la mano, se tiene una reserva en su oficina, asimismo, que el cabón y bicarbonato encontrado fue colocado por el personal de intendencia, con la finalidad de absorber olores, ya que cierto equipo se encuentra descompuesto. Aclaró que la botella de mezcal de cincuenta mililitros, junto con el vaso tequilero se encuentra sellado, y que fue un regalo de la compañera *****, manifestando su disposición para que se le practicaran los exámenes correspondientes para detectar si existe alguna sustancia toxica en su organismo.

- **Acta de inspección de la oficina del Licenciado *******, la cual llevó a cabo la Dictaminadora I y con los testigos de asistencia Dictaminadora II y el Subdirector de Área, todos adscritos a la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial, asimismo, con el auxiliar adscrito a la Dirección General de Tecnologías de la Información.

“el personal de la Contraloría hace constar que procede a verificar con los sentidos el mobiliario que integra el área de trabajo que ocupa el licenciado *****, mismo que se advierte está conformado por un escritorio con número de inventario *****; un archivero de metal con cubiertas de madera con número de inventario *****; un “robot” con

³⁹ Foja 506 a 510 del Tomo I-A

PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 6/2015

número de inventario *****; y dos archiveros metálicos de cuatro gavetas con números de inventario *****.

Sobre el escritorio, se observa una pila de documentos intitulados “órdenes de trabajo”, de aproximadamente cien hojas tamaño carta y respecto de las cuales ***** manifiesta que son “archivo muerto”; un aparato telefónico de la marca “AVAYA”; una computadora personal marca “DELL LATITUDE” con número de inventario *****; un tarjetero con fichas bibliográficas blancas, entre las cuales se encuentra un pequeño papel doblado a la mitad con una perforación doble, escrito con tinta negra, dirigido a “***** (*Abreme!!*)”, en cuyo interior, se advierten las siguientes notas: “*Te mando también tachón...*”, la siguiente leyenda aparece testada con tinta azul: “***** *te quiero mucho*” y con la misma tinta se dibuja una flecha que conduce a la siguiente nota: “*Sr. ***** , le admiro mucho*”, también, se observa la nota siguiente “*Te deseo lo mejor en estas fechas y para el próximo año...Te mando un abrazo sin agarrada de pompi* [un símbolo de carita feliz]” firmada por “*****”, del que se obtiene una fotografía; dos libros de bolsillo de color azul intitulados “Nuevo Testamento. Salmos y Proverbios” y “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, octava edición, octubre de dos mil trece”; un pisapapeles azul de piedra tipo onix; dos bocinas de marca “SPACE”; una caja pequeña con clips y una bandera blanca con el logo del Canal Judicial.

En el archivero de metal con cubiertas de madera, con número de inventario ***** , advertimos en el primer entrepaño de arriba hacia abajo, dos botellas de refresco de toronja y naranja de la marca “Peñafiel”; una caja abierta de cigarros marca “MARLBORO”, de veinte cigarrillos con filtro, que contiene un solo cigarro; una bolsa de papel con cuadros cafés, dentro de la cual se encuentra una caja que contiene un dulce de la marca “Amber InsectNside tm CANDY”; cinco bolsas de plástico del almacén “Abarrotes, Vinos y Licores La Villa de Cortés”; dos bolsas de plástico de la tienda “StereN”; una bolsa de manta con la leyenda “El Rey de Matatlán. Mezcal 100% agave”, en cuyo interior encontramos un paquete de café de la marca “Ñeey”; dos portalápices, decorados con imágenes del Canal Judicial y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; diversos documentos; una libreta para anotaciones del “Museo de Arte Moderno”; una bolsa de papel color azul con la leyenda “TOMMY HILFIGER”, en cuyo interior se observa una botella vacía de tequila “Corralejo reposado” de cien mililitros; una botella de mezcal joven “Tobalá”, con poco contenido; una botella de plástico de whiskey “JIM BEAM” de cincuenta mililitros, que se encuentra vacía; y una botella cerrada de ginebra “Bombay Sapphire” de cincuenta mililitros.

En el segundo entrepaño de arriba hacia abajo, observamos un recibo de pago de salarios; una constancia de alumno inscrito; y el original del acuse del oficio ***** , los tres en una foja útil por su lado anverso; también, un cristal con el grabado “Comité Olímpico Mexicano”; tres cuarzos decorativos, uno morado, dos blancos; unas copias fotostáticas de un artículo periodístico intitulado “El Joven que Tocaba

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

el Piano (y descuartizó a su novia)”; en el tercero, hay un gancho de madera para ropa, una bolsa de plástico de la negociación “Educal”, de color verde, un paraguas con patrón a cuadros gris, rojo y negro. Los entrepaños cuarto y quinto, están vacíos. El archivero metálico con número de inventario *****, de cuatro gavetas, se encuentra vacío en su totalidad. El archivero metálico con número de inventario *****, de cuatro gavetas, contiene en el primero de ellos, tres sobres de correspondencia grabados del Canal Judicial, una libreta tamaño profesional marca “Star”; once folders vacíos y uno con diversa documentación oficial y dos carpetas con grabado del Canal Judicial, una color vino y otra, color negro, dos engargolados de “Estrategia de Relaciones Públicas”, un equipo de telefonía celular “Nextel” con número de inventario *****, El periódico “El Sol de México” correspondiente al cuatro de marzo de dos mil quince; una bolsa de papel del Canal Judicial que contiene un suéter de color azul índigo y una bolsa de plástico de “Abarrotes, vinos y licores La Villa de Cortés”. En la segunda gaveta está “El Informe de Resultados del Primer Semestre 2014, Plan Cuatrienal Estratégico Administrativo 2011-2014”. La tercer gaveta está vacía. La cuarta gaveta contiene un cable de red “Ethernet”, un control remoto color gris para sistema “Sky”, una bolsa de Liverpool de color verde con rojo que contiene una cortina blanca, un portafolio negro de tela para computadora portátil marca “Dell”, un teclado marca “Dell”, un maletín negro con grabado en hilo que dice “Hong Kong” y una base para pantalla de televisión.

Por otra parte, hay un “robot” de tres cajones que se encuentra debajo del escritorio que ocupa el licenciado *****, en el lado izquierdo, con número de inventario *****, se encontró lo siguiente: En el primer cajón, de arriba para abajo, se observa una charola organizadora de plástico negra, en la cual aparecen diversas monedas de un peso, cincuenta y diez centavos, cinco llaves de metal, y diversas tarjetas de presentación, aproximadamente cien, en las que aparece el nombre de “*****. *Director de Noticias*” y el domicilio del edificio Sede del Alto Tribunal. Detrás de dicha charola, advertimos una pasta de dientes, un chocolate de la marca “TOBLERONE”; dos pastillas de Diclofenaco en “blister”; un cepillo dental, cinco condones de marcas “Ciudad de México” y “Possess”, unos anteojos, al parecer, para ver de cerca con armazón de color negro, un cargador de celular marca “Nokia”, un gel para manos de sesenta mililitros de la marca “WALTFORT”, un frasco de vitaminas marca “CENTRUM” y dos hojas de papel dobladas. Asimismo, advertimos un cristal rectangular que mide aproximadamente doce centímetros de largo y ocho centímetros de ancho con rastros de un polvo blanco; una caja de plástico tamaño tarjetero, la cual contiene en su interior los siguientes objetos: una tarjeta también de plástico, de tamaño y composición similar a las de crédito, en la que aparecen las leyendas “XEROX”, Copy Card”, una tapa rosca azul, con polvo blanco; un espejo roto, también con polvo blanco; dos papeles, al parecer de revista, doblados en forma de rectángulo, en cuyo interior aparece el equivalente a una cucharada cafetera de polvo blanco; y varios billetes enrollados de manera que en el centro queda un hueco similar a un popote, en cuyo interior se aprecian restos de contenido del polvo blanco. El billete exterior es de color verde, aparentemente de doscientos pesos mexicanos.

PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 6/2015

En el segundo cajón de ese mismo archivero con número de inventario *****, advertimos un control para sistema de aire acondicionado color blanco marca “McQUAY”; una libreta marca “SCRIBE” color rojo; una caja de plumas marca “BIC”, tipo mediano cristal; una botella de tequila de seiscientos noventa y cinco mililitros, casi vacía, marca “JOSÉ CUERVO” con etiqueta del almacén “Liverpool”, por un monto de \$106.00 (ciento seis pesos 00/100 MN); una manzana con chile, guardada dentro de una bolsa de plástico transparente; dos paletas de bombones; tres gafetes de identificación del Canal Judicial con el nombre de “*****”; otro gafete con las leyendas “*Poder Judicial de la Federación. Informe Anual 2011*”, “*****” y “*Canal Judicial*”; un sobre tamaño oficio que contiene una copia certificada del acta de nacimiento con número de folio ***** de *****; también, diversos documentos, el informe de resultados del segundo semestre de dos mil catorce de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; un recorte de periódico “Reforma” de dos de diciembre de dos mil catorce, con la nota intitulada “DISPUTA MINISTROS DIRIGENCIA DE CORTE”, un disco compacto de “ADN NOTICIAS” que contiene su “RESUMEN ANUAL DE NOTICIAS 2013”.

En el tercer cajón encontramos un saco de monedas de terciopelo color azul; una bolsa vacía de terciopelo rojo; dos libros con los títulos “El teatro de Sabbath”, de Philip Roth y “Diario de una adicta al sexo”, de Amber Stephens; detergente para trastos marca “AXIÓN”; dos fibras para lavar trastes; un “tupperware” de plástico con tapa naranja, en cuyo interior encontramos un polvo blanquizco, al parecer, azúcar; un gel para cabello de marca “Wet Line. XTREME”; un lustrador de calzado marca “Mixpiel”; un paquete de “FLANAX. Naproxeno Sódico”, de quinientos cincuenta miligramos; dos botellas de refresco de naranja de la marca “*Peñafiel. Naranjada*”, una llena hasta el tope, y la otra a la mitad; una botella de tequila reposado “José Cuervo. Especial” de seiscientos noventa y cinco mililitros, con el sello de apertura roto, llena a las tres cuartas partes; una bolsa pequeña color beige con la leyenda en letras rojas “El Rey de Matatlán. 100% agave”, en cuyo interior se aprecia un polvo naranja; una taza de cerámica color negro que al parecer tiene aroma a licor o alcohol, con letras en blanco que dicen CANAL JUDICIAL; una caja color azul, de pañuelos desechables marca “KLENEEX”, de ciento ochenta piezas, con motivos del filme de “Disney” denominado “Frozen”, varias bolsas de plástico de los almacenes “Liverpool”, “Gourmet Liverpool”, “Suburbia”, “Gandhi”, “Ultramarinos Coliseo”, “La Europea” con la leyenda “BACARDI”, “La Villa de Cáceres”, dos bolsas negras, varias pequeñas, en este momento, se advierte que dentro de una de las bolsas, se encuentra un ticket del comercio “PUERTAS PEREZ ALICIA” en por la compra: “CUERVO ESPE” y “PAÑUELOS KL”, misma que se realizó a las trece horas con cuarenta y ocho minutos del veinticuatro de febrero de dos mil quince; una esponja lustradora para zapatos; un estuche vacío para lentes de marca “RAYBAN” color negro; y un spray para eliminar olores marca “SHOUT” de ciento veinte mililitros.

Acto seguido, se informó al Encargado del Despacho de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial, licenciado *****, sobre los bienes encontrados así como a la Maestra *****, quien a su vez, solicitó el apoyo del personal de seguridad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que colocaran sellos de seguridad en los muebles donde se localizaron los objetos descritos en esta diligencia, lo cual ocurrió a las trece horas con cuarenta minutos. Por ese motivo, personal de la Dirección General de Seguridad colocó doce sellos de seguridad de la manera siguiente: en el archivero de metal con cubiertas de madera con número de inventario ***** los sellos con números de folio *****; en el archivero metálico de cuatro gavetas con número de inventario ***** los sellos con números de folios *****; en el archivero metálico de cuatro gavetas con número de inventario ***** archivero metálico de cuatro gavetas con número de inventario, los sellos con número de folios *****; y en el “robot” con número de inventario ***** los sellos con números de folio *****.

Así mismo, se hace constar que previo a la revisión del mobiliario de la oficina a inspeccionar, el licenciado *****, dio acceso al equipo de cómputo portátil, que tiene asignado, con número de inventario *****, y el licenciado ***** adscrito a la Dirección General de Tecnologías de la Información retiró el disco duro de ese equipo de cómputo, con número de serie *****, acto seguido se realiza el respaldo electrónico del disco duro del referido equipo de cómputo, el cual inició a las doce horas con veintidós minutos, a la par que la revisión del mobiliario, pero el respaldo respectivo concluyó a las trece horas con dieciséis minutos; hecho lo anterior, el licenciado ***** adscrito a la Dirección General de Tecnologías de la Información volvió a instalar el referido disco duro en la mencionada computadora.

En cuanto al procedimiento para obtener el citado respaldo, el licenciado ***** adscrito a la Dirección General de Tecnologías (...) generó una cadena de verificación de integridad de la copia fiel del disco duro (algoritmo de digestión *****) que es la siguiente “*****”, con la cual se hace constar que con esta imagen (entiéndase por imagen la copia fiel del disco duro) se podrá, con posterioridad, realizar el análisis forense de su contenido.⁴⁰.

- **Acta de inspección de la oficina del *******, utilizada anteriormente por *****, se llevó a cabo con la Dictaminadora II, ante los testigos de asistencia Dictaminadora II y un profesional operativo, todos adscritos a la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial, así como el auxiliar adscrito a la Dirección General de Tecnologías de la Información.

“(...)se solicita autorización a ***** para revisar el contenido del mobiliario localizado en esta oficina y abrir los cajones, a lo que manifiesta estar de acuerdo y en su presencia se inicia la revisión por

⁴⁰ Fojas 558 a 562 del Tomo I-A

PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 6/2015

el archivero color café claro, que se encuentra al lado izquierdo de la puerta de entrada, encima del mueble está una televisión marca SONY modelo BRAVIA con numero de inventario *****, en el primer cajón de dicho mueble, se encontraron una mochila negra, seis cajas azules de video, seis cajas de cartón y algunos cables, en el segundo se observan diversos engargolados, libros y folders, en el tercer cajón se encontró equipo cerrado de cámaras de video, diversas libretas, discos compactos de música y discos de video en formato DVD cerrados, folders, carpetas y un reproductor de DVD, en este cajón se encontró una fotografía blanco y negro de Marilyn Monroe, de la que se obtiene una fotografía para agregarla a esta acta, así como un cuadro de aproximadamente quince por diez centímetros en la que se aprecia la leyenda “BIENVENIDO A LA ÚNICA OFICINA CON BAÑO DE TODO EL CANAL JUDICIAL ATTE: LA TROPA”, de la que también se obtiene fotografía para agregarla al acta. En el cuarto cajón hay diverso equipo electrónico consistente en “mezcladoras” y diversos cables.

En este acto se hace constar que *****, voluntariamente, abre su mochila y muestra su contenido, en el cual se observan estados de cuenta, medicamentos, una cajetilla de cigarros, recibos de pago, una tarjeta de estacionamiento y un cepillo para cabello.

Enseguida, sobre el librero café claro horizontal que está de lado izquierdo de la oficina, se encuentra un equipo electrónico marca SONY que reproduce video “XDCAM” y su control remoto, una bandera con la leyenda Canal Judicial y un portalápices de metal color negro con diversos bolígrafos y marcadores, en el primer entrepaño se encuentran alrededor de setenta cajas de video en formato DVD y ocho cajas de cintas de video en formato “BETACAM SP”, además de dos bocinas negras con números de inventario *****.

En el centro de la oficina se encuentra un escritorio café claro en escuadra con un “robot” negro de tres gavetas color café, encima de él se encuentra una laptop con número de inventario *****, una pantalla marca HP *****, un equipo telefónico oficial, diversos papeles de trabajo de *****, una papelería metálica negra de tres niveles con diversos documentos en cada uno, una caja pañuelos desechables, varios discos compactos del programa DW TRANSTEL, una taza, dos libretas y un calendario; en tanto que en el “robot” metálico negro con cajones color café, se encuentran en el primer cajón papeles dispersos, papelería de oficina y un par de objetos de higiene personal; en el segundo hay dos cajas de plástico, una con clips, y en la otra, un control remoto y varias llaves metálicas, además de dos copias fotostáticas de la credencial de *****, una engrapadora y una caja roja con un disco en formato “XDCAM”. Y en el tercer cajón se encuentran diversos folder con papeles de trabajo, una carpeta de plástico color blanco, diversos folletos de difusión del Canal Judicial y una libreta.

En el archivero de color negro con dos puertas de color café claro con cinco entrepaños, localizado a lado de la puerta de la oficina se encuentran varias cajas de cartón de color blanco y café, de diversos

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

tamaños, dentro de las cuales hay diverso equipo de cómputo, para producción de imagen y de videograbación, un proyector y un reproductor de tarjetas de video, con excepción del cuarto entrepaño, en el que se encuentra una mochila de aproximadamente un metro de longitud que guarda un trípode de cámara de video. Enseguida, se encuentra un librero de color café claro con un entrepaño, encima tiene diversos discos compactos, en cajas de diferentes formas y tamaños, dos libros y un separador metálico gris. En el entrepaño se encuentran alrededor de cincuenta y dos cajas de películas en formato DVD, y quince casetes en formato “Mini DVM60” que en cinta “masking tape” tienen el título “PUEBLA” y “Los juicios de la revolución”. Debajo del mueble se encuentra una funda negra con un trípode dentro y en la parte de atrás del archivero se encuentra una bolsa negra con una fotografía del Ministro Juan N. Silva Meza enmarcada. Se precisa que la mayor parte de las películas señaladas se encuentran selladas, al parecer, en su empaque original.

A lado del archivero antes descrito, se encuentran en el piso dos maletas negras de plástico de alrededor de cuarenta centímetros de alto por cincuenta de largo y diez de ancho, ambas contienen tela reflejante y encima de ellas un balón de futbol soccer con la leyenda “Cruzeiro”, del que se obtiene fotografía para agregarla a esta acta.

Enseguida, se encuentra una mesa de cristal con ruedas de cuatro niveles, en el entrepaño inferior se encuentra una botella de vino “RIOJA” envuelta para regalo, con dos tarjetas de “*****.” una con el nombre del director general “*****” y la segunda a nombre de “*****”, de la que también se obtiene fotografía para agregarla a los autos. En el segundo no hay objetos, en el tercero hay un libro titulado “El Colegio Nacional” y una revista intitulada “Centenario de Octavio Paz”; en el cuatro nivel se encuentran diez libros de relativos al tema de periodismo.

Ubicado entre el escritorio y la mesa de cristal, se encuentra un “robot” negro con dos cajones, en el cajón inferior hay una gran cantidad de folders con títulos diversos relacionados con funciones y programas del Canal Judicial, y en el cajón superior se encuentran varias hojas, aparentemente de borradores del trabajo, además de diversos curriculums y un engargolado relacionado con la reestructuración de la videoteca; sobre el “robot” se encuentra la impresora con número de inventario *****.

Siendo las quince horas con nueve minutos, del día de la fecha, se realizó la extracción del disco duro de la computadora con número de inventario *****, para realizar un respaldo de los archivos electrónicos contenidos en el mismo, por lo que se solicitó al licenciado *****que advirtiera que respecto del disco extraído, se realizaría el respaldo correspondiente, a lo que accedió, por lo que se lleva a cabo el respaldo correspondiente. Luego, a las dieciséis horas con trece minutos, finalizó el proceso de respaldo, además se hace constar que ***** se cercioró que la computadora señalada quedó funcionando y en el mismo estado en que se encontraba antes de su respaldo. (...)

En este acto, se solicita autorización a ***** para revisar el contenido del mobiliario localizado en dicha área y abrir los cajones, a lo que manifiesta estar de acuerdo y en su presencia se inicia la revisión La gaveta con número ***** se ubica en el lugar que ahora ocupa *****, sólo hay una bolsa de ella y cintas de video y cajas de equipo electrónico, además de un mouse. En el “robot” negro con número

PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 6/2015

***** ubicado en el mismo lugar que ella ocupa, el primer cajón contiene cables, pilas, un encendedor, una cuchara y diversos documentos de trabajo, en el segundo cajón hay unas batas de trabajo color azul marino nuevas empaquetadas, que refiere ***** se las proporciona el Alto Tribunal cada año. Y en el tercer cajón hay libros, cables y una lata de “Coca-Cola” con el nombre *****.

Dentro de la gaveta con número *****, ubicada frente a los muebles antes descritos en el lugar que ocupa *****, ahí se encuentran diversos discos compactos que en este acto se revisan en una computadora y contienen material del Canal Judicial, además se encuentran discos en formato “XDCAM”, algunos folders y cajas que contienen “CD’s” nuevos.

En el archivero negro con número ***** que está pegado a la pared del lado derecho del área, junto al baño de hombres, en el cajón superior que de acuerdo con lo que manifiesta ***** “es el cajón al que ***** pasaron mis cosas hace como semana y media”, en él se encuentran diversas cintas “DVCAM” y discos “XDCAM”.

Así mismo, señala *****: “También quiero manifestar que en el lugar que antes ocupaba en el área común de producción, se encuentra la computadora que tengo asignada.” Al respecto el personal de la Contraloría hace constar que el “CPU” con número de inventario *****, que ***** señaló es suya, por el tamaño de los discos de memoria que tiene no fue posible realizar el respaldo en este acto, por lo que se procede a trasladarla a las oficinas de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial, para que quede a su resguardo y se haga el respaldo correspondiente(...).”⁴¹.

En el mismo acto ***** manifestó que la oficina le pertenecía a ***** hasta aproximadamente el dieciséis de febrero del año dos mil quince, cuando presentó su renuncia al Canal Judicial. Señaló:

“(...) las cosas que aquí se encuentran estaban bajo su resguardo o le pertenecían, salvo una mochila y una caja de audífonos que está en el archivero de cuatro cajones de lado izquierdo de la oficina, de los cuales la mochila es mía y la segunda pertenece al Canal Judicial. Yo no he metido mis cosas a la oficina, pues no tengo certeza de que se me vaya a dar el nombramiento que tenía ***** y si me quede en la oficina, sólo estoy de encargado de la Subdirección General de Producción.

Los dos libreros sin inventario que se señalaron anteriormente son de ***** y los mandó a hacer de forma externa, en tanto que la mesa de cristal se adquirió con recursos del programa de “Desafío Jurídico” y la ocupaba él para su computadora cuando no tenía el escritorio que está hoy.

⁴¹ Fojas 574 a 579 del Tomo I-A.

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

El biombo que se encuentra detrás de la puerta de entrada de la oficina se utilizó para el programa de “Desafío Jurídico” para que el presentador se cambiara de vestuario sin que lo vieran porque no hay camerinos en el Canal Judicial.

De la fotografía de Marilyn Monroe, ***** me contó en alguna ocasión, aproximadamente hace unos dos años, que ***** se la había regalado porque era una fotografía histórica de la cual él tenía el negativo, incluso el compañero ***** me llegó a referir que también tenía una.

Respecto del cuadro con la leyenda “BIENVENIDO A LA ÚNICA OFICINA CON BAÑO DE TODO EL CANAL JUDICIAL ATTE: LA TROPA”, quiero señalar que infiero era de ***** porque en el edificio sede donde antes eran las instalaciones del Canal Judicial, él tenía ese cuadro colgado en su pared, además también era la única oficina con baño del Canal y el resto del personal tenían que bajar al estacionamiento para ir al baño, ni siquiera el Director General tenía baño, él utilizaba el de la oficina de *****.

En cuanto al balón de fútbol que está en esta oficina, quiero manifestar que lo compró *****, porque algunos viernes por la tarde noche íbamos a jugar los compañeros del Canal Judicial a una cancha de fútbol rápido que está en el andador que está detrás del Claustro de Sor Juana, aquí en el Centro, es una instalación del Gobierno del Distrito Federal hasta donde entiendo.

En relación con la botella de vino que hay en la mesita de cristal ésta se la enviaron hace una semana a ***** de la empresa llamada “Artec”, que es una empresa con la que estamos en proceso de pláticas para contratar los servicios de red para trabajar los programas, es decir, que se almacene y distribuya el material de video y audio y en vez de que se resguarden en cintas, se resguarden en un servidor, como dije la botella la dejaron en recepción una semana después de que se fue *****, y por eso la dejé ahí en la mesa de cristal pues no es mía.”

En este momento ***** abre una caja de paquetería que enviaron a ***** por parte del “Sistema de Michoacano de Radio y Televisión”, y al respecto manifiesta “es un envío derivado de un convenio de intercambio de programas entre la red de televisoras públicas a nivel nacional y el paquete contiene un disco duro de tres “terabites” con diversos programas producidos allá para que se valoren y, en su caso, se transmitan en el Canal Judicial y en ese mismo nosotros les enviaremos programación nuestra que previamente ya se solicitó”.

Como ya lo señalé anteriormente, no tengo la certeza de que se me vaya a dar el nombramiento que tenía ***** y me quede en esta oficina, pues cuando él dejó la oficina ***** me dijo “de momento encárgate del despacho para que no se detenga la operación del canal”, yo me vine para acá y dejé mis cosas en mis cajones, pero como la carga del trabajo es mucha le pedí a mi compañera ***** que la ocupara y ella entonces me avisó que sacaría mis cosas y las pondría en dos cajoneras en lo que veía si me quedaba en esta oficina o no y accedí, sin problemas.”

- **Acta de inspección del lugar de trabajo de *****.** En este caso, resulta innecesario hacer referencia a su contenido, porque dicha persona no está vinculada a este procedimiento disciplinario.

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

VIGÉSIMO. El nueve de marzo de dos mil quince, **** se presentó en las oficinas de la Contraloría de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación para presentar documentos relacionados con los hechos que narró en su comparecencia de **cinco de marzo de dos mil quince**. Además, manifestó que tenía conocimiento que varios compañeros que realizaron su servicio social en el Canal Judicial se refirieron al ambiente laboral de dicha área en el reporte final que entregan a dicha facultad⁴².

VIGÉSIMO PRIMERO. En lo que interesa al presente procedimiento, por auto de doce de marzo de dos mil quince⁴³, **se tuvieron por recibidos los documentos presentados por ******, se hizo un resumen de sus comparecencias en donde dieron a conocer a la Contraloría el trato que recibieron de diversos servidores públicos de la Dirección General del Canal Judicial, así como aspectos relativos al ambiente de trabajo que prevalece en esa área.

En el mismo auto, se acordó lo relativo a la inspección realizada en el área de la Dirección General del Canal Judicial, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de cinco de marzo de dos mil quince. Con motivo de dicha diligencia, se instrumentaron además del acta inicial, siete actas independientes de la revisión realizada en los espacios de trabajo de diversos servidores públicos como se indica:

- “a) Inspección de la oficina del Director General del Canal Judicial, licenciado ****.
- b) Inspección de la oficina del licenciado ****.

⁴² Foja 652 a 653 del Tomo I-A

⁴³ Fojas 670 a 675 del Tomo I-A.

- c) Inspección de la oficina de la Subdirección General de Producción, que antes ocupaba ***** y ahora ocupa el licenciado *****y también se inspeccionó la oficina de éste último.
- d) Inspección de la oficina del licenciado *****.
- e) Inspección de la oficina del licenciado *****.
- f) Inspección del lugar de trabajo de *****”.

Se agregó la impresión de la memoria fotográfica relativa a la inspección de los lugares de trabajo de *****.

Por otro lado, en seguimiento de la integración de la investigación, se giró oficio a diversos titulares de área, para que en el término de **cinco días hábiles**, contados a partir del siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, realizaran las siguientes acciones:

“Dirección General de Tecnologías de la Información

1. Remita copia certificada de los resguardos de los equipos de cómputo con los números de inventario que a continuación se indican:

Número de inventario ⁴⁴

2. Designe a personal adscrito a esa Dirección General, para que acompañado de personal de la Contraloría, en las instalaciones de esta última, realicen el análisis del contenido del disco duro del equipo de cómputo con número de inventario *****, así como de los dos discos duros con número de inventario “*****” y “*****” que se encuentran en resguardo de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial, se realicen las impresiones que resulten relacionadas con la presente investigación y, en su caso, se efectúe el respaldo electrónico del equipo referido en primer término relacionado con dichas impresiones o con videos que atañen a esta investigación, de lo cual se deberá levantar el acta correspondiente.

44 ***** correspondiente a *****, ***** correspondiente a *****, ***** correspondiente a *****, ***** correspondiente a *****, ***** correspondiente a ***** y ***** correspondiente a *****.

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

**Dirección General de Recursos Humanos e Innovación
Administrativa**

(...)

c) Remita copia certificada del expediente personal de:

- *****
- *****
- *****
- *****
- *****
- *****
- *****
- *****
- *****
- *****

d) Plantilla de personal de dos mil diez, dos mil once y dos mil doce de la Dirección General del Canal Judicial, en la que se aprecien los cambios o movimientos de personal que tuvo durante el año correspondiente.

e) Nómina de personal adscrito a la Dirección General del Canal Judicial de dos mil diez, dos mil once y dos mil doce”.

VIGÉSIMO SEGUNDO. El mismo día del acuerdo anterior, ***** compareció a las oficinas de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial de la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para denunciar actos realizados a la Dirección del Canal Judicial, lo cual se podía corroborar con el escrito de renuncia al puesto de Asesor en la Dirección General del Canal Judicial, el cual señaló obra en su expediente⁴⁵.

VIGÉSIMO TERCERO. Por auto de veinticinco de marzo de dos mil quince, se acordó lo relativo a la comparecencia de *****. En el mismo auto, se acordó el oficio *****; la Directora General de Recursos Materiales remite copia certificada de los resguardos con folio “*****”, de veinte de septiembre de dos mil doce y de catorce de marzo de dos mil trece, respectivamente, relativos a los bienes asignados a *****.

⁴⁵ Fojas 676 a 678 del Tomo I-A.

Asimismo, precisa que al seis de marzo último, sólo estaban asignados a dicho servidor público los bienes con inventario “*****” debido a que los demás fueron retirados de las instalaciones del Canal Judicial, a solicitud de esa área, el dieciocho de febrero de dos mil catorce, como se advierte de la copia simple de la liberación de bienes con folio “*****”, del correo electrónico de diecisiete de febrero de dos mil catorce enviado por “*****” a “*****”, con el asunto intitulado “Solicitud de baja” y del documento en el que se detalla inventario, denominación de activo fijo y nombre del servidor público, documentales que se adjuntan al oficio de cuenta⁴⁶.

VIGÉSIMO CUARTO. En lo que interesa al presente procedimiento, por auto de seis de abril de dos mil quince⁴⁷ se tuvieron por recibidos los siguientes documentos:

- 1. Oficio *****, la Directora General de Recursos Humanos e Innovación Administrativa, los expedientes personales y diversos:

Número de expediente	Nombre	Número de fojas según folio y certificación
*****	*****	125
*****	*****	104
*****	*****	80
*****	*****	75
*****	*****	66
*****	*****	67
*****	*****	50
*****	*****	50

Asimismo, se informó que el expediente personal número “*****” correspondiente a ***** se envió al Consejo de la Judicatura Federal

⁴⁶ Fojas 690 y 601 del Tomo I-A
⁴⁷ Fojas 752 a 756 del Tomo I-A.

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

como se desprende de la copia simple del oficio ***** de tres de octubre de dos mil doce, que se acompañó al oficio de cuenta.

Se acordó que en diverso proveído de doce de marzo de dos mil quince se había ordenado requerir al Director General de Tecnologías de la Información que remitiera copia certificada de diversos resguardos de equipos de cómputo, **así como para que designara a personal adscrito a esa área a fin de realizar análisis de los archivos electrónicos contenidos en un equipo de cómputo y en dos discos duros**, determinación que se le notificó mediante el oficio *****, el diecisiete del mes en curso, por lo que el término que tenía para cumplir dicho requerimiento inició el diecinueve del presente mes y feneció el veintisiete de marzo último, **sin que a esa fecha hubiera realizado las acciones que se le solicitaron, por lo que debería reiterársele dicho requerimiento** y enfatizar la obligación contenida en el artículo 8 fracción XVI de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos⁴⁸ y 31 del Acuerdo General 9/2005.

Por otra parte se ordenó girar oficio a las siguientes autoridades, para que en el término de **cinco días hábiles**, contados a partir del siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, realice las acciones que se indican:

“(…)

Dirección General de Tecnologías de la Información.

1. Remita copia certificada de los resguardos de los equipos de

⁴⁸ “**Artículo 8.-** Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:

(…)

XVI.- Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos o resoluciones que reciba de la Secretaría, del contralor interno o de los titulares de las áreas de auditoría, de quejas y de responsabilidades, conforme a la competencia de éstos;

(…)”

cómputo con los números de inventario que a continuación se indican:

Número de inventario ⁴⁹

2. Designe a personal adscrito a esa dirección general, para que acompañado de personal de la Contraloría, en las instalaciones de esta última, **realicen el análisis del contenido del disco duro del equipo de cómputo con número de inventario *****, así como de los dos discos duros con número de inventario “*****” y “*****” que se encuentran en resguardo de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial**, se realicen las impresiones que resulten relacionadas con la presente investigación y, en su caso, se efectúe el respaldo electrónico del equipo referido en primer término relacionado con dichas impresiones o con videos que atañen a esta investigación, de lo cual se deberá levantar el acta correspondiente.
(...)”.

VIGÉSIMO QUINTO. El catorce de abril de dos mil quince⁵⁰, en las oficinas de la Contraloría, la Maestra *****, ante las testigos de asistencia, *****, todas dictaminadoras II, adscritas a la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial, y los auxiliares de informática, Ingenieros *****, Director de Seguridad Informática y *****, así como ante el Licenciado *****, estos dos últimos profesionales operativos, todos adscritos a la Dirección General de Tecnologías de la Información, hicieron constar que se instrumentó un acta en cumplimiento de lo ordenado en proveído de doce de marzo de dos mil quince, a efecto de realizar el **análisis forense de los archivos contenidos en el equipo de computo** con

49 ***** correspondiente a *****, *****correspondiente a *****, *****correspondiente a *****, *****correspondiente a *****, *****correspondiente a *****y *****correspondiente a *****.

50 Fojas 847 a 848 del Tomo I-A

PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015

número de inventario “****”, así como de los respaldos de los discos duros correspondientes a los siguientes equipos de cómputo:

Número de inventario del equipo de cómputo.	Servidor público en uso y/o resguardo.	Disco duro en el que se resguarda.
****	****	“****”
****	****	****
****	****	
****	****	
****	****	
****	****	
****	****	
****	****	“****”

Siendo las diecisiete horas con quince minutos, se hizo constar que no había concluido la búsqueda de archivos electrónicos del tipo imagen del equipo de cómputo con número de inventario “****” correspondiente a **** y que el proceso de búsqueda en el equipo de cómputo marca Apple con número de inventario “****” correspondiente a **** tampoco concluyó, por lo que ante la imposibilidad de continuar el análisis de los archivos referidos hasta su conclusión, por el tiempo que implica realizar los procesos de búsqueda, siendo las diecisiete horas con veinte minutos, se suspendió la diligencia para continuarse al siguiente día.

VIGÉSIMO SEXTO. Mediante acta de quince de abril de dos mil quince⁵¹, en las Oficinas de la Contraloría, con la presencia de personal de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial, así como de la Dirección General de Tecnologías de la Información, se reanudó el análisis de los equipos de cómputo, acordando que respecto al disco duro “****⁵²” continuaba el análisis de manera ininterrumpida, asimismo, la unidad

⁵¹ Fojas 849 a 850 del Tomo I-A
⁵² Disco duro que contenía el respaldos: ****correspondiente a ****, ****correspondiente a ****, ****correspondiente a ****, ****correspondiente a ****y ****correspondiente a ****.

denominada en la “****”, que se encontraba en el equipo de cómputo con número de inventario ****, correspondiente a ****, había concluido el día catorce de abril de dos mil quince a las dieciocho horas, asimismo, respecto al disco duro ****, se borró el contenido al tener una copia en el disco duro ****del respaldo ****correspondiente a ****, por lo que se utilizó para almacenar unidades contenidas en el equipo de computo con inventario ****, correspondiente a ****. Ante la imposibilidad de continuar el análisis de los archivos en comento hasta su conclusión, por el tiempo que implica realizar los procesos de análisis, a las diecisiete horas con quince minutos se suspendió la diligencia para continuar al día siguiente.

VIGÉSIMO SÉPTIMO. Por acta de dieciséis de abril de dos mil quince⁵³, en las oficinas de la multicitada Contraloría, con la presencia de personal de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial, así como de la Dirección General de Tecnologías de la Información, se informó que el copiado de los archivos tipo “dat” (correspondientes al historial de internet) del equipo de cómputo ****correspondiente a ****, había finalizado el día quince de abril de dos mil quince a las diecisiete horas con veinte minutos, y que el copiado de información de la unidad denominada “****”, correspondiente a ****, había concluido en la misma fecha, aproximadamente a las diecinueve horas con treinta y ocho minutos.

Posteriormente, informaron los horarios en que finalizaron los respaldos de los equipos de computo siguiente:

Número de inventario del equipo de cómputo.	Hora de inicio y conclusión
****	10:15 a 12:35
****	11:20 a 12:24
****	11:40 a 12:40

⁵³ Fojas 857 y 858 del Tomo I-A.

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

*****	12:07 a 14:05
*****	12:38 a 13:55

Asimismo, se hizo constar que los trabajos de extracción de la información de los equipos de cómputo continuaban y que por la extensión de tiempo que implica realizar tal proceso, a las diecinueve horas con quince minutos se suspendió la diligencia para continuarse al día siguiente.

VIGÉSIMO OCTAVO. En ese mismo sentido, a través del acta de diecisiete de abril de dos mil quince⁵⁴, en las oficina de la Contraloría, con la presencia de personal de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial, así como de la Dirección General de Tecnologías de la Información, se asentó que continuaron las diligencias a las que se refieren las diversas actas de catorce, quince y dieciséis de abril de esa anualidad y, ante la imposibilidad de que el proceso de resguardo de información y extracción de archivos terminaran en esa fecha, por la extensión de tiempo que implicaba realizar tal proceso, a las quince horas con treinta minutos se suspendió la diligencia para continuarse el día hábil siguiente.

VIGÉSIMO NOVENO. En lo que interesa al presente procedimiento disciplinario, mediante acuerdo de diecisiete de abril de dos mil quince⁵⁵, el Contralor de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por recibidos los siguientes documentos:

⁵⁴ Fojas 864 y 865 del Tomo I-A.
⁵⁵ Fojas 869 a 872 del Tomo I-A.

PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015

“1. Con el oficio *****, el Director General de Tecnologías de la Información remite copia certificada de los resguardos de los equipos de cómputo que se listan a continuación:

Usuario	Descripción	Número de inventario
***	CPU (APPLE POWER MAC PRO)	***
***	LAPTOP HP ELITEBOOK 8560P	***
***	EQ COMP PORT HP ELITEBOOK 8560P	***
***	LAPTOP HP ELITEBOOK 8560P	***
	MONITOR HP	***
***	LAPTOP DELL LATITUDE E6530	***
***	EQ COM PORT DELL LATITUDE E6530	***
Usuario	Descripción	Número de inventario
***	EQ COM PORT DELL LATITUDE E6530	***

Además, en el oficio de cuenta se designa a los ingenieros *****, así como al licenciado *****, para que realicen el análisis del contenido de los discos solicitados por la Contraloría, en las oficinas y con el personal de esta última área.

Se hace constar que en relación con la memoria “USB” que *** exhibió en su oportunidad para demostrar los asertos de sus comparecencias, ésta contiene grabaciones de diversas conversaciones de los camarógrafos en las que utilizan expresiones verbales vulgares y ofensivas, en particular, refirió que se escucha la voz de “***”. Además, solicitó la devolución de la memoria “USB”.

4. Con el oficio ***, la Directora General de Recursos Humanos e Innovación Administrativa remite copia certificada del expediente relativo a la plaza ***, constantes de sesenta fojas útiles según folio y certificación.

(...)

6. Las actas de catorce, quince, dieciséis y diecisiete de abril de dos mil quince, instrumentadas con motivo del análisis forense de los

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

archivos contenidos en el equipo de cómputo con número de inventario “***”, así como de los respaldos contenidos en los dos discos duros con número de inventario “***” y “***”, por personal de la Contraloría y de la Dirección General de Tecnologías de la Información, en cumplimiento del proveído de doce de marzo último.”

En relación a lo anterior, se ordenó la glosa de dichos documentos al cuaderno de investigación 6/2015 para que obraran como correspondan.

Por otra parte, se ordenó a la Dirección General de Tecnologías de la Información que precisara el nombre del servidor público que tenía asignado el equipo de cómputo “***”, del dos mil catorce al seis de marzo del dos mil quince, acompañando copia certificada de los documentos que respaldaran su informe.

TRIGÉSIMO. El veinte de abril de dos mil quince⁵⁶, en las oficinas de la Contraloría de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, conformidad con los artículos 23 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 8 y 9 del Acuerdo General 9/2005, la maestra ***, ante las testigos de asistencia licenciadas ***, dictaminadoras II, adscritas a la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial, y los auxiliares en informática ingenieros ***, Director de Seguridad Informática y ***, así como el licenciado ***, estos dos últimos profesionales operativos, todos adscritos a la Dirección General de Tecnologías de la Información, hicieron constar que se instrumentó el acta en cumplimiento de lo ordenado en proveído de doce de marzo de dos mil quince, dictado por el Contralor de este Alto Tribunal en el cuaderno de investigación *****, para continuar con las diligencias

⁵⁶ Foja 1022 del Tomo I-B.

asentadas en las actas de catorce, quince, dieciséis y diecisiete de abril de dos mil quince⁵⁷.

En el citado acto, los auxiliares en informática informaron que el proceso de resguardo en el disco duro con número de inventario “***” de la totalidad de los archivos de imagen, video, presentaciones de power point, así como de aquéllos tipo “.pst”, “.ost” y “.dat” (los dos primeros corresponden a archivos de correo electrónico y el tercero al historial de internet), ubicados en los respaldos de los equipos de cómputo con números de inventario “*****”⁵⁸, terminó alrededor de las diecisiete horas con treinta minutos; y que el proceso de copiado de los archivos de imagen, video, presentaciones de power point, así como los de tipo “.pst”, “.ost” y “.dat” (los dos primeros corresponden a archivos de correo electrónico y el tercero al historial de internet) de la unidad denominada “***”, terminó alrededor de las nueve horas del dieciocho de abril pasado.

Por otra parte, los auxiliares en informática refirieron que el proceso de resguardo de la totalidad de los archivos de imagen, video, presentaciones de power point, así como de aquéllos tipo “.pst”, “.ost” y “.dat”, copiados de la unidad denominada “***” se realizó en el disco duro con número de inventario “***”, terminando a las nueve horas con cincuenta minutos.

La anterior acta se tuvo por recibida y glosada al cuaderno de investigación 6/2015, mediante acuerdo de veintiuno de abril de dos mil quince⁵⁹, dictado por el Contralor de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

⁵⁷ Referentes al análisis de los discos duros.

⁵⁸ Disco duro que contenía el respaldos: ***correspondiente a ***, ***correspondiente a ***, ***correspondiente a ***, ***correspondiente a ***y ***correspondiente a ***.

⁵⁹ Foja 1022 del Tomo I-B.

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

TRIGÉSIMO PRIMERO. El cuatro de mayo de dos mil quince⁶⁰, el Contralor de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la escisión o separación de los autos que integran la investigación, debiéndose abordar en un cuaderno diverso los hechos relacionados con las contrataciones que se hicieron con personas con las que, al parecer, ***, en su calidad de titular de la Dirección General del Canal Judicial, tenía relación de parentesco o interés personal, por lo que al expediente que se integrara le correspondería el número ***, de acuerdo con el orden progresivo de asuntos de responsabilidades administrativas.

En consecuencia, **los hechos materia del cuaderno de investigación 6/2015 serían el posible acoso laboral, acoso sexual o faltas de respeto, o bien, cualquier conducta que genere incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos o pueda constituir infracción administrativa en términos del artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación**, en que pudieron incurrir los servidores públicos adscritos a la Dirección General del Canal Judicial, con excepción de las posibles contrataciones indebidas que se hubieran hecho de personas con las que **** tuviera relación de parentesco o interés personal o cualquier otra que implicara incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, en relación con tales contrataciones, lo cual se abordará en el cuaderno de investigación ****.

⁶⁰ Fojas 1181 a 1187 del Tomo I-B.

TRIGÉSIMO SEGUNDO. El Contralor de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó un acuerdo de fecha tres de julio de dos mil quince⁶¹, en el que ordenó realizar una segunda escisión del cuaderno de investigación, pues estimó que los hechos relacionados con el hallazgo de diversos objetos en la oficina de *****podría constituir infracción administrativa que no se relaciona con el acoso laboral, acoso sexual o faltas de respeto que son materia del cuaderno de investigación *****.

En consecuencia, atendiendo a la acordado el cinco de marzo y cuatro de mayo del año en curso, así como a este proveído, la materia de investigación de este cuaderno de investigación **6/2015** será el posible acoso laboral, acoso sexual o faltas de respeto, o bien, cualquier conducta que genere incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos o pueda constituir infracción administrativa en términos del artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la materia de investigación de los expedientes cuaderno de investigación ***** y *****, en que pudieron incurrir los servidores públicos adscritos a la Dirección General del Canal Judicial.

TRIGÉSIMO TERCERO. Mediante auto de trece de agosto de dos mil quince⁶², el Contralor de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó que se llevara a cabo la verificación de las grabaciones resguardadas en los discos cuyo contenido fue proporcionado en su momento por ***** en su escrito de quince de abril de dos mil quince, el cual contenía grabaciones de conversaciones sostenidas por camarógrafos de la Dirección General del Canal Judicial, en las que

⁶¹ Fojas 1677 a 1684 del Tomo I-B.

⁶² Foja 1686 del Tomo I-B

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

empleaban expresiones verbales vulgares y ofensivas y se levantara el acta correspondiente.

TRIGÉSIMO CUARTO Mediante constancia de veinticinco de junio de dos mil quince,⁶³ se asentó que se comenzó a realizar el análisis integral del **respaldo de la información obtenida** en la diligencia de inspección realizada en las instalaciones de la Dirección General del Canal Judicial el seis de marzo de dos mil quince, para lo cual, personal autorizado de la Contraloría solicitó a los especialistas de la Dirección General de Tecnologías de la Información localizar y seleccionar “en los equipos de cómputo” los archivos electrónicos tipo imagen, videos, historial de consulta en internet, correos electrónicos y presentaciones en “power point”, mismos que a su vez fueron almacenados en el disco duro con número de inventario “*****”⁶⁴, en la carpeta intitulada “Evidencia Casos”, **con la finalidad de que los archivos mencionados fueran de fácil acceso para el personal autorizado, ya que si la revisión se llevaba a cabo de manera directa, sólo se podían abrir o consultar mediante el software de análisis forense, cuyo manejo requiere de conocimientos especializados en informática.**

En esta diligencia se analizó la carpeta correspondiente a *** , en la que se localizó información de contenido sexual o pornográfico. Esta diligencia sólo fue firmada por el personal adscrito a la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial.**

⁶³ Foja 1687 del Tomo II del expediente en el que se actúa.

⁶⁴ Disco duro que contenía el respaldos: ***** correspondiente a ***** , ***** correspondiente a ***** , ***** correspondiente a ***** , ***** correspondiente a ***** , ***** correspondiente a ***** y ***** correspondiente a *****.

En atención a los tiempos necesarios para efectuar la revisión de todos medios electrónicos en comento, dicha diligencia continuó y se asentó en las actas correspondientes a los días veintiséis y treinta de junio, uno, dos, tres, seis, siete, ocho, nueve, diez, trece, catorce y quince de julio; tres, cuatro, cinco, seis, siete, diez, once y doce de agosto, todos correspondientes el dos mil quince⁶⁵.

Como resultado del análisis de los medios electrónicos en comento, se obtuvo como resultado que en la carpeta con número de inventario ****, correspondiente a ****, existían múltiples imágenes de mujeres y hombres desnudos o semidesnudos, muchas de éstas expresando actos sexuales, con alusión sexual o pornográficos.

Al advertir lo anterior, se procedió a su análisis individual y se inició la selección de algunas de las imágenes referidas y a la creación de un archivo electrónico de “Word” titulado: “Fotos diligencia”, para copiarlas y pegarlas en el mismo, a efecto de que se pudieran visualizar óptimamente. Posteriormente, se llevó a cabo la impresión de dichas imágenes.

TRIGÉSIMO QUINTO. El trece de agosto de dos mil quince⁶⁶, la Licenciada ****, dictaminadora II, ante las testigos de asistencia, Licenciadas ****, profesional operativa, y ****, dictaminadora II, todas adscritas a la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial, hizo constar que se revisó el contenido del dispositivo “USB” proporcionado por ****, en su escrito de quince de abril de dos mil quince.

⁶⁵ Fojas 1687 a 1790 del Tomo II.

⁶⁶ Fojas 1791 a 1794 del Tomo II.

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

En el disco identificado con el número uno se advirtió la existencia de una carpeta denominada “mas volumen” (sic) y en el disco número dos, una carpeta intitulada “original”, cada una con diez archivos de audio, con diferentes duraciones, de cuya reproducción se advertía que en las conversaciones intervenían varias voces masculinas que se expresan con groserías y bromas, así como algunas femeninas que no participaban en esos comentarios.

TRIGÉSIMO SEXTO. Por acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil quince⁶⁷, la Contraloría tuvo por recibidos –y se agregaron al cuaderno de investigación correspondiente– los siguientes documentos:

- i. El acta iniciada el veintitrés de junio y concluida el doce de agosto, ambos de dos mil quince, en la que se hizo constar que como resultado de la revisión del respaldo de los archivos obtenidos del equipo de cómputo de ****, se obtuvo la impresión de cuatro mil trescientas treinta y siete imágenes que contenían pornografía o sexo explícito.
- ii. El acta de trece de agosto de dos mil quince, donde consta la transcripción de los audios contenidos en la memoria “USB” presentada por ***** con el escrito de quince de abril de dos mil quince.

Respecto del análisis de los discos duros, se acordó que la forma en que se obtuvieron las copias y el análisis, y señaló que una vez que se encontraban accesibles en el disco duro con número de inventario

⁶⁷ Fojas 1795 a 1803 del Tomo II.

****⁶⁸, el veinticinco de junio de dos mil quince se inició la revisión del contenido para identificar imágenes de sexo explícito o de pornografía, respecto del respaldo del equipo de cómputo que tenía asignado ****, lo que consta en el acta que inició el veinticinco de junio de dos mil quince, la cual se suspendió al término de las horas hábiles de cada día laborable, para continuar el día hábil siguiente, hasta concluir el doce de agosto de dos mil quince, y como resultado se imprimieron 4,337 (cuatro mil trescientas treinta y siete) imágenes. Y especificó, que durante los días hábiles comprendidos en el periodo del veinticinco de junio al doce de agosto de dos mil quince, únicamente fue posible revisar el contenido de los archivos localizados en el equipo de cómputo asignado a ****, mismos que presentan 4.02 gigabytes; es decir, que hacía falta analizar el respaldo de los equipos de cómputo asignados o en uso de ****, que comprenden 481.79 gigabytes.

Por otro lado, precisó que en los archivos en que se identificaron imágenes de sexo explícito o pornografía, no fue posible que personal autorizado de la Contraloría identificara su ruta de acceso, es decir, su localización exacta en el equipo de cómputo respectivo, ya que, para llevar a cabo ese análisis fueron almacenados en el disco duro externo con número de inventario **, por lo que, la ruta de acceso que pudo visualizar el personal autorizado correspondía a ese medio de almacenamiento, no al del equipo de cómputo de origen, lo cual fue motivo de la diligencia de inspección de seis de marzo de dos mil quince.**

En este tenor, con la finalidad de conocer la localización exacta de los archivos electrónicos que contienen imágenes de sexo explícito o de pornografía, por lo que estimó necesario solicitar el apoyo técnico

⁶⁸ Disco duro que contenía el respaldos: **** correspondiente a ****, **** correspondiente a ****, **** correspondiente a ****, **** correspondiente a ****, **** correspondiente a **** y **** correspondiente a ****.

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

de personal de la Dirección General de Tecnologías de la Información, a fin de que con el nombre de los archivos de las imágenes que contenían sexo explícito o pornografía localizados por esta Contraloría en la diligencia que comenzó el veinticinco de junio y concluyó el doce de agosto de dos mil quince, de las cuales se obtuvo su impresión, se realizara un análisis forense para determinar y proporcionar en un informe que rinda por escrito, la ruta de acceso que tiene cada archivo en los equipos de cómputo que tenían asignados *****.

Asimismo, se estableció que si bien se habían recabado en la investigación diversos elementos de prueba respecto de los hechos relacionados con el posible acoso laboral, acoso sexual o faltas de respeto, o bien, cualquier otra conducta que genere incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos por parte de los servidores públicos adscritos a la Dirección General del Canal Judicial, o de aquellos que pudieran constituir infracción administrativa en términos del artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, también era cierto que aún debían realizarse diversas diligencias, pero el plazo para la integración de la misma fenecía el dieciocho de agosto de dos mil quince, por lo que se solicitó al Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el autorizar la ampliación de la investigación por seis meses más, para concluir con la misma.

Por acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil quince, el Ministro Presidente de este Alto Tribunal autorizó la ampliación del plazo de investigación **con la intención de que se obtuvieran las probanzas que resultaren indispensables para concluir con la**

citada investigación. En ese sentido, se estableció que el plazo que se autorizó ampliar correría del diecinueve de agosto de dos mil quince al dieciocho de febrero de dos mil dieciséis.

TRIGÉSIMO SÉPTIMO. A través del acta de nueve de octubre de dos mil quince⁶⁹, en las oficinas de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial, el Licenciado ****, dictaminador I, ante los testigos de asistencia, Licenciados ****, Profesionales Operativos adscritos a la referida Dirección General, y el Auxiliar de Informática, Ingeniero ****, Profesional Operativo adscrito a la Dirección General de Tecnologías de la Información, asentó que se realizó la copia de la carpeta intitulada “Evidencia Casos”, **contenida en el disco duro con número de inventario “*****”, para ser almacenada en el disco duro con número de inventario “*****”.**

A efecto de lo anterior, se asentó que el Ingeniero **** manifestó que se utilizaría el programa “TeraCopy”, que permite la transferencia de archivos con un mayor control que con la herramienta que ofrece el explorador de “Windows”. Asimismo, afirmó que el disco duro con número de inventario “*****”, donde se ubicaba la información original, se conectó a la herramienta “Tableau”, el cual protege contra escritura el contenido del disco, para garantizar que el disco duro no sufriera ninguna alteración en la información contenida.

A las diez horas con treinta y nueve minutos, el referido ingeniero precisó que comenzó el proceso de copia de la carpeta “Evidencia Casos”, contenida en el disco duro con número de inventario “*****” al identificado con número de inventario “*****”.

⁶⁹ Foja 1939 del Tomo II.

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

Posteriormente, a las dieciséis horas con veintitrés minutos, manifestó que el programa “TeraCopy” presentó un error y ya no se estaba realizando la copia, por lo que se procedió a utilizar la herramienta del explorador de Windows para iniciar de nueva cuenta el proceso de copiado.

Dicho procedimiento se mantuvo en funcionamiento hasta su culminación satisfactoria –la cual quedó asentada en acta de trece de octubre de dos mil quince–. Como resultado de la diligencia en comento, se obtuvieron un total de trescientos setenta mil ochocientos treinta y ocho archivos, contenidos en ciento noventa carpetas.

Asimismo, en dicha fecha, se inició el procedimiento de cadena de custodia “*****” en los archivos copiados del disco duro con número de inventario ***** al identificado con número de inventario *****, para verificar que los archivos originales no sufrieron alteración alguna y que correspondían exactamente a la copia que se hizo de los mismos en el disco duro. Siendo que dicho proceso tardaría aproximadamente doce horas, se dejó los equipos funcionando para no suspenderlo.

TRIGÉSIMO OCTAVO. En el acta levantada al día catorce de octubre de dos mil quince⁷⁰, el Ingeniero ***** comunicó que la cadena de custodia de los procesos de verificación de copiado de la carpeta “Evidencia Casos” se realizaría “caso por caso”, esto es, que el proceso de verificación se llevaría a cabo analizando cada una de las carpetas que contiene el disco duro con número de inventario *****, a efecto de comprobar que el copiado de los archivos no sufrió alteración alguna. A efecto de lo anterior, se utilizó la herramienta

⁷⁰ Fojas 1942 a 1944 del Tomo II.

denominada “Quick ***** v2.6.3”, derivada del algoritmo SHA-1. La verificación de los referidos archivos concluyó de manera satisfactoria hasta el quince de octubre de dos mil quince.

TRIGÉSIMO NOVENO. Por otra parte, en acta inicial de trece de octubre de dos mil quince⁷¹, ante la presencia de la Maestra *****, Subdirectora General de Responsabilidades Administrativas, y las testigos de asistencia, Maestra ***** y la Licenciada *****, dictaminadoras II, comparecieron *****, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintiuno de septiembre de dos mil quince, dictado en el cuaderno de investigación *****, y desahogar las testimoniales en torno a los hechos que se investigan en dicho expediente. Por otro lado, se hizo constar que al inicio de la diligencia no se encontraba presente *****, quien también fue citado como testigo, sin embargo, finalmente sí rindió su testimonial.

CUADRAGÉSIMO. Mediante acta inicial de catorce de octubre de dos mil quince, se hizo constar que ante la Maestra *****, Subdirectora General de Responsabilidades Administrativas, y las testigos de asistencia, Maestra ***** y la Licenciada *****, dictaminadores II, comparecieron en calidad de testigos *****, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintiuno de septiembre de dos mil quince, dictado en el cuaderno de investigación *****, y desahogar las testimoniales en torno a los hechos que se investigaron en dicho expediente. Asimismo, siendo las nueve horas con veinte minutos, se presentó *****, quien manifestó que su tardanza obedecía a que hubo una concentración masiva en la Calzada Zaragoza.

CUADRAGÉSIMO PRIMERO. A través del acta inicial de quince de octubre de dos mil quince, se hizo constar que comparecieron en la

⁷¹ Foja 1955 del Tomo II.

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial de la Contraloría de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en calidad de testigos, ***** y *****, a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintiuno de septiembre de dos mil quince, dictado en el cauderno de investigación *****, es decir, a rendir su testimonial en relación con los hechos investigados en dicho expediente. Dicha diligencia concluyó a las trece horas con cinco minutos de ese mismo día.

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. En el acta inicial de dieciséis de octubre de dos mil quince, se hizo constar que comparecieron en la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial de la Contraloría de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, *****, y posteriormente *****, a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en el proveído de veintiuno de septiembre de dos mil quince, dictado en el cuaderno de investigación 6/2015, y desahogar la testimonial correspondiente. Por otra parte, se asentó que al inicio de la diligencia no se encontraba presente *****, aunque finalmente sí acudió a rendir su testimonial ese mismo día.

CUADRAGÉSIMO TERCERO. El diecinueve de octubre de dos mil quince comparecieron ***** y *****, a efecto de rendir su testimonial respecto de los hechos investigados en el cuaderno de investigación 6/2015.

CUADRAGÉSIMO CUARTO. El veintidós de octubre de dos mil quince,⁷² el personal adscrito a la **Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial** hizo

⁷² Fojas 2129 a 2133 del Tomo II

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

constar que continuaba con el análisis de los archivos localizados en los respaldos de los equipos de cómputo asignados o en uso de *****,
*****, *****, *****, *****, *****, y *****.

Se especificó que el análisis se realizaría en el equipo de cómputo con número de inventario *****, bajo resguardo del licenciado *****, dictaminador I, adscrito a la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial. Asimismo, se utilizará la herramienta denominada “Index Dat Spy”, instalada por el personal de la Dirección General de Tecnologías de la Información, para analizar el historial de internet de los equipos de cómputo.

Siendo las diez horas con cuarenta minutos, inició el análisis del historial de correos electrónicos del respaldo de los archivos contenidos en el equipo de cómputo ***** asignado o en uso de *****. A las once horas con veinticinco minutos se realizó la apertura de cada archivo “index”, se advirtió que existían registros de diversas páginas de internet. Se precisó que al intentar abrir cada una de esas páginas no era posible visualizarlas con la herramienta en uso, ya que en ocasiones al intentar abrir diversos archivos, la herramienta se cerraba automáticamente, o bien, arroja un mensaje con la siguiente leyenda: “Unexpected file format”. Por lo anterior, ante la imposibilidad de abrir las páginas del historial de internet contenido en la carpeta “Evidencia Casos”, se concluyó la búsqueda y se cerró el acta.

Asimismo se estableció que no fue posible abrir las páginas de internet del historial de internet contenido en la carpeta analizada, por lo que se concluyó la búsqueda y se cerró el acta.

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

CUADRAGÉSIMO QUINTO. Mediante acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil quince⁷³, el Contralor solicitó el apoyo técnico de la Dirección General de Tecnologías de la información para conocer el historial de consulta de internet del equipo de cómputo con número de inventario ***** y contar con un listado de las páginas consultadas de todos los equipos de cómputo correspondientes a los servidores públicos ***** , ***** , ***** , ***** , ***** , ***** y ***** .

CUADRAGÉSIMO SEXTO. En el acta relativa al análisis de archivos tipo video localizados en el equipo de cómputo de ***** , de veintiocho de octubre de dos mil quince⁷⁴, que se levantó exclusivamente por personal de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial, se asentó que de la revisión de los archivos correspondientes, se visualizaron múltiples archivos en formato “.mp4”, siendo que algunos representaban escenas en movimiento que expresan actos sexuales, con alusión sexual, de impacto visual o inapropiadas, sin guardar relación con el servicio encomendado en el Alto Tribunal.

Al día siguiente⁷⁵, se inició el análisis de los archivos tipo “correo electrónico”, localizados en el “outlook” instalado en el equipo de cómputo asignado o en uso de ***** , con la finalidad de localizar materia pornográfico u otros que expresen actos sexuales, con alusión sexual, de impacto visual o inapropiadas que no guardan relación con el servicio encomendado.

⁷³ Fojas 2134 y 2135 del Tomo II.

⁷⁴ Fojas 2138 a 2141 del Tomo II.

⁷⁵ Fojas 2142 y 2143 del Tomo II.

En dicha actuación quedó asentado que no fue posible visualizar los archivos tipo correo electrónico contenidos en la subcarpeta intitulada “****”, por lo que se procedió al análisis de los archivos electrónicos tipo “power point”, localizados en el referido equipo de cómputo, sin que se advirtiera que alguno contuviera material pronográfico o que expresara actos sexuales, con alusión sexual, de impacto visual o inapropiadas, que no guardaran relación con el servicio encomendado por este Alto Tribunal.

CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO. El seis de noviembre de dos mil quince, se rindió la testimonial a cargo de ****.

CUADRAGÉSIMO OCTAVO. Por auto de diez de noviembre de dos mil quince⁷⁶, la Contraloría tuvo por recibidos diversos documentos, en los que se encontraba el acta de veintiocho de octubre de dos mil quince, en el que personal autorizado de la Contraloría hizo constar la denominación de los videos cuyo contenido expresa actos sexuales o con alusión sexual, que fueron localizados en el respaldo correspondiente a los archivos electrónicos del equipo de cómputo que tenía ****; mientras que en el acta de veintinueve de octubre de dos mil quince, se hizo constar que no fue posible realizar la búsqueda de los archivos tipo “correo electrónico” localizados en el “Outlook” del respaldo correspondiente al equipo de cómputo en uso de **** y que en dicho respaldo no fueron localizados archivos tipo “power point” con contenido que expresa actos sexuales, con alusión sexual.

Señaló que verificar el contenido del disco compacto “****”, se localizó un archivo intitulado “****” en formato “Word” y “PDF”, constante de 2,031 (dos mil treinta y un) fojas, que contiene un reporte

⁷⁶ Fojas 2152

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

relativo a las rutas de ubicación de los archivos materia del análisis forense mencionado, así como la descripción del formato de esos archivos, comentarios sobre dichos archivos y las propiedades obtenidas de los mismos en las que se incluye la imagen de contenidos sexuales.

Al respecto, refirió que la búsqueda de rutas de localización de las imágenes seleccionadas por personal autorizado de la Contraloría en el respaldo de los archivos contenidos en el equipo de cómputo que tenía asignado, en su momento, *****, era una tarea que requería conocimientos técnicos y especializados en informática, por ello se solicitó el apoyo de la Dirección General de Tecnologías de Información, para que se realizara el análisis forense de mérito, y si bien el reporte contenido en el disco compacto que se recibe cumple con lo solicitado, lo cierto es que, en atención a la naturaleza técnica de la información contenida en dicho reporte electrónico, se estima necesario contar con una versión impresa y a color de dicho documento, en la que obre la firma del personal que la Dirección General de Tecnologías de Información designó para que lo elaborara, pues esa formalidad avala que dicho análisis se realizó por personal técnico con conocimientos especializados en informática.

Por tanto, en ejercicio de las atribuciones conferidas a la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para practicar investigaciones que permitan demostrar, en su caso, la existencia de infracciones administrativas y la probable responsabilidad de alguno de sus servidores públicos, ordenó girar oficio al Director General de Tecnologías de la Información, para que en el término de tres días hábiles siguientes a aquél en que surta

efectos la notificación del proveído, remitiera la impresión a color del resultado del análisis forense solicitado por la Contraloría contenido en el disco compacto que anexa al oficio ****, el cual deberá incluir la explicación detallada del tipo de análisis forense que se realizó, las peculiaridades u observaciones que se estimen necesarias como resultado de dicho análisis, así como el nombre y la firma de las personas que lo elaboraron.

Por otra parte, también se solicitó al Director General de Tecnologías de la Información informar por escrito el listado de páginas de internet que fueron abiertas o consultadas en los equipos de cómputo cuyo respaldo se encuentra en la carpeta “Evidencia Casos”, requirió que dicho informe también debería presentarse impreso a color, con la explicación detallada del tipo de análisis forense que se realizó, así como el nombre de los servidores públicos a quienes haya designado para su elaboración y anexar el archivo electrónico del mismo.

CUADRAGÉSIMO NOVENO. Por oficio ****, presentado el treinta de noviembre de dos mil quince en las Oficinas de la Contraloría, el Director General de Tecnologías de la Información solicitó una prórroga para entregar el análisis del historial de internet correspondiente a las imágenes forenses de los equipos con número de inventario ****. Asimismo, informó que en el disco duro con número de inventario “****” no se encuentra la imagen forense del equipo de cómputo con número “SC-****”⁷⁷.

Conforme a lo anterior, por auto de uno de diciembre de dos mil quince⁷⁸, la Contraloría le otorgó una prórroga de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a aquél en que fenezca el plazo

⁷⁷ SC-**** correspondiente a ****, **** correspondiente a ****, **** correspondiente a ****, **** correspondiente a ****, **** correspondiente a **** y **** correspondiente a ****.

⁷⁸ Foja 2162 del Tomo II.

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

concedido en el proveído de trece de noviembre del año citado, señalando que el nuevo plazo corría del dos al quince de diciembre del dos mil quince, debido a que los días cinco y seis, doce y trece de diciembre serán sábado y domingo.

Por otro lado, confirmó que la Contraloría contaba con un respaldo del disco duro con número de inventario “****”, el cual se obtuvo con apoyo técnico del personal de la Dirección General de Tecnologías de la Información el nueve de octubre de dos mil quince. Y señaló que las carpetas intituladas “****” contenían la selección de archivos correspondientes al equipo de cómputo con número de inventario “SC-****” correspondiente a ****, por tanto, con dicha información se debería realizar el análisis forense del historial de internet solicitado.

QUINCAGÉSIMO. Por oficio ****, suscrito por el Director General de Tecnologías de la Información, presentado el once de diciembre de dos mil quince en la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial, envió diversos documentos, en los que se encontraba el análisis forense de los historiales de internet de las imágenes obtenidas de los equipos de computo con número de inventario SC-**** correspondiente a ****, **** correspondiente a ****, **** correspondiente a ****, **** correspondiente a ****, **** correspondiente a **** y **** correspondiente a ****.

Por auto de catorce de diciembre de dos mil quince⁷⁹, la Contraloría tuvo por presentado en tiempo el oficio del Director General de Tecnologías de la Información.

QUINCUAGÉSIMO PRIMERO. Mediante acuerdo de doce de enero de dos mil dieciséis⁸⁰, se tuvo por recibida el acta instrumentada con motivo de la revisión del respaldo de los archivos obtenidos en la diligencia de seis de marzo de dos mil quince, del equipo de cómputo asignado a *****, *****, ***** y *****, iniciada el once de noviembre de dos mil quince y concluida el siete de enero de dos mil dieciséis, en la que se obtuvo lo siguiente:

Nombre y número de inventario	Resultado de la revisión.	
	Tipo de archivo	Material con contenido pornográfico o sexo explícito
***** *****	Imágenes	95 impresiones
	Videos	No fue posible la visualización.
	Correo electrónico (Outlook)	No fue posible la visualización.
	Power Point	Ninguno
***** *****	Imágenes	Ninguna
	Videos	No fue posible la visualización.
	Correo electrónico (Outlook)	No fue posible la visualización.
	Power Point	1 Archivo (51 diapositivas)
***** *****	Imágenes	No fue posible la visualización.
	Videos	16
	Correo electrónico (Outlook)	No fue posible la visualización.
	Power Point	Ninguno
***** *****	Imágenes	No fue posible la visualización.
	Videos	No fue posible la visualización.
	Correo electrónico (Outlook)	No fue posible la visualización.
	Power Point	Ninguno.

En atención a lo anterior, se ordenó agregar dicha acta a los autos del cuaderno de investigación ***** para que obrara como corresponda, integrando las impresiones obtenidas del respaldo electrónico de los equipos de cómputo de ***** y ***** a los cuadernos de pruebas 5 y 8, respectivamente.

⁷⁹ Fojas 2168 y 2169 del Tomo II.
⁸⁰ Fojas 2222 a 2225 del Tomo II.

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

Por otra parte, se advirtió que **las herramientas tecnológicas con que cuentan los equipos de cómputo del personal autorizado de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial** habían sido insuficientes para visualizar el contenido de los archivos electrónicos tipo video, con excepción de los archivos correspondientes a los equipos de cómputo de ***** y *****. Asimismo tampoco fue posible visualizar los archivos tipo correo electrónico de los respaldos de los equipos de cómputo de *****, *****, *****, ***** y *****, ni los archivos tipo imagen de los respaldos de los equipos de cómputo de los dos servidores públicos citados en último término, que habían sido analizados hasta ese momento, por lo que se requería apoyo técnico.

En ese sentido, **se sostuvo que resultaba indispensable contar con un análisis forense que determinara la ruta de origen de los archivos en los que se localizó material con contenido pornográfico o con sexo explícito**, específicamente en aquéllos tipo imagen localizados en el equipo de cómputo asignado o en uso de *****; tipo video identificados en el equipo de cómputo asignado o en uso de *****, y tipo power point localizados en el equipo de cómputo de *****.

Respecto de esto último, se necesitaba contar con herramientas tecnológicas que permitieran visualizar y analizar el contenido de los archivos electrónico tipo correo electrónico de los respaldos de los equipos de cómputo **en los que personal autorizado de la Contraloría estuvo imposibilitado para hacerlo**, correspondientes a *****, *****, *****, ***** y *****. Asimismo, resultaba indispensable

visualizar y analizar el contenido de los archivos tipo imagen correspondientes a ***** y ***** , además de poder visualizar el contenido de los archivos tipo video localizados en los equipos de cómputo obtenidos en la diligencia de inspección de seis de marzo de dos mil quince, con excepción de los relativos a ***** y ***** , respecto de los cuales personal autorizado logró identificar y visualizar diversos archivos.

Por último se precisó que era necesario realizar el análisis de todos aquellos archivos tipo imagen, video, correo electrónico y power ponit que aún se encontraban pendientes de revisión, es decir, de los equipos de cómputo asignados o en uso de ***** y de ***** .

Para lo anterior, se estimó necesario solicitar apoyo a la Dirección General de Tecnologías de la Información, a fin de que en el término de ocho días hábiles emitiera informe forense por escrito en impresión a color, con la explicación detallada del tipo de análisis forense ordenando que fuera preciso el informe y acompañarlo con la impresión de imágenes o audios correspondientes⁸¹.

⁸¹ Se le requirió en específico proporcionara de manera precisa lo siguiente:

“1. Ruta de origen de los archivos localizados por personal autorizado de la Contraloría, como se indica:

a) De los archivos tipo imagen localizados en la subcarpeta intitulada “*****” del equipo de cómputo de *****.

b) De los archivos tipo video de las subcarpetas intituladas “*****” y “*****” de los equipos de cómputo de ***** y *****.

Al respecto, cabe precisar que deberá acompañar grabación en archivo electrónico, de los videos de los que se solicita análisis forense.

c) De los archivos tipo “power point” localizados en la subcarpeta intitulada “*****” del equipo de cómputo de *****.

2. Ruta de origen y características de los archivos electrónicos tipo video alusivos a mujeres u hombres desnudos o semidesnudos, o bien, con alusión sexual o sexo explícito o de tipo pornográfico, contenidos en las subcarpetas

intituladas “Caso ***”, “Caso *****”, “Caso ***” y “Caso ***”, de los equipos de cómputo de ***** , ***** , ***** , ***** , respectivamente, así como de las subcarpetas intituladas “Caso *****”, “Caso ***** 2” y “Caso *****”, correspondientes a *****.

Por cuanto hace a los archivos tipo video, se solicita que se realice un respaldo de los mismos, el cual deberá contener el programa que permita visualizarlos.

3. Ruta de origen y características de los archivos tipo correo electrónico que contengan imágenes de mujeres u hombres desnudos o semidesnudos, o bien, con alusión sexual o sexo explícito o de tipo pornográfico, contenidos en las subcarpetas intituladas “Caso ***”, “Caso ***”, “Caso ***”,

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO. Por oficio *****, el Director General de Tecnologías remitió la información requerida por la Contraloría en el auto anterior. Por proveído de diez de febrero de dos mil dieciséis⁸², la Contraloría tuvo por presentado en tiempo el citado informe, sin embargo, lo volvió a requerir por el término de tres días para que emitiera informe forense por escrito en impresión a color, con la explicación detallada del tipo de análisis forense que realice, en el que proporcione de manera precisa lo siguiente:

“1. Ruta de origen de cada uno de los archivos tipo imagen, cuyo contenido sea de imágenes de mujeres u hombres desnudos o semidesnudos, o bien, con alusión sexual o sexo explícito o de tipo pornográfico, localizados en la subcarpeta intitulada “Caso ****”, “Caso ****” y “Caso ****”.

2. Ruta de origen de cada uno de los archivos tipo imagen y presentaciones en “power point”, cuyo contenido sea de imágenes de mujeres u hombres desnudos o semidesnudos, o bien, con alusión sexual o sexo explícito o de tipo pornográfico, localizados en la subcarpeta intitulada “Caso ****”.

QUINCUAGÉSIMO TERCERO. Por proveído de dieciocho de febrero de dos mil dieciséis⁸³, una vez analizadas las actuaciones que obraban en el expediente, la Contraloría estimó contar con los elementos de prueba necesarios para emitir un pronunciamiento

“Caso ****”, “Caso ****” y “Caso ****”, de los equipos de cómputo de ****, ****, ****, ****, **** y ****, respectivamente, así como de las subcarpetas intituladas “Caso ****”, “Caso ****” y “Caso ****”, correspondientes a ****.

En dicho informe se deberá precisar si se trata de correos enviados o de correos recibidos en la bandeja de entrada de “Outlook” y acompañar impresión a color de las imágenes insertas en los correos electrónicos o que se encuentren como documentos adjuntos, con las características antes señaladas.

4. Ruta de origen de cada uno de los archivos tipo imagen y presentaciones en “power point”, cuyo contenido sea de imágenes de mujeres u hombres desnudos o semidesnudos, o bien, con alusión sexual o sexo explícito o de tipo pornográfico, localizados en la subcarpeta intitulada “Caso ****” del equipo de cómputo de ****, así como de la subcarpeta intitulada “Caso ****”, “Caso ****” y “Caso ****” del equipo de cómputo de ****.

5. Ruta de origen y características de los archivos tipo imagen que contengan mujeres u hombres desnudos o semidesnudos, o bien, con alusión sexual o sexo explícito o de tipo pornográfico, contenidos en las subcarpetas intituladas “****” y “****”, de los equipos de cómputo de **** y ****.

Es importante destacar, que la impresión del informe forense que se envíe en cumplimiento a este requerimiento, deberá contener el nombre y firma de los servidores públicos a quienes se designe para su elaboración y adjuntar la versión electrónica correspondiente”.

⁸² Fojas 2236 a 2238 del Tomo II.

⁸³ Fojas 2252 a 2262 del Tomo II.

respecto de la existencia de una infracción administrativa y sobre qué servidores públicos eran probables responsables de su comisión, por lo que la investigación se encontraba integrada y se ordenó emitir el dictamen correspondiente.

QUINCUAGÉSIMO CUARTO. Mediante dictamen correspondiente al diecisiete de febrero de dos mil dieciséis⁸⁴, el Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que:

1. Se contaba con elementos probatorios que acreditan, al momento, que *****, posiblemente incurrieron en la falta administrativa prevista en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por incumplir, de forma probable, con la obligación contenida en el artículo 6, fracción III de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; en virtud de utilizar los recursos que les fueron asignados para fines diversos a los que estaban afectos, ya que almacenaron imágenes con contenido pornográfico o sexo explícito en el equipo de cómputo que tenían en uso o resguardo. Además, también incurrieron en esa infracción ***** y *****, debido a que también utilizaron los bienes informáticos, y la red a través del correo institucional (Outlook) o internet para consultar páginas electrónicas con contenido pornográfico.
2. Se contaba con elementos probatorios suficientes, hasta ese momento, de que *****, *****, *****, ***** y *****, posiblemente incurrieron en la falta administrativa prevista en el artículo 131, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por incumplir, de forma probable, con la obligación contenida en el artículo 8, fracción I, de la Ley Federal de

⁸⁴ Fojas 2263 y 2264 del Tomo II.

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en virtud de que *****, *****, *****, y *****, consumían bebidas alcohólicas en las instalaciones del área a la que estaban adscritos, inclusive, de que *****, fomentó la ingestión de bebidas alcohólicas en la oficina; mientras que ***** introdujo bebidas alcohólicas a sabiendas de que las consumían en las instalaciones del Alto Tribunal.

3. Se tienen elementos probatorios de que *****, *****, y ***** posiblemente incurrieron en la falta administrativa prevista en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por incumplir, de forma probable, con la obligación contenida en el artículo 8, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, pues con motivo de su desempeño como servidores públicos en las instalaciones de la Dirección General del Canal Judicial, particularmente en la oficina de *****, durante la jornada de trabajo, realizaban actividades recreativas como jugar “play station” y “dominó”, en lugar de realizar las actividades laborales que tenían encargadas y dichas actividades por su naturaleza recreativa resultan inapropiadas en un centro de trabajo como es la Dirección General del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
4. Se estimó tener elementos de prueba suficientes para acreditar que probablemente *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, y *****, posiblemente incurrieron en la falta administrativa prevista en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación por incumplir, de forma probable, con la obligación contenida en el artículo 8,

fracción VI, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, ya que agredían físicamente a otros servidores públicos, a través de la práctica conocida como “el manto sagrado”, que consistía en que, habitualmente, en la fecha de cumpleaños de alguno de los compañeros de la Dirección General del Canal Judicial o por algún otro motivo, cubrían la cabeza de la persona festejada o de otra, con una manta, lo sentaban en una silla y, posteriormente, lo golpeaban.

5. Se contaba con elementos de prueba suficientes para acreditar que probablemente *****, *****, *****, *****, *****, ***** y ***** incurrieron en la falta administrativa prevista en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por incumplir, de forma probable, con la obligación contenida en el artículo 8, fracción VI, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en virtud de que como servidores públicos de la Dirección General del Canal Judicial, durante la jornada de trabajo y en su área de labores, habitual y continuamente, llevaron a cabo juegos de naturaleza sexual entre ellos, realizando tocamientos en sus penes y nalgas, simulando tener relaciones sexuales, mientras realizaban expresiones verbales de anturaleza sexual inapropiada, conductas con las cuales no se condicionan con respeto y rectitud hacia los demás.
6. Se consideró tener elementos probatorios de que ***** Martíenz como director general, *****y *****, como subdirectores generales, posiblemente incurrieron en la falta administrativa prevista en el artículo 131, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por incumplir con la obligación contenida en el artículo 8, fracción XVII de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, ya que, omitieron

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

supervisar que los servidores públicos que tenían bajo su mando cumplieran con las obligaciones inherentes al servicio público encomendado, ya que se tiene probado, hasta el momento, la utilización de los recursos informáticos asignados para fines diversos a los que estaban afectos; porque ejercieron indebidamente el cargo y porque dejaron de observar buena conducta en el empleo.

7. De conformidad con los artículos 3 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y 7 del Acuerdo General de Administración III/2012, las conductas que se consideran acreditadas de manera probable en este expediente, debido a las circunstancias en que se llevaron a cabo (de manera pública y abierta), las repercusiones negativas en el ambiente de trabajo y en la disciplina del personal de la Dirección General del Canal Judicial, inclusive considerando el nivel jerárquico de quienes intervinieron en dichas conductas, se considera que las infracciones administrativas que se tienen acreditadas al momento, deben clasificarse como graves.

En esas condiciones, al estimar que dichas infracciones debían calificarse como graves, de conformidad con los artículos 23, 24, segundo párrafo, 25, primer párrafo y 33 del Acuerdo General 9/2005, se remitió el expediente a la Presidente de este Alto Tribunal los autos correspondientes, para que, en su caso, dicatara el acuerdo de inicio del procedimiento.

QUINCUGÉSIMO QUINTO. Por acuerdo de tres de marzo de dos mil dieciséis, la Contraloría emitió el proyecto de dictamen en el

cual concluyó que se contaba con los elementos probatorios que acreditan, al momento, que *****, *****, *****, *****, y ***** posiblemente incurrieron en la falta administrativa prevista en el artículo 131, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por incumplir, de forma probable, con la obligación contenida en el artículo 8, fracción III de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en virtud de utilizar los recursos que les fueron asignados para fines diversos a los que estaban afectos, ya que almacenaron imágenes con contenido pornográfico o sexo explícito en el equipo de cómputo que tenían en uso o resguardo. Además, también incurrieron en esa infracción *****, ***** y ***** debido a que también utilizaron los bienes informáticos, y la red a través del correo institucional (Outlook) o internet, para consultar páginas electrónicas con contenido pornográfico.

Asimismo, con elementos probatorios suficientes, hasta este momento, de que *****, *****, *****, *****, y *****, posiblemente incurrieron en la falta administrativa prevista en el artículo 131, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por incumplir, de forma probable, con la obligación contenida en el artículo 8, fracción I de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en virtud de que *****, *****, *****, y ***** consumían bebidas alcohólicas en las instalaciones del área a la que estaban adscritos, inclusive, de que ***** fomentó la ingestión de bebidas alcohólicas en la oficina; mientras que ***** introdujo bebidas alcohólicas a sabiendas de que las consumían en las instalaciones del Alto Tribunal.

Se acordó que se contaba con elementos probatorios de que *****, ***** y ***** posiblemente incurrieron en la falta administrativa prevista en el artículo 131, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por incumplir, de forma probable, con la

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

obligación contenida en el artículo 8, fracción I y VI de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, pues con motivo de su desempeño como servidores públicos en las instalaciones de la Dirección General del Canal Judicial, particularmente en la oficina de *****, durante la jornada de trabajo, realizaban actividades recreativas, así como juegos de naturaleza sexual entre ellos, realizando tocamientos en sus penes y nalgas, simulando tener relaciones sexuales, mientras realizaban expresiones verbales de naturaleza sexual inapropiada, conductas con las cuales no se conducían con respeto y rectitud hacia los demás.

Estimó tener elementos de prueba suficientes para acreditar que probablemente *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, y *****, posiblemente incurrieron en la falta administrativa prevista en el artículo 131, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por incumplir, de forma probable, con la obligación contenida en el artículo 8, fracción VI de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, ya que agredían físicamente a otros servidores públicos.

Se considera tener elementos probatorios de que ***** como director general, ***** y ***** como subdirectores generales, posiblemente incurrieron en la falta administrativa prevista en el artículo 131, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por incumplir con la obligación contenida en el artículo 8, fracción XVII de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, ya que, omitieron supervisar que los

servidores públicos que tenían bajo su mando cumplieran con las obligaciones inherentes al servicio público encomendado.

Por lo que consideró que las infracciones que se tenían como acreditadas hasta ese momento, a su consideración, se calificaban de graves de conformidad con los artículos 23, 24, párrafo segundo, 25, primer párrafo y 33 del Acuerdo General 9/2005, por lo que ordenó remitir el expediente y sus cuadernos de pruebas a la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales conducentes

QUINQUAGÉSIMO SEXTO.- El nueve de mayo de dos mil dieciséis, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó el acuerdo de inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa en donde en esencia se sostuvo lo siguiente:

1.- De conformidad con el contenido y alcance de los medios demostrativos recabados en el cuaderno de investigación 6/2015 que obran autos, existen elementos suficientes que hacen presumir la probable responsabilidad de *****, *****, *****, ***** y *****, en su carácter de servidores públicos de la Dirección General del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la comisión de las conductas relativas a una indebida utilización de los recursos de trabajo, en particular, la utilización de recursos informáticos asignados en razón de su función por haberlos empleado para fines diversos a los que estaban afectos, ya que en el equipo de cómputo que como servidores públicos tenían conferido para su uso y bajo su resguardo, o bien, a través de éste, habían almacenado imágenes, videos, o consultado páginas con contenido pornográfico o sexo explícito, por lo que se impone inicio del procedimiento respectivo.

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

La conclusión anterior se ampara con los medios probatorios recabados en la investigación, dentro de los que destacan, cuando menos:

- Copia certificada de la declaración rendida el ocho de febrero de dos mil trece por *****, dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa ***** (Fojas 1807 a 1814 del Tomo II).
- Copia certificada de los expedientes personales de *****, *****, *****, ***** y *****.
- Copia certificada de los resguardos de los equipos de cómputo con número de inventario *****, entre otros, asignados a *****, *****, *****, ***** y *****, respectivamente.
- Acta de inspección de seis de marzo de dos mil quince en la Dirección General del Canal Judicial, en la que se realizó el respaldo de la información contenida en los equipos de cómputo que tuvieran bajo su resguardo *****, *****, *****, ***** y *****, respectivamente.
- Actas de catorce, quince, dieciséis, diecisiete y veinte de abril de dos mil quince en las que se hizo constar el inicio de la verificación del análisis forense realizado a los respaldos de los discos duros relativos a los equipos ya referidos.
- Actas de las diligencias iniciadas el veinticinco de junio y concluidas el doce de agosto de dos mil quince, en las que bajo las herramientas tecnológicas operantes, se verificó la existencia o no de archivos, páginas, imágenes o video de contenido sexual o pornográfico en el respaldo del equipo

de cómputo de *****, donde se encontró un total de cuatro mil trescientas treinta y ocho imágenes de contenido pornográfico o sexo explícito.

- Acta de veintiocho de octubre de dos mil quince relativa al análisis de archivos tipo video localizados en el equipo de *****, donde se obtuvieron 81 videos de contenido sexual.
- Impresión a color de cada uno de los cuatro mil trescientos treinta y ocho archivos tipo imagen localizados en el equipo de computo de *****.
- Actas de las diligencias iniciadas el once de noviembre de dos mil quince y concluidas el siete de enero de dos mil dieciséis, en las que se verificó la existencia de archivos con contenidos sexual en el equipo de *****, ***** y *****.
- Reportes de resultados en relación con los análisis forenses de historial de internet, archivos de imagen, power point, video y correo electrónico de los equipos de cómputo de ***** (setenta y nueve imágenes con contenido pornográfico, dos correos de contenido pornográfico, dos páginas de inicio de internet de contenido sexual y registro de acceso a cinco páginas web de contenido sexual), ***** (cincuenta y un diapositivas de contenido pornográfico o sexual), ***** (un video de contenido pornográfico), ***** (cuatro mil trescientos treinta y ocho imágenes de contenido pornográfico, ochenta y un videos de contenido pornográfico, ocho páginas de inicio de contenido pornográfico y consulta a noventa y un páginas de contenido pornográfico) y ***** (cuarenta y cuatro imágenes de contenido pornográfico, diecinueve videos de carácter sexual, once páginas de inicio de carácter pornográfico y acceso a cuatro páginas web de contenido pornográfico).

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

2.- Respecto al indebido ejercicio del empleo, cargo o comisión, específicamente la introducción y consumo, **respectivamente**,⁸⁵ de bebidas alcohólicas al interior de la Dirección General del Canal Judicial de esta Suprema Corte, así como la realización de actividades ajenas a las labores encomendadas en dicha área, su comisión se le atribuye a *****, *****, *****, ***** y *****, y a los tres últimos también por realizar actividades ajenas al cumplimiento de la función tales como jugar “play station” y dominó.

Parra arribar a la conclusión anterior se tomaron en cuenta, entre otros, los siguientes medios probatorios:

- Comparecencia de veintitrés de febrero de dos mil quince, a cargo de *****, en su carácter de Técnico Operativo adscrita a la Dirección General del Canal Judicial.
- Comparecencia de dos de marzo de dos mil quince, a cargo de *****, en su carácter de entonces Coordinador Administrativo adscrito a la Dirección General del Canal Judicial.
- Comparecencia de veintisiete de febrero de dos mil quince, a cargo de *****, en su carácter de Profesional Operativo adscrito a la Dirección General del Canal Judicial.
- Testimonial de trece de octubre de dos mil quince, a cargo de *****.
- Testimonial de catorce de octubre de dos mil quince, a cargo de *****.

⁸⁵ Foja 3366 vuelta del Tomo II del expediente en el que se actúa.

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

- Testimonial de seis de noviembre de dos mil quince, a cargo de *****, como servidor adscrito a la Dirección General del Canal Judicial.
- Testimonial de dieciséis de octubre de dos mil quince, a cargo de *****, como Profesional Operativo perteneciente a la Dirección General del Canal Judicial.
- Copia certificada de la testimonial de catorce de enero de dos mil dieciséis, rendida por *****, en su carácter de Profesional Operativo adscrito al Canal Judicial, en el diverso cuaderno de investigación *****.
- Comparecencia de veintisiete de febrero de dos mil quince, a cargo de *****, como talento de la Dirección General del Canal Judicial.
- Comparecencia de cuatro de marzo de dos mil quince, a cargo de *****, en su carácter de Técnico Operativo de la Dirección General del Canal Judicial.
- Comparecencia de veintitrés de febrero de dos mil quince, a cargo de *****, como servidor público adscrito al Canal Judicial.
- Testimonial de catorce de octubre de dos mil quince, a cargo de *****.
- Comparecencia de cuatro de marzo de dos mil quince, a cargo de *****.
- Impresión de dos fotografías exhibidas por *****, las cuales corresponden al personal del área de redacción de la Dirección del Canal Judicial, en la que se observa una botella de cerveza abierta de la marca “Superior” sobre una mesa.

PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 6/2015

3. Por otro lado, respecto a la conducta relativa a la inobservancia de buena conducta en el empleo, que específicamente consiste en la realización de acoso laboral que se materializó a través de maltrato físico,⁸⁶ el cual, su ejecución activa o pasiva, se le atribuye a *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, ***** y *****.

La conclusión anterior se ampara en los siguientes medios probatorios recabados en la investigación:

- Comparecencia de veintitrés de febrero de dos mil quince, a cargo de *****, en su carácter de servidor público de la Dirección General del Canal Judicial.
- Comparecencia de veintisiete de febrero de dos mil quince, a cargo de *****, como Técnico Operativo del Canal Judicial.
- Comparecencia de veintiséis de febrero de dos mil quince, a cargo de *****, ex servidor de la Dirección General del Canal Judicial.
- Comparecencia de dos de marzo de dos mil quince, a cargo de *****, en su carácter de entonces Coordinador Administrativo del Canal Judicial.
- Testimonial de trece de octubre de dos mil quince, a cargo de *****, quien se ostentó como camarógrafo.
- Testimonial de catorce de octubre de dos mil quince, por parte de *****.

⁸⁶ En específico la práctica denominada como “**manto sagrado**”, la cual consistía en que habitualmente, en la fecha de cumpleaños de alguno de los compañeros o por algún otro motivo, por ejemplo en errores de la toma de cámaras, se le llamaba usualmente a la oficina de ***** y se cubría la cabeza de la persona festejada o víctima, con una sábana, cortina o manta negra, se le sentaba en una silla, para después propinársele múltiples golpes.

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

- Testimonial de quince de octubre de dos mil quince, de *****.
- Testimonial de dieciséis de octubre de dos mil quince, a cargo de *****, en su carácter de Técnico Operativo del Canal Judicial.
- Testimonial de catorce de octubre de dos mil quince, a cargo de *****, servidor público de la Dirección General del Canal Judicial.
- Comparecencia de veinticuatro de febrero de dos mil quince, a cargo de *****, Técnico Operativo del Canal Judicial.
- Testimonial de diecisiete de octubre de dos mil quince, a cargo de *****, Técnico Operativo del Canal Judicial.
- Comparecencia de *****, de seis de septiembre de dos mil trece, en el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa ***** (Foja 1857 vuelta y 1858 del Tomo II)

4.- Respecto a la conducta de acoso Sexual Ambiental, en virtud de que como servidores públicos de la Dirección General del Canal Judicial, durante la jornada de trabajo y en su área de labores, habitual y continuamente, llevaron a cabo juegos de naturaleza sexual entre ellos y formularon expresiones de naturaleza sexual inapropiada, le es atribuida a *****, *****, *****, *****, *****, ***** y *****.

La conclusión anterior se ampara en los siguientes medios probatorios recabados en la investigación:

- Comparecencia de veinticuatro de febrero de dos mil quince, a cargo de *****, Técnico Operativo de la Dirección General del Canal Judicial.

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

- Testimonial de catorce de octubre de dos mil quince, a cargo de *****.
- Testimonial de catorce de octubre de dos mil quince, a cargo de *****, servidor público del Canal Judicial.
- Testimonial de trece de octubre de dos mil quince, a cargo de *****.
- Testimonial de catorce de octubre de dos mil quince, a cargo de *****.
- Comparecencia de veinte de febrero de dos mil quince, a cargo de *****.
- Comparecencia de veintitrés de febrero de dos mil quince, a cargo de *****.
- Comparecencia de veintiséis de febrero de dos mil quince, a cargo de *****.
- Declaración de *****, de dos de marzo de dos mil quince, entonces Coordinador Administrativo.
- Declaración de veintisiete de febrero de dos mil quince, a cargo de *****, Talento de la Dirección General del Canal Judicial.
- Comparecencia de cuatro de marzo de dos mil quince, a cargo de *****, en su carácter de Técnico Operativo del Canal Judicial.
- Comparecencia de veintisiete de febrero de dos mil quince, a cargo de *****, Técnico Operativo del Canal Judicial.
- Testimonial de *****, de diecinueve de octubre de dos mil quince, Técnico Operativo de la Dirección General del Canal Judicial.

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

- Copia certificada de la testimonial de ocho de febrero de dos mil trece, de *****, dentro del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa *****.
- Comparecencias de la propia *****, rendidas el tres y ocho de abril de dos mil trece, en el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa *****.
- Diversa comparecencia de *****, de seis de septiembre de dos mil trece, en el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa *****.
- Comparecencias de doce de diciembre de dos mil doce y diecisiete de enero de dos mil trece, a cargo de *****, en el cuaderno de investigación ***** (Fojas 1844 a la 1850 del Tomo II).

5.- Respecto a la conducta consistente en omitir realizar la supervisión de los servidores públicos que se encontraban bajo su dirección, con el fin de que cumplieran con sus obligaciones legales (implementación de acciones de prevención, establecimiento de mecanismos para conocer de la existencia de irregularidades o la aplicación de medidas de corrección), le es atribuida a *****, ***** y *****, toda vez que el primero de ellos era Director General y los otros dos eran subdirectores.

Estas omisiones se estimaron vinculadas con el hecho de que, ante su presencia, se habrían convalidado u ocultado las conductas irregulares que, como ya se vió, los servidores públicos bajo su dirección realizaban en las áreas a sus respectivos cargos, relacionadas con la indebida utilización de equipos de cómputo; la introducción y consumo de bebidas alcohólicas en las instalaciones del Canal Judicial, la realización de actividades “recreativas” durante la jornada laboral en el interior de las oficinas; el acoso laboral

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

materializado a través de maltrato físico mediante la práctica conocida como el “manto sagrado” y finalmente el acoso sexual ambiental generado en esa Dirección.

Lo anterior es así, toda vez que los tres servidores públicos antes mencionados, no solo evitaron estas irregularidades, sino que también participaron directamente en la comisión de algunas irregularidades.

Aunado a lo anterior, respecto a *****, también se acredita con los siguientes medios probatorios recabados en la investigación:

- Comparecencia de veintitrés de febrero de dos mil quince a cargo de *****, en su carácter de Técnico operativo del Canal Judicial.
- Comparecencia de dos de marzo de dos mil quince, a cargo de *****, en su carácter de entonces Coordinador Administrativo adscrito a la Dirección General del Canal Judicial.
- Comparecencia de cuatro de marzo de dos mil quince a cargo de *****.

Se determinó iniciar procedimiento de responsabilidad administrativa, ya que a juicio del Presidente de este Alto existen elementos suficientes que obran en autos del cuaderno de investigación **6/2015** que hacen presumir la probable responsabilidad de *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****,

****, **** y ****, por lo que ordenó que se celebraran las audiencias de defensas respectivas.

En particular, se ordenó iniciar procedimiento de responsabilidad en contra de ****, ****, ****, **** y ****, en su actuación como servidores públicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por estimarse suficientemente acreditada su probable responsabilidad en la configuración de la causa prevista en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,⁸⁷ en relación con el artículo 8, fracción III, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Asimismo, se ordenó iniciar procedimiento de responsabilidad en contra de ****, ****, ****, **** y ****, en su actuación como servidores públicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por estimarse suficientemente acreditada su probable responsabilidad en la configuración de la causa prevista en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 8, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.⁸⁸

Se inició procedimiento de responsabilidad en contra de ****, ****, ****, ****, ****, ****, ****, **** y ****, en su actuación como servidores públicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por estimarse suficientemente acreditada su probable responsabilidad en la configuración de la causa prevista en el artículo

⁸⁷ **Artículo 131.** Serán causas de responsabilidad para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación: (...)

XI. Las previstas en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, siempre que no fueren contrarias a la naturaleza de la función jurisdiccional; (...)

⁸⁸ **Artículo 8.-** Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones: (...)

I.- Cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión; (...)

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 8, fracción VI, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.⁸⁹

De la misma manera, se inició procedimiento de responsabilidad en contra de *****, ***** y *****, en su actuación como servidores públicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por estimarse suficientemente acreditada su probable responsabilidad en la configuración de la causa prevista en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 8, fracción XVII, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.⁹⁰

Se precisó que aun cuando las conductas imputadas no se encuentran expresamente catalogadas como graves por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, lo cierto es que eso no significa que tales infracciones sean las únicas que puedan clasificarse de esa forma, sino que es posible determinar, caso por caso, su gravedad o no atendiendo a las características de la conducta de que se trate.

Lo anterior, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y 7 del Acuerdo General de Administración III/2012, así como con el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la

⁸⁹ **VI.-** Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo de éste;

⁹⁰ **XVII.-** Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las disposiciones de este artículo;

Nación en la jurisprudencia 2ª/J.139/2009, que lleva por rubro: “RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO ESTABLECE LIMITATIVAMENTE LAS CONDUCTAS QUE PUEDEN CALIFICARSE COMO GRAVES POR LA AUTORIDAD SANCIONADORA.”

En ese orden de ideas, se consideró que el acoso laboral, el acoso sexual ambiental y la falta de supervisión a los servidores públicos sujetos a dirección, previstos en el artículo 8, fracciones VI y XVII, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, deberían ser catalogadas como graves

QUINQUAGÉSIMO SÉPTIMO. Mediante acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, el Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó registrar el procedimiento de responsabilidad administrativa 6/2015; ordenó notificar personalmente a los probables responsables señalando fecha para que tenga verificativo la audiencia de defensa de cada uno de ellos, apercibiéndolos de que en caso de dejar de comparecer a la audiencia sin causa justificada, se tendrá por precluído su derecho para realizar manifestaciones, oponer defensas, ofrecer pruebas y realizar alegatos.

QUINQUAGÉSIMO OCTAVO. Mediante acuerdo dictado el treinta de mayo de dos mil dieciséis, el Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tuvo por recibido el escrito signado por *****, en donde realiza diversas manifestaciones y comparece al procedimiento de responsabilidad administrativa 6/2015.

El treinta de mayo de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de defensas de *****, quien en ese momento entregó el

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

escrito en el que presenta sus argumentos para su defensa, haciéndose constar que no se acompañaron documentales con el referido escrito.

El treinta de mayo de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de defensas de *****, quien en ese momento entregó el escrito en el que presenta sus argumentos para su defensa, haciéndose constar que no se acompañaron documentales con el referido escrito.

El treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de defensas de *****, en donde se hace constar las pruebas que ofrece, así como las manifestaciones que realiza.

El treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de defensas de *****, en donde se hace constar las pruebas que ofrece, así como las manifestaciones que realiza.

Mediante acuerdo de dos de junio de dos mil dieciséis, el Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tuvo por recibidas las actas relativas al desahogo de la audiencia de defensas anteriormente citadas de los probables responsables.

El uno de junio de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de defensas de *****, en donde realizó las manifestaciones que creyó convenientes y no ofertó prueba alguna.

El uno de junio de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de defensas de *****, en donde se hizo constar que el presunto responsable no se presentó en la audiencia respectiva

El dos de junio de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de defensas de *****, en donde ofertó su escrito de defensas, ofreció las pruebas que consideró pertinentes y realizó las manifestaciones que creyó convenientes.

El dos de junio de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de defensas de *****, en donde ofertó su escrito de defensas y ofreció las pruebas que consideró pertinentes.

El tres de junio de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de defensas de *****, en donde realizó las manifestaciones que creyó convenientes y no acompañó documento alguno.

Mediante acuerdo de tres de junio de dos mil dieciséis, el Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por recibidas las actas relativas al desahogo de la audiencia de defensas anteriormente citadas de los probables responsables.

QUINQUAGÉSIMO NOVENO. Por auto de seis de junio de dos mil dieciséis, el Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió diversos recursos signados por *****, y fijó nueva fecha y hora para celebrar la audiencia de defensas de este último.

El seis de junio de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de defensas de *****, en donde presentó su escrito de defensas, realizó las manifestaciones que creyó convenientes y exhibió un disco compacto así como una memoria USB.

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

SEXTOAGÉSIMO. Mediante acuerdo de ocho de junio de dos mil dieciséis, el Contralor de esta Suprema Corte, tuvo por recibido el escrito de ***** mediante el cual interpuso recurso de revisión en contra del auto de diecisiete de agosto de dos mil quince, en el que la Contraloría solicitó al Ministro Presidente la ampliación del plazo de seis meses para realizar la investigación de los hechos materia del cuaderno de investigación *****, así como del acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil quince, en el que el Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, autorizó la ampliación del citado plazo por seis meses más; y toda vez que la normativa vigente correspondiente a dicha materia no se contempla el recurso de revisión sino sólo el recurso de inconformidad, se ordenó consultar a trámite girando oficio al Secretario General de Acuerdos de esta Suprema Corte.

SEXTOAGÉSIMO PRIMERO. El diez de junio de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de defensas de *****, en donde presentó su escrito de defensas, realizó las manifestaciones que creyó convenientes y ofreció diversas pruebas.

El trece de junio de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de defensas de *****, en donde presentó su escrito de defensas, realizó las manifestaciones que creyó convenientes y ofreció diversas pruebas.

Mediante acuerdo de trece de junio de dos mil dieciséis, el Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tuvo por

recibidas las actas relativas al desahogo de la audiencia de defensas anteriormente citadas de los probables responsables y señaló nueva hora y fecha para el desahogo de la audiencia de defensas de *****, toda vez que así lo solicitó este último.

El quince de junio de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de defensas de *****, en donde presentó su escrito de defensas, realizó las manifestaciones que creyó convenientes en las que negó los hechos que se le imputaban y ofreció diversas pruebas para acreditar su dicho.

Mediante acuerdo de quince de junio de dos mil dieciséis, el Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por recibidas las constancias relativas a la audiencia a supra líneas mencionada y acordó diversos escritos mediante los cuales se realizaron diversas peticiones.

SEXTOAGÉSIMO SEGUNDO. Por proveído de veinte de junio de dos mil dieciséis el Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, difirió la audiencia de defensas de *****, toda vez que aún no se había resuelto lo relativo al recurso de revisión que interpuso con anterioridad.

El veintitrés de junio de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de defensas de *****, en donde presentó su escrito de defensas, realizó las manifestaciones que creyó convenientes y ofreció diversas pruebas para acreditar su dicho.

El veintisiete de junio de dos mil dieciséis, el Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un acuerdo mediante el

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

cual tuvo por recibida el acta relativa a la audiencia de defensas de ***** y autorizó la expedición de copias que solicitó este último.

Mediante auto de treinta de junio de dos mil dieciséis, Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por recibido el escrito de ***** , en donde presenta queja en contra de un diverso compañero de trabajo, toda vez que aduce le causa perjuicio a su persona las difamaciones que se hicieron en su contra, por lo que el Contralor se reservó emitir pronunciamiento alguno hasta en tanto sean analizados en su conjunto con las defensas y con los elementos de prueba que ofreció en su audiencia de defensas

SEXTOAGÉSIMO TERCERO. Mediante oficio número SGA/MFEN/1535/2016, el Secretario General de Acuerdos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, comunicó que el Ministro Presidente está impedido conocer del diverso recurso de revisión que interpuso ***** en el procedimiento de responsabilidad administrativa, por lo que debía de conocer el Ministro Presidente en funciones. Dicho oficio fue acordado el cinco de julio de dos mil dieciséis por el Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.⁹¹

Posteriormente, el treinta de junio de dos mil dieciséis, el Ministro Presidente en funciones, José Ramón Cossío Díaz, dictó resolución en la que estableció que ***** había tramitado un *recurso de inconformidad*⁹² toda vez que la normativa correspondiente no contempla el recurso de revisión dentro de un procedimiento de responsabilidad administrativa, y con fundamento en la fracción IV del

⁹¹ Fojas 4291 y 4292 del expediente en el que se actúa.

⁹² Recurso de inconformidad ***.

artículo 77 del Acuerdo General Plenario 9/2005, desechó por notoriamente improcedente el referido recurso de inconformidad.

SEXTOAGÉSIMO CUARTO. Por acuerdo de catorce de julio de dos mil dieciséis, el Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por un lado, acordó la resolución dictada el treinta de junio de dos mil dieciséis por el Ministro Presidente en Funciones relativo al desechamiento del recurso de inconformidad ***, interpuesto por ***** y por otro fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia de defensas de este último.

El nueve de agosto de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia de defensas de *****, en donde presentó su escrito de defensas, realizó las manifestaciones que creyó convenientes, en las que negó los hechos que se le imputaban y ofreció diversas pruebas para acreditar su dicho.

Mediante acuerdo de doce de agosto de dos mil dieciséis, el Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo por recibida el acta relativa a la audiencia de ***** y autorizó la expedición de copias que solicitó el autorizado de este último.

SEXTOAGÉSIMO QUINTO. El veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, el Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó un acuerdo en el que decretó lo siguiente:

- Toda vez que ***** no ofreció pruebas, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia de responsabilidades, se declara precluido su derecho para ofrecerlas.

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

- Por cuanto a ***** se admite la prueba de informes a cargo de ***** , Director de Producción y Servicios del Canal Judicial, pero lo relativo al punto petitorio TERCERO de su escrito de defensas, en el sentido de “tener por reservado mi derecho de ofrecer pruebas, dentro del término de ley, para el caso de resultar necesario” se enfatiza que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, el Acuerdo General Plenario 9/2005 y el Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, que conforman la normativa aplicable a los procedimientos de responsabilidades seguidos en el Alto Tribunal, no prevén que los probables responsables puedan reservarse el ofrecimiento de pruebas de su parte, por lo que al no estar prevista la figura de la “reserva para ofrecer pruebas”, no puede acordarse favorablemente lo solicitado por ***** .

- Respecto a ***** , se tiene por admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza la documental privada consistente en el original de la carta de recomendación suscrita por ***** , con el objeto de demostrar su buen desempeño laboral. Y respecto al escrito y las documentales relativas a la copia de la carta de recomendación expedida a su favor por ***** el veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, y acuse original del escrito de nueve de junio del año en curso, que dirigió a la Directora General del Canal Judicial, en el que le informa de la agresión de la que fue objeto por parte de ***** , alias “****”, se presentaron con posterioridad al treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis en que se celebró la audiencia de defensas, por lo que dichas manifestaciones no pueden tenerse como defensas o alegatos

y las documentales no pueden admitirse por haberse presentado extemporáneamente.

- Respecto a *****, se tienen por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las pruebas con las que pretende demostrar que se ha dedicado a acciones que enaltecen al Canal Judicial, lo cual, afirma le ha redituado premios y reconocimientos, así como los documentos electrónicos que ofreció a través de una memoria “USB”.

- Ante la omisión de ***** de ofrecer pruebas, de conformidad con el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia de responsabilidades, se declara precluído su derecho para hacerlo.

- En relación con ***** se advierte que no compareció a la audiencia de defensas, por lo que se declaró precluído su derecho para realizar manifestaciones, oponer defensas, ofrecer pruebas y realizar alegatos.

- Se admitieron las testimoniales ofertadas por *****, se desechó la prueba documental consistente en los recibos de pago, toda vez que no presentó documento alguno que acredite que ya había solicitado de manera previa dichos documentos, Se admiten las documentales ofertadas relativas a doscientas veintiséis impresiones de órdenes de trabajo y programación de la Dirección General del Canal Judicial, las cuales obran en autos, así como los documentos exhibidos en una memoria “USB”.

- Se admiten las pruebas testimoniales ofertadas por *****, sin embargo, no ha lugar a tener como testigos a “*****”, “*****”, ***** y a

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

*****, respecto del comportamiento recto y forma de trabajar de *****, en razón de que no dijo expresamente que se ofrecían como testigos. Se tiene por admitida y desahogada la documental consistente en original de la carta de recomendación signada por *****, así como la información contenida en un disco compacto que exhibió.

- Se tiene como ofrecida, admitida y desahogada, dada su propia y especial naturaleza la prueba documental pública ofertada por ***** consistente en el acta de la inspección de seis de marzo de dos mil quince, visible en las fojas 579 a 583 y con apoyo en los artículos 79, 81, 87, 93, fracción II, 129 a 142 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia de responsabilidades administrativas.

- Se admiten las testimoniales ofertadas por ***** a cargo de *****, así como la información contenida en un dispositivo USB que exhibió.

- Respecto a ***** no ha lugar a tener por admitidas las pruebas ofertadas relativas a diversos expedientes laborales, toda vez que no demostró que realizó la solicitud de recabarlos y que le fuera negada. No obstante, en aras de dotar de plena eficacia el derecho de defensa del probable responsable, de conformidad con los artículos 23, 26, segundo párrafo, 30, primer párrafo y 31, primer párrafo del Acuerdo General Plenario 9/2005, estos últimos dos numerales por identidad jurídica, así como 30, fracción XII del Reglamento Orgánico en Materia de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ordenó girar oficio a la Directora General del Canal Judicial, para que en el término de cinco días hábiles siguientes a aquél en que surta

efectos la notificación de este proveído, remita copia certificada de los expedientes laborales de *****, ***** y *****, que obren en esa Dirección General, o bien manifieste el impedimento que tenga para ello.

Por otro lado fueron admitidas las pruebas documentales que ofertó, así como la instrumental de actuaciones, consistente en el original del expediente del procedimiento de responsabilidad administrativa P.R.A. 6/2015, en todo aquello que le favorezca, en especial para demostrar la invalidez de los testimonios por los motivos que expresó en su escrito de defensas, y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, en todo lo que favorezca a sus intereses.

- Se tienen por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las documentales privadas ofertadas por *****, se admite la testimonial a cargo de *****, se admite la instrumental de actuaciones, consistente en todo lo actuado en este procedimiento de responsabilidad administrativa en lo que beneficie a sus intereses y se admite la presuncional en su doble aspecto legal y humana, en todo lo que beneficie sus intereses.

- No ha lugar a tener por admitida la prueba ofertada por ***** relativa a su expediente laboral, toda vez que no demostró haberla solicitado y negado por parte de la Dirección General del Canal Judicial. No obstante, para dotar de plena eficacia al derecho de defensa del probable responsable, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 23, 26, segundo párrafo, 30, párrafo primero y 31, párrafo primero del Acuerdo General Plenario 9/2005, estos últimos dos numerales por identidad jurídica, así como 30, fracción XII del Reglamento Orgánico en Materia de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, gírese oficio a la Dirección General del

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

Canal Judicial, para que en el término de cinco días hábiles siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, remita copia certificada del expediente laboral de *****, que obre en esa dirección general, o bien, manifieste el impedimento que tenga para ello.

Se tienen por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las documentales privadas que oferta, se admiten las pruebas de informes a cargo de la Directora General del Canal Judicial y a *****, Subdirectora General en el Canal Judicial y se admite la instrumental de actuaciones, consistente en todo lo actuado en este procedimiento de responsabilidad administrativa en lo que beneficie a sus intereses y se admite la presuncional en su doble aspecto legal y humana, en todo lo que beneficie sus intereses.

- Se admite la prueba presuncional legal y humana ofertada por *****, en todo lo que favorezca al oferente, la cual relaciona con todas y cada una de las manifestaciones contenidas en los capítulos primero y segundo de su escrito de defensas, así como la instrumental de actuaciones consistente en todo lo actuado en el expediente.

- Respecto a *****, se admite la testimonial ofertada a cargo de ***** y de *****, se tienen por admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, las documentales públicas que ofertó, así como las documentales privadas, con excepción a la prueba consistente en la Bitácora de citas del Ministro Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, del seis de marzo de dos mil quince, la cual se desecha por inconducente. Respecto a la prueba consistente en las

bitácoras de seguridad del Canal Judicial en el edificio sede, de dos mil siete a dos mil trece, si bien ***** las ofrece en su escrito de defensas, como se dijo, no exhibe el acuse en el que se advierta que las requirió con anticipación a la audiencia de defensas; no obstante, en aras de dotar de plena eficacia el derecho de defensa del probable responsable, de conformidad con los 23, 26, segundo párrafo, 30, párrafo primero y 31, párrafo primero del Acuerdo General Plenario 9/2005, estos últimos dos numerales por identidad jurídica, así como 30, fracción XII del Reglamento Orgánico en Materia de Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, gírese oficio al Director General de Seguridad, para que en el término de diez días hábiles siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, remita copia certificada de las bitácoras del personal de seguridad adscrito al edificio sede del Alto Tribunal, de dos mil siete a dos mil trece, que obren en esa dirección general, o bien manifieste el impedimento que tenga para ello.

Se admite la prueba de informe a cargo de la Dirección General de Comunicación y Vinculación Social, de la Dirección General de Presupuesto y Contabilidad y de la Dirección General de Recursos Humanos e Innovación Administrativa, así como las pruebas que oferta contenidas en un disco compacto, se admite la inspección ofrecida en las anteriores instalaciones del Canal Judicial en el edificio Sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el área llamada “pasos perdidos”, que ocupó de abril de dos mil siete a diciembre de dos mil trece, así como la inspección en la “vitrina de premios” que se ubica en las instalaciones actuales del Canal Judicial.

SEXTOAGÉSIMO SEXTO. Por auto de veintisiete de octubre de dos mil dieciseis, el Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró necesario precisar que el presente asunto fue

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

iniciado por acuerdo del Presidente de este Alto Tribunal el día nueve de mayo de dos mil dieciséis, por considerar que se acreditaba, de manera probable, la comisión de algunas faltas graves y que, por ende, corresponderá resolver este asunto al Pleno de esta Suprema Corte, con fundamento en los artículos 133, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el 24, segundo párrafo, del Acuerdo General Plenario 9/2005.

SEXTOAGÉSIMO SÉPTIMO. El once de noviembre de dos mil dieciséis se dictó un acuerdo por el Contralor de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se tuvo a ***** señalando un domicilio falso para recibir notificaciones, por lo que las siguientes se le harán mediante rotulón, y se fijó nueva fecha y hora para llevar a cabo las pruebas testimoniales ofertadas por ***** y *****.

SEXTOAGÉSIMO OCTAVO El catorce de noviembre de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la inspección ofertada por *****, en estas instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el área identificada como “pasos perdidos”.

SEXTOAGÉSIMO NOVENO. El dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, se desahogaron las testimoniales de *****, y de *****, ofertadas por *****.

El dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, se desahogaron las testimoniales a cargo de *****, ***** y *****, ofertadas por *****, sin embargo, ***** no asistió.

El dieciocho de noviembre de dos mil dieciséis, se desahogaron las testimoniales a cargo de **** y ****, ofertadas por ****.⁹³

SEPTUAGÉSIMO. Por proveído de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, el Contralor de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó nueva fecha y hora para el desahogo de la testimonial ofertada por ****, a cargo de ****, apercibiéndolo que de no presentarse, se le impondrá una sanción económica

El veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, se desahogaron las testimoniales a cargo de ****, ofertadas por ****.

SEPTUAGÉSIMO PRIMERO. El veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la inspección ofertada por **** en la planta baja de las instalaciones de la Dirección General del Canal Judicial, en el área de la vitrina de premios.

SEPTUAGÉSIMO SEGUNDO. El veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, se desahogaron las confesionales a cargo de ****, ofertadas por ****.

SEPTUAGÉSIMO TERCERO. Mediante proveído de veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, el Contralor de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó girar oficio a la Dirección General de Recursos Humanos e Innovación Administrativa, para que en el término de cinco días hábiles rinda el informe completo relativo a que si existe algún reporte o nota desfavorable en el expediente de ****.

⁹³ Foja 4743 del Tomo IV del expediente en el que se actúa.

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

SEPTUAGÉSIMO CUARTO. El veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, se desahogaron las testimoniales ofertadas por ***** a cargo de *****.

Posteriormente, el veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, se desahogaron las testimoniales ofertadas por ***** a cargo de *****.

El uno de diciembre de dos mil dieciséis se desahogaron las testimoniales ofertadas por ***** a cargo de ***** y *****.

SEPTUAGÉSIMO QUINTO. El siete de diciembre de dos mil dieciséis,⁹⁴ el Contralor de este Alto Tribunal dictó un acuerdo en el que tuvo por desahogado el medio de perfeccionamiento admitido por proveído de veintisiete de octubre de dos mil dieciséis a *****, se tuvieron por desahogadas las pruebas documentales ofrecidas por *****, relativas a las actas del Consejo Consultivo del Canal Judicial celebradas trimestralmente de dos mil once a dos mil catorce, así como los informes semestrales rendidos por el entonces Director General del Canal Judicial en el mismo periodo. Respecto a las pruebas relativas a las bitácoras del personal de seguridad adscrito al edificio del Canal Judicial, así como los videos del sistema de circuito cerrado, se tiene al Director General de Seguridad informando el impedimento para enviar esa información. Por último se tuvieron por desahogadas las testimoniales a cargo de ***** y *****, ofertadas por *****.

⁹⁴ Foja 4902 del expediente en el que se actúa

SEPTUAGÉSIMO SEXTO. Mediante acta de cinco de diciembre de dos mil dieciséis, compareció ***** a fin de desahogar la prueba a su cargo ofertada por *****.

El seis de diciembre de dos mil dieciséis, se levantó el acta de la testimonial ofrecida por ***** , a cargo de *****.

El ocho de diciembre de dos mil dieciséis se levantó el acta de la testimonial ofrecida por ***** , a cargo de ***** , sin embargo este último no se presentó.

SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO. Seguida la secuela procesal del asunto, el quince de diciembre de dos mil dieciséis el Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó un acuerdo en el que por un lado tuvo por admitidas y desahogadas las pruebas documentales, de informe y videgrabaciones ofertadas por *****; y por otro, le impuso una multa a ***** de \$2,191.20 (Dos mil ciento noventa y un pesos con veinte centavos, 00/100 moneda nacional), por no presentarse el día y hora fijados para el desahogo de la testimonial ofertada por ***** , por lo que se señaló nueva fecha y hora para desahogar dicha testimonial, haciendo del conocimiento a ***** que de no comparecer, se le impondrá nuevamente una sanción económica y de continuar su conducta contumaz, se utilizará como medida de apremio para que se presente el uso de la fuerza pública, en términos de lo señalado en la fracción II, del artículo 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia de responsabilidades.

Toda vez que no fue posible notificar a ***** la resolución de quince de diciembre de dos mil dieciséis, por acuerdo del Contralor de esta Suprema Corte se ordenó al personal autorizado en autos notificarla en su domicilio particular.

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

SEPTUAGÉSIMO OCTAVO. Por auto de dieciséis de enero de dos mil diecisiete, el Contralor de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación solicitó a la Directora General de Recursos Humanos e Innovación Administrativa que en el término de diez días proporcionara la documentación que creyera necesaria que obrara en autos.

SEPTUAGÉSIMO NOVENO. El diecinueve de febrero de dos mil diecisiete, se llevó a cabo el desahogo de la prueba testimonial a cargo de *****, en la que manifestó lo que consideró pertinente, la cual fue ofertada por *****.

OCTOGÉSIMO. Por último, el nueve de febrero de dos mil diecisiete, el Contralor de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó un acuerdo en el que estableció que no existían diligencias por llevar a cabo y que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, por lo que ha concluido la intervención de esa Contraloría en la substanciación del procedimiento de responsabilidad administrativa, así, ordenó remitir el asunto a la Secretaría General de Acuerdos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de que se turne el asunto a la ponencia que corresponda presentar el proyecto de resolución.

Mediante acuerdo de catorce de febrero de dos mil diecisiete, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el cuaderno auxiliar del expediente relativo al procedimiento de responsabilidad administrativa 6/2015 y lo envió a la

Ponencia del Señor Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, para la elaboración del proyecto de resolución.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver el presente procedimiento de responsabilidad administrativa, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, quinto párrafo, 108 y 109, fracción III, de la Constitución General; 10, fracción XII, 11, fracción XXIII, y 133, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 3, fracción II, y 11 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, actualmente abrogada,⁹⁵ así como 24, segundo párrafo, del Acuerdo General 9/2005, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que se inició el presente procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de diversos servidores públicos adscritos actualmente, o en su momento, a la Dirección General del Canal Judicial y el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación estima que son presuntamente responsables de conductas que deben ser calificadas como graves,⁹⁶ cuestión que deberá ser determinada en definitiva por este órgano colegiado.

⁹⁵ Legislación que es aplicable al presente procedimiento, en términos del artículo Tercero Transitorio del Decreto publicado el dieciocho de julio de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, por virtud del cual fue expedida la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

“Tercero. La Ley General de Responsabilidades Administrativas entrará en vigor al año siguiente de la entrada en vigor del presente Decreto.

En tanto entra en vigor la Ley a que se refiere el presente Transitorio, continuará aplicándose la legislación en materia de Responsabilidades Administrativas, en el ámbito federal y de las entidades federativas, que se encuentre vigente a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto.

(...)

Los procedimientos administrativos iniciados por las autoridades federales y locales con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, serán concluidos conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio.

(...)”

⁹⁶ Tal como se hace constar en el apartado VIII del auto de 9 de mayo de dos mil dieciséis, por el cual se dio inicio al procedimiento administrativo.

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

SEGUNDO.- Antecedentes y materia de la litis.- Para estar en condiciones de resolver el presente asunto, es menester retomar algunos antecedentes que están contenidos en los resultandos de la presente ejecutoria y en los autos del procedimiento disciplinario que nos ocupa.

Por oficio ****, de dieciséis de febrero de dos mil quince, el Ministro Presidente de este Alto Tribunal instruyó al Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que practicara una auditoría de investigación al área de la Dirección General del Canal Judicial, pues mencionó que existían inconformidades del personal que trabajaba en dicha área.

Durante esta etapa, el órgano investigador recibió una serie de inconformidades y recabó diversas notas periodísticas, las cuales fueron referidas en los resultandos de esta ejecutoria.

A partir del diecinueve de febrero de dos mil quince, comparecieron en la Oficina de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial de la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación diez servidores públicos adscritos al Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a rendir su declaración sobre diversos acontecimientos que estimaron relacionados con la auditoría de investigación, así como tres personas que en su momento laboraron en dicha institución. Tres de dichos comparecientes acompañaron a

su declaración una serie de fotografías con las que pretendieron sustentar su dicho.⁹⁷

Con apoyo en el material recabado hasta ese momento, el día **cuatro de marzo de dos mil quince** el Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el Dictamen de Inicio de Investigación y se abrió el cuaderno respectivo bajo el número 6/2015. Toda vez que la investigación, en inicio, sólo puede durar seis meses y tomando en cuenta que el oficio ***** se entregó el diecisiete de febrero de dos mil quince, se fijó como fecha de conclusión de la investigación el dieciocho de agosto del mismo año. Asimismo, ordenó la remisión de los autos a la Presidencia de este Alto Tribunal mediante oficio *****.

Los hechos declarados hasta esa etapa procedimental, sobre los cuales debería versar la investigación, en términos del artículo 30-B del Acuerdo General 9/2005, son los siguientes:

No.	NOMBRE	PUESTO	RESEÑA DE HECHOS DECLARADOS	FECHA DE LA QUEJA
1.	*****	Jefa de departamento	Malos tratos y cargas de trabajo inequitativas.	19-Febrero y 2-Marzo-2015
2.	*****	Ex servidora pública de la Dirección General del Canal Judicial	***** (quien fungía como subdirector general) le envió, vía telefónica, mensajes y fotografías donde él aparece desnudo.	20-Febrero-2015

⁹⁷ Entre ellos están *****, ***** y *****, (fojas 36, 56 y 87 del Tomo I-A del expediente en que se actúa)

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

3.	*****	Camarógrafo	<p>***** organizaba en su oficina y dentro del horario laboral, torneos de Play Station o dominó, a veces también llegaba alcoholizado y hablaba con groserías.</p> <p>***** y ***** organizaban con los camarógrafos o personal de producción un juego llamado “el manto sagrado”, en el que golpeaban a una persona a la que cubrían con una manta.</p> <p>***** no le daba facilidades de horario, ni respetaba su jornada de ocho horas a pesar de que tiene problemas de salud.</p>	23-Febrero-2015
4.	*****	Técnico operativo	<p>***** habla con gritos y groserías.</p> <p>Trato desigual porque sólo él checa su entrada.</p> <p>En las instalaciones del Canal Judicial, ***** se drogaba y ***** ingería bebidas alcohólicas, lo cual comunicó al Director General y a partir de entonces los dos servidores públicos, quienes eran los jefes de su esposa ***** , la acosaron y aislaron laboralmente, porque le dejaron de hablar.</p>	23-Febrero-2015
5.	*****	Técnico Operativo	<p>El Director General del Canal Judicial no le otorga aumento de sueldo como camarógrafo, a pesar de que realiza esa función y afirma que “a trabajos iguales, salarios iguales”.</p> <p>***** habla mal del personal y los pone a unos contra los otros.</p>	23-Febrero-2015
6.	*****	Técnica Operativo	<p>Hostigada por ***** , quien la exhibe públicamente por los errores de redacción.</p> <p>***** les invita bebidas alcohólicas en la oficina, lo cual era solapado por el Director General.</p> <p>***** le negó, supuestamente por su trabajo deficiente, aumento salarial o compensación por la jornada nocturna, lo cual solicitó por los gastos de transporte que tenía que hacer para llevar su hija al CENDI.</p> <p>***** la agrede, intimida y aísla.</p>	23-Febrero y 26 Febrero - 2015

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

7	*****	Técnico Operativo	<p>Durante cuatro años ha sido acosado por ***** y ***** , este último organizaba un juego llamado “manto sagrado” y juegos sexuales consistentes en agarrarle al personal a su cargo las nalgas y el pene.</p> <p>***** le agarraba las nalgas, incluso delante de *****.</p> <p>***** le pedía información de sus compañeros ***** y *****.</p>	24-Febrero-2015
8	*****	Técnico Operativo	<p>El bono discrecional de fin de año se otorga con “parcialidad” y se queja del monto que le ha sido asignado, de la duración de su jornada de trabajo, pero dice que acude a trabajar, de manera voluntaria, los días sábados.</p>	24-Febrero-2015
9	*****	Técnico Operativo	<p>***** le asignó mayor trabajo como asistente de cámaras y estaba a cargo de los vehículos. En general a quienes no formaban parte de su equipo les asignaban más trabajo. El director general comenzó a meter a trabajar a su gente, a familiares y amigos.</p> <p>***** le dijo que su hijo ***** tenía que trabajar más por lo que dejaba de hacer.</p> <p>Refiere haber tenido un accidente automovilístico de trabajo y que al reincorporarse se le asignaron las mismas labores a pesar de que no podía caminar bien.</p>	26-Febrero y 27-Febrero-2015
10	*****	Ex servidor público de la Dirección General del Canal Judicial	<p>***** le comentó que habían mandado al correo institucional unas fotografías donde estaba desnudo con una mujer, por lo que con ese argumento le cambiaron funciones y posteriormente, le pidió su renuncia.</p> <p>Dijo que el Director General es primo de *****.</p> <p>En el Canal Judicial se organiza un juego en el que se usa una cortina negra con la que tapan a una persona y lo golpeaban, participan en él ***** , del que no recuerda su nombre. ***** se llevaba a “mentadas con los camarógrafos”, se agarraban las “nalgas”, “penes” y “testículos”.</p> <p>Refiere que en una ocasión ***** llegó en estado de ebriedad y personal de seguridad lo detuvo.</p>	26-Febrero-2015

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

11	*****	“Talento del noticiero de la noche del Canal Judicial”	<p>***** trata al personal con gritos y groserías, a ***** la humillaba diciéndole que era una “basura”.</p> <p>Ella y ***** desarrollaron una campaña de derechos constitucionales en lenguas indígenas, cuando salió al aire, en los subtítulos aparecían ellos como los creadores de la idea original, y ***** le comunicó que ***** le pidió que se modificara los créditos para que apareciera que la idea original era de dicho Director General.</p> <p>Refiere que para elaborar un programa de “arquitectura parlamentaria”, a invitación del Secretario de Educación Pública, en recursos humanos se le informó que tenía derecho a una suspensión de su contrato, lo cual fue por un mes y a su reingreso el Director General del Canal Judicial le dijo que la cambiaría al noticiero de la mañana, lo cual le afectaba porque trabajaba en TVUNAM y el propio director de recursos humanos le comentó que ***** le pidió buscara la manera de despedirla.</p>	27-Febrero-2015
12	*****	Reportero	<p>***** desde que llegó al Canal Judicial casi diario llegaba en estado de ebriedad, lo que se llama crudo, consumía bebidas alcohólicas y cerveza en la oficina, incluso lo hizo con compañeros de la oficina. ***** tomó una foto en una ocasión en que estaban bebiendo y la publicó en Facebook, aparecían unas cervezas en la foto. Lo acusaba con el Director General de no trabajar, quien le reclamó esa situación y le dijo que iba a tomar medidas más drásticas</p>	27-Febrero-2015

PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 6/2015

13	*****	Coordinador Administrativo	<p>El Director General maltrataba al personal, les decía “pendejos”, “inútiles”, tenía un trato humillante; se refería a las mujeres como “putas”, le llegó a decir “llámale a la puta de *****”.</p> <p>En dos mil diez, durante la transmisión del mundial de Sudáfrica, el Director General ingirió Whisky con ***** y que también tomaba alcohol con *****.</p> <p>***** contrató por honorarios a su novia y a su cuñada de nombres *****. Vio que esta última le aventaba papeles a ***** y le hablaba de forma grosera.</p> <p>***** incluyó en el seguro de gastos médicos a su concubina *****.</p> <p>En el área de producción a cargo de ***** se practicaba una actividad llamada “el manto sagrado”, incluso se hacía en los cumpleaños, en la cual se cubría a una persona con una sábana o cualquier ropa y la tocaban y golpeaban, incluso en sus partes íntimas, el Director General llegaba a participar en los golpes o empujones.</p> <p>Era una práctica recurrente entre los directivos como ***** y ***** abrazarse y tocarse las nalgas y penes.</p> <p>En ocasiones ***** se subía en sus compañeros y simulaba tener relaciones sexuales con ellos.</p> <p>Cuando se referían a las mujeres decían “oye esa vieja está bien buena”, “ya viste como viene”, “mándame a esa puta”, “dile que baje esa pendeja”. “esa vieja tiene guano en la cabeza”.</p> <p>***** y su equipo veían pornografía en páginas de internet en los equipos de cómputo de la Corte.</p> <p>En la oficina de ***** jugaban él y su equipo <i>Play Station</i> durante la jornada de trabajo.</p> <p>En la oficina de ***** era común el consumo de alcohol, por lo regular tequila, situación que sabía y permitía el Director General.</p> <p>***** por las tardes llegaba con aliento alcohólico.</p> <p>Había cargas de trabajo son inequitativas</p>	2-Marzo-2015
----	-------	----------------------------	--	--------------

De este modo, en el auto de inicio de investigación se refirió, a manera de síntesis, que la investigación se iniciaría para la investigación de las siguientes conductas dentro del Canal Judicial: (i) acoso laboral; (ii) acoso sexual; (iii) el encubrimiento de dichas conductas; (iv) faltas de respeto; (v) contratación de personal con vínculos de parentesco; (vi) cualquier acto que no implique conducirse con buena conducta; (vii), el incumplimiento del artículo 8º de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos o el artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

Atento a dicho proveído, por oficio ****, presentado en las oficinas de la Contraloría el día cinco de marzo de dos mil quince, el Secretario Jurídico de la Presidencia informó que por instrucciones del Ministro Luis María Aguilar Morales, acusó de recibo el oficio **** y **tomó conocimiento** del inicio de la investigación, de la materia, plazo y trámite respectivo; asimismo, devolvió el expediente para los efectos a que hubiera lugar.⁹⁸

Ahora bien, el artículo 30-B del Acuerdo General 9/2005, dispone que el Acuerdo que ordena la investigación, en este caso, el de cuatro de marzo de dos mil quince, deberá expresar las circunstancias que la justifiquen, **sin extenderse a hechos distintos a los señalados en dicho acuerdo.**⁹⁹

No obstante lo anterior, una vez dictado el auto de inicio de investigación de cuatro de marzo de dos mil quince, se siguieron recibiendo comparecencias de otros servidores públicos, como **** y ****,¹⁰⁰ de tal modo que las que se rendieron el propio cuatro de marzo fueron acordadas por auto del Contralor de esta Suprema Corte de Justicia el día cinco de marzo de dos mil quince.

A raíz de las comparecencias de ****, la Contraloría de la Suprema Corte, mediante auto de quince de abril de dos mil quince,

⁹⁸ Foja 387 del Tomo I A del expediente en el que se actúa.

⁹⁹ “**Artículo 30-B.** El acuerdo que ordena la investigación deberá expresar las circunstancias que la justifiquen, sin extenderse a hechos distintos de los señalados en dicho acuerdo. (...)”

¹⁰⁰ Al respecto, pueden consultarse las fojas 363, 394, 369, 382, 400, 652, 676, 693, 815, 1815, 1824, 1835, 1855, 1860, 1842 y 1849 del expediente en el que se actúa. En particular, es interesante destacar que **** se refiere a un escrito del treinta de marzo de dos mil once que no está en el expediente, mismo que en su comparecencia solamente “aclarar”.

requirió a diversas instituciones educativas el envío de los reportes de las personas que prestaron su servicio social en el Canal Judicial.

Una vez que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo conocimiento del inicio de la investigación, mediante auto de cinco de marzo de dos mil quince el Contralor estableció que **es obligación del órgano competente, en este caso, de la Contraloría, allegarse de los medios de prueba que permitan conocer la verdad de los hechos puestos en conocimiento y determinar la existencia de una falta administrativa y la probable responsabilidad de algún servidor público.**¹⁰¹

En tal virtud, en ejercicio de las atribuciones conferidas a la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para recabar pruebas en las investigaciones que se le autoriza practicar, a efecto de demostrar la existencia de infracciones administrativas y la probable responsabilidad de alguno de sus servidores públicos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 23, 26, segundo párrafo, 30, párrafo primero, 30 C y 31, párrafo primero, del Acuerdo General Plenario 9/2005 y 5 del Acuerdo General de Administración III/2012, ordenó la práctica de una **diligencia de inspección** en las instalaciones de la Dirección General del Canal Judicial, para lo cual, con apoyo en los artículos 79, 80, 93, fracciones V, 94, 161 a 164 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Civiles, se instruyó al personal autorizado para que se constituyeran en la citada Dirección, y practicar la inspección en las oficinas de *****, *****, o de quien ocupara en ese momento la Subdirección General del Canal Judicial, *****, *****, *****, *****, y *****.

¹⁰¹ Foja 391 vuelta del Tomo I del expediente en el que se actúa.

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

Lo anterior para constatar, en particular, el ingreso y consumo de bebidas alcohólicas, juegos sexuales entre los servidores públicos y consulta de pornografía con el equipo de cómputo propiedad de este Alto Tribunal, dentro las instalaciones de la Dirección General del Canal Judicial.

El objeto de la inspección fue el siguiente:

- a) Revisar oficinas y mobiliario a efecto de identificar imágenes u objetos de contenido sexual o de sexo explícito.
- b) Localizar bebidas alcohólicas en el lugar de trabajo de los mencionados servidores públicos.
- c) Examinar la información almacenada en el equipo de cómputo que los mencionados servidores públicos tienen bajo resguardo o que utilizan para sus actividades, así como las páginas de internet a las que tienen acceso con dichos equipos y, en su caso, las comunicaciones que intercambian mediante la cuenta de correo institucional.**

Se precisó que los archivos electrónicos contenidos en los equipos de cómputo asignados a la Dirección General del Canal Judicial comprenden, de manera enunciativa mas no limitativa, las imágenes, videos, presentaciones, impresiones de pantalla, el respaldo de la cuenta del correo electrónico oficial y de los archivos adjuntos que pudieran contener, además, del historial de navegación en internet, lo que hacía necesario contar con personal especializado en informática para realizar el respaldo

electrónico correspondiente. Para ello, el Contralor giró oficio al Director General de Tecnologías de la Información.

Asimismo, se instruyó que del respaldo electrónico de los archivos contenidos en los equipos de cómputo inspeccionados, se deberá instrumentar la constancia correspondiente y de ser el caso, obtener las impresiones que se consideren necesarias.

Finalmente, el Contralor señaló que al momento en el que la Contraloría se constituyera en la Dirección General del Canal Judicial, debería comunicar al titular y a los servidores públicos mencionados que se ordenó la diligencia de mérito, a fin de que prestaran las facilidades necesarias.

La diligencia de inspección se le notificó al entonces Director General del Canal Judicial (sin que el acuse respectivo precise qué día se practicó la notificación) y se llevaron a cabo las diligencias de mérito el día seis de marzo de dos mil quince, que consistieron no solamente en hacer una revisión de las oficinas de los servidores públicos antes citados, sino en el respaldo del disco duro de cada una de las computadoras que manifestaron tener bajo su resguardo, lo que dio lugar a procedimiento técnico y científico a cargo de la Dirección General de Tecnologías de la Información.

Posteriormente, la propia Contraloría instauró un procedimiento de revisión de la información respaldada, en el cual tuvo intervención directa la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial. Dicho procedimiento inició el once de noviembre de dos mil quince y concluyó el siete de enero de dos mil

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

dieciséis, como se informa en el acuerdo de doce del mismo mes y año, emitido por el Contralor de esta Suprema Corte.¹⁰²

En ese mismo acuerdo se hacen constar cuáles fueron los resultados obtenidos hasta ese momento por la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial, así como la necesidad de contar con el apoyo de la Dirección General de Tecnologías de la Información en aquellos aspectos en los que las herramientas tecnológicas con las que cuentan los equipos de cómputo del personal autorizado de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial fueron insuficientes. Para ello se le solicitó a la citada Dirección General un informe forense por escrito en impresión a color, con la explicación detallada del tipo de análisis forense que realizara.

Mediante auto de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se hizo constar que en el acta de veintidós de octubre de dos mil quince, y acuerdos subsecuentes, se refirió que el equipo de cómputo con número de inventario SC ***** estaba asignado a *****, sin embargo, de acuerdo con el acta de inspección realizada el seis de marzo de dos mil quince, el equipo de cómputo con número SC ***** estaba asignado a *****, por lo que se regularizaron las actuaciones.

El dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, el Contralor de esta Suprema Corte cerró la investigación porque venció el plazo para hacerlo y estimó que tenía suficiente información para determinar quiénes son los probables responsables de las conductas materia de

¹⁰² Foja 222 del Tomo I-A del expediente en el que se actúa.

PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 6/2015

investigación. De esta manera, dio inicio el procedimiento de responsabilidades administrativas en contra de quince servidores públicos adscritos al Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos que han quedado referidos en los resultandos de esta ejecutoria, particularmente al sintetizar el auto dictado por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día nueve de mayo de dos mil dieciséis.

En síntesis, las conductas que se les imputan en la referida actuación son las siguientes:

Conducta	Servidores públicos
Indebido ejercicio del empleo, cargo o comisión, específicamente la utilización de recursos informáticos asignados en razón de su función para fines diversos a los que estaban afectos. (Infracción que se enmarcó en el artículo 8, fracción III, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos)	***** ***** ***** ***** ***** ,
Indebido ejercicio del empleo, cargo o comisión, específicamente la introducción y consumo de bebidas alcohólicas al interior de la Dirección General del Canal Judicial (Infracción que se enmarcó en el artículo 8, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos).	***** ***** ***** ***** ***** .
Indebido ejercicio del empleo, cargo o comisión, específicamente realizar actividades ajenas al cumplimiento de la función tales como jugar “play station” y dominó (Infracción contenida en el artículo 8, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos)	***** ***** *****
Acoso laboral, que se materializó a través de maltrato físico, esto es, de la práctica del “manto sagrado (Infracción que se enmarcó en el artículo 8, fracción VI, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de	***** , ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015

los Servidores Públicos)	***** ***** *****.
Juegos de naturaleza sexual entre los servidores públicos y formulación de expresiones de naturaleza sexual inapropiada (Infracción que se enmarcó en el artículo 8, fracción VI, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos).	***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Omitir realizar la supervisión de los servidores públicos que se encontraban bajo su dirección, con el fin de que cumplieran con sus obligaciones legales (Infracción que se enmarcó en el artículo 8, fracción XVII, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos).	***** , ***** *****.

La presente resolución tiene como objetivo determinar si se cuenta con el idóneo y suficiente caudal probatorio para demostrar la existencia de las conductas imputadas, así como la responsabilidad atribuída por la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin que este Tribunal Pleno esté en condiciones de incriminar a los servidores públicos por conductas diversas a las ya precisadas en el auto de inicio del procedimiento de responsabilidad, pues ello sería contrario al derecho fundamental de audiencia de los servidores públicos involucrados.

Por las mismas razones, sólo se valorará el material probatorio con el que fue motivado el auto de inicio del procedimiento de responsabilidad, pues fue en dicha actuación en la que se fijó la litis, esto es, en la que se le hace saber la responsabilidad que se le imputa y su derecho a ofrecer pruebas y alegar en una audiencia de ley; además, con ella se les corre traslado a los servidores públicos

imputados para que formulen sus defensas, tal como se ordenó por el Contralor de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en el auto de dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, en los siguientes términos:¹⁰³

“En cumplimiento a lo ordenado por el Ministro Presidente, en el acuerdo en el que se inicia procedimiento de responsabilidad administrativa a (.....), con fundamento en los artículos 15, primer párrafo y 17 del Acuerdo General Plenario 9/2005, con copia certificada de dicho acuerdo y del presente proveído, así como con copia simple de las constancias ponderadas en aquél para tener por acreditadas las infracciones administrativas que se les atribuye a cada uno de ellos, notifíquese personalmente a los probables responsables el inicio del presente procedimiento (.....)”

En la inteligencia de que si el auto de nueve de mayo de dos mil dieciséis no se motivó con otros medios de prueba desahogados durante la investigación, es porque no se consideraron idóneos, pertinentes o con suficiente valor probatorio para incriminar de manera probable al servidor público.

De este modo, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede introducir, de oficio, algún medio de prueba que hubiere sido desahogado en la investigación pero no invocado en el auto de inicio del procedimiento, so pena de violar el derecho fundamental de audiencia en contra del servidor público y dejarlo en estado de indefensión, lo cual reviste suma importancia en este tipo de procedimientos, porque en contra de la determinación definitiva que adopte este Tribunal Pleno no cabe recurso alguno, como lo dispone el artículo 40, último párrafo, del mismo Acuerdo General 9/2005.¹⁰⁴

¹⁰³ Véase foja 3403 del expediente en el que se actúa.

¹⁰⁴ **Artículo 40.-** En las resoluciones que dicten el Pleno o el Presidente con las que se ponga fin a los procedimientos de responsabilidades administrativas deberá analizarse la existencia de la conducta infractora y, en su caso, la responsabilidad en su comisión, tomando en cuenta las circunstancias en que se dieron los hechos. De igual manera se verificará que la substanciación del procedimiento se haya realizado conforme a las reglas que prevé este Acuerdo General y, en su caso, se ordenará que se subsane la omisión o deficiencia detectada. Las resoluciones que dicte el Pleno en los expedientes de responsabilidad administrativa no admitirán recurso alguno. En contra de las resoluciones que emita el Presidente procederá el recurso de revisión, en los términos señalados en este Acuerdo General.”

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

TERCERO.- Estudio de la tipicidad de las conductas imputadas por la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a los servidores públicos sujetos a procedimiento disciplinario.

El derecho disciplinario constituye una subespecie del derecho administrativo sancionador. Con respecto a este último, el Tribunal Pleno de este Alto Tribunal, al resolver la acción de inconstitucionalidad 4/2006, en sesión de veinticinco de mayo de dos mil seis, estableció que el derecho administrativo sancionador es una inequívoca manifestación de la potestad punitiva del Estado, entendida como la facultad que tiene este último de imponer sanciones ante la comisión de conductas ilícitas.¹⁰⁵

¹⁰⁵ “DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS TÉCNICAS GARANTÍSTAS DEL DERECHO PENAL, EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA DEL ESTADO”, Novena Época. Registro: 174488. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIV, Agosto de 2006. Materia(s): Constitucional, Administrativa. Tesis: P./J. 99/2006. Página: 1565. **Cuyo texto es el siguiente:** De un análisis integral del régimen de infracciones administrativas, se desprende que el derecho administrativo sancionador posee como objetivo garantizar a la colectividad en general, el desarrollo correcto y normal de las funciones reguladas por las leyes administrativas, utilizando el poder de policía para lograr los objetivos en ellas trazados. En este orden de ideas, la sanción administrativa guarda una similitud fundamental con las penas, toda vez que ambas tienen lugar como reacción frente a lo antijurídico; en uno y otro supuesto la conducta humana es ordenada o prohibida. En consecuencia, tanto el derecho penal como el derecho administrativo sancionador resultan ser dos inequívocas manifestaciones de la potestad punitiva del Estado, entendida como la facultad que tiene éste de imponer penas y medidas de seguridad ante la comisión de ilícitos. Ahora bien, dada la similitud y la unidad de la potestad punitiva, en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador puede acudirse a los principios penales sustantivos, aun cuando la traslación de los mismos en cuanto a grados de exigencia no pueda hacerse de forma automática, porque la aplicación de dichas garantías al procedimiento administrativo sólo es posible en la medida en que resulten compatibles con su naturaleza. Desde luego, el desarrollo jurisprudencial de estos principios en el campo administrativo sancionador -apoyado en el Derecho Público Estatal y asimiladas algunas de las garantías del derecho penal-, irá formando los principios sancionadores propios para este campo de la potestad punitiva del Estado, sin embargo, en tanto esto sucede, es válido tomar de manera prudente las técnicas garantistas del derecho penal

En específico, el derecho administrativo sancionador posee como objeto garantizar a la colectividad en general el desarrollo correcto y normal de las funciones reguladas por las leyes administrativas, utilizando el poder de policía para lograr los objetivos en ellas trazados, cuestión en la que va inmerso el interés colectivo.

Por sanción administrativa debemos entender un castigo infligido por la Administración a un administrado como consecuencia de una conducta tachada como ilícita por la ley. Este castigo puede consistir en la privación de un bien, de un derecho, la imposición de una obligación de pago, arresto, etcétera.

Así, el llamado derecho administrativo sancionador se refiere al cúmulo de normas sustantivas y adjetivas que se relacionan con la comisión de infracciones e imposición de sanciones en el plano administrativo. De este modo, la pena administrativa tiene lugar como reacción frente a lo antijurídico en el ámbito del derecho administrativo.

Con base en lo anterior, el Tribunal Pleno sostuvo que la pena administrativa guarda una similitud fundamental con la sanción penal, toda vez que como parte de la potestad punitiva del Estado, ambas tienen lugar como reacción frente a lo antijurídico.

En uno y otro supuesto, la conducta humana es ordenada o prohibida bajo la sanción de una pena. Que esta pena la imponga en un caso el tribunal y en otro la autoridad actuando en sus funciones administrativas, constituye una diferencia jurídico-material entre los dos tipos de normas penales.

PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 6/2015

Bajo esta misma línea, se dijo que en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador es totalmente válido acudir a los principios penales sustantivos; sin embargo, también se mencionó que esa traslación, en cuanto al grado de exigencia, no puede hacerse de forma automática, ya que los referidos principios deben resultar compatibles con la naturaleza del procedimiento administrativo.

En lo que a la presente resolución interesa, el derecho disciplinario es el conjunto de normas sustantivas y procesales en virtud de las cuales el Estado, en su faceta administrativa, asegura que los servidores públicos cumplan con los deberes constitucionales de apego a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, conforme lo establece el artículo 109, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.¹⁰⁶

¹⁰⁶ “**Artículo 109.-** Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente:
(...)”

III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones.

Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control, o por sus homólogos en las entidades federativas, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa que resulte competente. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control.

Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial de la Federación, se observará lo previsto en el artículo 94 de esta Constitución, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación en materia de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos.

La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación de las faltas administrativas como no graves, que realicen los órganos internos de control.

Los entes públicos federales tendrán órganos internos de control con las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y

El texto constitucional en cita dispone que las sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones.

De este modo, el derecho disciplinario está relacionado de manera directa con el régimen de responsabilidades de los servidores públicos, y tiene como objetivo investigar y proceder en contra de aquellos que con motivo del desempeño de la función pública, no cumplan las finalidades que la Constitución General les exige.

En este sentido, el propósito del derecho disciplinario es hacer efectiva, en el ámbito administrativo, la exigencia general que establece el artículo 108 constitucional en su primer párrafo, el cual dispone que los servidores públicos serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.¹⁰⁷

Ahora bien, como se puede desprender de la fracción III del artículo 109 de la Constitución General, el derecho disciplinario, en su

aplicación de recursos públicos federales y participaciones federales; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a que se refiere esta Constitución.

Los entes públicos estatales y municipales, así como del Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, contarán con órganos internos de control, que tendrán, en su ámbito de competencia local, las atribuciones a que se refiere el párrafo anterior, y

(...)"

¹⁰⁷ **Artículo 108.-** Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

(...)"

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

aspecto procedimental, exige instaurar en contra del servidor público un verdadero procedimiento seguido en forma de juicio, en el cual están claramente diferenciadas tres etapas: la investigación, el procedimiento disciplinario y el dictado de la resolución. De ahí que por mayoría de razón, el derecho disciplinario deba acoger no sólo la doctrina que este Alto Tribunal ha desarrollado sobre el derecho administrativo sancionador, sino también construir sus propios principios, en tanto está relacionado con la función pública.

Por otro lado, del propio artículo 109, fracción III, de la Constitución General, se desprende que para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial de la Federación, se observará lo previsto en el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del cual se infiere que la disciplina de los servidores públicos adscritos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación estará a cargo de ella misma.

En este sentido, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, actualmente abrogada pero aún aplicable para resolver el presente asunto, dispone en su artículo 3º, fracción II, que en el ámbito de su competencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está facultada para aplicar la citada ley. Asimismo, en ejercicio de sus facultades constitucionales, el Pleno de este Alto Tribunal emitió el Acuerdo General número 9/2005, de veintiocho de marzo de dos mil cinco, relativo a los procedimientos de responsabilidades administrativas de los servidores públicos de

dicho Tribunal, cuya versión fue actualizada mediante instrumento normativo de veintiuno de abril de dos mil catorce.

Ahora bien, esta Suprema Corte también ha sostenido que el crecimiento en la utilización del poder de policía puede tornarse arbitrario si no se controla a la luz de la Constitución General, por tanto, es labor de este Alto Tribunal crear una esfera garantista que proteja de manera efectiva los derechos fundamentales.

Al respecto, no cabe duda que uno de los límites más importantes del ejercicio del *ius puniendi* del Estado es el principio de legalidad, con base en el cual no sólo se impide que los poderes Ejecutivo y Judicial configuren libremente infracciones y sanciones; sino que exige que el órgano que aplica la norma se sujete de manera estricta al tipo administrativo. Esto último se conoce como el principio de tipicidad en el ámbito de aplicación de la norma, y es una derivación del denominado exacta aplicación de la ley en materia penal,¹⁰⁸ ampliamente reconocido como rector del derecho administrativo sancionador.

En aras del principio de tipicidad, a la autoridad sancionadora se le prohíbe interpretar de manera extensiva la infracción o bien, aplicarla de manera analógica,¹⁰⁹ pues ello sería fuente de creación de

¹⁰⁸ Al respecto, puede consultarse el contenido de la jurisprudencia que lleva por rubro y texto los siguientes: **“EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL, GARANTÍA DE. SU CONTENIDO Y ALCANCE ABARCA TAMBIÉN A LA LEY MISMA”** La interpretación del tercer párrafo del artículo 14 constitucional, que prevé como garantía la exacta aplicación de la ley en materia penal, **no se circunscribe a los meros actos de aplicación**, sino que abarca también a la propia ley que se aplica, la que debe estar redactada de tal forma, que los términos mediante los cuales especifique los elementos respectivos sean claros, precisos y exactos. La autoridad legislativa no puede sustraerse al deber de consignar en las leyes penales que expida, expresiones y conceptos claros, precisos y exactos, al prever las penas y describir las conductas que señalen como típicas, incluyendo todos sus elementos, características, condiciones, términos y plazos, cuando ello sea necesario para evitar confusiones en su aplicación o demérito en la defensa del procesado. Por tanto, la ley que carezca de tales requisitos de certeza, resulta violatoria de la garantía indicada prevista en el artículo 14 de la Constitución General de la República.”

¹⁰⁹ Díaz Fraile, Francisco, **Derecho Administrativo Sancionador: Análisis a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos** (Crítica del Derecho Español vigente), Barcelona, España: Editorial Atelier, 2016, página 302.

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

tipos infractores en contra de la seguridad jurídica. Así, el aplicador sólo debe sancionar aquellos comportamientos que reúnan todos los requisitos que configuran el tipo infractor aplicado.

La necesidad de respetar el principio de tipicidad es importante dentro del ámbito del derecho administrativo sancionador, como lo ha dispuesto el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis que lleva por rubro: **“TIPICIDAD. EL PRINCIPIO RELATIVO, NORMALMENTE REFERIDO A LA MATERIA PENAL, ES APLICABLE A LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS”**¹¹⁰ y, por ende, en el derecho disciplinario. Esta exigencia es reconocida en el citado Acuerdo General Número 9/2005, de esta Suprema Corte, cuyo artículo 4º dispone lo siguiente:

Artículo 4o. Para la sustanciación y resolución de los procedimientos previstos en este acuerdo serán aplicables la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, en lo que no se oponga a lo dispuesto en esta última, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. En su caso, será aplicable supletoriamente

Asimismo, V. Cobo Olvera, Tomas, **El procedimiento administrativo sancionador tipo**, 4ª edición, Barcelona, España: Editorial Bosch, 2014, foja 38

¹¹⁰ “El principio de tipicidad, que junto con el de reserva de ley integran el núcleo duro del principio de legalidad en materia de sanciones, se manifiesta como una exigencia de predeterminación normativa clara y precisa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes. En otras palabras, dicho principio se cumple cuando consta en la norma una predeterminación inteligible de la infracción y de la sanción; supone en todo caso la presencia de una *lex certa* que permita predecir con suficiente grado de seguridad las conductas infractoras y las sanciones. En este orden de ideas, debe afirmarse que la descripción legislativa de las conductas ilícitas debe gozar de tal claridad y univocidad que el juzgador pueda conocer su alcance y significado al realizar el proceso mental de adecuación típica, **sin necesidad de recurrir a complementaciones legales que superen la interpretación y que lo llevarían al terreno de la creación legal para suplir las imprecisiones de la norma.** Ahora bien, toda vez que el derecho administrativo sancionador y el derecho penal son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado y dada la unidad de ésta, en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador debe acudir al aducido principio de tipicidad, normalmente referido a la materia penal, haciéndolo extensivo a las infracciones y sanciones administrativas, de modo tal que si cierta disposición administrativa establece una sanción por alguna infracción, la conducta realizada por el afectado debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea lícito ampliar ésta por analogía o por mayoría de razón.” (Novena Época, Registro 174326, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Agosto de 2006, Materia(s) Constitucional, Administrativa, Tesis P./J. 100/2006, Página 1667).

el Código Federal de Procedimientos Civiles y, en su defecto, deberá acudir a los principios generales de derecho, en términos de lo previsto en el artículo 14, párrafo cuarto, de la Constitución General de la República, **salvo por lo que se refiere a las causas de responsabilidad y sanciones aplicables.**

Así, a efecto de dar continuidad a esta necesidad de certeza y seguridad jurídica, el órgano sancionador, en cumplimiento al principio de legalidad, exacta aplicación de la ley y su derivación de tipicidad, no tiene mas que asegurarse de conocer el alcance y significado de la infracción prevista en ley al realizar el proceso mental de adecuación típica y de la correlación entre sus elementos,¹¹¹ sin que se rebase la labor de interpretación y se incurra en el terreno de la creación legal para superar las deficiencias de la norma. Al respecto, resulta aplicable el criterio plasmado en la tesis del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: **“EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. ESTE DERECHO FUNDAMENTAL, CONTENIDO EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SALVAGUARDA LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS”**¹¹².

De acuerdo con la doctrina en materia de derecho administrativo sancionador, el principio de tipicidad se infringe no sólo cuando se sanciona una conducta atípica, sino también cuando, siendo típico el comportamiento, se utiliza en el acto sancionador un tipo

¹¹¹ La doctrina define al principio de tipicidad en materia de aplicación de la ley administrativa del siguiente modo: es la adecuación absoluta entre el hecho realizado y el tipo descrito en la norma. V. Cobo Olvera, Tomas, **Op. Cit.**, foja 31.

¹¹² Época: Décima Época. Registro: 2003572. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1. Materia(s): Constitucional. Tesis: P. XXI/2013 (10a.). Página: 191. **Cuyo texto es el siguiente:** El derecho fundamental a la exacta aplicación de la ley penal tiene su origen en los principios nullum crimen sine lege (no existe un delito sin una ley que lo establezca) y nulla poena sine lege (no existe una pena sin una ley que la establezca), al tenor de los cuales sólo pueden castigarse penalmente las conductas debidamente descritas en la legislación correspondiente como ilícitas y aplicarse las penas preestablecidas en la ley para sancionarlas, con el fin de salvaguardar la seguridad jurídica de las personas, a quienes no puede considerárseles responsables penalmente sin que se haya probado que infringieron una ley penal vigente, en la que se encuentre debidamente descrito el hecho delictivo y se prevea la sanción aplicable.

PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015

equivocado.¹¹³ De este modo, los principios de legalidad y de seguridad jurídica, reclaman que en la motivación de la resolución sancionadora se recoja el fundamento legal de la sanción, debiendo precisar el tipo infractor aplicado, e impide, en aquellos casos en los que se admite recurso, que los tribunales de alzada busquen una cobertura legal al tipo infractor que no haya sido señalada por el órgano sancionador, o bien, un tipo alternativo al empleado por la resolución sancionadora.

A continuación es menester aludir a las conductas por las cuales el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación elevó su acusación en el auto de inicio del procedimiento disciplinario, que emitió el nueve de mayo de dos mil dieciséis y la calificación preliminar de las mismas:

Conducta	Calificación legal preliminar, prevista en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos
1. Indebido ejercicio del empleo, cargo o comisión, específicamente la utilización de recursos informáticos asignados en razón de su función para fines diversos a los que estaban afectos, esto es, para el almacenamiento de imágenes, videos, o consulta de páginas con contenido pornográfico o sexo explícito.	Artículo 8.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones: (...) III.- Utilizar los recursos que tenga asignados y las facultades que le hayan sido atribuidas para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, exclusivamente para los fines a que están afectos;
2. Indebido ejercicio del empleo, cargo o comisión, específicamente la introducción y consumo de bebidas alcohólicas al interior de la Dirección General del Canal Judicial	Artículo 8.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones: I.- Cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión;

¹¹³ Ibid., foja 307.

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

3. Indebido ejercicio del empleo, cargo o comisión, específicamente realizar actividades ajenas al cumplimiento de la función, tales como jugar “play station” y dominó.	Artículo 8.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones: I.- Cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión.
4. Acoso laboral, que se materializó a través de maltrato físico, esto es, de la práctica del “manto sagrado”.	Artículo 8.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones: (...) VI.- Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto , diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo de éste;
5. Juegos de naturaleza sexual entre los servidores públicos y formulación de expresiones de naturaleza sexual inapropiada.	Artículo 8.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones: (...) VI.- Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo de éste;
6. Omitir realizar la supervisión de los servidores públicos que se encontraban bajo su dirección, con el fin de que cumplieran con sus obligaciones legales.	Artículo 8.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones: (...) XVII.- Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las disposiciones de este artículo.

Este Tribunal Pleno comparte el ejercicio de tipicidad que llevó a cabo de manera preliminar el Presidente de este Alto Tribunal en el auto de nueve de mayo de dos mil dieciséis, por las siguientes razones:

En cuanto a la conducta sintetizada bajo el número 1, debe decirse que, en términos abstractos, como corresponde en este apartado, la conducta consistente en emplear los recursos informáticos asignados a un servidor público, debe ceñirse al objeto, función, finalidad o servicio que presta el órgano del Estado al cual se encuentra adscrito, en el caso concreto, para la impartición de justicia y la propagación de la labor de este Alto Tribunal a través de un medio

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

de comunicación como lo es la televisión, en términos de la Constitución General y el ordenamiento secundario aplicable.

En el caso concreto, resulta de mucha utilidad invocar los objetivos y funciones de la Dirección General del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenidos en el Manual Específico de dicha Dirección:¹¹⁴

“VII. OBJETIVOS Y FUNCIONES

**1.0.1.3. DIRECCIÓN GENERAL DEL CANAL JUDICIAL
OBJETIVO**

Dar a conocer a la sociedad las resoluciones emitidas y las acciones emprendidas por la SCJN, por medio de la señal de televisión propia, proporcionando información institucional clara y oportuna al público televidente; así como impulsar la imagen del Poder Judicial de la Federación y de los órganos que lo integran, a través de programas y campañas televisivas, con el fin de difundir y promover la cultura de la legalidad.

FUNCIONES

- Realizar y coordinar reuniones con el Consejo Consultivo Interinstitucional del Canal Judicial, para informar sobre las políticas, programas y acciones realizadas y recibir e instrumentar las opiniones y recomendaciones que éste realice.
- Supervisar que se proporcione información institucional amplia, clara y oportuna al público televidente, a través de los programas de televisión y de campañas televisivas de la Suprema Corte.
- Supervisar la transmisión de la señal de televisión generada en la Suprema Corte y en los distintos órganos que conforman al Poder Judicial de la Federación.
- Supervisar la transmisión en vivo de las sesiones plenarias públicas de los órganos que conforman al Poder Judicial de la Federación.
- Supervisar la transmisión en vivo de las sesiones plenarias de los órganos que conforman al Poder Judicial de la Federación.
- Coordinar la producción de programas de televisión relacionados con los objetivos y actividades de la Suprema Corte y de los otros órganos del Poder Judicial de la Federación.
- Supervisar la cobertura televisiva de eventos que se desarrollen en los distintos órganos del Poder Judicial de la Federación.
- Coordinar y supervisar la Barra de Programación, previamente aprobada por la Secretaría General de la Presidencia, así como sus actualizaciones subsecuentes.

¹¹⁴ http://psvscjnsijs.scjn.pjf.gob.mx/manuales/docs/MOE_DGCJ_DGRHIA_V2_12_2015.pdf

PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 6/2015

- Producir los promocionales de la programación, así como diversos materiales institucionales.
- Establecer vínculos con instituciones educativas para que produzcan materiales susceptibles de ser transmitidos en el Canal Judicial.
- Supervisar la conservación y adecuada catalogación de las videograbaciones y programas realizados.
- Coordinarse con la Dirección General de Comunicación y Vinculación Social sobre cualquier actividad relevante de la Suprema Corte o de las relacionadas con ésta.
- Reseñar, difundir e informar, bajo los principios de objetividad, veracidad, ética, pluralidad, equidad y oportunidad, la actividad jurisdiccional que corresponda a la responsabilidad de los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación, por medio del canal de televisión, coadyuvando en el fortalecimiento de la cultura jurídica de los mexicanos.
- Gestionar, ante las autoridades competentes, los permisos y autorizaciones para subir al satélite, de forma permanente, la señal de televisión generada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en los distintos órganos que conforman al Poder Judicial de la Federación.
- Gestionar ante las instancias en materia de telecomunicaciones, los espacios necesarios para que el Poder Judicial de la Federación cuente de forma permanente con la señal propia de televisión.
- Concretar la realización de convenios para la producción, transmisión y fomento de programas educativos entre las instituciones o dependencias gubernamentales o privadas, para programas culturales, jurídicos, educativos, etc.
- Validar el contenido y actualización de los manuales de organización y de procedimientos del del Canal Judicial.
- Las demás que expresamente le confieran las disposiciones generales aplicables, así como las que le sean encomendadas por la Secretaría General de la Presidencia.”

Dentro del cúmulo de normatividad que rige la actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no existe fundamento legal que confiera atribución a sus servidores públicos para consultar o almacenar imágenes, videos, o información con contenido pornográfico o sexo explícito. Por el contrario, de conformidad con el Acuerdo General de Administración IV/2008, del Comité de Archivo, Biblioteca e Informática, relativo al Uso y Aprovechamiento de los Bienes y Servicios Informáticos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los servidores públicos adscritos a esta Suprema Corte están obligados a hacer uso ético de los bienes informáticos que les han sido asignados y utilizarlos con fines laborales exclusivamente:

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

“Artículo 60. Todos y cada uno de los usuarios de equipo de cómputo de la Suprema Corte son responsables de la información que generen y guarden en los equipos que les hayan sido asignados para el desempeño de sus funciones” (...)

Título Cuarto
(...)

Capítulo Cuarto.
Del uso ético de la red

Artículo 37. El usuario con acceso a cualquiera de las redes de la Suprema Corte deberá comportarse con ética, civilidad y profesionalismo en relación con el uso de los recursos que las componen, evitando acceder, copiar, remover, borrar, imprimir o realizar cualquier actividad, en lugares o archivos a los que no se les han otorgado permisos explícitos, aun cuando se trate de recursos generales.

(...)

Capítulo Sexto
Del correo electrónico

Artículo 45. El usuario de cualquier cuenta de correo se abstendrá de:

Enviar correos con contenidos ofensivos para otros usuarios o que desacrediten la integridad de la Institución, de otros compañeros de trabajo o de sus órganos de adscripción, que atenten o perturben contra la moral de personas de la institución o fuera de ella;

(...)

VII. Publicar, exponer, cargar, distribuir o diseminar cualquier tema, nombre, material o información inapropiados, blasfemos, difamatorios, infractores, obscenos, inmorales o ilegales:

(...)

Título Quinto

Del Internet

Capítulo Primero

Del servicio, acceso y consultas a internet

(...)

Artículo 54. El servicio de internet proporcionado como herramienta de trabajo, únicamente podrá utilizarse para acceder a páginas relacionadas con las funciones del órgano de adscripción. El servicio otorgado para el uso personal de los servidores públicos estará sujeto a las limitantes previstas en el artículo 56 de este Acuerdo General.

Artículo 56. El usuario deberá adoptar las normas de uso ético a que se refiere el Título Cuarto, Capítulo Cuarto, de este Acuerdo General y deberá abstenerse de:

I. Consultar páginas pornográficas, de violencia, de entretenimiento y aquéllas que no vayan de acuerdo con sus necesidades de trabajo;
(...)

De ahí que si el Presidente de este Alto Tribunal inició un procedimiento administrativo con motivo de la consulta o almacenamiento de imágenes, videos, o páginas electrónicas con contenido pornográfico o sexo explícito en los bienes informáticos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se encuentran bajo el resguardo de determinados servidores públicos, es correcto estimar que su acreditamiento se ajustaría al supuesto previsto en el artículo 8, fracción III, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, actualmente derogada, en la medida en la que no utilizarían los recursos asignados **para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, esto es, para los fines a los cuales están afectos**

En cuanto a la introducción y consumo de bebidas alcohólicas al recinto de este Alto Tribunal, es menester llevar a cabo una serie de precisiones, a fin de no incurrir en generalizaciones que traigan consigo la tipicidad de conductas que son inocuas en relación con el debido cumplimiento de las funciones de impartición de justicia que se desempeñan en este Alto Tribunal y, en su caso, con la de dar a conocer a la sociedad las resoluciones emitidas y las acciones emprendidas por la Suprema Corte, por medio de la señal de televisión propia, proporcionando información institucional clara y oportuna al público televidente; así como impulsar la imagen del Poder Judicial de la Federación y de los órganos que lo integran, a través de programas y campañas televisivas, con el fin de difundir y promover la cultura de la legalidad.

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

La introducción de bebidas alcohólicas, en envase cerrado, por parte de servidores públicos de este Alto Tribunal, puede tener una finalidad justificada, que de manera excepcional se traduzca en la atipicidad de la conducta. Se advierte, por ejemplo, el simple propósito de llevar a cabo obsequios entre los mismos servidores públicos y mientras las bebidas alcohólicas permanezcan envasadas, cerradas y no sean consumidas en las instalaciones de este Tribunal Constitucional, no podría sostenerse que su mera introducción afecte el cumplimiento del servicio al que se encuentran obligados los servidores públicos, que se cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio, o que implique un abuso o ejercicio indebido del empleo, cargo o comisión. Esta y otras razones análogas pueden integrar la atipicidad de la conducta revisada y deberán valorarse caso por caso.

Sin embargo, la razón por la cual se introducen bebidas alcohólicas, aun empaquetadas, deberá estar plenamente demostrada en autos, porque por regla general, su introducción no está relacionada con el ejercicio del servicio público que se presta en este Tribunal Constitucional, consistente en la impartición de justicia, en el caso concreto, dar a conocer a la sociedad las resoluciones emitidas y las acciones emprendidas por la Corte por medio de la señal de televisión propia, proporcionando información institucional clara y oportuna al público televidente; así como impulsar la imagen del Poder Judicial de la Federación y de los órganos que lo integran, a través de programas y campañas televisivas, con el fin de difundir y promover la cultura de la legalidad.

Al ser esto así, si la introducción de bebidas alcohólicas no está justificada en un caso concreto, entraña ejercer indebidamente el empleo, cargo o comisión, porque esa conducta no tiene relación alguna con las funciones de este Alto Tribunal, y tratándose del Canal Judicial, no impulsa una imagen adecuada de este órgano jurisdiccional. La valoración de estos puntos dependerá de las circunstancias de cada caso.

De este modo, deberán analizarse aquellos supuestos en los que se pueda sostener que la conducta relacionada con la introducción de bebidas alcohólicas (aún empaquetadas) a este Alto Tribunal, sí constituya una infracción administrativa, pues puede presentarse el caso en el que un servidor público, prevaleciéndose de su posición jerárquica, ordene la compra de bebidas alcohólicas a su inferior, sin justificar de qué manera se relaciona con las funciones que desempeñan ambos servidores públicos o bien, las que se desarrollen en este Alto Tribunal. En consecuencia, sólo podría justificarse esa instrucción si se vinculan, por ejemplo, con eventos o celebraciones que se organicen con los recursos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, los cuales deberán estar debidamente motivados y demostrados, porque de otro modo la conducta podrá subsumirse en la hipótesis prevista en la última parte de la fracción I del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, consistente en abusar o ejercer indebidamente un empleo, cargo o comisión.

Asimismo, si la introducción de las bebidas alcohólicas genera en un caso concreto el incumplimiento del servicio encomendado, la suspensión o deficiencia del servicio de impartición de justicia propio de este Alto Tribunal, entonces se estará frente a una conducta típica

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

que ameritará la correspondiente sanción, en los términos de la legislación aplicable.

Por otro lado, la acción consistente en ingerir bebidas alcohólicas en la Suprema Corte de Justicia es, por regla general, una conducta que no se ajusta a los fines que persigue el Poder Judicial de la Federación, incluyendo al Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, motivo por el cual no se relaciona con el cumplimiento del servicio que le ha sido encomendado a los servidores públicos de este Alto Tribunal, de ahí que, en principio, una conducta de esa naturaleza constituye una infracción al artículo 8, fracción I, de la ley de la materia.

Sin embargo, al igual que en el caso de la introducción de bebidas alcohólicas, es menester no incurrir en generalizaciones, pues en determinados eventos organizados por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, sería factible que los servidores públicos, de manera excepcional y justificada, pudiesen conmemorar algún evento solemne o tradicional, en el que de manera controlada y respetuosa, ingirieran alguna bebida alcohólica.

Pasando a la diversa conducta imputada, consistente en jugar “play station” y dominó, es un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en esta materia, que ambos son pasatiempos y, por ende, su práctica en las instalaciones de este Alto Tribunal no guardan relación con el cumplimiento del servicio que le puede ser encomendado a un integrante del Poder Judicial de la Federación,

motivo por el cual es correcta la calificación de esa conducta en términos del artículo 8, fracción I, de la Ley de la materia, pues resulta imposible que con su práctica se cumpla el servicio público, máxime si queda demostrado que ello causa la suspensión o deficiencia del mismo; de igual manera y atendiendo a las condiciones de ejecución de la conducta, puede implicar un abuso o ejercicio indebido del empleo, cargo o comisión.

En este sentido, en las Condiciones Generales de Trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,¹¹⁵ que de conformidad con su artículo 1 establece que son de observancia obligatoria para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y para el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, respecto de sus servidores públicos de base y tratándose del personal de confianza, se aplicarán en lo que resulte conducente, se prevé como prohibición expresa en su artículo 51, fracción II, desatender el trabajo de manera injustificada, así como distraerse o provocar la distracción de los compañeros con actos que no tengan relación con el trabajo. Ese precepto establece lo siguiente:

“ARTÍCULO 51. De manera adicional a las obligaciones y prohibiciones contenidas en la Ley Reglamentaria, así como en las demás disposiciones aplicables, queda prohibido a los servidores públicos:

(...)

II. Desatender su trabajo injustificadamente, aun cuando permanezcan en su sitio, así como distraerse o provocar la distracción de sus compañeros con lecturas o actos que no tengan relación con el trabajo;”

De igual manera, es correcto tipificar la conducta consistente en el maltrato físico entre servidores públicos como una falta de respeto entre aquellas personas con las que se tiene relación con motivo del desempeño de la función pública. El respeto al que se refiere la ley es

¹¹⁵ Publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de enero de 2013.

PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 6/2015

un concepto jurídico indeterminado que es necesario interpretar en cada caso concreto. En este aspecto, el Diccionario de la Real Academia lo define del siguiente modo:

Respeto:

Del lat. *respectus* 'atención, consideración'.

1. m. Veneración, acatamiento que se hace a alguien.

2. m. Miramiento, consideración, deferencia.

3. m. Cosa que se tiene de prevención o repuesto. *Coche de respeto*.

4. m. **miedo** (ll recelo).

5. m. desus. **respeto**.

6. m. germ. **espada** (ll arma blanca).

7. m. germ. Persona que tiene relaciones amorosas con otra.

8. m. pl. Manifestaciones de acatamiento que se hacen por cortesía.

respeto humano

1. m. Miramiento excesivo hacia la opinión ajena, antepuesto a los dictados de la moral estricta. U. m. en pl.

campar alguien **por** su **respeto**, o **por** sus **respetos**

1. locs.

verbs. Obrar a su antojo, sin miramientos a la obediencia o a la consideración debida.

Otra definición del respeto es la que se expresa a continuación:¹¹⁶

Respeto:

1.- Consideración, acompañada de cierta sumisión, con que se trata a una persona o una cosa por alguna cualidad, situación o circunstancia que las determina y que lleva a acatar lo que dice o establece **o a no causarle ofensa o perjuicio**.

2.- **Consideración de que algo es digno** y debe ser tolerado.

"el respeto a los derechos humanos; el respeto a la libertad de expresión; **el respeto al propio cuerpo**"

116

<https://www.google.com.mx/search?q=respeto&oq=respeto&aqs=chrome.0.69i59j69i61j69i59j0l3.1169j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

De lo anterior se concluye que el maltrato físico entre servidores públicos debe ser considerado como una falta de respeto y, por ende, un desacato a la obligación legal de observar buena conducta en el empleo, cargo o comisión. El maltrato físico genera un perjuicio sobre el cuerpo de una persona que no expresa miramiento, consideración o deferencia hacia ella y no puede considerarse una conducta idónea para relacionarse con diligencia y rectitud en la prestación del servicio público.

En cuanto a los juegos de naturaleza sexual entre servidores públicos y formulación de expresiones a que se refiere el número 5 anterior, también está correctamente tipificado en la fracción VI del artículo 8 de la Ley de la Materia. Los juegos de naturaleza sexual entre servidores públicos y formulación de expresiones de naturaleza sexual no son propias del servicio público y su expresión en el centro de trabajo constituye una falta de respeto hacia el resto de los servidores públicos cuando éstas se cometen frente a ellos, pues como ya se expresó, el respeto es, entre otras cosas, el miramiento, consideración y deferencia que se tiene hacia otros, en la inteligencia de que los comportamientos sexuales llevados a cabo en público generan malestar entre las personas o les resultan ofensivos.

Finalmente, si a determinados servidores públicos se les imputa omitir la supervisión de aquellos que se encontraban bajo su dirección, con el fin de que cumplieran con sus obligaciones legales, dicha conducta encuadra de manera precisa y sin necesidad de interpretación en el artículo 8, fracción XVII, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos

Ahora bien, las conductas imputadas no son de aquellas a las cuales se refiere el artículo 24, segundo párrafo, del Acuerdo General

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

9/2005 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, por tanto, la competencia originaria para resolver sobre los procederes investigados no es del Tribunal Pleno, sin embargo, al estar de por medio diversas denuncias de acoso sexual ambiental y acoso laboral, resulta aplicable el artículo 7 del Acuerdo General de Administración III/2012, del tres de julio de dos mil doce, emitido por el Comité de Gobierno y Administración de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el cual se emiten las bases para investigar y sancionar el acoso laboral y el acoso sexual en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en lo sucesivo, “el Acuerdo”). Dicho precepto dispone:

“Artículo 7.- Concluida la investigación, el órgano competente, de acuerdo a la naturaleza y circunstancias del caso, evaluará si la conducta o conductas pueden ser calificadas como graves para efecto del procedimiento de responsabilidad administrativa. Lo anterior, con la finalidad de que la sanción impuesta corresponda a la magnitud de la conducta y de los resultados causados.”

De este modo, si como resultado de la investigación las conductas imputadas a los presuntos responsables fueron consideradas como graves en un caso concreto, entonces sí se surtirá la competencia en favor de dicho órgano colegiado, tal como lo disponen los artículos 133, fracción I y 136 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, aplicable al presente procedimiento.

En efecto, tal como lo ha sostenido el Tribunal Pleno en otras ocasiones,¹¹⁷ la calificación de la gravedad de las conductas no está limitada a los supuestos previstos en el segundo párrafo del artículo 136 citado, pues el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades

¹¹⁷ Véase por ejemplo, el procedimiento de responsabilidad administrativa 6/2013, fallado por mayoría de votos el día veintinueve de febrero de dos mil dieciséis.

Administrativas de los Servidores Públicos, actualmente abrogada, no limita las facultades de la autoridad para clasificar las infracciones que no fueron catalogadas de esa forma, sino que establece que es posible determinar su gravedad en ejercicio de sus atribuciones legales, atendiendo a las circunstancias particulares del caso, previstas en el artículo 14 de dicho ordenamiento legal.¹¹⁸

Este Tribunal Pleno considera aplicable la jurisprudencia 2ª./J.139/2009, de rubro: **“RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, NO ESTABLECE LIMITATIVAMENTE LAS CONDUCTAS QUE PUEDEN CALIFICARSE COMO GRAVES POR LA AUTORIDAD SANCIONADORA.”**¹¹⁹

¹¹⁸ **“Artículo 13.** Las sanciones por falta administrativa consistirán en:

- I. Amonestación privada o pública;
 - II. Suspensión del empleo, cargo o comisión por un período no menor de tres días ni mayor a un año;
 - III. Destitución del puesto;
 - IV. Sanción económica, e
 - V. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
- [...]

En el caso de infracciones graves se impondrá, además, la sanción de destitución.

En todo caso, se considerará infracción grave el incumplimiento a las obligaciones previstas en las fracciones VIII, X a XVI, XIX, XIX-C, XIX-D, XXII y XXIII del artículo 8º de la ley....”

“Artículo 14. Para la imposición de las sanciones administrativas se tomarán en cuenta los elementos propios del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público cuando incurrió en la falta, que a continuación se refieren:

- I. La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de la Ley o las que se dicten con base en ella;
- II. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público;
- III. El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos la antigüedad en el servicio;
- IV. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución;
- V. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y
- VI. El monto del beneficio, lucro, o daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.

Para los efectos de la ley, se considerará reincidente al servidor público que habiendo sido declarado responsable del incumplimiento a alguna de las obligaciones a que se refiere el artículo 8º de la ley, incurra nuevamente en una o varias conductas infractoras a dicho precepto legal.”

¹¹⁹ El artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos determinarán sus obligaciones y las sanciones aplicables, así como los procedimientos y las autoridades facultadas para aplicarlas, a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones. Asimismo, de la exposición de motivos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se advierte que parte de su objeto fue reducir la discrecionalidad de las autoridades en la imposición de las sanciones administrativas, evitando conductas arbitrarias contrarias a los derechos de los trabajadores al servicio del Estado, e impidiendo actos a través de los cuales pretenda eludirse la imposición de una sanción a los servidores públicos infractores de dicho ordenamiento. Por lo anterior, el legislador dispuso en el antepenúltimo párrafo del artículo 13 de la ley citada, que en todo caso el incumplimiento a las obligaciones previstas en las fracciones VIII, X a XIV, XVI, XIX,

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

Desde un punto de vista abstracto, se coincide con la calificación de gravedad que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le atribuyó a las conductas imputadas, pues si se demuestra su comisión y se dan las condiciones que exige la normatividad respectiva, ello podrían dar lugar a las figuras jurídicas de acoso sexual ambiental y acoso laboral, consideradas y reguladas en el Acuerdo, así como en el Manual de Buenas Prácticas para investigar y sancionar el acoso laboral y/o sexual en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en lo sucesivo, “el Manual”).

Tal como se menciona en el Manual, la Suprema Corte ha asumido el compromiso de crear ambientes laborales libres de violencia. Asimismo, se informa que los eventos de acoso laboral y sexual son incompatibles no sólo con el ordenamiento jurídico en materia de derechos humanos, sino con la función de esta Suprema Corte de velar por la adecuada protección de los derechos de todas las personas.

Este Alto Tribunal ha considerado, en otras ocasiones, que la denuncia de hechos relacionados con el acoso sexual o laboral deben elevar a las conductas imputadas como de carácter grave, lo que

XXII y XXIII del artículo 8 de la propia ley se considerará como grave para efectos de la sanción correspondiente, lo cual constituye una limitación para la autoridad sancionadora, pues al ubicar la conducta irregular de un servidor público en las referidas fracciones, deberá indefectiblemente calificarla como grave. Lo anterior no significa que tales infracciones sean las únicas que pueden catalogarse como graves por la autoridad sancionadora, pues el indicado artículo 13 no acota sus facultades para clasificar así a las infracciones no señaladas en su antepenúltimo párrafo, por lo que en ejercicio de sus atribuciones legales puede determinar, dentro del marco legal aplicable a las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, si las infracciones a las obligaciones previstas en las fracciones I a VII, IX, XV, XVII, XVIII, XX, XXI y XXIV del artículo 8 de la ley de la materia resultan graves o no, atendiendo a las circunstancias socioeconómicas, nivel jerárquico, antecedentes del infractor, antigüedad en el servicio, condiciones exteriores y los medios de ejecución, la reincidencia en el incumplimiento de obligaciones y el monto del beneficio, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de dichas obligaciones.”

justifica, entonces, la competencia de este Tribunal Pleno para emitir un pronunciamiento en este asunto.¹²⁰ En efecto, el Acuerdo General de Administración III/2012 de este Alto Tribunal, dispone que para efectos de la responsabilidad administrativa en que pueden incurrir sus servidores públicos, la infracción a la obligación de observar buena conducta, por cometer faltas de respeto, incluye a los actos que pudieran ser constitutivos de acoso sexual y laboral, según lo establece su artículo 1º y que señala lo siguiente:

“Artículo 1º. Las conductas de acoso laboral y de acoso sexual constituyen infracciones a los deberes previstos en las fracciones I, VI y XXIV del artículo 8º de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en relación con las fracciones I, VIII y XIII del artículo 131 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Lo anterior, porque implican: (I) abuso o ejercicio indebido del empleo, cargo o comisión; (VI) constituyen una falta de respeto y rectitud; (XXIV) entrañan incumplimiento a disposiciones legales, reglamentarias y/o administrativas, y, en todos los casos, se apartan de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen el servicio público.”

Por su parte, en el artículo 2 de dicho acuerdo se ha precisado lo que se entiende por acoso laboral y sexual, de la siguiente manera:

“**Artículo 2.** Para los efectos y con carácter meramente enunciativo, se entiende por:

I. Acoso laboral: los actos o comportamientos, en un evento o en una serie de ellos, en el entorno del trabajo o con motivo de éste, con independencia de la relación jerárquica de las personas involucradas, que atenten contra la autoestima, salud, integridad, libertad o seguridad de las personas; entre otros: la provocación, presión, intimidación, exclusión, aislamiento, ridiculización, o ataques verbales o físicos, que pueden realizarse de forma evidente, sutil o discreta, y que ocasionan humillación, frustración, ofensa, miedo, incomodidad o estrés en la persona a la que se dirigen o en quienes lo presencian, con el resultado de que interfieren en el rendimiento laboral o generan un ambiente negativo en el trabajo.

II. Acoso sexual: son actos o comportamientos de índole sexual, en un evento o en una serie de ellos, que atentan contra la autoestima, la salud, la integridad, la libertad y la seguridad de las personas; entre otros: contactos físicos indeseados, insinuaciones u observaciones

¹²⁰ Puede consultarse el procedimiento de responsabilidad administrativa 6/2013 antes citado.

PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 6/2015

marcadamente sexuales, exhibición no deseada de pornografía, o exigencias sexuales verbales o de hecho.

El acoso sexual se configura independientemente de la relación jerárquica entre las partes y puede consistir en:

(...)

2) Acoso sexual ambiental: acercamientos corporales u otras conductas de naturaleza sexual indeseadas u ofensivas para quien las recibe, utilización de expresiones o imágenes de naturaleza sexual que razonablemente resulten humillantes u ofensivas para quien las recibe”.

Asimismo, la Ley General de Acceso de las mujeres a una vida sin violencia al respecto establece lo siguiente:

“Artículo 10. Violencia Laboral y Docente: Se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad.

Puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya suma produce el daño. También incluye el acoso o el hostigamiento sexual.”

“Artículo 11. Constituye violencia laboral: la negativa ilegal a contratar a la Víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo; la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación, el impedimento a las mujeres de llevar a cabo el período de lactancia previsto en la ley y todo tipo de discriminación por condición de género.”

“Artículo 13. El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. El acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.”

El acoso, en sus variantes laboral y sexual, atenta principalmente en contra del derecho humano a tener un trabajo digno, el cual se

encuentra reconocido y tutelado en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que al efecto dispone que: “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.”

De lo que se desprende que todos los individuos tienen derecho a un trabajo donde se respete plenamente la dignidad humana como trabajadores, lo que implica el reconocimiento a su calidad humana, y a que puedan desempeñar sus labores en un ambiente libre de violencia física y psicológica, donde prevalezca el respeto a su integridad y al resto de sus derechos.

La tutela directa de estos valores constitucionales y legales son los que elevan la acusación de acoso laboral y sexual ambientan a un carácter superlativo, de tal modo que si se acreditara su comisión a través de los medios de prueba idóneos, da lugar a la existencia de conductas que deben ser calificadas como graves.

Una vez que se ha dejado sentado que las conductas imputadas son típicas, se procederá a analizar, en un primer plano, la idoneidad de los medios de prueba que obran en el sumario para demostrar la comisión de las infracciones administrativas por parte de los quince servidores públicos implicados y, posteriormente, se ponderará el valor probatorio que estos merecen.

CUARTO.- Principios legales para determinar la idoneidad y pertinencia del material probatorio. En un primer plano, es menester que este Alto Tribunal acuda a las reglas procesales a partir de las cuales se debe revisar la idoneidad y pertinencia del material probatorio que obra en autos, y para ello es necesario acudir al Código

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 4º del Acuerdo General 9/2005 y el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.¹²¹

De la revisión de autos se obtiene que tanto los comparecientes como la propia Contraloría ofrecieron diversos medios de prueba, entre los que constan la prueba testimonial, la inspección, la confesión y diverso material fotográfico. A continuación se hará referencia a las formalidades que exige la prueba testimonial para el efecto de que pueda ser considerada como medio de prueba idóneo y posteriormente, a los requisitos de pertinencia de los restantes medios de prueba mencionados.

1.- Prueba testimonial.

Este medio de prueba está regulado en el Título Cuarto, Capítulo VI, del Código Federal de Procedimientos Civiles. En lo que interesa, dicho capítulo dispone lo siguiente:

Artículo 165.- Todos los que tengan conocimiento de los hechos que las partes deben probar, están obligados a declarar como testigos.

(...)

Artículo 173.- Para el examen de los testigos, no se presentarán interrogatorios escritos. Las repreguntas serán formuladas verbal y directamente, por las partes o sus abogados, al testigo. Primero interrogará el promovente de la prueba, y, a continuación, las demás partes, pudiendo el

¹²¹ “**ARTICULO 47.-** En todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en los Títulos Segundo y Tercero de la Ley, así como en la apreciación de las pruebas, se observarán las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.”

tribunal, en casos en que la demora puede perjudicar el resultado de la investigación, a su juicio, permitir que, a raíz de una respuesta, hagan las demás partes las repreguntas relativas a ella, o formularlas el propio tribunal.

(...)

Artículo 175.- Las preguntas y repreguntas deben estar concebidas en términos claros y precisos; han de ser conducentes a la cuestión debatida; se procurará que en una sola no se comprenda más de un hecho y no hechos o circunstancias diferentes, y pueden ser en forma afirmativa o inquisitiva. Las que no satisfagan estos requisitos, serán desechadas de plano, sin que proceda recurso alguno; pero se asentarán literalmente en autos.

Artículo 176.- Después de tomarse, al testigo, la protesta de conducirse con verdad, y de advertirlo de las penas en que incurre el que se produce con falsedad, se hará constar su nombre, edad, estado, lugar de residencia, ocupación, domicilio, **si es pariente consanguíneo o afín de alguno de los litigantes, y en qué grado; si tiene interés directo en el pleito o en otro semejante, y si es amigo íntimo o enemigo de alguna de las partes.** A continuación, se procederá al examen.

Artículo 177.- Los testigos serán examinados separada y sucesivamente, sin que unos puedan presenciar las declaraciones de los otros. Cuando no fuere posible terminar el examen de los testigos en un solo día, la diligencia se suspenderá para continuarse al día siguiente hábil.

Artículo 178.- Cuando el testigo deje -de contestar algún punto, o haya incurrido en contradicción, o se haya expresado con ambigüedad, pueden las partes llamar la atención del tribunal, para que, si lo estima conveniente, exija a aquél las respuestas y aclaraciones que procedan.

Artículo 179.- El tribunal tendrá la más amplia facultad para hacer, a los testigos y a las partes, las preguntas que estime conducentes a la investigación de la verdad, así como para cerciorarse de la idoneidad de los mismos testigos, asentándose todo en el acta.

(...)

Artículo 182.- Los testigos están obligados a dar la razón de su dicho, respecto de las respuestas que no la lleven ya en sí, y el tribunal deberá exigirla.

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

Artículo 183.- El testigo firmará al pie de su declaración y al margen de las hojas en que se contenga, después de habersele leído o de que la lea por sí mismo y la ratifique. Si no quiere, no sabe o no puede leer, la declaración será leída por el secretario, y, si no quiere, no sabe o no puede firmar, imprimirá sus huellas digitales, si puede y quiere hacerlo, de todo lo cual se hará relación motivada en autos.

Artículo 184.- La declaración, una vez ratificada, no puede variarse ni en la substancia ni en la redacción.

Artículo 185.- Con respecto a los hechos sobre que haya versado un examen de testigos y con respecto a los directamente contrarios, no puede la misma parte volver a presentar prueba testimonial, en ningún momento del juicio.

Artículo 186.- En el acto del examen de un testigo o dentro de los tres días siguientes, pueden las partes atacar el dicho de aquél, por cualquier circunstancia que, en su concepto, afecte su credibilidad. Para la prueba de las circunstancias alegadas, se concederá un término de diez días, y, cuando sea testimonial, no se podrán presentar más de tres testigos sobre cada circunstancia. El dicho de estos testigos ya no puede impugnarse por medio de prueba, sin perjuicio de las acciones penales que procedan, y su valor se apreciará en la sentencia, según el resultado de la discusión en la audiencia final del juicio.

Artículo 187.- Al valorar la prueba testimonial, el tribunal apreciará las justificaciones relativas a las circunstancias a que se refiere el artículo anterior, ya sea que éstas hayan sido alegadas, o que aparezcan en autos.

En lo tocante a la valoración de la prueba testimonial, el capítulo IX del mismo título dispone lo siguiente:

Capítulo IX. Valuación de la prueba.

Artículo 197.- El tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas; para determinar el valor de las mismas, unas enfrente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria; a no ser que la ley fije las reglas para hacer esta valuación, observando, sin embargo, respecto de cada especie de prueba, lo dispuesto en este capítulo.

Artículo 198.- No tendrán valor alguno legal las pruebas rendidas con infracción de lo dispuesto en los artículos precedentes de este Título.

(..)

Artículo 215.- El valor de la prueba testimonial quedará al prudente arbitrio del tribunal, quien, para apreciarla, tendrá en consideración:

I.- Que los testigos convengan en lo esencial del acto que refieran, aun cuando difieran en los accidentes;

II.- Que declaren haber oído pronunciar las palabras, presenciado el acto o visto el hecho material sobre que depongan;

III.- Que, por su edad, capacidad o instrucción, tengan el criterio necesario para juzgar el acto.

IV.- Que, por su probidad, **por la independencia de su posición** o por sus antecedentes personales, **tengan completa imparcialidad**;

V.- Que por sí mismos conozcan los hechos sobre que declaren, y no por inducciones ni referencias de otras personas;

VI.- Que la declaración sea clara, precisa, sin dudas ni reticencias, sobre la substancia del hecho y sus circunstancias esenciales.

VII.- Que no hayan sido obligados por fuerza o miedo, ni impulsados por engaño, error o soborno, y

VIII.- Que den fundada razón de su dicho.

Artículo 216.- Un solo testigo hace prueba plena cuando ambas partes convengan expresamente en pasar por su dicho, siempre que éste no esté en oposición con otras pruebas que obren en autos. En cualquier otro caso, su valor quedará a la prudente apreciación del tribunal.

Para efectos de esta resolución, es menester profundizar sobre las formalidades que requiere el desahogo de la prueba testimonial, en particular, la prevista en el artículo 176 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que dispone que después de tomarse al testigo la protesta de conducirse con verdad y de advertirlo de las penas en que incurre el que se produce con falsedad, **se hará constar** su nombre, edad, estado, lugar de residencia, ocupación, domicilio, **si es pariente consanguíneo o afín de alguno de los litigantes, y en qué grado; si tiene interés directo en el pleito o en otro semejante,**

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

y si es amigo íntimo o enemigo de alguna de las partes,¹²² pues tal como lo dispone el diverso 198 del mismo ordenamiento legal, no tendrán valor legal alguno las pruebas rendidas con infracción de lo dispuesto en los artículos precedentes de ese Título Cuarto.

En torno a la validez de la prueba testimonial, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dispuesto que la prueba testimonial, **en un primer plano de análisis, sólo es válida si cumple con ciertos requisitos taxativamente delimitados en las normas procesales respectivas, de manera que si uno de ellos no se satisface, lo declarado por el testigo no puede tener valor probatorio.** En un segundo nivel de estudio, superadas tales exigencias normativas, el juez tiene la facultad de ponderar, a su arbitrio, el alcance de lo relatado por el testigo, conforme al caso concreto. Asimismo, afirma que las referidas condiciones normativas están establecidas como garantía mínima para que un testimonio pueda adquirir el carácter indiciario sujeto a la calificación del juzgador.¹²³

¹²² Sólo de manera ilustrativa, es interesante señalar que esta misma formalidad está prevista para el desahogo de la prueba testimonial en el procedimiento administrativo sancionador contenido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en los siguientes términos:

“Artículo 153.- Antes de rendir su testimonio, a los testigos se les tomará la protesta para conducirse con verdad, y serán apercibidos de las penas en que incurren aquellos que declaran con falsedad ante autoridad distinta a la judicial. Se hará constar su nombre, domicilio, nacionalidad, lugar de residencia, ocupación y domicilio, **si es pariente por consanguinidad o afinidad de alguna de las partes, si mantiene con alguna de ellas relaciones de amistad o de negocios, o bien, si tiene alguna enemistad o animadversión hacia cualquiera de las partes.** Al terminar de testificar, los testigos deberán manifestar la razón de su dicho, es decir, el por qué saben y les consta lo que manifestaron en su testificación.”

¹²³ PRUEBA TESTIMONIAL. REQUISITOS PARA SU VALIDEZ Y POSTERIOR VALORACIÓN. La prueba testimonial, en un primer plano de análisis, sólo es válida si cumple con ciertos requisitos (taxativamente delimitados en las normas procesales respectivas), de manera que si uno de ellos no se satisface, lo declarado por el testigo no puede tener valor probatorio en tanto que en un segundo nivel de estudio, superadas tales exigencias normativas, el juez tiene la facultad de ponderar, a su arbitrio, el alcance de lo relatado por el testigo, conforme al caso concreto. De lo anterior se advierte que la calificación no es respecto a la persona que lo emite, sino en cuanto al relato de hechos que proporciona, por lo que el alcance probatorio de su dicho puede dividirse, ya que una persona puede haber advertido por medio de sus sentidos un hecho particular y, a la vez,

La Primera Sala, al resolver la contradicción de tesis 133/2005, estableció que los medios probatorios tienen una importancia esencial dado que su función es formar el convencimiento del juzgador sobre la verdad de los hechos objeto del proceso.

Así, al resolver esa misma Sala el amparo directo 9/2008 el día doce de agosto de dos mil nueve, sostuvo que la prueba testimonial está contemplada dentro de los medios probatorios establecidos en la ley, y ella consiste en una relación de hechos conocidos por quien declara, a través de la cual se ayuda al esclarecimiento de cuestiones relacionadas con el objeto de la controversia. Debido a su naturaleza jurídica, la prueba testimonial no persigue como finalidad allegar al juicio datos técnicos o especializados sobre la cuestión a debate, sino que su objetivo es que las personas que de alguna manera conocieron a través de sus sentidos un hecho que resulta de interés en el juicio, lo expongan ante la autoridad para que ésta valore su dicho al emitir el fallo sobre la controversia suscitada entre las partes. Es preciso establecer que testigo es la persona que se encontraba presente en el momento en que el hecho tuvo lugar, teniendo el carácter de un tercero que informa al juzgador respecto a un acontecimiento percibido sensorialmente por él.

Toda vez que el citado amparo se refería más bien a una cuestión penal, se hizo referencia al artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Penales, el cual establecía que el juzgador para apreciar la declaración de todo testigo debía considerar que por su

haber conocido otro hecho, vinculado con el primero, por medio de otra persona. Así, lo que un testigo ha conocido directamente tiene valor probatorio de indicio y debe ponderarse por la autoridad investigadora o judicial conforme al caso concreto, según su vinculación con otras fuentes de convicción; mientras que lo que no haya conocido directamente, sino a través del relato de terceros, no debe tener valor probatorio alguno. Por tanto, las referidas condiciones normativas están establecidas como garantía mínima para que un testimonio pueda adquirir el carácter indiciario sujeto a la calificación del juzgador. (Novena Época, Registro: 165929, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Noviembre de 2009, Materia(s): Común, Tesis: 1a. CLXXXIX/2009, Página: 414)

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

edad, capacidad e instrucción, tenga el criterio necesario para juzgar el acto; **que sea imparcial**, tomando en consideración su probidad, **independencia de su posición** y antecedentes personales; que el hecho sea susceptible de conocerse a través de los sentidos, habiéndolo hecho por sí mismo y no por referencia de otra persona; que la declaración emitida sea clara y precisa, sin dudas ni reticencias; y que no se encuentre obligado por fuerza o miedo, ni impulsado por engaño, error o soborno. Estos principios, obtenidos de una legislación en materia penal, también son útiles y aplicables para los efectos de la prueba testimonial que se rige por la codificación procesal civil, como se verá en este apartado.

Continúa sosteniendo la Sala que **una vez satisfechos los requisitos antes mencionados**, la prueba testimonial constituirá un indicio. En este contexto se entiende su afirmación en el sentido de que, en un primer plano de análisis, la prueba testimonial debe cumplir ciertos requisitos, taxativamente delimitados en las normas, de modo que si uno de ellos no satisface, el hecho narrado, no tendrá valor probatorio. Y en un segundo nivel de análisis, superadas tales exigencias normativas, el Juez ponderará a su arbitrio el alcance del relato del testigo, conforme al caso concreto.

Este mismo criterio ha sido refrendado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya en materia civil, con respecto a los medios de prueba, los cuales, por estar relacionados con actuaciones judiciales, pertenecen al ámbito del órgano jurisdiccional y, por ende, están sujetos a una reglamentación, **pues la ley prevé las formas y los formalismos que las partes o el propio**

juzgador deben observar para que las fuentes de prueba se incorporen al proceso. Por tanto, al ejercer su arbitrio judicial en la valoración de los medios de prueba, **el juzgador debe atender a la forma en que éstos fueron ofrecidos y desahogados de acuerdo a la reglamentación, formas y formalismos previstos en la ley.**¹²⁴

En este sentido, la Primera Sala sostuvo al fallar por unanimidad de votos el amparo directo 55/2013, que los medios de prueba son las actuaciones judiciales a través de las cuales las fuentes de prueba se incorporan al proceso. De esta manera, el conocimiento de las partes sobre los actos propios que dieron lugar al debate (fuentes de prueba) se incorporan al proceso mediante la confesión (medio de prueba); el conocimiento de los hechos litigiosos que personas ajenas al juicio pueden tener (fuente de prueba) se traen al juicio cuando declaran ante el juzgador con la calidad de testigos (medio de prueba); las características de la cosa o un bien sujeto a controversia (fuente de

¹²⁴ **“FUENTES DE PRUEBA Y MEDIOS DE PRUEBA. SU DISTINCIÓN PARA EFECTOS DE SU VALORACIÓN POR EL JUZGADOR.** La doctrina distingue entre fuentes de prueba y medios de prueba; las primeras, existen antes y con independencia del proceso, los segundos surgen en el proceso y corresponden con lo que ha de valorar el juez para la resolución del juicio. Ciertamente, las fuentes de prueba pertenecen a las partes, sólo ellas saben de su existencia, son anteriores e independientes del proceso porque, por regla general, a éste se llevan afirmaciones o enunciados sobre hechos producidos con anterioridad a los escritos donde se narran (demanda y contestación) y sólo puede hablarse de confesión, testimonios, etcétera, si existe un proceso, de forma que si éste no surge, existirán simplemente personas que tienen conocimiento de determinados hechos, ya sea por ser protagonistas o percatarse de lo ocurrido, pero no existiría razón alguna para atribuirles la calidad de partes, ni para dar a sus conocimientos la calidad de confesión o de testimonios. Por su parte, los medios de prueba son las actuaciones judiciales a través de las cuales las fuentes de prueba se incorporan al proceso, y cuando ello ocurre, dejan de pertenecer a las partes, pues se prueba para el proceso y, en virtud del principio de adquisición procesal, cualquiera de éstas, o incluso el juzgador, puede prevalerse de ellas, como lo establecen los artículos 278 y 279 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Esto es, el conocimiento de las partes sobre los actos que dieron lugar al debate (fuentes de prueba) se incorporan al proceso mediante la confesión (medio de prueba); el conocimiento de los hechos litigiosos que personas ajenas al juicio pueden tener (fuente de prueba) se traen al juicio cuando declaran ante el juzgador con la calidad de testigos (medio de prueba); y las características de la cosa o un bien sujeto a controversia (fuente de prueba) se reciben en el proceso a través de la inspección judicial (medio de prueba). Ahora bien, los medios de prueba, por estar relacionados con actuaciones judiciales, pertenecen al ámbito del órgano jurisdiccional y, por ende, están sujetos a una reglamentación, pues la ley prevé las formas y los formalismos que las partes o el propio juzgador deben observar, para que las fuentes de prueba se incorporen al proceso. Por tanto, al ejercer su arbitrio judicial en la valoración de los medios de prueba, el juzgador debe atender a la forma en que éstos fueron ofrecidos y desahogados de acuerdo a la reglamentación, formas y formalismos previstos en la ley. Época: Décima Época. Registro: 2007985. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I. Materia(s): Civil. Tesis: 1a. CCCXCVII/2014 (10a.). Página: 718.

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

prueba) se reciben en el proceso a través de la inspección judicial (medio de prueba).

Las fuentes de prueba pertenecen a las partes, pues sólo ellas saben de su existencia, la cual es anterior e independiente del proceso, porque, por regla general, a éste se llevan afirmaciones o enunciados sobre hechos producidos con anterioridad a los escritos donde se narran (demanda y contestación) y, por otra parte, sólo tiene sentido hablar de confesión, testimonios, etcétera, si hay proceso. Si éste no surge, existirán simplemente personas que tienen conocimiento de determinados hechos, ya sea por haber sido protagonistas o haberse percatado de lo ocurrido; pero ninguna razón habría para atribuirles la calidad de partes, ni para darles a sus conocimientos la calidad de confesión o de testimonios, según sea el caso.

Por lo tanto, antes de que el juzgador se ocupe de determinar el valor probatorio de los medios probatorios, es menester que aborde un primer paso, que consiste en determinar si las pruebas fueron ofrecidas y desahogadas conforme a las formas y formalismos previstos en la ley, pues de otro modo, no son idóneas para ser incorporadas al procedimiento.

Dentro de este contexto corresponde hacer referencia al formalismo previsto en el artículo 176 del mismo ordenamiento legal, pues si éste no se satisface con respecto a las testimoniales recabadas durante el procedimiento disciplinario, entonces las mismas carecerán de valor probatorio como lo ordena el artículo 198 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

El testimonio es un medio de prueba que consiste en la declaración procesal o procedimental de un tercero ajeno a la controversia, acerca de hechos que a ésta conciernen. En general, todos los que tengan conocimiento de los hechos que las partes deban probar, están obligados a declarar como testigos. Una vez ofrecida la prueba, se procede a la práctica o desahogo del testimonio, el cual inicia con la protesta de decir verdad, la advertencia sobre las penas al falso testigo y la expresión de los datos de identificación del declarante, **así como de sus circunstancias personales en relación con las partes o el conflicto.**¹²⁵

En este sentido, la doctrina es coincidente en un punto: antes de la formulación del interrogatorio respectivo, es menester que el testigo informe al juzgador sus generales, rinda protesta de conducirse con verdad, apercibido de las penas en las que incurren quienes se conducen con falsedad **y es menester que, a continuación, el testigo exprese, en su caso, si es pariente consanguíneo de alguno de los litigantes y en qué grado, si tiene relación de interés directo en el proceso, si es amigo íntimo o enemigo de alguno de los litigantes.** El propósito de esta última exigencia es que el juzgador debe estar en posibilidad de evaluar objetivamente la declaración que presente.¹²⁶

De este modo, se observa que el juez pregunta al testigo, por un lado, cuáles son sus datos de identificación personales, como son nombre completo, domicilio, ocupación e incluso grado de estudios, y en un segundo plano, le invita a declarar si tiene relaciones de parentesco, afinidad, afiliación o dependencia con alguna de las partes

¹²⁵ Ovalle Favela, José, **Derecho Procesal Civil**, Cuarta Edición, Colección Textos Universitarios, México: Editorial Harla, 1991, página 165.

¹²⁶ Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, **Diccionario Jurídico Mexicano**, México: Editorial Porrúa, 1999, página 3087.

o interés en la causa. Así, la doctrina sostiene que la identificación *lato sensu* comprende no sólo la investigación dirigida a comprobar la identidad, sino también la **idoneidad** del testigo.¹²⁷

Esta formalidad o “formalismo” no es gratuito, sino que atiende a la naturaleza y reconocimiento de valor probatorio de la prueba testimonial. La doctrina reconoce un principio que se denomina “principio de la formalidad de la prueba”, en el cual se reconoce que las formalidades o requisitos extrínsecos que exige la ley para el ofrecimiento y desahogo de la misma, tiene como propósito **garantizar del mejor modo posible la probidad y veracidad de los datos que arroja**. Esto explica la exigencia de que para que la misma tenga validez, se requiera que sea llevada al proceso con los requisitos procesales establecidos en la norma procesal aplicable.¹²⁸

En esa misma línea de pensamiento, surge otro principio que la doctrina de la materia ha denominado “principio de la inmaculación de la prueba”, por virtud del cual debe procurarse que los medios allegados al proceso estén libres de vicios intrínsecos y extrínsecos que los hagan ineficaces o nulos. Se trata, en realidad, de comprender en éste, de manera más general y desde otro punto de vista, el principio de formalidad de la prueba, pues como ya se dijo, la falta de idoneidad de una prueba al no reunir un requisito extrínseco trae consigo la ineficacia probatoria, al existir la prohibición legal de probar un hecho con ella. Rige este principio por igual para el proceso civil y para el penal o de otra naturaleza.¹²⁹

¹²⁷ Carnelutti, Francesco, **Insituciones del Proceso Civil**, Volumen II, Buenos Aires, Argentina: Librería El Foro, S.A., página 99.

¹²⁸ Devis Echandía, Hernando, **Teoría General de la Prueba Judicial**, Tomo I, Bogotá, Colombia: Editorial Themis, S.A., 2002, página 117 y 118.

¹²⁹ **Ibid**, páginas 129-130.

Desde épocas anteriores, esta Suprema Corte ha reconocido la necesidad de considerar la independencia de los testigos para garantizar la completa imparcialidad del testimonio. Así, pueden invocarse como ejemplo, las tesis aisladas que llevan por rubros: PRUEBA TESTIMONIAL, ESTIMACION DE LA”,¹³⁰ “PRUEBA TESTIMONIAL, APRECIACION DE LA”,¹³¹ PRUEBA TESTIMONIAL (LEGISLACION DEL ESTADO DE GUANAJUATO),¹³² “COACUSADO,

¹³⁰ “El artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, impone al juez la obligación de preguntar siempre a los testigos, si son amigos íntimos o enemigos de los litigantes, lo cual es necesario que la autoridad conozca, porque encontrándose el testigo colocado en cualquiera de estas dos circunstancias, no puede ser considerado con la independencia de posición y completa imparcialidad que requiere la ley, para que su dicho sea eficaz; circunstancias de las que el juzgador no puede prescindir en la estimación de la prueba, toda vez que el artículo 347 del mencionado código, manda en su fracción III, que el Juez, para estimar la prueba de testigos, debe tener en cuenta que los mismos, por su probidad, por la independencia de su posición y por sus antecedentes personales, tenga completa imparcialidad. (Quinta Época, Registro: 358762, Instancia: Tercera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo XLVII, materia(s): Civil, Página: 115).

¹³¹ “El juzgador tiene la facultad de valorar la prueba testimonial conforme a su prudente arbitrio, según lo establece el artículo 419 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, lo cual significa que al hacerlo debe tomar en cuenta todas las circunstancias que puedan influir en la independencia de criterio de los testigos; esto es, debe examinar si por su probidad e independencia de su posición y por sus antecedentes personales tienen completa imparcialidad; además, debe apreciar que el testigo no sea inhábil en los términos legales; que por su edad, capacidad e instrucción, está dotado del criterio necesario para juzgar el acto; que el hecho de que se trate sea susceptible de ser conocido por los sentidos y que el testigo lo conozca por sí mismo y no por referencia o inducciones, de otra persona; que el testigo en su declaración sea claro, preciso y se exprese sin dudas o reticencias; que la sustancia del hecho declarado establezca la firme convicción de ser verdad que efectivamente ocurrió, así como la cualidad en cuanto a las circunstancias que enmarcaron el hecho materia del testimonio, aun cuando no es indispensable la absoluta precisión de los detalles accesorios, por la imposibilidad psíquica - retentiva y reproductiva- de la persona, de percibir y recordar totalmente todas las circunstancias de un suceso. (Séptima Época, Registro: 241110, Instancia: Tercera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 103-108, Cuarta Parte, Materia(s): Común, Página: 166)

¹³² Si bien es cierto que la prueba testimonial es una de las más frecuentes y delicadas en su apreciación, pues la mendacidad de los testigos constituye un serio peligro y por ello dicha probanza generalmente produce una profunda desconfianza en el juzgador, sin embargo, tales circunstancias obligan a un análisis acucioso de la misma, para estar en condiciones de poder concluir sobre su eficacia o ineficacia, con base en lo que previene el artículo 277 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato, que señala las reglas fundamentales que deban observarse para aquilatar debidamente las declaraciones de mérito, precisando, entre otras, que el hecho de que se trate sea susceptible de conocerse por medio de los sentidos y que el testigo lo conozca por sí mismo y no por inducciones ni referencias de otro, y que la declaración sea clara y precisa, sin dudas ni reticencias, ya sobre la sustancia del hecho, ya sobre sus circunstancias esenciales, además de que el testigo por su edad, capacidad e instrucción tenga el criterio necesario para juzgar del acto y que por su probidad, la independencia de su posición y antecedentes personales tenga completa imparcialidad, dándose, en teoría, la exigencia de que el testimonio, para que pueda valorarse debidamente, debe emanar de persona digna de fe, que sea persistente, uniforme y, principalmente, que concuerde con las demás constancias del proceso. (Séptima Época, Registro: 235341, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 84, Segunda Parte, Materia(s): Penal, Página: 58)

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

VALOR DE SU DICHO”,¹³³ PRUEBA TESTIMONIAL, VALORACION DE LA,¹³⁴ y “PRUEBA TESTIMONIAL, APRECIACION DE LA (LEGISLACION DEL ESTADO DE ZACATECAS)”.¹³⁵

¹³³ “Tratándose de la prueba testimonial, se requieren como requisitos esenciales, para que el dicho de un testigo se tome en consideración, según el artículo 255 del Código de Procedimientos Penales que, por su probidad, **independencia de posición** y antecedentes personales, tenga completa imparcialidad y, por ello, la Primera Sala de la Suprema Corte ha establecido en jurisprudencia constante, que no debe desecharse la confesión de un coacusado que no se invalida con su imparcialidad y por lo mismo es hábil su testimonio y tiene el carácter de una presunción; pero si el coacusado únicamente aceptó uno de los delitos imputados y no su coautoría en el otro, arrojando la carga de la responsabilidad sobre el quejoso y descargando la suya, tratando de eludirla, su declaración no puede tenerse como generadora de un indicio, en toda su amplitud. (Quinta Época, Registro: 300722, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo CI, Materia(s): Penal, Página: 1417)

¹³⁴ De acuerdo con el artículo 1303 del Código de Comercio, para valorar las declaraciones de los testigos, el Juez debe tomar en consideración las circunstancias siguientes: que el testigo no sea inhábil, por cualquiera de las causas señaladas en el artículo 1262; que por su probidad, **por la independencia de su posición** y por sus antecedentes personales, **tenga completa imparcialidad**; que el hecho de que se trata sea susceptible de ser conocido por medio de los sentidos y que el testigo lo conozca por sí mismo y no por inducciones ni por referencias de otras personas; que la declaración sea clara y precisa, sin dudas ni reticencias, ya sobre la sustancia del hecho ya sobre las circunstancias esenciales. El artículo 1302 del propio ordenamiento, dispone, a su vez, que el valor de la prueba testimonial queda al arbitrio del Juez, quien nunca puede considerar probados los hechos sobre los cuales ha versado, cuando no haya, por lo menos, dos testigos en quienes concurren las siguientes condiciones: que sean mayores de toda excepción; que sean uniformes, esto es, que convengan no sólo en la sustancia, sino en los accidentes del acto que refieren, o aun cuando no convenga en esto, si no modifican la esencia del hecho; que declaren de ciencia cierta, esto es, que hayan oído pronunciar las palabras, presenciando el acto, o visto el hecho material sobre que deponen que den fundada razón de su dicho; y por último, el artículo 1262 que establece que no pueden ser testigos, entre otros, los que tengan interés directo o indirecto en el pleito, y si bien es cierto que el Juez es soberano para la apreciación de las pruebas, en todo lo que está sometido a su prudente arbitrio, también lo es que dicha apreciación, dentro de las disposiciones de la ley mercantil, no es absoluta, ya que la ley señala reglas y normas para su valoración, según se infiere de las disposiciones legales antes transcritas, de las que no debe apartarse el juzgador, y cuyas reglas tienen como fin evitar errores, y conseguir, en lo posible, que el criterio judicial no se extravíe y llegue hasta el abuso. (Quinta Época, Registro: 357124, Instancia: Tercera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo LV, Materia(s): Civil, Página: 2771)

¹³⁵ “De conformidad con la fracción III del artículo 316 del Código de Procedimientos Penales, vigente en el Estado de Zacatecas, para apreciar la declaración de un testigo, el Juez o tribunal tendrá en consideración, entre otras las circunstancias siguientes: que por su probidad, por la independencia de su posición, y por sus antecedentes personales, el testigo tenga completa imparcialidad; por lo que, si para dar por comprobada la existencia del delito de ultrajes a un funcionario público, y la posible culpabilidad del indiciado, el Juez se apoya en el testimonio de un individuo que desempeña un cargo público y depone sobre hechos que afectan directa y personalmente al jefe supremo del Estado en que aquél presta sus servicios, es evidente que esta circunstancia lo inhabilita, ya que no puede estimarse que el testigo tenga completa imparcialidad, por carecer de la independencia de posición que expresamente exige la ley, para que sus declaraciones tengan valor probatorio.” (Quinta Época, Registro: 313448, Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXXVIII, Materia(s): Penal, Página: 2894).

De acuerdo con la doctrina, no es factible aseverar que todo testimonio es una perfecta expresión de la realidad o de la verdadera manera en la que ocurrió un hecho, pues ello depende de la percepción de la persona y de su capacidad de expresarse con fidelidad. Por lo tanto, para garantizar de mejor manera la imparcialidad y, por ende, la idoneidad del material probatorio, es menester hacerse llegar de mecanismos que procuren una mayor probabilidad de la buena fe de quien declara judicialmente, y para ello es menester determinar no solamente si el testigo es capaz, sino hacerle saber la responsabilidad que implica, prevalerse del temor a la sanción de quien declara con falsedad y descartar cualquier circunstancia que haga sospechosa la declaración, como es el parentesco, amistad íntima o enemistad con alguna de las partes o interés económico.¹³⁶ Sólo cuando se cumple con los formalismos legales es cuando resulta lógico presumir la sinceridad del testigo.¹³⁷

Dicho en otras palabras, no sólo una regla legal, sino una máxima de la experiencia es la que permite confiar en la veracidad de las declaraciones formuladas en el proceso por personas que carecen de interés respecto a las consecuencias jurídicas de los hechos narrados.

Finalmente, debe formularse una reflexión sobre la necesidad práctica e importancia de la prueba testimonial para comprender de

¹³⁶ Al respecto, resulta ilustrativo el contenido de la siguiente tesis: **"TESTIGOS EN EL PROCESO.** Unos testimonios, aunque fueran concordantes entre sí y complementarios unos de otros, no podrían constituir una prueba plena, si han tenido todos los testigos dificultades de carácter económico con el reo, hasta haberlo llegado a acusar uno de ellos, por el delito de fraude, y debe presumirse con todo fundamento, que no pudieron declarar en forma imparcial, ya que es humano que una persona que por algún motivo esté resentida con otra, produzca una declaración en contra suya, no reuniendo, por consiguiente, tales testimonios, los requisitos señalados por el artículo 256 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, ni la circunstancia a que se refiere la fracción III del artículo 255 del mismo ordenamiento, que consiste en que el testigo por su probidad, independencia de su posición y antecedentes personales, tenga completa imparcialidad. (Quinta Época, Registro: 806690, Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXXVIII, Materia(s): Penal, Página: 1602.

¹³⁷ Lo anterior no implica, como ya se dijo, que el testimonio corresponda necesariamente a la realidad, ni que deba otorgársele siempre pleno valor probatorio. Devis Echandía, Hernando, **Op. Cit.**, Tomo II, página 78.

mejor manera la importancia del formulismo al que se refiere el artículo 176 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Es menester recurrir al testimonio porque algunas veces no se dispone de medios diferentes para conocer la verdad o resulta imposible conocerla de otro modo, porque no es posible verificarlos a través de una inspección y no son susceptibles de ser documentados, entre otras circunstancias. Esto explica por qué los legisladores se han ocupado de revestir al testimonio de cierta solemnidad y sancionar la falsedad con penas severas,¹³⁸ pues al no contarse con otros elementos objetivos que revelen la verdad histórica, entonces las declaraciones de terceros se elevan al carácter de indicio que puede conducir a la aplicación de una sanción en el sentido más amplio de la palabra.

2.- Inspección.

La inspección es el examen sensorial directo realizado por el juzgador en personas u objetos relacionados con la controversia, es la percepción inmediata o cercioramiento de los hechos objeto de prueba.¹³⁹

Otra definición es que consiste en una diligencia procesal practicada por un funcionario judicial, con objeto de obtener argumentos de prueba para la formación de su convicción, mediante el examen y la observación con sus propios sentidos de hechos ocurridos durante la diligencia o antes, pero que subsisten o de rastros o huellas de hechos pasados.¹⁴⁰

¹³⁸ **Ibid**, página 80.

¹³⁹ Ovalle Fabela, **Op. Cit.**, páginas 162 y 163.

¹⁴⁰ Devis Echendía, **Op. Cit.**, Tomo II, página 403.

Ese contacto directo y personal que lleva a cabo el juez con el hecho u objeto que con aquella se pretende verificar, constituye el vehículo más seguro y sencillo para que el funcionario adquiera la certeza o evidencia indispensable para decidir si tal hecho existe o no y cuáles son sus características o modalidades que pueden influir en la solución del litigio, con la salvedad de que si la verificación de tal hecho u objeto exige conocimientos técnicos, científicos o artísticos que escapan de la cultura común de un juez, éste debe asesorarse de peritos en la materia. En estos casos, existe un doble medio de prueba que es concurrente, compuesto por el reconocimiento y la peritación, con objetos diferentes, pues el primero se refiere a los hechos susceptibles de ser percibidos directa y personalmente por los sentidos del juez y no requiere de conocimientos especiales, en cambio, el segundo se refiere a hechos técnicos, científicos o artísticos que el juez no verifica, ni tampoco las causas o efectos de los mismos.

La doctrina señala que existen diferencias substanciales entre ambos medios de prueba, porque la primera es directa, crítica y lógica, pues el juez llega al conocimiento de la verdad a través de los sentidos, la segunda, en cambio, es indirecta en cuanto a que el juez deberá analizar el dictamen de la peritación; lo anterior con independencia del valor probatorio que podrá tener cada una.¹⁴¹

La doctrina advierte esas diferencias e invita a no confundir ambos medios de prueba, pues aunque pudieran coincidir sobre el mismo objeto, siguen siendo distintos.

La regulación de la inspección judicial está prevista en el capítulo V del Título Cuarto del Código Federal de Procedimientos Civiles:

¹⁴¹ Ibid., páginas 419 y 469.

PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 6/2015

ARTICULO 161.- La inspección judicial puede practicarse, a petición de parte o por disposición del tribunal, con oportuna citación, cuando pueda servir para aclarar o fijar hechos relativos a la contienda **que no requieran conocimientos técnicos especiales**.

ARTICULO 162.- Las partes, sus representantes y abogados podrán concurrir a la inspección, y hacer las observaciones que estimen oportunas.

ARTICULO 163.- De la diligencia se levantará acta circunstanciada, que firmarán los que a ella concurran.

ARTICULO 164.- A juicio del tribunal o a petición de parte, se levantarán planos o se tomarán fotografías del lugar u objetos inspeccionados.

De ahí que la inspección sólo será pertinente cuando sea el medio idóneo para probar los hechos susceptibles de percepción directa por el juez, en la inteligencia de que puede ocurrir que la ley exija un medio distinto, como la peritación, ello en vista del carácter técnico, científico o artístico del hecho.¹⁴²

3.- Confesión.

La prueba confesional es la declaración vinculativa de parte, la cual contiene la admisión de que determinados hechos propios son ciertos. Se dice que es vinculativa porque generalmente contiene un reconocimiento de hechos de consecuencias jurídicas desfavorables para el confesante. Es, además, una declaración de una de las partes del juicio, lo cual la distingue del testimonio.¹⁴³

La confesión puede ser expresa o tácita (ficta). La primera es la que se formula con palabras, generalmente respondiendo las preguntas o posiciones que formula la contraparte o el juez, la

¹⁴² **Ibid.**, página 428.

¹⁴³ Ovalle Fabela, **Op. Cit.**, página 148.

segunda es la que presume la ley cuando el que haya sido citado a una diligencia no comparezca sin justa causa, entre otros casos.

El Título Cuarto del Código Federal de Procedimientos Civiles regula la prueba confesional, en lo que interesa, del siguiente modo:

CAPITULO II

Confesión

ARTICULO 95.- La confesión puede ser expresa o tácita: expresa, la que se hace clara y distintamente, ya al formular o contestar la demanda, ya absolviendo posiciones, **o en cualquier otro acto del proceso**; tácita, la que se presume en los casos señalados por la ley.

ARTICULO 96.- La confesión sólo produce efecto en lo que perjudica al que la hace; **pero si la confesión es la única prueba contra el absolvente, debe tomarse íntegramente, tanto en lo que lo favorezca como en lo que lo perjudique.**

ARTICULO 123.- **Contra la confesión expresa de hechos propios no se admitirá, a la parte que la hubiere hecho, prueba de ninguna clase**; a no ser que se trate de demostrar hechos ignorados por ella al producir la confesión, debidamente acreditados, o de hechos posteriores, acreditados en igual forma.

ARTICULO 124.- La parte legalmente citada a absolver posiciones será tenida por confesa en las preguntas sobre hechos propios que se le formulen:

I.- Cuando sin justa causa no comparezca;

II.- Cuando insista en negarse a declarar;

(F. DE E., D.O.F. 13 DE MARZO DE 1943)

III.- Cuando, al declarar, insista en no responder afirmativa o negativamente, o en manifestar que ignora los hechos, y

IV.- Cuando obre en los términos previstos en las dos fracciones que anteceden, respecto a las preguntas que le formule el tribunal, conforme al artículo 113.

ARTICULO 125.- En el primer caso del artículo anterior, el tribunal abrirá el pliego de posiciones y las calificará antes de hacer la declaración.

En los demás casos, el tribunal, al terminarse la diligencia, hará la declaración de tener por confesa a la parte.

ARTICULO 126.- El auto que declare confesa a una parte, y el que niegue esta declaración, son apelables.

PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 6/2015

Se tendrá por confeso al articulante, y sólo en lo que le perjudique, respecto a los hechos propios que consten en las posiciones que formule, y contra ellos no se le admitirá prueba de ninguna clase.

ARTICULO 128.- En el caso del artículo anterior y en el de la fracción I del 124, la declaración de confeso se hará a instancia de parte, en todo tiempo, hasta antes de la audiencia final del juicio.

En cualquier estado del juicio, en que se pruebe la justa causa, quedará insubsistente la declaración de confeso, sin perjuicio de que puedan articularse nuevamente posiciones.

ARTICULO 200.- **Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba.**

4.- Fotografías

Para efectos de la teoría de la prueba, las fotografías son documentos representativos, no declarativos, que sirven para probar el estado de hecho que existía en el momento de ser tomadas, de acuerdo con la libre crítica que de ellas haga el juzgador.¹⁴⁴

Al respecto, el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles dispone lo siguiente:

ARTICULO 217.- El valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas y de otras cualesquiera aportadas por los descubrimientos de la ciencia, quedará al prudente arbitrio judicial.

Las fotografías de personas, lugares, edificios, construcciones, papeles, documentos y objetos de cualquier especie (sic) deberán contener la certificación correspondiente que acredite el lugar, tiempo y circunstancias en que fueron tomadas, así como que corresponden a lo representado en ellas, para que constituyan prueba plena. En cualquier otro caso, su valor probatorio queda al prudente arbitrio judicial.

¹⁴⁴ Devis Echendía, Hernando, Op. Cit., página 565.

QUINTO.- Valoración del material probatorio para acreditar la infracción y responsabilidad de los servidores públicos involucrados.

Por cuestión de método, se procederá al análisis de las infracciones denunciadas del siguiente modo:

- (i) En primer lugar, se abordará el análisis de pertinencia del material probatorio que existe en autos para acreditar la infracción consistente en el indebido ejercicio del empleo, cargo o comisión, en virtud de la utilización de recursos informáticos para fines diversos a los que estaban afectos, imputada a *****, *****, *****, *****, y *****, en términos del artículo 8, fracción III, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
- (ii) En segundo lugar, se abordará la conducta consistente en el indebido ejercicio del empleo, cargo o comisión, en virtud de la introducción y consumo de bebidas alcohólicas al interior de la Dirección General del Canal Judicial, atribuida a *****, *****, *****, *****, y *****, prevista en el el artículo 8, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
- (iii) A continuación, se abordará la infracción relacionada con el indebido ejercicio del empleo, cargo o comisión, al realizar actividades ajenas al cumplimiento de la función, tales como jugar “play station” y dominó, imputada a *****, *****, y *****, la cual está prevista en el artículo 8, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
- (iv) Acoso laboral, que se materializó a través de maltrato físico, esto es, de la práctica del “manto sagrado”,

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

imputable a *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****,
*****, *****, y *****, la cual está prevista en el artículo 8,
fracción VI, de la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos.

- (v) Juegos de naturaleza sexual entre los servidores públicos y
formulación de expresiones de naturaleza sexual
inapropiada, prevista en el artículo 8, fracción VI, de la Ley
Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos, imputada a *****, *****, *****, *****,
*****, *****, y *****.
- (vi) Omitir realizar la supervisión de los servidores públicos que
se encontraban bajo su dirección, con el fin de que
cumplieran con sus obligaciones legales, atribuida a *****,
*****, y *****.

En el considerando final se individualizarán, en su caso, las
sanciones que correspondan.

**(i) Utilización de recursos informáticos para fines
diversos a los que estaban afectos.**

De conformidad con el acuerdo de inicio del procedimiento
disciplinario, de fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el
cuaderno de investigación existen elementos suficientes para acreditar
la probable responsabilidad de *****, *****, *****, *****, y *****, en su
carácter de servidores públicos de la Dirección General del Canal
Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la comisión
de las conductas relativas a una indebida utilización de los recursos de

trabajo, en particular, la utilización de recursos informáticos asignados en razón de su función por haberlos empleado para fines diversos a los que estaban afectos, ya que en el equipo de cómputo que como servidores públicos tenían conferido para su uso y bajo su resguardo, o bien, a través de éste, habían almacenado imágenes, videos, o consultado páginas con contenido pornográfico o sexo explícito.

Antes de analizar los medios de prueba con los cuales se busca enervar la presunción de inocencia que les asiste a los presuntamente responsables, es menester destacar que uno de ellos, *****, no compareció a la audiencia de imputación de responsabilidades que tuvo lugar el día primero de junio de dos mil dieciseis,¹⁴⁵ pese a que fue oportunamente notificado de su celebración el día diecinueve de mayo del mismo año.¹⁴⁶ En dicha audiencia tenía derecho a ofrecer pruebas y alegar lo que a su derecho conviniera, por sí o por un defensor, en términos de los artículos 34 y 36 del Acuerdo General 9/2005, del Pleno de este Máximo Tribunal.¹⁴⁷ Este ordenamiento especial no le atribuye consecuencia jurídica alguna a la falta de comparecencia del servidor público, ni tampoco el artículo 134, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

De hecho, mediante instrumento normativo de veintiuno de abril del dos mil catorce, se derogó el segundo párrafo del artículo 36 del Acuerdo General 9/2005, el cual sí preveía la confesión ficta ante la

¹⁴⁵ Foja 3596 del expediente en el que se actúa.

¹⁴⁶ Idem, foja 3427

¹⁴⁷ “**Artículo 34.** En el auto en el que se admita la queja o denuncia, o en el que de oficio se inicie el procedimiento, en los casos previstos en el artículo 24 de este acuerdo, se citará al probable responsable a una audiencia, haciéndole saber la responsabilidad o responsabilidades que se le imputan, el lugar, día y hora en que tendrá verificativo dicha audiencia, y su derecho a ofrecer pruebas y a alegar lo que le convenga, por sí o por un defensor.

Entre la fecha de citación y la audiencia deberá mediar un plazo no menor de cinco ni mayor de quince días hábiles.”

“**Artículo 36.** En la referida audiencia el probable responsable rendirá su declaración en relación con los hechos que se le imputan y que puedan ser causa de responsabilidad en los términos de este acuerdo y demás disposiciones aplicables; asimismo, se recibirán las pruebas ofrecidas.

(...)”

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

inasistencia del servidor público. Dicho numeral estaba redactado del siguiente modo:

“Artículo 36.

Si el probable responsable deja de comparecer sin causa justificada a la audiencia se tendrán por ciertos los actos u omisiones que se le imputan.
(...)”

Ante al supresión expresa de dicha presunción por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, órgano constitucional con competencia para emitir la normativa relativa a los procedimientos disciplinarios de sus servidores públicos, no es factible aplicar de manera supletoria el artículo 21, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, actualmente abrogada, el cual disponía en su tercer párrafo que hecha la notificación, si el servidor público dejaba de comparecer sin causa justificada, se tendrían por ciertos los actos u omisiones imputados.¹⁴⁸

¹⁴⁸ En adición, la dinámica de las audiencias de defensas a las que se refieren tanto el Acuerdo General 9/2005 como la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es diversa a la que regía en la ley de responsabilidades abrogada. En el sistema que impera en este Alto Tribunal, el servidor público tiene el deber de ofrecer pruebas y alegatos en la misma audiencia, por lo que si se aplicara de manera supletoria la confesión ficta a la que alude el artículo 21, fracción I, de la ley abrogada, pesaría sobre el servidor público una presunción de atribuidad de la infracción contra la cual ya no cabría prueba en contrario y, por lo tanto, la Contraloría de este Alto Tribunal quedaría relevada de demostrar la infracción y la correlativa responsabilidad. La construcción de un sistema de esta naturaleza transgrediría el derecho de presunción de inocencia, en su variante de regla probatoria y el de no autoincriminación, que si bien es propio de la materia penal, encuentra cabida dentro del procedimiento disciplinario, el cual, como ya se dilucidó en apartados anteriores, es una manifestación más del *ius puniendi* del Estado, que acarrea al gobernado la posibilidad de ser sancionado.

Por otro lado, la supletoriedad a la que se refiere el artículo 4º del propio Acuerdo General 9/2005, debe llevarse a cabo en lo que no se oponga a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. De este modo, no es factible aplicar una figura jurídica que no está prevista en el Acuerdo General 9/2005 ni en la citada ley orgánica, que no hace sentido dentro de la lógica del sistema de responsabilidades de esta Suprema Corte porque traería consigo una transgresión al principio de presunción de inocencia, al relevar a la Contraloría de la respectiva de toda carga probatoria, y el de no autoincriminación.

Con base en las consideraciones anteriores, es que este Tribunal Pleno procede a analizar la pertinencia y valor probatorio de los medios recabados en la investigación que fueron invocados en el auto de nueve de mayo de dos mil dieciséis, para enervar la presunción de inocencia que les asiste a los servidores públicos imputados, incluyendo a *****. Los medios de prueba son los siguientes:

- Copia certificada de la declaración rendida el ocho de febrero de dos mil trece por ***** , dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa ***** (Fojas 1807 a 1814 del Tomo I).
- Copia certificada de los expedientes personales de ***** , ***** , ***** , ***** y ***** .
- Copia certificada de los resguardos de los equipos de cómputo con número de inventario ***** , entre otros, asignados a ***** , ***** , ***** , ***** y ***** , respectivamente.¹⁴⁹
- Acta de inspección de seis de marzo de dos mil quince en la Dirección General del Canal Judicial, en la que se realizó el respaldo de la información contenida en los equipos de cómputo que tuvieran bajo su resguardo ***** , ***** , ***** , ***** y ***** , respectivamente.
- Actas de catorce, quince, dieciséis, diecisiete y veinte de abril de dos mil quince en las que se hizo constar el inicio de la verificación del análisis forense realizado a los respaldos de los discos duros relativos a los equipos ya referidos.
- Actas de las diligencias iniciadas el veinticinco de junio y concluidas el doce de agosto de dos mil quince, en las que

¹⁴⁹ Fojas 771 a la 776 del cuaderno en el que se actúa.

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

bajo las herramientas tecnológicas operantes, se verificó la existencia o no de archivos, páginas, imágenes o videos de contenido sexual o pornográfico en el respaldo del equipo de cómputo de *****, donde se encontró un total de cuatro mil trescientas treinta y ocho imágenes de contenido pornográfico o sexo explícito.

- Acta de veintiocho de octubre de dos mil quince relativa al análisis de archivos tipo video localizados en el equipo de *****, donde se obtuvieron 81 videos de contenido sexual.
- Impresión a color de cada uno de los cuatro mil trescientos treinta y ocho archivos tipo imagen localizados en el equipo de computo de *****.
- Actas de las diligencias iniciadas el once de noviembre de dos mil quince y concluidas el siete de enero de dos mil dieciséis, en las que se verificó la existencia de archivos con contenidos sexual en el equipo de *****, ***** y *****.
- Reportes de resultados en relación con los análisis forenses de historial de internet, archivos de imagen, power point, video y correo electrónico de los equipos de cómputo de ***** (setenta y nueve imágenes con contenido pornográfico, dos correos de contenido pornográfico, dos páginas de inicio de internet de contenido sexual y registro de acceso a cinco páginas web de contenido sexual), ***** (cincuenta y un diapositivas de contenido pornográfico o sexual), ***** (un video de contenido pornográfico), ***** (cuatro mil trescientos treinta y ocho imágenes de contenido pornográfico, ochenta y un videos de contenido pornográfico, ocho páginas de inicio de contenido

pornográfico y consulta a noventa y un páginas de contenido pornográfico) y ***** (cuarenta y cuatro imágenes de contenido pornográfico, diecinueve videos de carácter sexual, once páginas de inicio de carácter pornográfico y acceso a cuatro páginas web de contenido pornográfico).

Se comenzará por analizar la pertinencia de los medios de prueba consistentes en la inspección que se llevó a cabo el seis de marzo de dos mil quince, las actas de las diligencias en las que se verificó la existencia de archivos, imágenes, acceso a páginas y videos de contenido sexual o pornográfico, así como el análisis forense del historial de internet, archivos de imagen, power point, video y correo electrónico de los equipos de cómputo bajo uso o resguardo de los servidores públicos presuntamente responsables.

Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que los citados medios de prueba no reúnen los requisitos legales necesarios para que se les confiera valor probatorio alguno, por las razones que se exponen a continuación.

Mediante auto de cinco de marzo de dos mil quince, el Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la práctica de una inspección, con los siguientes propósitos:

1.- Revisar oficinas y mobiliario a efecto de identificar imágenes u objetos de contenido sexual o de sexo explícito.

2.- Localizar bebidas alcohólicas en el lugar de trabajo de los mencionados servidores públicos.

3.- Examinar la información almacenada en el equipo de cómputo que tienen bajo resguardo o que utilizan para sus actividades, así como las páginas de internet a las que tienen acceso con dichos equipos y, en su caso, las comunicaciones

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

que intercambian mediante la cuenta de correo institucional que tengan o tenían asignada.

Esta ordenanza se notificó al entonces Director General del Canal Judicial, por lo que el día seis de marzo de dos mil quince se procedió a la inspección de las oficinas y al respaldo de la información que obraba en las computadoras de *****, *****, *****, *****, y de *****, quien en la respectiva diligencia manifestó que la oficina en que estaba ocupando era en la que anteriormente laboraba *****.

A partir de ese momento, comenzó una labor técnica y científica especializada en materia de informática. Como parte del procedimiento que se siguió, se advierte lo siguiente:

1.- En la diligencia de inspección se llevó a cabo la copia de la información que obraba en los discos duros de las computadoras de *****, *****, *****, y *****, pero en cuanto el equipo de cómputo en uso por *****, el cual en su momento estuvo bajo el resguardo de *****, quedó bajo el resguardo de la Contraloría porque no fue posible llevar a cabo el respaldo en la oficina respectiva. Esta diligencia fue encabezada por la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial, auxiliada por personal de la Dirección General de Tecnologías de la Información y se obtuvo la cadena de identificación correspondiente.

2.- De este modo, el doce de marzo y seis de abril de dos mil quince, la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación requirió al Director General de Tecnologías de la Información que remitiera copia certificada de diversos resguardos de equipos de

cómputo, así como para que designara a personal adscrito a esa área a fin de analizar los archivos electrónicos contenidos en un equipo de cómputo con número de inventario SC-***** y en dos discos duros con número de inventario “*****” y “*****”, y se realizaran las impresiones correspondientes, con lo cual se debería levantar el acta respectiva.

3.- Este requerimiento se desahogó el catorce de abril de dos mil quince, ya que en las oficinas de la Contraloría, se reunió personal adscrito a la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial y de la Dirección General de Tecnologías de la Información, a efecto de realizar el **análisis forense de los archivos contenidos en el equipo de computo** con número de inventario “SC-*****”, así como de los respaldos de los discos duros correspondientes a los siguientes equipos de cómputo:

Número de inventario del equipo de cómputo.	Servidor público en uso y/o resguardo.	Disco duro en el que se resguarda.
***	*****	“***”
***	*****	“***”
***	*****	
***	*****	
***	*****	
***	*****	
***	*****	
***	*****	

4.- El proceso de resguardo de la información transcurrió del catorce al veinte de abril de dos mil quince y ésta se llevó a cabo en las oficinas de la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en presencia de personal adscrito a la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial, así como de la Dirección General de Tecnologías de la Información.

5.- A partir del veinticinco de junio de dos mil quince, comenzó el análisis integral del respaldo de la información obtenida en la diligencia de inspección, sin embargo, como se aprecia en el acta de esta fecha,

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

la diligencia de localización de información con contenido pornográfico o sexual sólo fue instruida por personal de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, de la información que brinda el auto se infiere que el análisis integral del respaldo de la información se llevó a cabo en equipo de cómputo de esa misma Dirección General y por personal que no tenía conocimientos especializados en informática, pues se hizo la precisión de que los respaldos fueron almacenados en el disco duro con número de inventario “*****”¹⁵⁰, en la carpeta intitulada “Evidencia Casos”, “...**con la finalidad de que los archivos mencionados fueran de fácil acceso para el personal autorizado, ya que si la revisión se llevaba a cabo de manera directa, sólo se podían abrir o consultar mediante el software de análisis forense, cuyo manejo requiere de conocimientos especializados en informática.**”

La labor de búsqueda e impresión de los archivos por parte del personal de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial concluyó el doce de agosto de dos mil quince sólo por lo que respecta a *****,

6.- En el auto de diecisiete de agosto de dos mil quince, la Contraloría hizo constar las vicisitudes a las que se enfrentó el personal adscrito a la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial, ya que no les fue posible identificar la ruta de acceso, es decir, **su localización exacta en el**

¹⁵⁰ Disco duro que contenía el respaldos: *** correspondiente a *****, *** correspondiente a *****, *** correspondiente a *****, *** correspondiente a *****, *** correspondiente a *****, *** correspondiente a *****, y *** correspondiente a *****.

equipo de cómputo respectivo, ya que, para llevar a cabo ese análisis fueron almacenados en el disco duro externo con número de inventario ****, por lo que la ruta de acceso que pudo visualizar el personal autorizado correspondía a ese medio de almacenamiento, **no al del equipo de cómputo de origen**. Fue en este punto donde fue necesario solicitar el apoyo técnico de personal de la Dirección General de Tecnologías de la Información.

7.- Conforme al acta de nueve de octubre de dos mil quince, se hizo constar que con la asistencia del personal adscrito a la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial, así como de la Dirección General de Tecnologías de la Información, la información contenida en el disco duro con número de inventario “****” fue almacenada en el disco duro con número de inventario “****” y se menciona cuál fue el programa de cómputo que se utilizó para ese efecto, el cual, por cierto, presentó un error, por lo que se procedió a utilizar la herramienta del explorador de Windows para iniciar de nueva cuenta el proceso de copiado. Asimismo, se dejó constancia de la cadena de custodia ***** correspondiente, por lo que se dejaron los equipos funcionando para no suspenderlo.

8.- En el acta levantada al día catorce de octubre de dos mil quince¹⁵¹, el Ingeniero ***** comunicó que la cadena de custodia de los procesos de verificación de copiado de la carpeta “Evidencia Casos” se realizaría “caso por caso”, esto es, que el proceso de verificación se llevaría a cabo analizando cada una de las carpetas que contiene el disco duro con número de inventario *****, a efecto de comprobar que el copiado de los archivos no sufrió alteración alguna. A efecto de lo anterior, se utilizó la herramienta denominada “Quick ***** v2.6.3”, derivada del algoritmo SHA-1. La verificación de los referidos archivos

¹⁵¹ Fojas 1942 a 1944 del Tomo II.

PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 6/2015

concluyó de manera satisfactoria hasta el quince de octubre de dos mil quince.

9.- El veintidós de octubre de dos mil quince,¹⁵² el personal adscrito a la **Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial** (esto es, sin la participación de la Dirección General de Tecnologías de la Información) hizo constar que continuaba con el análisis de los archivos localizados en los respaldos de los equipos de cómputo asignados o en uso de ***** , ***** , ***** , ***** , ***** , ***** y ***** .

Se especificó que el análisis se realizaría en el equipo de cómputo con número de inventario ****, bajo resguardo del licenciado *****, dictaminador I, adscrito a la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial, es decir, no era equipo de la Dirección General de Tecnologías de la Información, y que se utilizó la herramienta denominada “Index Dat Spy”, instalada por el personal de la Dirección General de Tecnologías de la Información, para analizar el historial de internet de los equipos de cómputo.

Siendo las diez horas con cuarenta minutos, inició el análisis del historial de correos electrónicos del respaldo de los archivos contenidos en el equipo de cómputo *** asignado o en uso de *****. A las las once horas con veinticinco minutos se realizó la apertura de cada archivo “index”, se advirtió que existían registros de diversas páginas de internet. Se precisó que al intentar abrir cada una de esas páginas no era posible visualizarlas con la herramienta en uso, ya que

¹⁵² Fojas 2129 a 2133 del Tomo II

en ocasiones al intentar abrir diversos archivos, la herramienta se cerraba automáticamente, o bien, arroja un mensaje con la siguiente leyenda: Unexpected file format". Por lo anterior, ante la imposibilidad de abrir las páginas del historial de internet contenido en la carpeta "Evidencia Casos", se concluyó la búsqueda y se cerró el acta.

Asimismo se estableció que no fue posible abrir las páginas de internet del historial de internet contenido en la carpeta analizada, por lo que se concluyó la búsqueda y se cerró el acta.

10.- Ante esta eventualidad, mediante acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil quince¹⁵³, el Contralor solicitó el apoyo técnico de la Dirección General de Tecnologías de la información para conocer el historial de consulta de internet del equipo de cómputo con número de inventario ***** y contar con un listado de las páginas consultadas de todos los equipos de cómputo correspondientes a los servidores públicos ***** , ***** , ***** , ***** , ***** , ***** y ***** .

11.- Como se hace constar en el acta de de veintiocho de octubre de dos mil quince, el personal de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial continuó con la búsqueda y localización de evidencias tecnológicas, haciendo constar que no fue posible realizar la búsqueda de los archivos tipo "correo electrónico" localizados en el "Outlook" del respaldo correspondiente al equipo de cómputo en uso de ***** , con lo cual se le dio cuenta en su oportunidad al Contralor.

Por tanto, en el auto de diez de noviembre de dos mil quince, el Contralor refirió que la búsqueda de rutas de localización de las imágenes seleccionadas por personal autorizado de la Contraloría en el respaldo de los archivos contenidos en el equipo de cómputo que

¹⁵³ Fojas 2134 y 2135 del Tomo II.

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

tenía asignado, en su momento, *****, era una tarea que requería conocimientos técnicos y especializados en informática, por ello solicitó el apoyo de la Dirección General de Tecnologías de Información, para que se realizara el análisis forense de mérito y en atención a la naturaleza técnica de la información contenida en dicho reporte electrónico, se estimó necesario contar con una versión impresa y a color de dicho documento, en la que obre la firma del personal que la Dirección General de Tecnologías de Información designó para que lo elaborara, pues esa formalidad avala que dicho análisis se realizó por personal técnico con conocimientos especializados en informática.

También se solicitó al Director General de Tecnologías de la Información informar por escrito el listado de páginas de internet que fueron abiertas o consultadas en los equipos de cómputo cuyo respaldo se encuentra en la carpeta “Evidencia Casos”, requirió que dicho informe también debería presentarse impreso a color, con la explicación detallada del tipo de análisis forense que se realizó, así como el nombre de los servidores públicos a quienes haya designado para su elaboración y anexar el archivo electrónico del mismo.

De la revisión de los autos se advierte que el procedimiento de adquisición de la evidencia informática, la respectiva cadena de custodia, la localización e impresión de las imágenes, así como conocer las rutas de acceso de los archivos, es una labor científica y técnica especializada, que escapa del conocimiento común. En las actas levantadas el seis de marzo de dos mil quince, la Dirección General de Tecnologías de la Información hace referencia a una “cadena de verificación de integridad”, a partir de la cual, presumiblemente, se tiene la garantía de que la información

respaldada corresponde a la que obra en el disco duro de la computadora. En el caso de la computadora de *****, durante la diligencia, el personal de informática se llevó el disco duro al pasillo y cerraron la puerta (foja 508 vuelta del Tomo I de la investigación).

El catorce de abril de dos mil quince, a las diez horas, se inició la diligencia de resguardo de los discos duros en las oficinas de la Contraloría, en la cual, estuvieron presentes el Director General de Responsabilidades y el Director General de Tecnologías de la Información, a fin de realizar el análisis forense de los archivos contenidos en el disco duro de resguardo ***** y se asumió la integridad de la información que se verificó a través de la cadena de custodia. Asimismo, comenzó la búsqueda de imágenes, videos, historial de consulta en internet, correos electrónicos y presentaciones de power point, a través de un proceso automático de búsqueda avanzada y la aplicación de filtros. Esta diligencia se suspendió ese mismo día a las 17:30 horas.

El día quince de abril continuó la diligencia,¹⁵⁴ en la que se hizo constar que aún se llevaba a cabo el análisis del disco duro *****. En esa misma diligencia se hizo constar que se borró la información del disco duro *****, por ser idéntica a la contenida en el disco duro *****, lo cual verificó el personal de la Contraloría de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, se hizo constar que inició el copiado de los archivos .pst, .ost y .dat. La diligencia se suspendió a las 17:15 horas.

El día dieciséis de abril terminó el copiado de los archivos .dat de la computadora de *****,¹⁵⁵ asimismo, se hizo constar que terminó el copiado de los archivos de imagen, video, presentaciones de power

¹⁵⁴ Foja 849 del Tomo I del expediente de investigación.

¹⁵⁵ Foja 857 del Tomo I del expediente de investigación.

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

point, tipo .pst, .ost y .dat del resto de los equipos de cómputo y se obtuvieron cinco impresiones de pantalla, en las que se muestra la cadena de verificación MD5 de las imágenes forenses de los restantes equipos analizados. Como todavía no terminaba la labor de informática, se suspendió la diligencia.

El diecisiete de abril de dos mil quince, se hizo constar por personal de la **Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial** que terminó la captura de las imágenes forenses, las cuales quedaron resguardadas en el disco duro *****, se precisaron las cadenas de verificación MD5 de integridad de tres discos duros que corresponden, a su vez, a las obtenidas de los discos duros instalados en el equipo de cómputo SC ***** y se agregaron tres impresiones de pantalla en las que se muestra la cadena de verificación.¹⁵⁶

En esa misma diligencia se hizo constar que estaba en proceso de resguardo la totalidad de los archivos de imagen, video, presentaciones de power point, aquellos tipo .pst, .ost y .dat, ubicados en los respaldos de los equipos de cómputo de los servidores públicos implicados.

En el proceso de copiado del disco duro ***** al ***** se hizo constar por el personal de informática autorizado que el procedimiento de cadena de custodia ***** no culminó de manera satisfactoria por lo numeroso de los archivos y, por lo tanto, era necesario hacer la verificación caso por caso, para comprobar que los archivos no

¹⁵⁶ Ibid, Foja 864

sufrieron alteración alguna. Ello, a juicio del personal de informática, exigía usar la herramienta Quick Hash de la que deriva el algoritmo SHA-1.

En la foja 2129 del expediente en que se actúa se hizo constar que el personal de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial continuó con el análisis de los archivos localizados en los respaldos de los equipos de cómputo obtenidos en la inspección y que a continuación se procedía a buscar el historial de internet, páginas con contenido pornográfico y actos sexuales de impacto visual inapropiado, se explica qué equipo de cómputo se empleó para ello (el cual se presume que es de la misma Dirección General de Responsabilidades) y las herramientas conducentes, pero ante la imposibilidad de ver las páginas, se concluyó la búsqueda.

En la foja 2142 del expediente se hace constar inició la búsqueda de información en los archivos tipo correo electrónico localizados en el Outlook que tuvieran imágenes de contenido pornográfico y actos sexuales de impacto visual inapropiado. Para ello se utilizó el equipo del Dictaminador de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y Registro Patrimonial, y fue necesario conectarse a internet; sin embargo, se hizo constar que no fue posible visualizar el correo electrónico.

El once de diciembre de dos mil quince, a petición del Contralor, el Director General de Tecnologías de la Información envió a la Contraloría un disco compacto y el reporte del análisis forense de internet de siete computadoras, en la inteligencia de que no se podía

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

consultar el historial de internet de *****.¹⁵⁷ Asimismo, se agregaron las cadenas de verificación SHA1.

El once de noviembre de dos mil quince, a partir de la foja 2170 del expediente en que se actúa, el personal autorizado de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y Registro Patrimonial llevó a cabo el análisis de las imágenes presuntamente localizadas en el equipo de cómputo de *****, llevando a cabo a la búsqueda, copiado e impresión de archivos. En esa diligencia se afirma que se visualizaron archivos tipo imagen que reflejan actos sexuales y pornográficos, de ahí que se procedió a ampliar o reducir, en su caso, cada imagen, para una mejor visualización.

Particularmente, en la foja 2173, el personal de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y Registro Patrimonial hizo constar de la revisión del equipo de cómputo que ***** tenía bajo su uso y resguardo sí hay material pornográfico en los archivos tipo imagen, por lo que se procedió a imprimir las imágenes a color. En las foja 2176, 2179 y 2183 se hace constar que las impresiones se enviaron a la impresora vía wi-fi. En la foja 2184 se dejó asentado que en la computadora asignada al citado servidor público se localizaron videos de contenido pornográfico y sexual.

Mediante acuerdo de doce de enero de dos mil dieciséis, el Contralor de esta Suprema Corte hizo referencia al contenido de los reportes que hasta ese momento había recibido de la Dirección General de Tecnologías de la Información, de los cuales, se desprendía lo siguiente:

¹⁵⁷ Foja 2164 del expediente en que se actúa.

- A cinco servidores públicos se les imputa tener en la memoria de sus computadoras asignadas por esta Suprema Corte imágenes que no están relacionadas con la prestación del servicio público.
- En el caso de *****, se revisaron archivos y videos, pero no se tuvo acceso al Outlook.
- De los cuatro servidores públicos restantes, se revisaron imágenes y archivos de power point, pero no fue posible revisar el correo electrónico ni archivos tipo video de tres de ellos.
- De dos servidores públicos no se pudieron revisar los archivos tipo imagen.
- En ese momento estaba pendiente el análisis del respaldo de los archivos tipo imagen, video, power point y correo electrónico de ***** y *****, correspondientes a los equipos que tenían asignados o en uso.

Toda vez que era necesario contar con mayor apoyo tecnológico, la Contraloría de esta Suprema Corte requirió a la Dirección General de Tecnologías de la Información para que informara **la ruta de origen de los archivos localizados**, de tal suerte que en dicho informe se debería **precisar si se trata de correos enviados o recibidos en Outlook**.

En el acuerdo de fecha diez de febrero de dos mil dieciséis, la Contraloría hizo constar que estaban pendientes de recibir las rutas de origen de los archivos imágenes y de power point. Dicho requerimiento se desahogó el dieciséis de febrero de dos mil dieciséis por el Director General de Tecnologías de la Información,¹⁵⁸ e hizo llegar la siguiente información o documentación:

¹⁵⁸ Foja 2263 del expediente en el que se actúa.

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

- Un disco duro con número *****
- Las contraseñas asignadas a los archivos contenidas en disco compacto.
- Paquetes que contienen la impresión del reporte de hallazgos de archivos de tipo imagen, localizados tras el análisis de carpetas.
- Paquetes que contienen la impresión del reporte de hallazgos de archivos de tipo imagen y power point, el equipo con número de inventario *****.
- Un disco compacto conteniendo los reportes de hallazgos de archivos electrónicos del tipo imagen y de power point, con la correspondiente cadena de verificación SHA1.

Mediante auto de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se hizo constar que en el acta de veintidós de octubre de dos mil quince, y acuerdos subsecuentes, se refirió que el equipo de cómputo con número de inventario ***** estaba asignado a *****, sin embargo, de acuerdo con el acta de inspección realizada el seis de marzo de dos mil quince, el equipo de cómputo con número SC ***** estaba asignado a *****, por lo que se regularizaron las actuaciones.

El dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, el Contralor de esta Suprema Corte cerró la investigación porque venció el plazo para hacerlo y estimó que tenía suficiente información para determinar quiénes son los probables responsables de las conductas materia de investigación.

Como se aprecia de la anterior relatoría, para demostrar la infracción consistente en el indebido ejercicio del empleo, cargo o comisión, específicamente la utilización de recursos informáticos

asignados en razón de su función para fines diversos a los que estaban afectos, prevista en el artículo 8, fracción III, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que le fue imputada a *****, *****, *****, *****, y *****, en realidad se acudió a dos pruebas sustanciales: la inspección y la pericial asociada en materia de tecnologías de la información, pues lo cierto es que para la demostración de que en el disco duro de las computadoras asignadas o en uso se había almacenado material pornográfico o de contenido sexual, no fue suficiente la apreciación sensorial por parte del personal de la Contraloría de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación o de su Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial, pues como se manifestó desde el auto de cinco de marzo de dos mil quince, era indispensable la participación de la Dirección General de Tecnologías de la Información, lo que convirtió a dicha probanza en una auténtica pericial .

Por tanto, la prueba idónea para demostrar la comisión de la infracción de mérito no era la inspección, sino la prueba pericial, porque era necesario contar con conocimientos técnicos y científicos que escapan del común de los ciudadanos para determinar si en los equipos de cómputo asignados o en uso de *****, *****, *****, *****, y ***** existía información de contenido sexual o pornográfico.

El trabajo pericial que llevó a cabo la Contraloría de este Alto Tribunal, incluso, el que realizó la Dirección General de Tecnologías de la Información, no está rendido en forma de dictamen pericial, ya que es menester recapitular cada una de las actuaciones que llevaron a cabo tales Direcciones para determinar, de manera inductiva, cuál fue el método o ruta a seguir para obtener la evidencia tecnológica rendida al Pleno de este Alto Tribunal. La falta de un dictamen pericial resulta relevante para resolver este asunto, porque si no se cuenta con

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

un marco teórico o de referencia en cuanto al protocolo, normatividad o criterios de orden jurídico y tecnológico, nacionales o internacionales, que se adoptaron para obtener la evidencia, entonces se infringen, por un lado, las reglas del debido proceso y, por otra, el principio de legalidad en el cual se sustenta el procedimiento administrativo sancionador.

En efecto, si se acude al Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria y norma especial para determinar los alcances de las pruebas, se advierte que el artículo 210 A dispone lo siguiente:

ARTICULO 210-A.- Se reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología.

Para valorar la fuerza probatoria de la información a que se refiere el párrafo anterior, se estimará primordialmente la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta.

Cuando la ley requiera que un documento sea conservado y presentado en su forma original, ese requisito quedará satisfecho si se acredita que la información generada, comunicada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, se ha mantenido íntegra e inalterada a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva y ésta pueda ser accesible para su ulterior consulta.

ARTICULO 211.- El valor de la prueba pericial quedará a la prudente apreciación del tribunal.

En los resultandos relacionados con la etapa de investigación y en líneas anteriores ha quedado descrito, *grosso modo*, cuál fue la ruta que empleó la Contraloría, con apoyo de la Dirección General de Tecnologías de la Información, para copiar la información constante en

los discos duros de las computadoras asignadas o en uso de *****,
*****, *****, *****, y *****, sin embargo, en ninguna parte se precisa a
qué protocolo o método reconocido acudieron los servidores públicos
para el efecto de que este Alto Tribunal esté en condiciones de valorar
su fuerza probatoria, pues como lo ordena el Código Federal de
Procedimientos Civiles, para ello se estimará primordialmente **la
fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada,
recibida o archivada, lo cual en el caso concreto resulta
imposible, ante el desconocimiento del citado método o
protocolo.** De este mismo numeral se desprende una exigencia
implícita para el órgano técnico, que consiste en justificar cuál fue el
referido método o protocolo que siguió para obtener la información con
la que se pretende imputar responsabilidad a los servidores públicos
sujetos a procedimiento disciplinario.

Lo anterior resulta indispensable, incluso, al tenor del marco
legal que regula los procedimientos disciplinarios que se substancian
en este Alto Tribunal, ya que el artículo 40 del Acuerdo General
9/2005, establece que en las resoluciones que dicte el Pleno con las
que se ponga fin a los procedimientos de responsabilidades
administrativas, **se verificará que la substanciación del
procedimiento se haya realizado conforme a las reglas que prevé
este Acuerdo General.**

En este aspecto, desde un punto de vista procesal, resulta
imposible brindar valor probatorio alguno a la evidencia recabada por
la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al no
reunir las condiciones que exige el artículo 210 del Código Federal de
Procedimientos Civiles.

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

Por otro lado, tratándose de un procedimiento administrativo, es indispensable que este Alto Tribunal se apegue de manera estricta al principio de legalidad al que se refieren los artículos 14 y 16 constitucionales, pues nadie podrá ser privado de sus derechos sin que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Si se aprecia este asunto desde la perspectiva del derecho administrativo, se obtiene que la actuación de la autoridad debe ceñirse a la ley, con el objeto de brindar seguridad jurídica a los gobernados o a las personas sujetas a su potestad, de otro modo, la actuación del Estado se torna arbitraria. Esta es una de las razones que justifica la previsión contenida en el artículo 40 del Acuerdo General 9/2005, en el que autoriza que este Tribunal Pleno, de oficio, verifique que la substanciación del procedimiento se haya realizado **conforme a las reglas** que prevé este Acuerdo General, el cual en su artículo 4º remite a una serie de disposiciones de aplicación supletoria que integran el marco jurídico al cual se debe sujetar el procedimiento disciplinario que se substancia en este Alto Tribunal.

En este sentido, las actuaciones de la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación carecen de la correspondiente fundamentación en algún protocolo científico y jurídico que respalde la legalidad del procedimiento que se siguió. La problemática que arroja esta circunstancia es que no se conoce cuáles fueron las reglas o normatividad a la cual se sujetó el procedimiento de respaldo y la cadena de custodia de la evidencia tecnológica, así como la impresión de las imágenes y el reporte respectivo, por lo que resulta imposible que este Alto Tribunal acredite la legalidad de la actuación procesal

llevada a cabo por la Contraloría, con apoyo de la Dirección General de Tecnologías de la Información, como lo exige el artículo 40 del Acuerdo General 9/2005.

A partir del protocolo, se podrían conocer algunos elementos esenciales que rigen este procedimiento, como son, entre otros: (i) las autoridades competentes para recabar la evidencia, esto es, en qué medida debe tener intervención la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial en un trabajo científico y técnico; (ii) los equipos tecnológicos y lugares en los que se debe obtener la evidencia; (iii) las exigencias formales y científicas para acceder al disco duro de los bienes informáticos; (iv) si a los servidores públicos les asiste algún derecho fundamental relacionado con la intervención de las comunicaciones privadas, o bien, si es derecho del patrón revisar el equipo de trabajo sin mayor autorización; (v) cuáles son los algoritmos aceptados por este Alto Tribunal para tener por constituida la respectiva cadena de custodia, así como los sistemas de respaldo autorizados; y, (vi) la forma en que debe presentarse esta evidencia a la Suprema Corte de Justicia para que constituya un medio de prueba que reúna las formalidades procesales requeridas, así como sus requisitos elementales.

En este sentido, el respeto a los principios de legalidad y debido proceso adquiere una connotación superlativa tratándose de los procedimientos disciplinarios que se instruyen en este Alto Tribunal, pues como ya quedó referido en páginas anteriores, no existe otra instancia a la cual acudir una vez que se dicta el fallo que resuelve sobre la responsabilidad de un servidor público.

PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 6/2015

Para enfatizar la importancia de conocer el protocolo de actuación necesario para recabar la evidencia incriminatoria, resulta útil acudir a la doctrina que existe sobre la materia. En ella se afirma que la actuación de campo de la recopilación de las evidencias es una actividad extremadamente delicada y compleja, y que la valía legal y técnica de las evidencias en la mayoría de las ocasiones depende del proceso realizado en la recopilación y preservación de las mismas.¹⁵⁹ Dados los avances de la vida moderna, hoy en día se hace muy complicado no intervenir, al menos, un ordenador de sobremesa o portátil más un dispositivo móvil, por lo que el derecho se enfrenta a la necesidad imperiosa de incorporar nuevos protocolos y técnicas de investigación, que permitan identificar cualquier información en formato digital que pueda establecer una relación entre la falta y el autor de la misma.

Toda información en formato digital que se va a utilizar como prueba en el procedimiento recibe el nombre de evidencia digital. Incluso, los soportes informáticos como discos duros, pendrives, CDs o DVDs **son considerados evidencias digitales, aunque en realidad la evidencia digital se encuentra en su contenido, no en los soportes que son los contenedores.**¹⁶⁰

La evidencia digital tiene unas características especiales que la diferencian de otros tipos de evidencias, porque puede ser volátil, reemplazable, alterable, duplicable y eliminable. En efecto, casi

¹⁵⁹ <https://peritoit.com/2012/10/23/isoiec-270372012-nueva-norma-para-la-recopilacion-de-evidencias/>

¹⁶⁰

[https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/PONENCIA_BENITEZ_IGLESIAS%20\(2\).pdf?idFile=f78ecda3-8fba-4b8b-bd1e-d97b25f424e3](https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/PONENCIA_BENITEZ_IGLESIAS%20(2).pdf?idFile=f78ecda3-8fba-4b8b-bd1e-d97b25f424e3)

cualquier información digital se puede modificar, por lo que para evitar esto, a la hora de realizar cualquier análisis forense se debe utilizar algún tipo de bloqueador de escritura, que evite, ya sea por imprudencia o con dolo el alterar la evidencia original. Por eso lo ideal es realizar una copia de los datos originales y trabajar con la misma.

Al tratarse de información digital, compuesta de bits de información, es posible reproducir esa misma información en varios soportes distintos sin alterar la evidencia original. Con ello se consigue una evidencia original intacta y tantas copias de la misma totalmente idénticas. Además, las evidencias digitales se pueden modificar y uno de estos tipos de modificación consiste en el borrado de esa evidencia.

La evidencia digital es anónima en ciertos casos. Las evidencias digitales intervenidas en el procedimiento pueden ser asignadas a un individuo concreto, pero en otras ocasiones o en las evidencias digitales que se obtienen a través de investigaciones realizadas en Internet puede que los únicos datos que se obtengan para identificar al usuario estén enmascaradas con técnicas de anonimización u ocultación del origen.

Estas propiedades generan múltiples situaciones en las que se puede llegar a cuestionar su validez jurídica.¹⁶¹

Si bien a nivel internacional los protocolos de actuación y normativas siguen unas pautas comunes, se tiene que para cumplir con el principio de legalidad es menester que la autoridad tenga un marco de referencia homogéneo que no se infiera de manera inductiva por el Tribunal, pues de otro modo, no existe parámetro legal con el

¹⁶¹

[https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/PONENCIA_BENITEZ_IGLESIAS%20\(2\).pdf?idFile=f78ecda3-8fba-4b8b-bd1e-d97b25f424e3](https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/PONENCIA_BENITEZ_IGLESIAS%20(2).pdf?idFile=f78ecda3-8fba-4b8b-bd1e-d97b25f424e3)

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

cual cotejar su apego a derecho. Y es que la doctrina establece variedad de pautas a seguir. Por ejemplo, algunos exigen que el perito se coloque guantes para operar el equipo y tome fotografías de todos los elementos informáticos que va a revisar (pantallas del monitor del equipo dubitado, vistas frontal, lateral, posterior, teclados mouse, impresoras, videocámaras, pendrive, unidades zip o jazz, dispositivos de almacenamiento en red, material impreso en la bandeja de la impresora, cableado, dispositivos de conectividad, entre otros).

Otros, sin hacer referencia a esa formalidad, solicitan identificar el equipo informático, el cual se debe proteger de cualquier manipulación, por lo que evitan cualquier acceso a través de la conexión de red o internet, y para ello desconectan el cable de red de datos. Si se cuenta con personal policial cualificado, éste será quien determine la posibilidad de desconexión instantánea o la posibilidad de analizar la estructura de la red para determinar el número de equipos conectados y si es posible identificarlos todos ellos.¹⁶²

Estas exigencias, en el caso concreto, no fueron satisfechas por el personal de la Dirección General de Tecnologías de la Información, pues ello no se hace constar en las actas de inspección que se levantaron el seis de marzo de dos mil quince; sin embargo, resulta imposible que ese Alto Tribunal solicite esas formalidades porque la autoridad investigadora no informa si se cuenta con un protocolo de actuación o método para obtener las evidencias tecnológicas que se buscan y si éste se adoptó de manera escrupulosa, con la finalidad de que se eleven al rango de medios de prueba en un procedimiento disciplinario.

¹⁶² Idem

Continúa refiriendo la doctrina que en caso de que el equipo se encuentre encendido, hay dos posibilidades de actuación: se puede realizar un análisis superficial o se apaga el equipo inmediatamente, pero no mediante el procedimiento normal (en Windows es mediante botón Inicio y apagar), ya que cuando se utiliza el procedimiento normal, el equipo puede tener configurado la ejecución de aplicaciones de borrado seguro. Por tanto, para un apagado seguro debe realizarse desconectando el cable de alimentación. Es necesario desconectarlo de ese lugar y no de la toma de red de la pared, ya que pueden existir dispositivos llamados Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI) intermedios que al detectar que se han quedado sin energía sigan alimentando al equipo y además les dé una orden para que haga un apagado con borrado seguro. En cualquiera de los casos es necesario retirar cualquier componente que se encuentre conectado al dispositivo a intervenir, como CDs, DVDs o pendrives, y reseñarlos de forma independiente.¹⁶³

De acuerdo con algunos protocolos, los dispositivos se precintarán en la medida de lo posible, utilizando bolsas especiales para tal efecto, evitando el uso de precinto policial sobre la evidencia misma, ya que al retirarla pueda dañar partes sensibles o electrónicas. En caso de dispositivos de considerable volumen, como ordenadores de sobremesa, que no puedan ser introducidos en bolsas, se deberá precintar cualquier elemento que sirva como puerto de entrada/salida de datos, como son los puertos USB, Firewire, conectores de red RJ45 o lectores de CD o DVD, bien mediante precinto policial directamente o mediante una hoja de papel.¹⁶⁴ La exigencia del precinto evita que la evidencia original se altere o manipule de alguna forma. Lo anterior sin

¹⁶³ Idem

¹⁶⁴ https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5482_G13_Evidencia_Digital.pdf

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

menoscabo de contar con la respectiva autorización judicial para llevar a cabo el procedimiento.¹⁶⁵

Estas son exigencias sobre las cuales no informan las diligencias de inspección, ni tampoco dan a conocer cuál es el protocolo de actuación con apoyo en la cual sea posible establecer si era necesario adoptarlas para efectos de evitar errores en la cadena de custodia, lo que denota una abierta falta de fundamentación.

En este sentido, la carencia de protocolos adecuados en las respectivas instituciones públicas, puede provocar que se cometan errores en la cadena de custodia, los cuales comprometan la investigación que se está llevando a cabo, por ello era indispensable que la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Dirección General de Tecnologías de la Información citaran y aplicaran rigurosamente el protocolo respectivo.

Al respecto, resulta ilustrativo el contenido de la siguiente tesis aislada de la Primera Sala de este Alto Tribunal, que este Pleno comparte:

CADENA DE CUSTODIA. DIRECTRICES PARA QUE LOS INDICIOS RECABADOS EN LA ESCENA DEL CRIMEN PUEDAN GENERAR CONVICCIÓN EN EL JUZGADOR. A efecto de que la cadena de custodia sea respetada en el análisis de una escena del crimen y, por tanto, los indicios recabados generen convicción en el juzgador, aquélla debe iniciar con la búsqueda de evidencias. Una vez que se han descubierto, lo ideal es llevar a cabo un levantamiento cuidadoso -con un mínimo de manipulación- y una recopilación de dichas evidencias para proceder a su embalaje, esto

¹⁶⁵

[https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/PONENCIA_BENITEZ_IGLESIAS%20\(2\).pdf?idFile=f78ecda3-8fba-4b8b-bd1e-d97b25f424e3](https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/PONENCIA_BENITEZ_IGLESIAS%20(2).pdf?idFile=f78ecda3-8fba-4b8b-bd1e-d97b25f424e3)

es, a su protección para evitar que se contaminen o pierdan, buscando minimizar su deterioro mediante un sellado que impida posibles vías de contaminación. Posteriormente, el elemento debe ser rotulado y sellado, para finalmente trasladarlo de inmediato a los laboratorios correspondientes. Para que la cadena de custodia se mantenga de forma adecuada, debe procurarse que el especialista - quien habrá de vestir con el equipo necesario-: (i) marque cada elemento que va a ser identificado; (ii) se asegure de que se registre apropiadamente la información; (iii) procure que los elementos se almacenen en lugares adecuados; y, (iv) limite el número de personas con acceso a la escena. Sin embargo, la falta de preparación de las personas que intervienen en el estudio de las escenas de crimen, así como **la carencia de protocolos adecuados en las respectivas instituciones públicas, puede provocar que se cometan errores en la cadena de custodia, los cuales comprometan la investigación que se está llevando a cabo.** Así, entre tales errores se encuentran la falta de organización del equipo, la débil protección de la escena, la falta de aseguramiento de ésta para evitar que entren personas no autorizadas, la falla en la toma de anotaciones adecuadas, la toma de pocas fotografías, el uso de técnicas incorrectas y la manipulación, recolección y empaque inadecuados de la evidencia. Por tanto, el registro de la cadena de custodia resulta un aspecto indispensable dentro de la investigación criminal, pues es recomendable que las personas que intervengan en el manejo de la escena del crimen describan la forma en que se realizó la recolección, el embalaje y el etiquetado de evidencias, las medidas puestas en práctica para garantizar su integridad, así como la identificación de quienes intervinieron en las acciones, recabando el nombre, cargo y proceso realizado con cada una de las evidencias, incluyendo la firma respectiva.¹⁶⁶

Al respecto, la doctrina insiste en que la cadena de custodia tiene como finalidad brindarle soporte veraz a la prueba digital ante el juez, en medio de lo que se conoce como el debido proceso. Por tal motivo deben establecerse los procedimientos indicados para garantizar la idoneidad de los métodos aplicados para la sustracción de la evidencia informática. A través de un procedimiento controlado y monitoreable se garantiza una base efectiva para el juzgamiento y la validez ante cualquier fuero judicial.¹⁶⁷

Así, la implementación de mecanismos efectivos de recopilación de evidencias debe incluir procedimientos que aseguren la

¹⁶⁶ Décima Época, Registro: 2004655, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, Materia(s): Penal, Tesis: 1a. CCXCVII/2013 (10a.), Página: 1044

¹⁶⁷ ojs.tdea.edu.co/index.php/cuadernoactiva/article/download/45/42/0

confiabilidad de la información recolectada. **Dicha confiabilidad incluye la trazabilidad, es decir, establecer un mecanismo que permita realizar un seguimiento estricto de los elementos probatorios, desde su detección hasta el momento de su disposición definitiva, la confidencialidad, la autenticidad, la integridad y el no repudio de los datos.** En términos sencillos, implica establecer mecanismos de garantía de que los elementos probatorios ofrecidos como prueba documental informática son confiables, es decir, que no han sufrido alteración o adulteración alguna desde su recolección.¹⁶⁸

El juez debe poder confiar en dichos elementos digitales, por considerarlos auténticos “testigos mudos”. Desde la detección, identificación, fijación, recolección, protección, resguardo, empaque y traslado de la evidencia del lugar del hecho real o virtual, hasta la presentación como elemento probatorio, la cadena de custodia debe garantizar que la evidencia recolectada en la escena es la misma que se está presentando ante el evaluador o decisor.

La cadena de custodia, por sí misma, es un procedimiento controlado que se aplica a los indicios materiales relacionados con un hecho delictivo, desde su localización hasta su valoración, por parte de los encargados de administrar justicia y busca asegurar la inocuidad y la esterilidad técnica en el manejo de los mismos, evitando alteraciones, sustituciones, contaminaciones o destrucciones, hasta su disposición definitiva por orden judicial.¹⁶⁹

¹⁶⁸ Idem

¹⁶⁹ Idem

Por tanto, la validez de la prueba informática depende del mantenimiento de la seguridad, de procurar el resguardo legal y del **seguimiento de una metodología estricta**, la cual en el caso se ignora por no haber sido precisada por la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial o el órgano técnico y científico que les prestó apoyo técnico y le dio formalidad y presentación científica a la evidencia recabada.

La explicación anterior es útil para destacar la importancia de invocar el respectivo protocolo de actuación que sirvió de base para llevar a cabo el procedimiento administrativo, pues es el parámetro para revisar la legalidad de la diligencia de recopilación de la evidencia informática y de la cadena de custodia, en términos del artículo 40 del Acuerdo General 9/2005. De otro modo, no se cuenta con elementos para estimar la fiabilidad del método a partir del cual fue obtenida la evidencia tecnológica, conforme al artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles. Lo anterior con independencia de que, en el caso concreto, la probanza pertinente no era la inspección, sino una pericial que debió cumplir con los requisitos que exige el Código Federal de Procedimientos Civiles para su ofrecimiento y desahogo.

A mayor abundamiento, de la revisión de las constancias de autos no se advierte cual es el origen de las imágenes y archivos localizados por la Dirección General de Tecnologías de la Información en las computadoras asignadas formalmente a los servidores públicos sujetos a procedimiento. En efecto, aun partiendo del supuesto de que estuviera apegado a derecho el procedimiento de cadena de custodia de las evidencias tecnológicas, subsiste la interrogante de determinar cómo ingresaron esos archivos a las computadoras y en qué época, para poder establecer con firmeza la presunción de que fueron precisamente dichos funcionarios quienes estuvieron en condiciones

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

de almacenarla en los bienes tecnológicos asignados y no alguna otra persona que, incluso, les antecediera en el resguardo de los mismos.

En atención a los principios de legalidad y debido proceso, este Alto Tribunal determina que no está en condiciones de otorgar valor probatorio alguno a las diligencias que en materia de cadena de custodia llevó a cabo la Dirección General de Tecnologías de la Información, pues con independencia de que su actuación se hubiere ajustado o no a algún protocolo nacional o internacional, éste no se invoca en el procedimiento administrativo de recopilación de evidencias incriminatorias, por lo que la actuación de la autoridad investigadora no tiene apoyo legal e impide determinar sus alcances como medio de prueba.

No pasa desapercibido que el treinta de septiembre de dos mil trece, la Oficialía Mayor, a través de la Dirección General de Tecnologías de la Información, Dirección de Seguridad Informática, elaboró un Procedimiento de Análisis Forense Informático; sin embargo, éste tiene un objetivo muy específico, que consiste en “realizar un proceso para la obtención, preservación y documentación de evidencia digital en equipos y/o dispositivos de cómputo, **que permita determinar las causas que han originado un incidente de seguridad informática.**”¹⁷⁰

Un incidente de seguridad informática se define como un evento adverso en un sistema de computadoras, o red de computadoras, que compromete la confidencialidad, integridad o disponibilidad, la

¹⁷⁰

<http://psvscjnsijs.scjn.pjf.gob.mx/manuales/procedimientos/11.ProcedimientosDGTecnologias.pdf>

legalidad y confiabilidad de la información. Puede ser causado mediante la explotación de alguna vulnerabilidad o un intento o amenaza de quebrar los mecanismos de seguridad existentes. Tiene relación, en síntesis, con una violación o inminente amenaza de violación de una política de seguridad de la información o política de uso aceptable de recursos de información.¹⁷¹ La investigación de un incidente de seguridad informática tiene como propósito revisar si hubo un acceso, intento de acceso, uso, divulgación, modificación o destrucción no autorizada de información; un impedimento en la operación normal de las redes, sistemas o recursos informáticos; o cualquier otro acto que implique una violación a la política de seguridad de la información de la institución de que se trate.¹⁷²

De este modo, un incidente de seguridad informática no tiene relación con el objetivo de recabar evidencia informática para un procedimiento disciplinario, ni con las técnicas para integrar la respectiva cadena de custodia, garantizando los derechos fundamentales de legalidad, debido proceso legal y aquellos otros a los que haya lugar.¹⁷³

¹⁷¹ <http://www.seguridadinformatica.unlu.edu.ar/?q=taxonomy/term/1>

¹⁷² <http://www.seguridadinformatica.unlu.edu.ar/?q=node/4>

¹⁷³ Resulta ilustrativo considerar que el Consejo de la Judicatura Federal sí cuenta con un Protocolo de Actuación para la obtención y tramitación de los recursos informáticos y/o evidencias digitales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día diecisiete de junio de dos mil dieciséis, el cual tiene como objetivo integrar el marco normativo de las investigaciones y procedimientos que realizan la Secretaría Ejecutiva de Disciplina y la Visitaduría Judicial, tal como se señala en los considerando sexto al octavo, mismos que se transcriben a continuación:

“SEXTO. Con el auge de las tecnologías de la información, es necesario proporcionar métodos y procedimientos que aseguren la detección, recolección, manejo, autenticación, análisis, procesamiento y resguardo de los recursos informáticos y/o evidencias digitales obtenidos de las computadoras, redes informáticas, discos duros, floppy disk, zip disk, cintas magnéticas, appliances, routers, switches, memorias de almacenamiento masivo de información (USB), discos compactos, tabletas, teléfonos alámbricos y móviles, sistemas de correo electrónico, mensajería sincrónica o instantánea asincrónica, intercambio de archivos en línea, redes sociales, y en general de cualquier dispositivo de comunicación, almacenamiento y transmisión de datos, con la finalidad de integrar en estricto apego al marco constitucional y normativo las **investigaciones y procedimientos** que realizan en su respectivo ámbito de competencia las Secretarías Ejecutivas de Vigilancia, Información y Evaluación, y la de Disciplina, así como la Dirección General de Tecnologías de la Información, todas del Consejo de la Judicatura Federal y, por su parte, la Visitaduría Judicial y la Contraloría del Poder Judicial de la Federación;

SÉPTIMO. La obtención de información (elementos de prueba) constituye una de las facetas útiles dentro del éxito de una investigación, aspecto que demanda de los encargados de la recolección, preservación, análisis y presentación de las evidencias, **una eficaz labor que garantice la autenticidad e integridad de éstas, a fin de ser utilizadas posteriormente como**

PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 6/2015

Por otro lado, la Dirección General de Tecnologías de la Información, en ninguna de las actas que levantó ni en los reportes de resultados de los análisis forenses de los equipos de cómputo, informó que se hubiere apoyado en ese protocolo para rendir su dictamen, tampoco lo hizo así la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial ni la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al levantar cada una de las actas en las que afirma haber buscado y localizado información de contenido sexual o pornográfico; de ahí que revisar el proceso de

parte de los diversos procedimientos que se tramitan en el Consejo de la Judicatura Federal y/o en su caso, ante las autoridades ministeriales o judiciales correspondientes; y

OCTAVO. Uno de los principales problemas en el análisis de la evidencia digital entendida como información probatoria almacenada o transmitida digitalmente, es la cadena de custodia, es decir, el procedimiento controlado que se aplica a los indicios materiales relacionados con la investigación, desde su localización hasta su valoración y que tiene como fin no viciar el manejo que de ellos se haga y así evitar alteraciones, sustituciones, contaminaciones o destrucciones.

En ese contexto, es imprescindible que la detección, recolección, manejo, autenticación, análisis, procesamiento y resguardo de las evidencias digitales y recursos informáticos, **se lleve a cabo con estricto apego al marco constitucional y normativo vigente a efecto de no constituir prueba inválida o ilícita** dentro de los diversos procedimientos que se instruyen en el Consejo de la Judicatura Federal, **garantizando en todo momento los derechos fundamentales a la intimidad o vida privada, así como a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas.**

Así, desde la ubicación, fijación, recolección, embalaje y traslado de la evidencia, hasta la presentación al debate, la cadena de custodia debe garantizar que el procedimiento empleado ha sido exitoso y que la información que se recolectó en la escena, es la misma que se presente como prueba o como base de un informe.

Resulta de suma importancia contar con principios o lineamientos relacionados con la naturaleza, propósito y fines para la obtención, procesamiento y resguardo de los recursos informáticos y/o evidencias digitales que no riñan con los postulados de la Constitución Federal y los Tratados Internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte y, **que sean acordes con la finalidad del debido proceso legal, a fin de no generar ningún perjuicio a la esfera jurídica de los gobernados.**

Este procedimiento de control debe ser absolutamente riguroso con la prueba, así como con los hechos que la afecten y el personal que intervenga en su obtención, de tal forma que cuando esta, o cualquier informe que se genere llegue a manos de la autoridad competente, no pueda dudarse ni por un instante de su validez o licitud, tanto de la prueba, como del informe.

Lo anterior, cobra especial relevancia, toda vez que la prueba constituye el núcleo central de toda investigación científica, en cuanto satisface la necesidad insalvable de verificar los alcances de verdad o falsedad de la hipótesis en que se asienta. La prueba es un imperativo de la razón; es un juicio que denota la necesidad intelectual de que se confirme todo aquello que se quiera considerar como cierto, circunstancia por la cual, **su obtención debe ser enmarcada en el principio constitucional de legalidad.**

Es por ello, que se subraya la necesidad de que el Consejo de la Judicatura Federal cuente con un Protocolo de actuación en el que se establezcan con toda claridad los métodos y procedimientos que deben seguirse puntualmente para controlar el cuándo, cómo y dónde se debe obtener la prueba, así como el recurso informático y/o evidencia digital, qué se debe hacer con ellos, cómo se deben analizar y quién debe resguardarlos.”

obtención de la evidencia informática y su cadena de custodia a partir de dicho protocolo, o bien, presumir su legalidad a partir de la existencia del mismo, implicaría sostener la validez de las actuaciones de autoridad a partir de especulaciones.

Ahora bien, el restante material probatorio con el cual se pretende demostrar la comisión de la infracción que nos ocupa, carece de pertinencia para lograr ese objetivo. En este sentido, el auto de nueve de mayo de dos mil dieciséis administró los resultados de las diligencias practicadas por la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial, así como por la Dirección General de Tecnologías de la Información, con lo siguiente:

- Copia certificada de la declaración rendida el ocho de febrero de dos mil trece por *****, dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa *****.
- Copia certificada de los expedientes personales de *****, *****, *****, *****, y *****.
- Copia certificada de los resguardos de los equipos de cómputo con número de inventario *****, entre otros, asignados a *****, *****, *****, *****, y *****, respectivamente.

Como se advierte, las dos últimas probanzas mencionadas, por sí solas, no son pertinentes para demostrar la comisión de la conducta consistente en la indebida utilización de los recursos informáticos asignados en razón de su función, por haberlos empleado para fines diversos a los que estaban afectos, esto es, para almacenar imágenes, videos, o consultar páginas con contenido pornográfico o sexo explícito, pues en sus expedientes personales no obra constancia alguna de dichas infracciones, y las copias certificadas de los resguardos del equipo de cómputo únicamente son útiles para

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

demostrar que dichos servidores públicos asumieron la responsabilidad de proteger el equipo informático propiedad de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En cuanto a la declaración rendida el ocho de febrero de dos mil trece por *****, dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa *****, ésta carece de valor convictivo, por lo siguiente:

a.- Dicho medio de prueba fue agregado a los autos por la Directora General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial de la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de lo ordenado en proveído de diecisiete de agosto de dos mil quince, dictado por el Contralor de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin embargo, dicha autorización no está fundada ni motivada en **el artículo 30 A del Acuerdo General 9/2005**,¹⁷⁴ el cual dispone que **la información o documentos recabados en una diversa investigación, podrán agregarse a este procedimiento de responsabilidad administrativa 6/2015, siempre y cuando se justifique** que el diverso procedimiento de responsabilidad administrativa ***** ha concluido en el sentido que no existen elementos suficientes para advertir la probable existencia de alguna causa de responsabilidad administrativa, y que no ha prescrito la facultad sancionadora.

¹⁷⁴ “**Artículo 30 A.-** (...)”

Si en el dictamen se concluye que no existen elementos suficientes para advertir la probable existencia de alguna causa de responsabilidad administrativa, la información o documentos recabados en esa investigación podrán valorarse en una posterior, siempre y cuando lo autorice el órgano que ordenó la nueva investigación y no haya prescrito la facultad sancionadora.

b.- Sólo a mayor abundamiento, se advierte que en la comparecencia de mérito, expresamente se afirma que dentro de la Dirección General del Canal Judicial, los servidores públicos: “(...) *veían pornografía en la computadora, (...) Las imágenes que ponen en las computadoras las ven en los equipos de la dirección general, en la mía no porque es una Mac y no la saben usar, la que siempre usan es la de ****, cuando he llegado en ocasiones tiene pornografía, hay camarógrafos y gente de producción; (.....) las fotografías de la computadora de **** son de pornografía (.....) un camarógrafo de nombre **** (...) a él sí lo he visto que ve pornografía, (...)*”, son imputaciones que no están dirigidas de manera directa a los servidores públicos contra quienes se instauró el presente procedimiento.

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que al servidor público imputado le asiste el derecho fundamental de presunción de inocencia,¹⁷⁵ el cual es aplicable a todos los procedimientos de cuyo resultado pudiera derivar alguna pena o sanción como resultado de la facultad punitiva del Estado debido a su naturaleza gravosa, cuestión que implica que a toda persona que se encuentre sometida a alguno de estos procedimientos se le debe de reconocer su calidad de inocente y, por ende, la carga de la prueba se desplaza a la autoridad en aras de proteger el derecho al debido proceso.

El criterio que precede tiene sustento en la jurisprudencia emitida por este Tribunal Pleno de rubro y texto siguiente.

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON Matices o Modulaciones. El Tribunal Pleno de la Suprema

¹⁷⁵ Puede consultarse la ejecutoria recaída al procedimiento de responsabilidad administrativa 2/2012, fallado por mayoría de nueve votos el veintitrés de noviembre de dos mil quince.

PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 6/2015

Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. XXXV/2002, sostuvo que, de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008), deriva implícitamente el principio de presunción de inocencia; el cual se contiene de modo expreso en los diversos artículos 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; de ahí que, al ser acordes dichos preceptos - porque tienden a especificar y a hacer efectiva la presunción de inocencia-, deben interpretarse de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados la interpretación más favorable que permita una mejor impartición de justicia de conformidad con el numeral 1o. constitucional. Ahora bien, uno de los principios rectores del derecho, que debe ser aplicable en todos los procedimientos de cuyo resultado pudiera derivar alguna pena o sanción como resultado de la facultad punitiva del Estado, es el de presunción de inocencia como derecho fundamental de toda persona, aplicable y reconocible a quienes pudiesen estar sometidos a un procedimiento administrativo sancionador y, en consecuencia, soportar el poder correctivo del Estado, a través de autoridad competente. En ese sentido, el principio de presunción de inocencia es aplicable al procedimiento administrativo sancionador -con matices o modulaciones, según el caso- debido a su naturaleza gravosa, por la calidad de inocente de la persona que debe reconocérsele en todo procedimiento de cuyo resultado pudiera surgir una pena o sanción cuya consecuencia procesal, entre otras, es desplazar la carga de la prueba a la autoridad, en atención al derecho al debido proceso.”¹⁷⁶

De esta manera, si bien el procedimiento de responsabilidad administrativa tiene como finalidad salvaguardar los principios constitucionales de honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen el servicio público, no puede soslayarse que el mismo implica la materialización del poder coercitivo del Estado en perjuicio de una persona, quien puede ver mermados sus derechos como consecuencia de la sanción impuesta.

¹⁷⁶ Con datos de localización: [J]; 10a. Época; Pleno; Gaceta S.J.F.; Libro 7, Junio de 2014; Tomo I; Pág. 41. P./J. 43/2014 (10a.).

Así, lo anterior implica que, por un lado, las pruebas de cargo deben desvirtuar efectivamente la presunción de inocencia que existe en favor del servidor público imputado y, por otro, los medios probatorios de descargo no deben generar duda razonable sobre la probable culpabilidad de dicho servidor público, esto es, el juzgador debe cerciorarse de que ambas situaciones concurren.

Lo anterior encuentra apoyo en la tesis aislada pronunciada por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente:

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA. Para poder considerar que hay prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia, el juez debe cerciorarse de que las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia efectivamente alegada por la defensa en el juicio y, al mismo tiempo, en el caso de que existan, debe descartarse que las pruebas de descargo o contraindicios den lugar a una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora.”¹⁷⁷

En consecuencia, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que no existen elementos de convicción idóneos o pertinentes para demostrar la infracción a que se refiere el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 8, fracción III, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como la consecuente responsabilidad de *****, *****, *****, *****, y *****.

- (ii) **Indebido ejercicio del empleo, cargo o comisión, en virtud de la introducción y consumo de bebidas alcohólicas al interior de la Dirección General del Canal Judicial.**

¹⁷⁷ Datos de localización: [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 11, Octubre de 2014; Tomo I; Pág. 611. 1a. CCCXLVII/2014 (10a.).

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

La comisión de esta infracción fue atribuída a *****, *****, *****,
***** y *****, y la misma tiene su apoyo en el artículo 131, fracción XI,
en relación con el numeral 8, fracción I, de la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Por cuestión de método, será conveniente pronunciarse, en
primer lugar, sobre la conducta que le fue atribuida a *****, pues con
respecto a ella este Alto Tribunal advierte que existe confesión
expresa de su parte, en el sentido de haber ingresado a las
instalaciones de esta Suprema Corte con bebidas alcohólicas. He aquí
el texto expreso de su declaración rendida en la audiencia de
defensas, desahogada dentro del procedimiento disciplinario:¹⁷⁸

¹⁷⁸ Fojas 3502 y siguientes del expediente en el que se actúa.

PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015

3485

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

México, Ciudad de México, 30 de mayo de 2016.

Supuesto Fulle
2016 MAY 30 AM 10 10

Mediante este escrito, yo, Mario López Peña, Profesional Operativo adscrito a la Dirección General del Canal Judicial, con plena capacidad de facultades, quiero presentar de forma respetuosa a esta Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación algunos argumentos en mi defensa a propósito del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa que se inició en mi contra en el cuaderno de investigación C.I. 6/2015, por probablemente haber incurrido en la falta administrativa prevista en el artículo 131 fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con la obligación contenida en el artículo 8, fracción I de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

En la foja 21 de dicho cuaderno de investigación se me señala por probablemente haber determinado desatender las funciones que tenía encomendadas, por lo que habría incurrido en el indebido ejercicio de mi empleo. Se hace referencia a la introducción y consumo de bebidas alcohólicas como los elementos con los que se sustentaría la posible desatención al debido y eficiente ejercicio del cargo.

Sobre lo anterior quiero manifestar que en ninguno de los testimonios por los que se me incluye en esta investigación soy mencionado o referido por el consumo de bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones del Canal Judicial. Quiero subrayar que no hay elementos en este cuaderno de investigación que me señalen por consumo de alcohol. Insisto en este punto porque un apartado del C.I. 6/2015 remite a la INTRODUCCIÓN Y CONSUMO de bebidas alcohólicas (Foja 21), en conjuntivo y de forma genérica, como las bases para la desatención al debido y eficiente ejercicio del cargo; por tanto, no habría uno de los elementos para ligarme a las dos circunstancias que darían sustento a esta responsabilidad, pues nunca he consumido bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones de mi espacio laboral. Aquí cabe aclarar que el sentido de conjuntar la INTRODUCCIÓN Y CONSUMO de bebidas alcohólicas dentro del espacio laboral como motivos para sustentar la desatención al debido y eficiente ejercicio del cargo, es que para que se consuma en el espacio laboral (consumir la bebida alcohólica es el acto que provoca

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

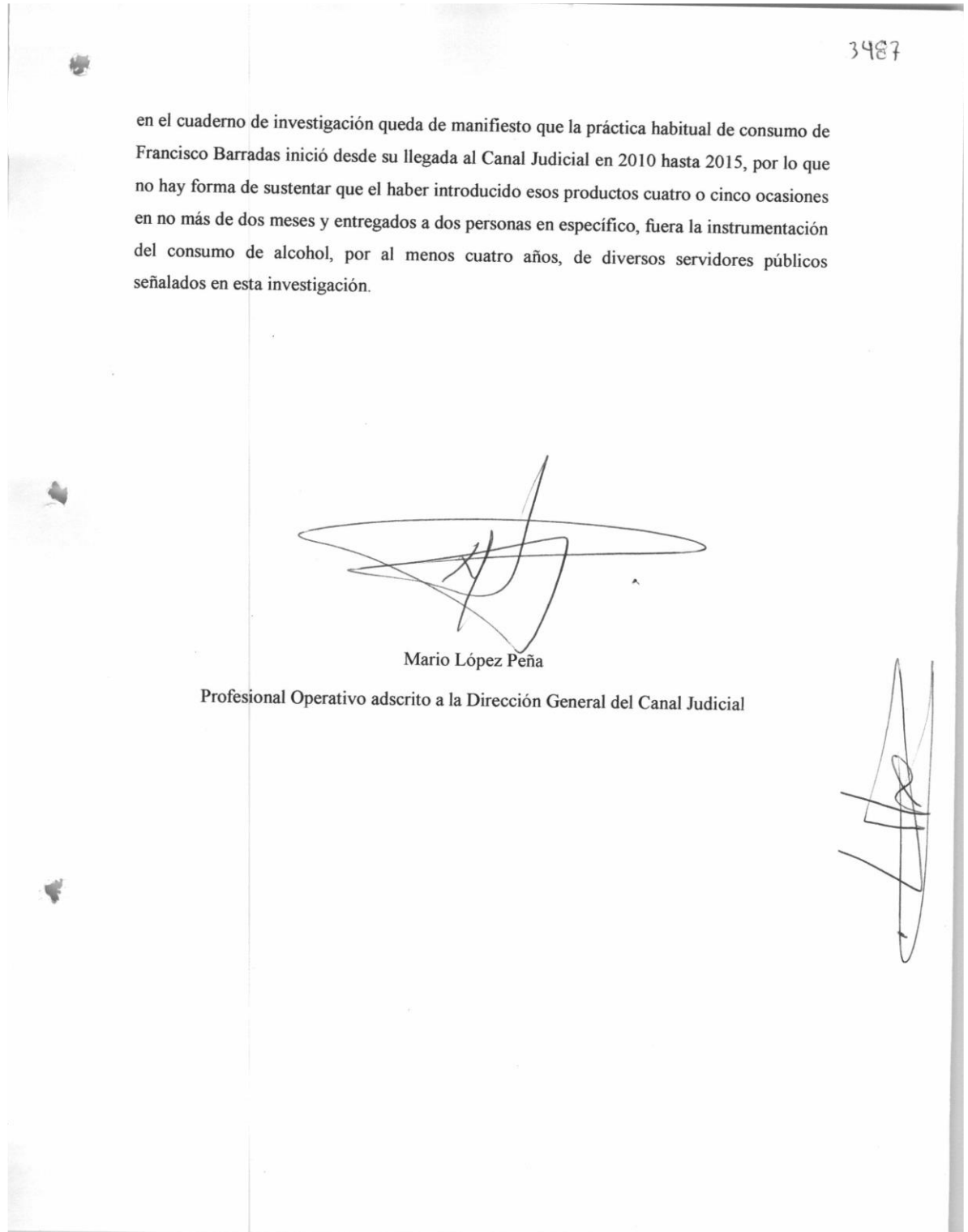
3486

materialmente la desatención y la ineficiencia del trabajo por los efectos que causa en el cuerpo la intoxicación por alcohol), se necesita de su introducción. A mí no se me señala por consumirlo, así, la formula INTRODUCCIÓN-CONSUMO no se adaptaría a mi caso.

A propósito de la introducción de bebidas, que es la razón por la que se me inició este procedimiento, manifiesto que los testimonios que me vinculan al mismo cuaderno son solamente los que yo manifesté voluntariamente en su momento, y los emití con la firme intención de contribuir a esta investigación. Quiero explicar que en dichos testimonios no aclaré cuales fueron los horarios en los que fui las cuatro o cinco ocasiones a comprar los productos que Francisco Barradas, mi superior jerárquico en ese momento, me ordenó; esos horarios coincidían con los momentos en los que yo tenía tiempo para ir a comer o una vez que había terminado las labores que tenía encomendadas. Esto lo manifiesto, porque en atención a lo descrito en la norma que establece la falta administrativa de la que se me responsabilizaría, es decir, la obligación contenida en el artículo 8, fracción I de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, no hubo acto que suspendiera o que causara la deficiencia en el trabajo como reportero que realizo en la Institución desde hace casi nueve años, sobre todo porque las condiciones laborales *de facto* en mi actividad como reportero, no contemplan un horario fijo. En ese sentido, manifiesto que nunca desatendí mi trabajo en el Canal Judicial para ir por dichos productos, ya que además, partiendo del principio de presunción de inocencia previsto en el artículo 20 de la Constitución General de la República y el 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, no hay testimonios o señalamientos en este cuaderno de investigación que prueben lo contrario.

En la foja 20 del mismo cuaderno se me señala como uno de los diversos agentes para instrumentar el consumo de alcohol de servidores públicos señalados en esta investigación con la introducción de botellas de bebidas alcohólicas. Sobre este señalamiento quiero reiterar lo que manifesté en los testimonios que rendí para contribuir a esta investigación: fueron cuatro o cinco veces las que fui a comprar esos productos por orden de mi superior jerárquico Francisco Barradas y se los entregué a él o a Alberto Villa dentro de las instalaciones, y con el desconocimiento inicial sobre el lugar donde las consumirían. Quiero explicar que esas cuatro o cinco ocasiones sucedieron en un lapso no mayor a dos meses, y

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**



Como se aprecia de la misma, el propio declarante reconoce de manera expresa, espontánea y libre de toda coacción, los siguientes hechos que le son propios: que durante un periodo de dos meses, acudió cuatro o cinco veces a comprar bebidas alcohólicas, fuera del horario de labores de este Alto Tribunal, y que se las entregaba a *****, o a *****, con el desconocimiento *inicial* del lugar donde las

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

consumirían. En las líneas finales de su comparecencia, reconoce que **introdujo** esos productos y busca exculparse de la infracción por la cual se inició el procedimiento de responsabilidades en su contra, que consiste en introducir bebidas alcohólicas a este Alto Tribunal.

Esta declaración reúne las condiciones de una verdadera confesión, ya que es una declaración que contiene la admisión de que determinados hechos propios son ciertos, la cual le vincula para efectos procesales y fue rendida durante la instrucción del procedimiento disciplinario que nos ocupa. En este punto, resulta aplicable el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual dispone que los hechos propios de las partes, aseverados en en cualquier acto del juicio (en este caso, del procedimiento administrativo), **harán prueba plena en contra de quien los asevere**, sin necesidad de ofrecerlos como prueba, en la inteligencia e que contra la confesión expresa de hechos propios no se admitirá, a la parte que la hubiere hecho, prueba de descargo ninguna clase, como lo dispone el artículo 123 del mismo ordenamiento procesal.

Por tanto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación declara que está acreditada la infracción cometida por *****, consistente en ingresar a la Dirección General del Canal Judicial de este Alto Tribunal con bebidas alcohólicas, la cual está prevista en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 8, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, sin que el servidor público confeso justifique de qué manera la conducta imputada se relaciona con las funciones de Profesional Operativo

perteneciente a la Dirección General del Canal Judicial en este Alto Tribunal, las cuales se describen en la hoja de control que expide la Secretaría Ejecutiva de Administración, Dirección General de Personal, y que son, a saber:¹⁷⁹

- Investigar y redactar el material informativo para utilizarse en los diferentes espacios noticiosos.
- Elaborar reportajes de los eventos.
- Elaborar guiones para los programas, avances y resúmenes informativos.
- Grabar notas, reportajes y cápsulas informativas.
- Dar seguimiento a la información para llevar una continuidad en los espacios.
- Realizar coberturas de acuerdo a las necesidades del área de noticias.
- Cubrir las sesiones de las señoras y señores Ministros tanto de sesiones públicas como privadas.
- Controlar la información de las coberturas.
- Analizar el manejo de la información generada en el Poder Judicial de la Federación

Por lo tanto, la conducta imputada y demostrada de manera plena, consistente en introducir bebidas alcohólicas a este Alto Tribunal, constituye una infracción al deber previsto en el artículo 8, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, consistente en “cumplir el servicio que le sea encomendado”, el cual no incluye la introducción de bebidas alcohólicas a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin la debida justificación.

¹⁷⁹ Foja 87 del cuaderno de pruebas 14 del procedimiento de responsabilidad administrativa en el que se actúa.

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

No es obstáculo para la conclusión anterior el contenido del escrito de defensas del servidor público mencionado, por las siguientes razones:

- a) La tipicidad de la conducta consistente en introducir bebidas alcohólicas a este Alto Tribunal no está vinculado de manera indisoluble con su ingesta en estas mismas instalaciones. En efecto, como quedó abordado en el estudio de tipicidad de esta ejecutoria, tanto la introducción como la ingesta de bebidas alcohólicas, cada una como conducta independiente, no están relacionados con el servicio que le está encomendado a un servidor público adscrito a este Tribunal Constitucional, por lo que constituyen por separado una infracción al deber previsto en el artículo 8, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, consistente en “cumplir el servicio que le sea encomendado”, así como abstenerse del “ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión”.
- b) Por otro lado, no se advierte de autos que la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hubiera decidido iniciar la investigación y el proceso disciplinario con motivo de una conducta dual, indisoluble e imputable a un mismo sujeto, consistente en introducir y consumir las bebidas con contenido alcohólico. Una interpretación lógica de los autos de cuatro de marzo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, permiten inferir que la Presidencia de este Alto Tribunal procuró investigar y brindar el derecho fundamental

de audiencia en beneficio de aquellos servidores públicos que infringieran el artículo 8, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y ello se puede actualizar con la introducción de bebidas alcohólicas o bien, con su consumo en este Alto Tribunal.

- c) El hecho de que el servidor público sostenga que ingresó a las instalaciones del Canal Judicial de esta Suprema Corte con las bebidas alcohólicas sin interferir en sus labores de reportero, no trae consigo una condición de atipicidad de la conducta, porque por un lado, no es la función de un reportero ingresar a este Alto Tribunal bebidas embriagantes y, por otro, no demostró que lo hiciera sin que comprometiera sus labores dentro del Canal Judicial
- d) Tampoco se produce la atipicidad con apoyo en la afirmación de que la conducta se llevaba a cabo por instrucciones de su superior jerárquico *****. Lo anterior, toda vez que el tipo administrativo no prevé alguna condición de atipicidad o antijuridicidad fundada en la mera instrucción de un superior.

En todo caso, cuando se abordó la problemática relacionada con la tipicidad de la conducta, se refirió que el ingreso de bebidas alcohólicas empaquetadas a este Alto Tribunal, por regla general, no está relacionado con la función de impartir justicia, de ahí que si las bebidas están cerradas será necesario demostrar de manera fehaciente que existía una justificación legal para su ingreso, lo cual no está acreditado en autos.

No obstante, las aseveraciones con las cuales el servidor público busca justificar su conducta podrán ser valoradas al momento de individualizar la sanción respectiva.

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

Bajo el mismo tamiz con el cual fue valorada la declaración de ***** debe analizarse la declaración de ***** , rendida durante la audiencia de defensas, dentro del procedimiento disciplinario que nos ocupa:¹⁸⁰

“Si en alguna ocasión se le pidió a algún subordinado que comprara alguna botella de contenido alcohólico, esto fue como un favor personal, fuera de su horario de oficina y con diversos motivos como para hacer un regalo, pagar una apuesta con mis compañeros de trabajo, o para ofrecer un presente propio con personas, que por mi trabajo de vinculación contribuían a optimizar y hacer aún más eficiente el desempeño de mis funciones.

(...) Respecto de la compra de bebidas alcohólicas, pues si bien es cierto que se lo solicité (a *****), como ya he afirmado, esto era un favor personal y fuera de su horario de trabajo, (.....) sino para ofrecerlas como regalo a las personas ajenas a la institución que facilitaban mi trabajo, tal y como se apuntó líneas más arriba.”

Como se advierte de la declaración anterior, ésta es coherente y concuerda con la que rindió ***** , quien refirió que ***** le giraba instrucciones para que comprara bebidas alcohólicas. En este sentido, este último servidor público reconoce expresamente que le dio instrucciones a sus subordinados para comprar bebidas alcohólicas, aunque la justificación que manejó era porque constituían un regalo en favor de *personas ajenas a la institución que facilitaban su trabajo* y que, además, esas instrucciones se giraron fuera del horario de labores. En este punto, se advierte que dentro de las funciones que en su momento se le encomendaron a ***** , en su carácter de Subdirector General adscrito al Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se encuentran las de adquirir bebidas alcohólicas, mucho menos con el objeto de “facilitar” su trabajo y, por ende, de instruir en ese sentido a sus subordinados. Lo anterior se

¹⁸⁰ Foja 3992 del expediente en el que se actúa.

acredita con la hoja de control que expidió la Secretaría Ejecutiva de Administración, Dirección General de Personal, en el cual se describen las funciones principales de esa plaza, que son:¹⁸¹

- Supervisión de la calidad de los contenidos editoriales de la barra de programación.
- Coordinación, gestión y supervisión del área de noticias planeando la cobertura de eventos, notas informativas, reportajes y entrevistas, tanto para la realización del programa informativo “Noticias del Poder Judicial de la Federación”, como para las demás solicitudes que hacen llegar al canal las distintas instancias del P.J.F.
- Coordinación con las áreas responsables de la Comunicación Social de SCJN, CJF y TEPJF, con respecto de los eventos de agenda informativa del Poder Judicial de la Federación.
- Planeación de encuestas tendientes a mejorar el posicionamiento del Canal.
- Gestión de las solicitudes que recibe el Canal para participar, como expositor, en eventos de diversa índole, jurídicos, universitarios, culturales, mediáticos.
- Atención y fomento de las relaciones institucionales con dependencias gubernamentales, organismos gremiales y agrupaciones privadas.

De este modo, el servidor público afirma que adquiriría las bebidas alcohólicas por conducto de ***** para hacer regalos, sin embargo, no especificó ni demostró de qué manera esa adquisición facilitaría las funciones antes enunciadas, o bien, si esos regalos

¹⁸¹ Foja 433 del Cuaderno de Pruebas I del procedimiento de responsabilidad administrativa en el que se actúa.

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

tendrían alguna relación con algún evento que estuviera a su cargo ejecutar o coordinar.

Por otro lado, no existe una condición de atipicidad o antijuridicidad de la conducta basada en el hecho de que la instrucción de adquirir bebidas alcohólicas se llevara a cabo fuera del horario de labores, pues la prestación del servicio público es continua o permanente, de ahí que sea irrelevante el horario para efectos de la tipicidad de la conducta; con independencia de que el servidor público imputado no demostró esa circunstancia de tiempo.

Ahora bien, la declaración de ***** reúne las condiciones de una verdadera confesión, ya que es una declaración que contiene la admisión de que determinados hechos propios son ciertos, la cual le vincula para efectos procesales y fue rendida durante la instrucción del procedimiento disciplinario que nos ocupa. En este punto, resulta aplicable el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual dispone que los hechos propios de las partes, aseverados en en cualquier acto del juicio (en este caso, del procedimiento administrativo), **harán prueba plena en contra de quien los asevere**, sin necesidad de ofrecerlos como prueba. Y por su parte, el artículo 123 del mismo ordenamiento procesal dispone que contra la confesión expresa de hechos propios no se admitirá, a la parte que la hubiere hecho, prueba de ninguna clase.

Por tanto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación declara que está acreditada la infracción cometida por ***** , consistente en ingresar bebidas alcohólicas a la Dirección General del Canal Judicial

de este Alto Tribunal, la cual está comprendida en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 8, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, pues si bien él no ejecutó materialmente la acción, sí giró instrucciones para que ésta se llevara a cabo, de ahí que sea considerado autor intelectual de la conducta. En adición, el servidor público confeso no justifica de qué manera sus instrucciones se relacionaban con las funciones que desempeñaba en este Alto Tribunal, por lo que su actuar se traduce en un abuso o ejercicio indebido de su empleo.

A continuación, es menester pronunciarse con respecto a la infracción y responsabilidad que se les imputa a ***** y *****, consistente en **ingerir** bebidas alcohólicas en las instalaciones de este Alto Tribunal, así como la de *****, ***** y *****, no sólo por **ingerir** bebidas alcohólicas, sino por **introducirlas** a la Dirección General del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como se señaló en el auto de inicio del procedimiento disciplinario respectivo.

Con respecto a este punto, se advierte que la Presidencia de este Alto Tribunal se apoyó en el siguiente material probatorio:

- Comparecencia de veintitrés de febrero de dos mil quince, a cargo de *****, en su carácter de Técnico Operativo adscrita a la Dirección General del Canal Judicial.
- Comparecencia de dos de marzo de dos mil quince, a cargo de *****, en su carácter de entonces Coordinador Administrativo adscrito a la Dirección General del Canal Judicial.

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

- Comparecencia de veintisiete de febrero de dos mil quince, a cargo de *****, en su carácter de Profesional Operativo adscrito a la Dirección General del Canal Judicial.
- Testimonial de trece de octubre de dos mil quince, a cargo de *****.
- Testimonial de catorce de octubre de dos mil quince, a cargo de *****.
- Testimonial de seis de noviembre de dos mil quince, a cargo de *****, como servidor adscrito a la Dirección General del Canal Judicial.¹⁸²
- Testimonial de dieciséis de octubre de dos mil quince, a cargo de *****, como Profesional Operativo perteneciente a la Dirección General del Canal Judicial.
- Copia certificada de la testimonial de catorce de enero de dos mil dieciséis, rendida por *****, en su carácter de Profesional Operativo adscrito al Canal Judicial, en el diverso cuaderno de investigación ***** (Fojas 2246 vuelta y 2247 del Tomo II).
- Comparecencia de veintisiete de febrero de dos mil quince, a cargo de *****, como talento de la Dirección General del Canal Judicial.
- Comparecencia de cuatro de marzo de dos mil quince, a cargo de *****, en su carácter de Técnico Operativo de la Dirección General del Canal Judicial.
- Comparecencia de veintitrés de febrero de dos mil quince, a cargo de *****, como servidor público adscrito al Canal Judicial.

¹⁸² Foja 2148 del expediente en el que se actúa.

- Testimonial de catorce de octubre de dos mil quince, a cargo de *****.
- Comparecencia de cuatro de marzo de dos mil quince, a cargo de *****.
- Impresión de dos fotografías exhibidas por *****, las cuales corresponden al personal del área de redacción de la Dirección del Canal Judicial, en la que se observa una botella de cerveza abierta de la marca “Superior” sobre una mesa.

Por cuestión de método, es menester conocer cuáles son los hechos denunciados por *****, ***** y *****, de veintitrés de febrero, dos de marzo y veintisiete de febrero de dos mil quince, respectivamente, ***** de veintisiete de febrero de dos mil quince; *****; ***** de veintitrés de febrero de dos mil quince y de *****, de cuatro de marzo de dos mil quince, con las cuales la Presidencia ordenó el inicio del procedimiento disciplinario que nos ocupa.

- **Comparecencia de veintitrés de febrero de dos mil quince, a cargo de *****, en su carácter de Técnico Operativo adscrita a la Dirección General del Canal Judicial:**

“(....) *****, pero él comenzó a fomentar el uso del alcohol en las oficinas de la redacción, ya que salía con una botella, nos ofrecía tequila y nos daba unos vasitos de unicel y nos servía. Afortunada o desafortunadamente yo no podía tomar vino porque tenía una gran colitis y gastritis por lo que había pasado con el aborto y sus consecuencias. Recuerdo que cuando él servía todos convivíamos, nos reíamos, platicábamos, por lo que en una ocasión se me ocurrió tomar unas fotografías, en las que salíamos los compañeros y en la misma aparece una botella de cerveza abierta (.....) El beber alcohol en la oficina de la redacción no era algo muy discreto, ya que nadie se escondía para beber. Para entrar a las oficinas del subdirector y del asesor jurídico, por la distribución del área tenían que pasar por la redacción, y era ese el momento en que cualquier persona que

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

pasara se daba cuenta que se ingerían bebidas alcohólicas en la oficina. (.....) el licenciado *****, quien también ingería alcohol en la redacción (....)”

- **Comparecencia de dos de marzo de dos mil quince, a cargo de *****, en su carácter de entonces Coordinador Administrativo adscrito a la Dirección General del Canal Judicial.**

“(...) Recuerdo que en una ocasión, mientras se transmitía el pasado mundial de Sudáfrica, en dos mil diez, en la oficina de la Dirección General, ***** bebía whisky con ***** y posteriormente, también ingería alcohol con ***** cuando éste ingresó al Canal Judicial. (...)

- **Comparecencia de veintisiete de febrero de dos mil quince, a cargo de *****, en su carácter de Profesional Operativo adscrito a la Dirección General del Canal Judicial.**

(...) “***** (.....) prácticamente llegaba diario a la oficina (.....9 en estado de ebriedad, lo que llamamos “crudo”, (.....) ***** llegaba ebrio a la oficina y comenzaba a beber, traía un vaso con hielo y se servía alcohol o bien consumía cerveza, de lo que me percaté porque en dos ocasiones; una, más o menos un mes después de que llegó ***** , aproximadamente en dos mil diez, dio la orden a unos compañeros para comprar cervezas, no recuerdo quiénes eran, cuando llegaron, él cerró la puerta de la oficina e instruyó que sirvieran cerveza y alcohol, sin poder establecer de qué tipo, a todo el personal que estaba allí, alcancé a ver que algunos tomaban la cerveza por temor, ignorando si la bebían o no, en esa ocasión, cuando me iban a dar un vaso de cerveza no acepté, pero advertí que ***** estaba en la puerta viendo quien aceptaba y quien no, cuando yo no acepté, ***** me dijo “no, ¿cómo no? sírvele”, yo reiteré que yo no quería y esa actitud mía la tomó como un desafío pues inmediatamente noté su molestia, situación que se repitió en otra ocasión, unos días después, en términos similares, e igual me negué a consumir alcohol y de ahí comenzaron los problemas” Quiero precisar que en una de esas cosaciones, ***** solicitó que nos tomáramos una foto, creo que ***** tomó esa foto, la cual se subió a “Facebook”, no recuerdo con precisión pero al parecer fue en la

cuenta de *****, en ella aparecíamos todos los que estábamos en la oficina y al frente ***** con el rostro en evidente estado de ebriedad, además, se apreciaba una o varias cervezas sobre una mesa larga y después de que se dieron cuenta la borraron.(...) [foja 197 vuelta y 198].

- **Comparecencia de veintisiete de febrero de dos mil quince, a cargo de *****, como talento de la Dirección General del Canal Judicial.**

“(...) A propósito de ello, quiero comentar que la única vez que acudí a la oficina del citado *****, éste me recibió con los pies encima del escritorio y con su oficina oliendo a alcohol, incluso sé que le dicen “El *****” (...).”

- **Comparecencia de cuatro de marzo de dos mil quince, a cargo de *****, en su carácter de Técnico Operativo de la Dirección General del Canal Judicial.**

(...)“En una ocasión, sin recordar la fecha exacta, alrededor de las nueve o nueve y media de la noche, una vez que concluyó el noticiero, entré a la oficina de ***** para preguntarle a qué hora sería mi llamado, ya que mi jefe ***** no se encontraba, y advertí que estaba jugando dominó con ***** y algunos otros de quien no recuerdo su nombre, y tenían una botella de alcohol en el escritorio de ***** y servido un vaso, sin poder especificar algún elemento adicional, pero lo que sí recuerdo es que trascendía a ese olor característico del alcohol. No recuerdo bien la fecha, pero esa práctica era continua y frecuente, es decir, formaba parte de lo cotidiano” (...) [foja 384 vuelta].

- **Comparecencia de veintitrés de febrero de dos mil quince, a cargo de *****, como servidor público adscrito al Canal Judicial.**

(...) “en horario laboral ***** organizaba torneos de play station o dominó en su oficina y en éstos algunas veces participaban ***** (sic), ***** , todos son mis compañeros del Canal Judicial, ellos podían jugar toda la tarde, quiero señalar que los que acabo de mencionar muchas veces llegaban alcoholizados, pues veía como hablaban, se conducían y además olían a alcohol, desde hace como seis años

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

empezaron a ver muchas anomalías en el canal judicial” (...) [fojas 53 y vuelta].

- **Comparecencia de cuatro de marzo de dos mil quince, a cargo de *****.**

“(...) ”

4. Respecto del párrafo sexto de la página cinco, en cuanto a que ***** llegaba en estado de ebriedad y con aliento alcohólico, no recuerdo fechas exactas, pero sucedió varias veces, además de que en una ocasión lastimó a un compañero del cual en este momento no quiero mencionar su nombre, por la misma razón de que actualmente sigue laborando en el canal judicial. En esas ocasiones que llegaba “tomado”, también éramos objeto de insultos por parte de *****.

“(...) ”

También, percibí que llegaban en estado de ebriedad, ***** de forma recurrente y ***** , recuerdo que lo hizo en una ocasión, específicamente el jueves diecisiete de junio después del partido de México contra Francia, momento en que nos abrazó y dijo “disfrútenlo”, refiriéndose a la victoria de México en dicho partido.”

Estas comparecencias o declaraciones, salvo las de ***** y ***** , ambas de fecha cuatro de marzo de dos mil quince, dieron lugar al inicio de la investigación respectiva, por “cualquier acto” que no implicara conducirse con buena conducta en el centro laboral, o bien, se tradujeran en el incumplimiento del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Ahora bien, como quedó referido en los antecedentes, las dos últimas comparecencias -las de ***** y ***** , ambas de fecha cuatro de marzo de dos mil quince- no deberán considerarse para efectos de resolver en el presente procedimiento.

En efecto, **los hechos sobre los cuales se fijó la materia de la investigación, no incluyen los denunciados por tales servidores públicos**, pues las dos comparecencias antes referidas **se rindieron**

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

con posterioridad a que se dictara el auto de inicio de la investigación, aunque tanto las declaraciones como el auto son de la misma fecha. Lo anterior se constata con la revisión de los autos, el auto de cinco de marzo de dos mil quince, en donde se incorporan, como hecho notorio, las dos comparecencias antes mencionadas y, en particular, de la lectura del cuadro de hechos con apoyo en los cuales se inició la indagatoria, los cuales, para mayor claridad, se transcriben de nueva cuenta:

No.	NOMBRE	PUESTO	RESEÑA DE HECHOS DECLARADOS	FECHA DE LA QUEJA
1.	*****	Jefa de departamento	Malos tratos y cargas de trabajo inequitativas.	19-Febrero y 2-Marzo-2015
2.	*****	Ex servidora pública de la Dirección General del Canal Judicial	***** (quien fungía como subdirector general) le envió, vía telefónica, mensajes y fotografías donde él aparece desnudo.	20-Febrero-2015
3.	*****	Camarógrafo	***** organizaba en su oficina y dentro del horario laboral, torneos de Play Station o dominó, a veces también llegaba alcoholizado y hablaba con groserías. ***** y ***** organizaban con los camarógrafos o personal de producción un juego llamado “el manto sagrado”, en el que golpeaban a una persona a la que cubrían con una manta. ***** no le daba facilidades de horario, ni respetaba su jornada de ocho horas a pesar de que tiene problemas de salud.	23-Febrero-2015

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

4.	*****	Técnico operativo	<p>***** habla con gritos y groserías.</p> <p>Trato desigual porque sólo él checa su entrada.</p> <p>En las instalaciones del Canal Judicial, ***** se drogaba y ***** ingería bebidas alcohólicas, lo cual comunicó al Director General y a partir de entonces los dos servidores públicos, quienes eran los jefes de su esposa ***** , la acosaron y aislaron laboralmente, porque le dejaron de hablar.</p>	23-Febrero-2015
5.	*****	Técnico Operativo	<p>El Director General del Canal Judicial no le otorga aumento de sueldo como camarógrafo, a pesar de que realiza esa función y afirma que “a trabajos iguales, salarios iguales”.</p> <p>***** habla mal del personal y los pone a unos contra los otros.</p>	23-Febrero-2015
6.	*****	Técnica Operativo	<p>Hostigada por ***** , quien la exhibe públicamente por los errores de redacción.</p> <p>***** les invita bebidas alcohólicas en la oficina, lo cual era solapado por el Director General.</p> <p>***** le negó, supuestamente por su trabajo deficiente, aumento salarial o compensación por la jornada nocturna, lo cual solicitó por los gastos de transporte que tenía que hacer para llevar su hija al CENDI.</p> <p>***** la agrede, intimida y aísla.</p>	23-Febrero y 26 Febrero - 2015
7	*****	Técnico Operativo	<p>Durante cuatro años ha sido acosado por ***** y ***** , este último organizaba un juego llamado “manto sagrado” y juegos sexuales consistentes en agarrarle al personal a su cargo las nalgas y el pene.</p> <p>***** le agarraba las nalgas, incluso delante de ***** .</p> <p>***** le pedía información de sus compañeros ***** y ***** .</p>	24-Febrero-2015
8	*****	Técnico Operativo	<p>El bono discrecional de fin de año se otorga con “parcialidad” y se queja del monto que le ha sido asignado, de la duración de su jornada de trabajo, pero dice que acude a trabajar, de manera voluntaria, los días sábados.</p>	24-Febrero-2015

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

9	*****	Técnico Operativo	<p>***** le asignó mayor trabajo como asistente de cámaras y estaba a cargo de los vehículos. En general a quienes no formaban parte de su equipo les asignaban más trabajo. El director general comenzó a meter a trabajar a su gente, a familiares y amigos.</p> <p>***** le dijo que su hijo ***** tenía que trabajar más por lo que dejaba de hacer.</p> <p>Refiere haber tenido un accidente automovilístico de trabajo y que al reincorporarse se le asignaron las mismas labores a pesar de que no podía caminar bien.</p>	26-Febrero y 27-Febrero-2015
10	*****	Ex servidor público de la Dirección General del Canal Judicial	<p>***** le comentó que habían mandado al correo institucional unas fotografías donde estaba desnudo con una mujer, por lo que con ese argumento le cambiaron funciones y posteriormente, le pidió su renuncia.</p> <p>Dijo que el Director General es primo de *****.</p> <p>En el Canal Judicial se organiza un juego en el que se usa una cortina negra con la que tapan a una persona y lo golpeaban, participan en él ***** , ***** , ***** , *****y el “*****”, del que no recuerda su nombre. ***** se llevaba a “mentadas con los camarógrafos”, se agarraban las “nalgas”, “penes” y “testículos”.</p> <p>Refiere que en una ocasión ***** llegó en estado de ebriedad y personal de seguridad lo detuvo.</p>	26-Febrero-2015
11	*****	“Talento del noticiero de la noche del Canal Judicial”	<p>***** trata al personal con gritos y groserías, a ***** la humillaba diciéndole que era una “basura”.</p> <p>Ella y ***** desarrollaron una campaña de derechos constitucionales en lenguas indígenas, cuando salió al aire, en los subtítulos aparecían ellos como los creadores de la idea original, y ***** le comunicó que ***** le pidió que se modificara los créditos para que apareciera que la idea original era de dicho Director General.</p> <p>Refiere que para elaborar un programa de “arquitectura parlamentaria”, a invitación del Secretario de Educación Pública, en recursos humanos se le informó que tenía derecho a una suspensión de su contrato, lo cual fue por un mes y a su reingresó el Director General del Canal Judicial le dijo que la cambiaría al noticiero de la mañana, lo cual le afectaba porque trabajaba en TVUNAM y el propio director de recursos humanos le comentó que ***** le pidió buscara la manera de despedirla.</p>	27-Febrero-2015

PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015

12	*****	Reportero	***** desde que llegó al Canal Judicial casi diario llegaba en estado de ebriedad, lo que se llama crudo, consumía bebidas alcohólicas y cerveza en la oficina, incluso lo hizo con compañeros de la oficina. ***** tomó una foto en una ocasión en que estaban bebiendo y la publicó en Facebook, aparecían unas cervezas en la foto. Lo acusaba con el Director General de no trabajar, quien le reclamó esa situación y le dijo que iba a tomar medidas más drásticas	27-Febrero-2015
13	*****	Coordinador Administrativo	<p>El Director General maltrataba al personal, les decía “pendejos”, “inútiles”, tenía un trato humillante; se refería a las mujeres como “putas”, le llegó a decir “llámale a la puta de *****”.</p> <p>En dos mil diez, durante la transmisión del mundial de Sudáfrica, el Director General ingirió Whisky con ***** y que también tomaba alcohol con *****.</p> <p>***** contrató por honorarios a su novia y a su cuñada de nombres *****. Vio que esta última le aventaba papeles a ***** y le hablaba de forma grosera.</p> <p>***** incluyó en el seguro de gastos médicos a su concubina *****.</p> <p>En el área de producción a cargo de ***** se practicaba una actividad llamada “el manto sagrado”, incluso se hacía en los cumpleaños, en la cual se cubría a una persona con una sábana o cualquier ropa y la tocaban y golpeaban, incluso en sus partes íntimas, el Director General llegaba a participar en los golpes o empujones.</p> <p>Era una práctica recurrente entre los directivos como ***** , ***** y ***** abrazarse y tocarse las nalgas y penes.</p> <p>En ocasiones ***** se subía en sus compañeros y simulaba tener relaciones sexuales con ellos.</p> <p>Cuando se referían a las mujeres decían “oye esa vieja está bien buena”, “ya viste como viene”, “mándame a esa puta”, “dile que baje esa pendeja”. “esa vieja tiene guano en la cabeza”.</p> <p>***** y su equipo veían pornografía en páginas de internet en los equipos de cómputo de la Corte.</p> <p>En la oficina de ***** jugaban él y su equipo <i>Play Station</i> durante la jornada de trabajo.</p> <p>En la oficina de ***** era común el consumo de alcohol, por lo regular tequila, situación que sabía y permitía el Director General.</p> <p>***** , por las tardes llegaba con aliento alcohólico.</p> <p>Había cargas de trabajo son inequitativas</p>	2-Marzo-2015

Como ya se dejó asentado en considerandos anteriores, el artículo 30-B del Acuerdo General 9/2005 dispone que el auto que ordena **la investigación** deberá expresar las circunstancias que la justifiquen, **sin extenderse a hechos distintos a los señalados en dicho acuerdo.**

Se advierte que la razón lógica de esa disposición, es que cuando se inicia una investigación **ya se cuenta con suficientes datos de hecho para justificarla** y sólo se requiere recabar pruebas para sustentar las denuncias, como lo dispone el artículo 32, último párrafo, del Acuerdo General 9/2005.¹⁸³ De ahí que si se dicta un auto de inicio de investigación ya no es necesario continuar recibiendo más comparecencias, denuncias o quejas y menos aún, recabar material probatorio para sustentarlas. De otro modo, el procedimiento de investigación se tornaría arbitrario y sería inútil toda motivación que se hubiere dado en el auto de inicio de la investigación para llevarla a cabo, lo cual trastocaría los principios de legalidad, debido procedimiento y seguridad jurídica.

Ahora bien, de la revisión de autos se advierte que una vez dictado el auto de inicio de investigación de cuatro de marzo de dos mil quince, se siguieron recibiendo comparecencias de otros servidores públicos, como las de ***** y ***** antes referidas, quienes aluden acontecimientos que si bien tienen relación con la introducción e ingesta de bebidas alcohólicas al recinto del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no son eventos concretos, sujetos a ciertas circunstancias de tiempo, modo y lugar, que deban

¹⁸³ “Artículo 30.- (....)

Si la queja o denuncia no reúne los elementos suficientes para establecer la existencia de una conducta infractora y la probable responsabilidad de algún servidor público, se desechará y se integrará el cuaderno auxiliar correspondiente, **sin menoscabo de que se ordene, de oficio, iniciar cuaderno de investigación a fin de allegarse de elementos de convicción que acrediten la conducta infractora y la probable responsabilidad de algún servidor público de la Suprema Corte.**
(...)”

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

ser investigados en términos del citado artículo 30 B del Acuerdo General 9/2005, so pena de violar las reglas del debido procedimiento. Por esa razón, no serán consideradas como parte de la litis las dos comparecencias a las que se ha hecho referencia.

Ahora bien, los hechos a los cuales se refieren las restantes comparecencias deberán ser acreditados con los respectivos medios de prueba, cuya práctica ordenó en su oportunidad el Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Dichos medios de prueba son las testimoniales desahogadas por ***** el trece de octubre de dos mil quince, a cargo de ***** el día catorce de octubre de dos mil quince, ***** el seis de noviembre de dos mil quince, ***** el dieciséis de octubre de dos mil quince y ***** el catorce de octubre de dos mil quince.

Sin embargo, antes de proceder al análisis de su contenido y valor probatorio, es menester determinar si reúnen los requisitos y formalidades a los que se refiere el artículo 176 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual, por su importancia, conviene reiterar a continuación:

Artículo 176.- Después de tomarse, al testigo, la protesta de conducirse con verdad, y de advertirlo de las penas en que incurre el que se produce con falsedad, se hará constar su nombre, edad, estado, lugar de residencia, ocupación, domicilio, si es pariente consanguíneo o afín de alguno de los litigantes, y en qué grado; si tiene interés directo en el pleito o en otro semejante, y si es amigo íntimo o enemigo de alguna de las partes. A continuación, se procederá al examen.

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

De la revisión íntegra de las testimoniales de mérito se advierte que no reúnen las formalidades a las que se refiere el artículo antes transcrito. Para ello, conviene transcribir la primera parte del acta en la que se hace constar el desahogo de cada una de ellas:

A.- ***.**

“En México, Distrito Federal, siendo las doce horas con cincuenta y cinco minutos del trece de octubre de dos mil quince, en las oficinas que ocupa la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial de la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicadas en calle Dieciséis de Septiembre, número treinta y ocho, quinto piso, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad, ante la maestra ***** Subdirectora General del Responsabilidades Administrativas, y las testigos de asistencia, maestra ***** y licenciada ***** dictaminadoras II, todas con adscripción a dicha dirección general, en cumplimiento de lo ordenado en proveído de veintiuno de septiembre de dos mil quince, dictado en el cuaderno de investigación *****, hace constar que se encuentra presente *****, quien previamente quedó identificado en diversa acta del día de hoy y de cuya credencial se obtiene copia simple para agregarla a esta acta; lo anterior, a efecto de recabar su declaración como testigo en torno a hechos que se investigan en el expediente citado.

Acto seguido, se protesta a *****, para que se conduzca con verdad en esta diligencia y se le hace saber las penas a las que se pueden hacer acreedores aquéllos que se conducen con falsedad ante una autoridad distinta de la judicial, en términos de los artículos 247, fracción I, del Código Penal Federal y 23 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que se leen y se transcriben en la parte que interesa:

“Artículo 247.- Se impondrá de cuatro a ocho años de prisión y de cien a trescientos días multa:

I. Al que interrogado por alguna autoridad pública distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad”.

“Artículo 23.- Se levantará acta circunstanciada de todas las diligencias que se practiquen, teniendo la obligación de suscribirla quienes intervengan en ella, si se negaren a hacerlo se asentará dicha circunstancia en el acta. Asimismo, se les apercibirá de las penas en que incurrir quienes falten a la verdad”.

Hecho lo anterior, ***** manifiesta: “sí protesto conducirme con verdad”. Refirió llamarse como ha quedado escrito, de cuarenta y

PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 6/2015

tres años de edad, estado civil casado, con domicilio en *****, con último grado de estudios licenciatura en comunicación y periodismo.

Acto seguido se le informa a ***** que es requerido en calidad de testigo, en términos de lo dispuesto en el artículo 165 del Código Federal de Procedimientos Civiles, para que emita su declaración en relación con los hechos anteriormente referidos, precepto que señala:

“Artículo 165. Todos los que tengan conocimiento de los hechos que las partes deben probar, están obligados a declarar como testigos”.

En este momento, personal de la Contraloría da lectura a *****, un fragmento de la comparecencia de ***** de diecinueve de febrero de dos mil quince, en la que refirió: (....)”

B. **.**

“En México, Distrito Federal, siendo las diez horas con veinte minutos del catorce de octubre de dos mil quince, en las oficinas que ocupa la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial de la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicadas en calle Dieciséis de Septiembre, número treinta y ocho, quinto piso, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad, la maestra ***** Subdirectora General del Responsabilidades Administrativas, y las testigos de asistencia, maestra *****, y licenciada *****, dictaminadoras II, todas con adscripción a dicha dirección general, en cumplimiento de lo ordenado en proveído de veintiuno de septiembre de dos mil quince, dictado en el cuaderno de investigación *****, hace constar que se encuentra presente *****, quien previamente quedó identificado en diversa acta del día de hoy. Lo anterior, a efecto de recabar su declaración como testigo en torno a hechos que se investigan en el expediente citado.

Acto seguido, se protesta a *****, para que se conduzca con verdad en esta diligencia y se le hace saber las penas a las que se pueden hacer acreedores aquéllos que se conducen con falsedad ante una autoridad distinta de la judicial, en términos de los artículos 247, fracción I, del Código Penal Federal y 23 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que se leen y se transcriben en la parte que interesa:

“Artículo 247.- Se impondrá de cuatro a ocho años de prisión y de cien a trescientos días multa:

I. Al que interrogado por alguna autoridad pública distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad”.

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

“Artículo 23.- Se levantará acta circunstanciada de todas las diligencias que se practiquen, teniendo la obligación de suscribirla quienes intervengan en ella, si se negaren a hacerlo se asentará dicha circunstancia en el acta. Asimismo, se les apercibirá de las penas en que incurrirán quienes falten a la verdad”.

También se le hace de conocimiento el contenido del artículo 165 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia de responsabilidades, que establece:

“Artículo 165. Todos los que tengan conocimiento de los hechos que las partes deben probar, están obligados a declarar como testigos”.

Hecho lo anterior, ***** manifiesta: “sí protesto conducirme con verdad”. Refirió llamarse como ha quedado escrito, de treinta y nueve años de edad, estado civil soltero, con domicilio en ***** , con último grado de estudios licenciatura trunca en administración de empresas.

En este momento, se hace del conocimiento de ***** , cuales son los hechos por los que se le llamó a declarar como testigo en este cuaderno de investigación, (...)”

C.- ***.**

En México, Distrito Federal, siendo las doce horas del seis de noviembre de dos mil quince, en las oficinas que ocupa la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial de la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sito en el edificio Alterno ubicado en avenida 16 de Septiembre número 38 (treinta y ocho), quinto piso, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, en el Distrito Federal, ante el licenciado Óscar Carranco Espinosa dictaminador I, y los testigos de asistencia, licenciados ***** y ***** , dictaminadora II y profesional operativo, respectivamente, quienes intervienen de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Acuerdo General Plenario 9/2005, todos adscritos a la dirección general indicada, se encuentra presente el testigo ***** , quien se identifica con credencial emitida por el Instituto Nacional Electoral, con clave de elector ***** , la cual contiene una fotografía que coincide con sus rasgos fisonómicos, documento del que se obtiene copia fotostática simple para que corra agregada a los autos y una vez recabada en este acto se le devuelve su original. Lo anterior a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil quince, dictado en el cuaderno de investigación ***** , a efecto de recabar su declaración como testigo.

Acto seguido, se protesta a ***** , para que se conduzca con verdad en esta diligencia y se le hace saber las penas a las que se pueden hacer acreedores aquéllos que se conducen con falsedad ante una autoridad distinta de la judicial, en términos de los artículos 247, fracción I, del Código Penal Federal y 23 de la Ley Federal de

PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 6/2015

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que se leen y se transcriben en la parte que interesa:

“Artículo 247.- Se impondrá de cuatro a ocho años de prisión y de cien a trescientos días multa:

I. Al que interrogado por alguna autoridad pública distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad”.

“Artículo 23.- Se levantará acta circunstanciada de todas las diligencias que se practiquen, teniendo la obligación de suscribirla quienes intervengan en ella, si se negaren a hacerlo se asentará dicha circunstancia en el acta. Asimismo, se les apercibirá de las penas en que incurrirán quienes falten a la verdad”.

Hecho lo anterior, ***** manifiesta: “sí protesto conducirme con verdad”. Refirió llamarse como ha quedado escrito, de cincuenta y dos años de edad, estado civil casado, con domicilio en *****, de profesión camarógrafo en el Canal Judicial, con último grado de estudio preparatoria trunca.

Acto seguido se le informa a ***** que es requerido en calidad de testigo, en términos de lo dispuesto en el artículo 165 del Código Federal de Procedimientos Civiles, para que emita su declaración en relación con los hechos que a continuación le serán referidos, precepto que señala:

“Artículo 165. Todos los que tengan conocimiento de los hechos que las partes deben probar, están obligados a declarar como testigos”.

En este momento, se hace de conocimiento a *****, cuales son los hechos por los que se le llamó a declarar como testigo en este cuaderno de investigación, por lo que se da lectura del fragmento de la comparecencia de ***** de veintisiete de febrero de dos mil quince, en la que señaló: (...)”

D.- ***:**

En México, Distrito Federal, siendo las once horas con treinta minutos del dieciséis de octubre de dos mil quince, en las oficinas que ocupa la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial de la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicadas en calle Dieciséis de Septiembre, número treinta y ocho, quinto piso, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad, la maestra ***** Subdirectora General del Responsabilidades Administrativas, y los testigos de asistencia, maestra *****, y licenciada *****,

PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 6/2015

dictaminadoras II, todas con adscripción a dicha dirección general, en cumplimiento de lo ordenado en proveído de veintiuno de septiembre de dos mil quince, dictado en el cuaderno de investigación *****, hace constar que se encuentra presente *****, quien previamente quedó identificado en diversa acta del día de hoy. Lo anterior, a efecto de recabar su declaración como testigo en torno a hechos que se investigan en el expediente citado.

Acto seguido, se protesta a *****, para que se conduzca con verdad en esta diligencia y se le hace saber las penas a las que se pueden hacer acreedores aquéllos que se conducen con falsedad ante una autoridad distinta de la judicial, en términos de los artículos 247, fracción I, del Código Penal Federal y 23 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que se leen y se transcriben en la parte que interesa:

“Artículo 247.- Se impondrá de cuatro a ocho años de prisión y de cien a trescientos días multa:

I. Al que interrogado por alguna autoridad pública distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad”.

“Artículo 23.- Se levantará acta circunstanciada de todas las diligencias que se practiquen, teniendo la obligación de suscribirla quienes intervengan en ella, si se negaren a hacerlo se asentará dicha circunstancia en el acta. Asimismo, se les apercibirá de las penas en que incurrirán quienes falten a la verdad”.

También se le hace de conocimiento el contenido del artículo 165 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia de responsabilidades, que establece:

“Artículo 165. Todos los que tengan conocimiento de los hechos que las partes deben probar, están obligados a declarar como testigos”.

Hecho lo anterior, ***** manifiesta: “sí protesto conducirme con verdad”. Refirió llamarse como ha quedado escrito, de treinta años de edad, estado civil soltero, con domicilio en *****, ocupación periodista, con último grado de estudios licenciatura en periodismo.

En este momento, se hace del conocimiento de *****, cuales son los hechos por los que se le llamó a declarar como testigo en este cuaderno de investigación, para lo cual se lee un fragmento de la comparecencia de *****, de cuatro de marzo de dos mil quince, en la que señaló: (...)”

E.- ***:**

“En México, Distrito Federal, siendo las nueve horas con treinta y cinco minutos del catorce de octubre de dos mil quince, en las oficinas que ocupa la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial de la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicadas en calle Dieciséis

PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 6/2015

de Septiembre, número treinta y ocho, quinto piso, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad, la maestra ***** Subdirectora General del Responsabilidades Administrativas, y las testigos de asistencia, maestra ***** dictaminadoras II, todas con adscripción a dicha dirección general, en cumplimiento de lo ordenado en proveído de veintiuno de septiembre de dos mil quince, dictado en el cuaderno de investigación *****, hace constar que se encuentra presente *****, quien previamente quedó identificado en diversa acta del día de hoy. Lo anterior, a efecto de recabar su declaración como testigo en torno a hechos que se investigan en el expediente citado.

Acto seguido, se protesta a *****, para que se conduzca con verdad en esta diligencia y se le hace saber las penas a las que se pueden hacer acreedores aquéllos que se conducen con falsedad ante una autoridad distinta de la judicial, en términos de los artículos 247, fracción I, del Código Penal Federal y 23 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que se leen y se transcriben en la parte que interesa:

“Artículo 247.- Se impondrá de cuatro a ocho años de prisión y de cien a trescientos días multa:

I. Al que interrogado por alguna autoridad pública distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad”.

“Artículo 23.- Se levantará acta circunstanciada de todas las diligencias que se practiquen, teniendo la obligación de suscribirla quienes intervengan en ella, si se negaren a hacerlo se asentará dicha circunstancia en el acta. Asimismo, se les apercibirá de las penas en que incurrirán quienes falten a la verdad”.

También se le hace de conocimiento el contenido del artículo 165 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia de responsabilidades, que establece:

“Artículo 165. Todos los que tengan conocimiento de los hechos que las partes deben probar, están obligados a declarar como testigos”.

Hecho lo anterior, ***** manifiesta: “sí protesto conducirme con verdad”. Refirió llamarse como ha quedado escrito, de cincuenta y cinco años de edad, estado civil casado, con domicilio en *****, con último grado de estudios preparatoria.

En este momento, se hace del conocimiento de *****, cuales son los hechos por los que se le llamó a declarar como testigo en este cuaderno de investigación, para lo cual se transcribe un fragmento de

la comparecencia de ***** de veinticuatro de febrero de dos mil quince, en la que señaló: (....)”

Como ya quedó explicado en páginas precedentes, es esencial que los testigos manifiesten que guardan completa independencia e imparcialidad con respecto a los hechos y a la persona contra la cual deberán atestiguar. La exigencia a la que se refiere el artículo 176 del código procesal citado no es innecesaria, pues dada la naturaleza e importancia de la prueba testimonial, es menester asegurar que los hechos sobre los cuales se declarará estén lo más apegados posible a criterios de objetividad y veracidad. En un considerando anterior quedaron evidenciadas las dificultades que entraña la prueba testimonial, en el sentido de que ésta depende de la apreciación de los hechos que tiene cada persona y su facilidad de expresarlos adecuadamente, además de que, en muchas ocasiones, no se cuenta con otros elementos para probar determinados sucesos, de tal manera que la doctrina sostiene que la prueba testimonial ha sido revestida, inclusive, de cierta solemnidad.

Bajo esta óptica es que debe entenderse la previsión contenida en el diverso artículo 198 de la misma codificación procesal, el cual dispone, de manera categórica, que **no tendrán valor legal alguno las pruebas rendidas con infracción de lo dispuesto en los artículos precedentes del Título Cuarto**, en este caso, del artículo 176 del mismo ordenamiento legal, de ahí que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en respeto al principio de legalidad y del debido proceso, concluya que las testimoniales recabadas durante la investigación, en las cuales se sustenta el auto de inicio del procedimiento disciplinario, carecen de valor legal para incriminar a los servidores públicos a los cuales se refiere este apartado.

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

Por identidad de razones, resulta aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que este Tribunal Pleno comparte, que es del siguiente tenor:

“PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. SUPUESTOS EN QUE DEBE NULIFICARSE SU EFICACIA.” **La eficacia de las pruebas en el procedimiento penal debe nulificarse en los casos en que la norma transgredida establezca:** (i) garantías procesales, (ii) **la forma en que se practica la diligencia**, o bien, (iii) derechos sustantivos en favor de la persona. Por su parte, las pruebas derivadas (aunque lícitas en sí mismas) deben anularse cuando aquellas de las que son fruto resultan inconstitucionales. Así, los medios de prueba que deriven de la vulneración de derechos fundamentales no deben tener eficacia probatoria, pues de lo contrario se trastocaría la garantía de presunción de inocencia, la cual implica que nadie puede ser condenado si no se comprueba plenamente el delito que se le imputa y la responsabilidad penal en su comisión, circunstancia que necesariamente implica que las pruebas con las cuales se acreditan tales extremos, deben haber sido obtenidas lícitamente.¹⁸⁴

No es obstáculo para lo anterior el hecho de que el artículo 186 del Código Federal de Procedimientos Civiles prevea el derecho de las partes de atacar el dicho de un testigo cuando, por cualquier circunstancia, estimen que se afecta su credibilidad (tacha de testigos), pues ésta es una facultad que tienen las partes mas que una carga procesal que deban cumplir para descartar el valor probatorio del medio de prueba, además, la tacha es innecesaria si la propia ley de la materia exige que la prueba testimonial cumpla con determinadas formalidades, so pena de que, al incumplirlas, pierda todo su valor probatorio, lo cual puede ser determinado por el juzgador en ejercicio de la potestad a la cual se refiere el artículo 197 de la misma codificación, consistente en la amplia libertad que tiene para

¹⁸⁴ “Décima Época, Registro: 160500, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, Materia(s): Constitucional, Penal, Tesis: 1a./J. 140/2011 (9a.), Página: 2058.

hacer el análisis de las pruebas rendidas, observando lo dispuesto por la ley, en el caso concreto, los artículos 176 y 215, fracción IV, de la misma codificación.¹⁸⁵

Si bien este último precepto resulta aplicable en un segundo nivel, esto es, el de la valoración de la prueba que sí reúne las formalidades que exige la ley, es indicativo de la necesidad de que existan elementos formales para poder determinar si el testigo guarda independencia de su posición, con los cuales no se cuenta en el caso de las testimoniales en análisis.

Al respecto, es aplicable el criterio rector que orienta a las tesis de este Alto Tribunal, que llevan por rubros: "TESTIGOS, TACHAS DE LOS",¹⁸⁶ y "TESTIGOS, TACHA DE LOS (LEGISLACION DEL ESTADO DE PUEBLA)",¹⁸⁷ pues de ellas se desprende que el juzgador cuenta con la más amplia facultad para determinar en sentencia si existe algún elemento que pudiera afectar la credibilidad o

¹⁸⁵ "Artículo 215.- El valor de la prueba testimonial quedará al prudente arbitrio del tribunal, quien, para apreciarla, tendrá en consideración: (...)

IV.- Que, por su probidad, por la independencia de su posición o por sus antecedentes personales, tengan completa imparcialidad; (...)"

¹⁸⁶ "El artículo 371 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Distrito Federal, previene que en el acto del examen de un testigo, o dentro de los tres días siguientes, pueden las partes atacar el dicho de aquél, por cualquiera circunstancia que, en su concepto, afecte su credibilidad, cuando la misma no haya sido ya expresada en sus declaraciones, sustanciándose la petición de tachas en forma sumaria, por cuerda separada, y reservando su resolución para la sentencia definitiva. De los términos de este precepto se advierte que **la sustanciación de la tacha sólo puede realizarse cuando la circunstancia que afecta la credibilidad del testigo, no consta en autos, pues si consta, lo único que tienen que hacerse es tomarse en cuenta al dictar la sentencia definitiva.**(Quinta Época, Registro: 356259, Instancia: Tercera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo LVIII, Materia(s): Civil, Página: 639).

¹⁸⁷ "**Si el juzgador, al valorar la prueba testimonial rendida en juicio civil, toma en consideración tachas de los testigos, no obstante que no se hayan hecho valer mediante el incidente que la ley concede para el efecto, no incurre en violación del principio de que la jurisdicción civil se ejerce a petición de parte, porque es obligación del juzgador analizar las pruebas rendidas. Ese análisis y la valoración correspondiente debe hacerse de oficio, porque el artículo 286, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, ordena, que el Juez "estimaré el valor de las pruebas fijando los principios en que se apoya, para admitir o desechar aquéllas cuya calificación deja la ley a su juicio..."**", y el artículo 276 del mismo código dispone: " El Juez nunca repelerá de oficio al testigo. Aunque de autos aparezca alguna tacha, se recibirá su declaración, pero se tendrá en cuenta el impedimento, para su calificación en la sentencia." (Época: Sexta Época, Registro: 271140, Instancia: Tercera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen XLIV, Cuarta Parte, Materia(s): Civil, Página: 154)

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

imparcialidad de un testigo, cuando ello consta en autos, pese a que no se hubiere interpuesto el incidente de tacha de testigos. Lo anterior, porque es obligación del juzgador analizar las pruebas rendidas, lo cual debe hacerse de oficio.

Por otro lado, en cuanto a la copia certificada de la testimonial de catorce de enero de dos mil dieciséis, rendida por *****, en su carácter de Profesional Operativo adscrito al Canal Judicial, en el diverso cuaderno de investigación *****, dicha probanza no merece valor probatorio alguno, conforme a los siguientes razonamientos:

a.- En primer lugar, de la lectura de dicha constancia se desprende que la investigación *****, se seguía o se sigue en contra de *****, persona a quien no le es imputado el ingreso y consumo de bebidas alcohólicas en el presente procedimiento. Por tanto, se desconoce si en su momento *****, *****, ***** y *****, tuvieron intervención en tal investigación y pudieron ejercer el contradictorio respectivo.

b.- Dicho medio de prueba fue agregado a los autos por la Directora General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial de la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "...en cumplimiento de lo ordenado en proveído de diez de febrero del año en curso",¹⁸⁸ sin embargo, de la lectura de la citada actuación, del año dos mil dieciséis, dictada por el Contralor de esta Suprema Corte, no se aprecia esa instrucción. El auto al que se refiere la Directora General únicamente acusa de recibo la información que el Director General de Tecnologías de la Información le envió al

¹⁸⁸ Foja 2249 del Tomo II del expediente en el que se actúa.

Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como el requerimiento que le formuló para que brindara una explicación más detallada del tipo de análisis forense a realizar.¹⁸⁹ Por tanto, el medio de prueba que nos ocupa fue incorporado sin mediar autorización del Contralor, única autoridad facultada para hacerse llegar de los medios de prueba necesarios para enervar el principio de presunción de inocencia que asiste a los servidores públicos, **en particular, de la información o documentos recabados en una diversa investigación, como lo dispone el artículo 30 A del Acuerdo General 9/2005.**¹⁹⁰

En adición, aún cuando el Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hubiere acordado agregar a los autos la copia certificada que nos ocupa, no existe de por medio un auto en el que se funde y motive la determinación de agregarlas en los términos que lo exige el artículo 30 A, último párrafo, del Acuerdo General 9/2005, esto es, justificando que la investigación ***** había concluido en el sentido que no existen elementos suficientes para advertir la probable existencia de alguna causa de responsabilidad administrativa y que no ha prescrito la facultad sancionadora.

c.- Sólo a mayor abundamiento, si se estimara que el medio de prueba en cuestión es una testimonial, entonces se advierte que también carece de la formalidad a la cual se refiere el artículo 176 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que no debe conferírsele valor convictivo. A continuación se transcribe, en lo conducente, la diligencia de mérito:

¹⁸⁹ Fojas 2236 a la 2238 del Tomo II del expediente en el que se actúa.

¹⁹⁰ “**Artículo 30 A.-** (...)”

Si en el dictamen se concluye que no existen elementos suficientes para advertir la probable existencia de alguna causa de responsabilidad administrativa, la información o documentos recabados en esa investigación podrán valorarse en una posterior, siempre y cuando lo autorice el órgano que ordenó la nueva investigación y no haya prescrito la facultad sancionadora.

PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 6/2015

En México, Distrito Federal, siendo las once horas con diez minutos del catorce de enero de dos mil dieciséis, en las oficinas que ocupa la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial de la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sito en el edificio Alverno ubicado en avenida 16 de Septiembre, número 38 (treinta y ocho), quinto piso, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc en el Distrito Federal, ante el licenciado *****, dictaminador I, y las testigas de asistencia licenciada ***** y licenciada *****, dictaminadora II y profesional operativa, todos adscritos a la mencionada Dirección General, quienes interienen de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de Acuerdo General Plenario 9/2005, se encuentran presentes (sic) el testigo ***** quien se identifica con licencia de conducir con número de licencia ***** expedida por la Secretaría de Transporte y Vialidad del Gobierno del Distrito Federal, la cual contiene una fotografía que coincide con los rasgos fisonómicos del compareciente, de la que se obtiene copia fotostática simple para que corra agregada a los autos y en este acto le es devuelta el original de dicha credencial. Lo anterior a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en acuerdo de diez de diciembre de dos mil quince, dictado en el cuaderno de investigación C.I. *****, para recabar su testimonio en relación con los hechos materia de este cuaderno, relativos a la conducta que ***** observó en el Canal Judicial como servidor público del Alto Tribunal, en este momento ***** manifiesta que no llegó a las nueve de la mañana como se le había citado porque tuvo problemas en el tráfico, lo que le imposibilitó su llegada a la hora que se le señaló.

Acto seguido, se protesta a ***** para que se conduzca con verdad en esta diligencia y se le hace saber las penas a las que se pueden hacer acreedores aquéllos que se conducen con falsedad ante una autoridad distinta de la judicial, con fundamento en los artículos 247, fracción I, del Código Penal Federal y 23 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que se leen y se transcriben en la parte que interesa:

“Artículo 247.- Se impondrá de cuatro a ocho años de prisión y de cien a trescientos días multa:

I. Al que interrogado por alguna autoridad pública distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad”.

“Artículo 23.- Se levantará acta circunstanciada de todas las diligencias que se practiquen, teniendo la obligación de suscribirla quienes intervengan en ella, si se negaren a hacerlo se asentará dicha circunstancia en el acta. Asimismo, se les apercibirá de las penas en que incurrirán quienes falten a la verdad”.

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

Hecho lo anterior, ***** manifiesta: “sí protesto conducirme con verdad”. Refirió llamarse como ha quedado escrito, de treinta años de edad, estado civil soltero, con domicilio en ***** , con último grado de estudios licenciatura en periodismo.

Acto seguido se le informa a ***** que es requerido en calidad de testigo, en términos de lo dispuesto en el artículo 165 del Código Federal de Procedimientos Civiles, para que emita su declaración en relación con los hechos anteriormente referidos, precepto que señala:

“Artículo 165. Todos los que tengan conocimiento de los hechos que las partes deben probar, están obligados a declarar como testigos”.

A continuación, personal de la Contraloría da lectura a ***** de un fragmento de la comparecencia de seis de noviembre de dos mil quince, de ***** , en la que refirió de ***** lo siguiente (...)

d.- Si la declaración de ***** no se desahogó en este procedimiento administrativo **6/2015** bajo las formalidades de una testimonial, es decir, no fue citado, no compareció, ni tampoco fue examinado de manera verbal por la Contraloría en el presente asunto, entonces se trata más bien de una prueba documental pública en la que se hace constar la declaración de un testigo en otro procedimiento. En este aspecto, el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles dispone lo siguiente:

“ARTICULO 202.- Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, **si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado.**

Las declaraciones o manifestaciones de que se trata prueban plenamente contra quienes las hicieron o asistieron al acto en que fueron hechas, y se manifestaron conformes con ellas. Pierden su valor en el caso de que judicialmente se declare su simulación.

También harán prueba plena las certificaciones judiciales o notariales de las constancias de los libros parroquiales, relativos a las actas del estado civil de las personas, siempre que se refieran a época anterior al establecimiento del Registro Civil. Igual prueba harán cuando no existan los libros de registro, original y duplicado, y cuando, existiendo, estén rotas o borradas las hojas en que se encontraba el acta.

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

En caso de estar contradicho su contenido por otras pruebas, su valor queda a la libre apreciación del tribunal.”

Por lo tanto, la copia certificada de la testimonial rendida por *****, que obra agregada a los presentes autos sólo prueba plenamente que ante la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ***** formuló declaraciones o manifestaciones tendentes a incriminar a *****, persona contra la cual se sigue la investigación CI *****, pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado por el referido testigo. Ahora bien, como no se incorporaron de manera legal al procedimiento administrativo de responsabilidad **6/2015**, no se les puede conceder valor indiciario alguno.

En cuanto a la impresión de dos fotografías que obran a fojas 68 y 69 del Tomo I del expediente, es menester aludir a la manera en la que fueron incorporadas a los autos:

a.- En el acta de la comparecencia de veintitrés de febrero de dos mil quince rendida por *****, se hizo constar lo siguiente:

“Acto seguido, ***** refiere que las dos fotografías a las que hizo alusión en esta comparecencia se encuentran en un dispositivo USB, el cual en este momento nos proporciona, por lo que personal de la Contraloría resguarda los archivos electrónicos intitulados “*****” y “*****”, en el equipo de cómputo con número de inventario SC-21834. A este respecto ***** manifiesta lo siguiente: “me deslindo de toda responsabilidad que pueda surgir de esas fotografías.”

De la reseña anterior se advierte que ***** no ofreció la impresión de dos fotografías, sino una evidencia tecnológica, consistente en un dispositivo USB, cuya información es la que pretende enervar la

presunción de inocencia que asiste a los servidores públicos aquí imputados. Toda vez que la Contraloría no refiere si aplicó un protocolo en especial para obtener, imprimir y resguardar la información de la USB así com la respectiva cadena de custodia, no es factible brindarle valor probatorio alguno, pues ello es contrario a los derechos fundamentales del debido proceso y de legalidad, los cuales tutela el artículo 40, primer párrafo, del Acuerdo General 9/2005 de este Alto Tribunal.

Lo anterior es indispensable, pues no se trataba de la impresión de una actuación cualquiera, sino de un elemento incriminatorio, para lo cual es menester conocer y, en su caso, avalar el protocolo que se siguió para su obtención y ofrecimiento, según quedó demostrado en esta ejecutoria.

b.- Sólo a mayor abundamiento, es menester precisar que en la comparecencia de ***** que tuvo lugar el día veintiséis de febrero de dos mil quince, afirma que las personas que figuran en la foto son *****, *****, *****, sin embargo, no refiere quién ingresó con la bebida alcohólica (cerveza superior que se aprecia en las fotografías), o si alguno de los asistentes la ingirió, tampoco precisa circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que tuvo lugar la reunión que se representa en las fotografías. Lo anterior es relevante porque en la audiencia de defensas, ***** afirma que el hecho de que en la fotografía apareciera una botella eso no implica que era suya o que él la estuviera ingiriendo.¹⁹¹

No pasa desapercibido que en la cmparecencia de veintisiete de febrero de dos mil quince, ***** hace referencia a una fotografía que tomó *****, la cual en su momento subió a *Facebook*, sin embargo, de

¹⁹¹ Foja 4009 del Tomo III del procedimiento en el que se actúa.

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

la lectura de su declaración se advierte que refiere la conducta de ***** consistente en dar la orden de comprar cervezas, la cual queda subsumida en la de girar instrucciones para introducir bebidas alcohólicas a este Alto Tribunal, por virtud de la cual ya fue declarado responsable en páginas anteriores.

Finalmente, debe hacerse referencia a las comparecencias que se consideraron en el auto de inicio del procedimiento administrativo de nueve de mayo de dos mil dieciséis, que son a saber:

- Comparecencia de veintitrés de febrero de dos mil quince, a cargo de *****, en su carácter de Técnico Operativo adscrita a la Dirección General del Canal Judicial.
- Comparecencia de dos de marzo de dos mil quince, a cargo de *****, en su carácter de entonces Coordinador Administrativo adscrito a la Dirección General del Canal Judicial.
- Comparecencia de veintisiete de febrero de dos mil quince, a cargo de *****, en su carácter de Profesional Operativo adscrito a la Dirección General del Canal Judicial.
- Comparecencia de veintisiete de febrero de dos mil quince, a cargo de *****, como talento de la Dirección General del Canal Judicial.

- Comparecencia de veintitrés de febrero de dos mil quince, a cargo de *****, como servidor público adscrito al Canal Judicial.

Como ya se dejó sentado con anterioridad, en dichas comparecencias se denuncia que ***** fomentó el consumo del alcohol, que ofrecía tequila y cervezas a los servidores públicos adscritos al Canal Judicial, bebía whisky con *****, que ***** llegaba ebrio y se servía alcohol, o bien, consumía cerveza, que su oficina olía a alcohol y que le decían “el *****”, que *****, *****, y ***** a veces llegaban alcoholizados.

En primer lugar, destaca que las imputaciones formuladas no incriminan de manera directa a ***** por ingerir bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones de la Dirección General del Canal Judicial, ni tampoco señalan a *****, ***** y ***** como responsables de introducir las bebidas alcohólicas, motivo por el cual no es factible sostener que existe acusación alguna a dichos servidores públicos por lo que respecta a las conductas mencionadas, lo que los excluye de toda responsabilidad administrativa por ese concepto.

Subsiste entonces la imputación directa en contra de *****, *****, ***** y *****, por la conducta consistente en ingerir bebidas alcohólicas en las instalaciones de este Alto Tribunal. Sin embargo, las acusaciones formaladas, sin medios de prueba pertinentes, idóneos y apegados a las formalidades esenciales del procedimiento, son insuficientes para determinar la existencia de la infracción administrativa y la correlativa responsabilidad, pues sería contrario a la naturaleza y estructura de la investigación, así como del procedimiento disciplinario, brindar valor probatorio pleno a las comparecencias, ya que bastaría con su mera formulación para darles credibilidad y así evitar toda auditoría o investigación en la que se recaben pruebas para

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

demostrar los extremos de tales aseveraciones. Dicho en otras palabras, bastaría con la existencia de comparecencias en el sumario, que incriminaran a los servidores públicos de este Alto Tribunal, para que resultara innecesaria toda labor de investigación, recabación de pruebas y el respeto al derecho de defensa de los gobernados, a fin de emitir la determinación definitiva correspondiente.

Las comparecencias, en términos del artículo 29, segundo párrafo, del Acuerdo General 9/2005, del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, sólo constituyen un medio para conocer de hechos que pudieran constituir responsabilidades administrativas de los servidores públicos de este Alto Tribunal, con apoyo en las cuales la Contraloría está facultada para practicar las investigaciones pertinentes,¹⁹² por lo tanto, no constituyen medios de prueba que por sí solos sean suficientes para enervar la presunción de inocencia que les asiste a los imputados.

Las comparecencias, como su propio nombre lo indica, no se desahogaron bajo las formalidades de la prueba testimonial, por lo que más bien se trata de pruebas documentales públicas en las que se hacen constar declaraciones rendidas ante la autoridad competente. En este aspecto, el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles¹⁹³ sólo permite concluir que las mismas prueban plenamente

¹⁹² “**Artículo 29.-** (...) La Contraloría, previo acuerdo del Presidente y notificación, en su caso, al titular de la ponencia respectiva, también está facultada para practicar investigaciones cuando por cualquier medio tenga conocimiento de hechos que pudieran constituir responsabilidades administrativas de los servidores públicos de la Suprema Corte, con excepción de los Ministros.

¹⁹³ “**ARTICULO 202.-** Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado.

que ante la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se formularon las declaraciones o manifestaciones que motivaron el inicio de la investigación.

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que al servidor público imputado le asiste el derecho fundamental de presunción de inocencia,¹⁹⁴ el cual es aplicable a todos los procedimientos de cuyo resultado pudiera derivar alguna pena o sanción como resultado de la facultad punitiva del Estado debido a su naturaleza gravosa, cuestión que implica que a toda persona que se encuentre sometida a alguno de estos procedimientos se le debe de reconocer su calidad de inocente y, por ende, la carga de la prueba se desplaza a la autoridad en aras de proteger el derecho al debido proceso.

El criterio que precede tiene sustento en la jurisprudencia emitida por este Tribunal Pleno de rubro y texto siguiente.

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON Matices o Modulaciones. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. XXXV/2002, sostuvo que, de la interpretación armónica y sistemática de los artículos 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero, 19, párrafo primero, 21, párrafo primero y 102, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008), deriva implícitamente el principio de presunción de inocencia; el cual se contiene de modo expreso en los diversos artículos 8, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos

Las declaraciones o manifestaciones de que se trata prueban plenamente contra quienes las hicieron o asistieron al acto en que fueron hechas, y se manifestaron conformes con ellas. Pierden su valor en el caso de que judicialmente se declare su simulación.

También harán prueba plena las certificaciones judiciales o notariales de las constancias de los libros parroquiales, relativos a las actas del estado civil de las personas, siempre que se refieran a época anterior al establecimiento del Registro Civil. Igual prueba harán cuando no existan los libros de registro, original y duplicado, y cuando, existiendo, estén rotas o borradas las hojas en que se encontraba el acta.

En caso de estar contradicho su contenido por otras pruebas, su valor queda a la libre apreciación del tribunal.”

¹⁹⁴ Puede consultarse la ejecutoria recaída al procedimiento de responsabilidad administrativa 2/2012, fallado por mayoría de nueve votos el veintitrés de noviembre de dos mil quince.

PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 6/2015

Civiles y Políticos; de ahí que, al ser acordes dichos preceptos - porque tienden a especificar y a hacer efectiva la presunción de inocencia-, deben interpretarse de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados la interpretación más favorable que permita una mejor impartición de justicia de conformidad con el numeral 1o. constitucional. Ahora bien, uno de los principios rectores del derecho, que debe ser aplicable en todos los procedimientos de cuyo resultado pudiera derivar alguna pena o sanción como resultado de la facultad punitiva del Estado, es el de presunción de inocencia como derecho fundamental de toda persona, aplicable y reconocible a quienes pudiesen estar sometidos a un procedimiento administrativo sancionador y, en consecuencia, soportar el poder correctivo del Estado, a través de autoridad competente. En ese sentido, el principio de presunción de inocencia es aplicable al procedimiento administrativo sancionador -con matices o modulaciones, según el caso- debido a su naturaleza gravosa, por la calidad de inocente de la persona que debe reconocérsele en todo procedimiento de cuyo resultado pudiera surgir una pena o sanción cuya consecuencia procesal, entre otras, es desplazar la carga de la prueba a la autoridad, en atención al derecho al debido proceso.”¹⁹⁵

De esta manera, si bien el procedimiento de responsabilidad administrativa tiene como finalidad salvaguardar los principios constitucionales de honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen el servicio público, no puede soslayarse que el mismo implica la materialización del poder coercitivo del Estado en perjuicio de una persona, quien puede ver mermados sus derechos como consecuencia de la sanción impuesta.

Así, lo anterior implica que, por un lado, las pruebas de cargo deben desvirtuar efectivamente la presunción de inocencia que existe en favor del servidor público imputado y, por otro, los medios probatorios de descargo no deben generar duda razonable sobre la probable culpabilidad de dicho servidor público, esto es, el juzgador debe cerciorarse de que ambas situaciones concurren.

¹⁹⁵ Con datos de localización: [J]; 10a. Época; Pleno; Gaceta S.J.F.; Libro 7, Junio de 2014; Tomo I; Pág. 41. P./J. 43/2014 (10a.).

Lo anterior encuentra apoyo en la tesis aislada pronunciada por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente:

“PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA. Para poder considerar que hay prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia, el juez debe cerciorarse de que las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia efectivamente alegada por la defensa en el juicio y, al mismo tiempo, en el caso de que existan, debe descartarse que las pruebas de descargo o conraíndicios den lugar a una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora.”¹⁹⁶

En consecuencia, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que no medios de prueba con suficiente valor probatorio para considerar que *****, *****, *****, ***** y *****, incurrieron en la infracción consistente en ingerir bebidas alcohólicas en las instalaciones del Canal Judicial de este Alto Tribunal, a la cual se refiere el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 8, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Esta misma conclusión se alcanza con respecto a la infracción atribuida a los tres últimos servidores públicos mencionados, por lo que se refiere a la introducción de bebidas alcohólicas a las instalaciones del mencionado Canal Judicial, a la cual también se refieren los numerales citados.

- (iii) **Indebido ejercicio del empleo, cargo o comisión, al realizar actividades ajenas al cumplimiento de la función, tales como jugar “play station” y dominó.**

¹⁹⁶ Datos de localización: [TA]; 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 11, Octubre de 2014; Tomo I; Pág. 611. 1a. CCCXLVII/2014 (10a.).

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

Esta infracción le fue imputada a *****, *****, y *****, y está prevista en el artículo 131, fracción XI, en relación con el numeral 8, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Con respecto a este punto, se advierte que la Presidencia de este Alto Tribunal se apoyó en el mismo material probatorio con el cual consideró presuntamente acreditada la diversa infracción consistente en la introducción y consumo de bebidas alcohólicas. Dichas probanzas son:

- Comparecencia de veintitrés de febrero de dos mil quince, a cargo de *****, en su carácter de Técnico Operativo adscrita a la Dirección General del Canal Judicial.
- Comparecencia de dos de marzo de dos mil quince, a cargo de *****, en su carácter de entonces Coordinador Administrativo adscrito a la Dirección General del Canal Judicial.
- Comparecencia de veintisiete de febrero de dos mil quince, a cargo de *****, en su carácter de Profesional Operativo adscrito a la Dirección General del Canal Judicial.
- Testimonial de catorce de octubre de dos mil quince, a cargo de *****.
- Testimonial de seis de noviembre de dos mil quince, a cargo de *****, como servidor adscrito a la Dirección General del Canal Judicial.¹⁹⁷

¹⁹⁷ Foja 2148 del expediente en el que se actúa.

- Testimonial de dieciséis de octubre de dos mil quince, a cargo de *****, como Profesional Operativo perteneciente a la Dirección General del Canal Judicial.
- Copia certificada de la testimonial de catorce de enero de dos mil dieciséis, rendida por *****, en su carácter de Profesional Operativo adscrito al Canal Judicial, en el diverso cuaderno de investigación *****.¹⁹⁸
- Comparecencia de veintisiete de febrero de dos mil quince, a cargo de *****, como talento de la Dirección General del Canal Judicial.
- Comparecencia de cuatro de marzo de dos mil quince, a cargo de *****, en su carácter de Técnico Operativo de la Dirección General del Canal Judicial.
- Comparecencia de veintitrés de febrero de dos mil quince, a cargo de *****, como servidor público adscrito al Canal Judicial.
- Testimonial de catorce de octubre de dos mil quince, a cargo de *****.
- Comparecencia de cuatro de marzo de dos mil quince, a cargo de *****.
- Impresión de dos fotografías exhibidas por *****, las cuales corresponden al personal del área de redacción de la Dirección del Canal Judicial, en la que se observa una botella de cerveza abierta de la marca “Superior” sobre una mesa.

Por cuestión de método, es menester conocer cuáles son los hechos denunciados en las comparecencias a las cuales se refiere la

¹⁹⁸ fojas 2246 vuelta y 2247 del expediente.

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

Presidencia en el auto de inicio de procedimiento de responsabilidades:

- **Comparecencia de veintitrés de febrero de dos mil quince, a cargo de *******, en su carácter de Técnico Operativo adscrita a la Dirección General del Canal Judicial, en la que en síntesis manifestó:
 - Que ***** le decía que no se pueden cometer “estupideces”.
 - Que ***** comenzó a fomentar el uso del alcohol.
 - Que ***** hacía comentarios ofensivos con respecto a su trabajo.
 - Que el Director General del Canal Judicial le dijo que estuviera conciente de sus limitaciones laborales.
 - ***** bloqueaba sus proyectos.
 - Que no le permitían capacitarse.
 - Que ***** no le permitió asistir a su examen profesional y que ese tema lo solucionó el Licenciado *****.
 - Que ***** intimidó a su esposo.
 - Que le afectó psicológicamente el trato que recibió de *****.
 - Cree que había instrucciones del Director General de “aislarla” a ella y a su esposo.
 - Que ***** cuestionó a su esposo sobre la difusión del rumor de que él se iba del Canal Judicial.
 - Que su esposo le reveló a ***** sobre la política de aislamiento de su esposa implementada por *****.

- Que ***** le dijo a su esposo que ella tenía “relaciones muy calientes” con sus compañeros de trabajo.
- **Comparecencia de dos de marzo de dos mil quince, a cargo de ***** , en su carácter de entonces Coordinador Administrativo adscrito a la Dirección General del Canal Judicial, en la que sostuvo que:**

(...) Por otra parte, también era una práctica común que en la oficina de ***** jugaran “play station” y juegos similares, él y su equipo de producción, durante la jornada de trabajo (...)

- **Comparecencia de veintisiete de febrero de dos mil quince, a cargo de ***** , en su carácter de Profesional Operativo adscrito a la Dirección General del Canal Judicial, en la que, en síntesis, sostuvo lo siguiente:**
 - Que ***** llegaba ebrio a la oficina y comenzaba a beber, y que dio orden a varios compañeros de comprar cervezas.
 - Que ***** veía pornografía en la oficina y bebía alcohol.
- **Comparecencia de veintisiete de febrero de dos mil quince, a cargo de ***** , como talento de la Dirección General del Canal Judicial, en la que, en síntesis, sostuvo:**
 - Que en febrero de dos mil ocho fue contratada por honorarios para conducir el noticiero de las nueve de la noche en el Canal Judicial, que actualmente se llama “ADN Acceso Directo Noticias” servicio que desempeña actualmente.
 - Que durante aproximadamente un año mantuvo una relación cordial de trabajo con el director general ***** .
 - En el mes de febrero de dos mil nueve ***** , quién es productor del noticiero de las nueve de la noche y ella le propusieron al Director General realizar una campaña de derechos constitucionales en lenguas

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

- indígenas en los lugares de origen con subtítulos en español, idea que le encantó
- El camarógrafo ***** y ***** asistente de camarógrafo acompañaron a ***** y a la denunciante los sábados y domingos y vacaciones de ellos de casi un año a diversos lugares de la república para difundir los derechos constitucionales en las comunidades indígenas, acercarse a sus lugares de origen y mostrar el valor y respeto que merecen sus lenguas y cultura y la importancia de que los indígenas conozcan sus derechos.
 - El cinco de febrero de dos mil diez salió al aire el prólogo que ella redactó y allí aparecían los créditos como sigue:
Dirección General del Canal Judicial *****.
Subdirección General de Producción del Canal Judicial *****.
Idea original ***** y *****.
 - Aproximadamente dos días después de que salió al aire le llamó ***** a su celular y le dijo que ***** le había ordenado modificar los créditos para aparecer él en la idea original, por lo cual le molestó. Después de ese evento ***** y ella se retiraron la palabra y ella dejó de hacer reportajes, se concretó a su labor en el noticiero.
 - Del quince al dieciséis de septiembre de dos mil diez, no pudieron salir de las instalaciones y todos pasaron la noche en las instalaciones del canal, en las camionetas, cabinas, escaleras, etcétera, ***** llegó aproximadamente a las doce del día, y ella escuchó lo siguiente “que gran oportunidad me dan para decirles que son unos cerdos, unos marranos, como pueden vivir en la mierda, esas cosas cuadradas se llaman botes de basura”, sus gritos se escuchaban hasta el estacionamiento.
 - En el mes de noviembre de dos mil once, ***** , como camarógrafo y ***** , como productor, recibieron el “Premio Nacional de Periodismo”, en la categoría de “Fotografía”, cuando ella llegó al canal ***** “El ***”, su director de cámaras de “ADN”, le dijo “Cantú, perdóname pero te tengo que decirte algo muy desagradable: me ordenó ***** que en la nota de la

entrega del premio “Voces. Origen de una Nación”, difuminara la imagen de *****, ***** y la suya, e ilustrara la nota con tomas abiertas, finalmente, ella presenté la nota en el noticiero, en la cual venían las tomas abiertas sin que se viera la recepción del premio y la cual concluyó con el rostro de ***** en pantalla hablando de los premios, sin mencionar quiénes lo habían recibido.

- Que con motivo de la invitación que le hizo el Secretario de Educación Pública, requería de un mes para realizar ese trabajo, por lo que se ausentaría el mes de septiembre de dos mil doce, por lo que ***** le informó que estaba pensando cambiarla de horario al noticiero de la mañana, a lo cual le respondió que no podía porque estaba cubriendo voces de la democracia en TV UNAM.
- Que recibió un llamada de parte de *****, Director General de Recursos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para alertarme en el sentido de que ***** había enviado al doctor ***** a hablar con ***** para pedirle que buscara la manera de correrme y ***** le dijo que no procedía porque ella tenía derecho a disfrutar de una suspensión temporal.
- Luego, sus compañeros de trabajo de la producción de mi noticiero le llamaron para decirle que ***** había dado la orden de no dejarla entrar a las instalaciones del Canal Judicial, y aunque finalmente pudo ingresar, ***** le dijo que quería informarle que la Suprema Corte no estaba a mi disposición y que quería mi total disponibilidad de horario para lo que se requiriera
- La compareciente menciona varios errores que se cometieron en las transmisiones del noticiero del Canal Judicial y que los directivos la quisieron inducir al error.
- El área de maquillaje era un pequeño cuarto cerca de la dirección del canal, en el que ella se cambia de ropa, le ponen tubos, la maquillan, por eso esa puerta siempre estaba cerrada, y ***** dio la orden a *****, entonces coordinadora administrativa, de que esa puerta permaneciera abierta.
- Su maquillista en otro momento me comentó que ***, un camarógrafo, se mofaba de ella.
- Que en el Canal Judicial prevalece un ambiente hostil, provocado y fomentado principalmente por

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

- *****, ya que éste trata a su personal con insultos, gritos y groserías, por ejemplo: “Eres un pendejo”, “No te corro porque tus hijos no tienen la culpa de tener un padre tan pendejo como tú”, “Eres una basura”; a *****, quien era su secretaria, la humillaba constantemente, diciéndole por ejemplo, “*****, eres una basura”; o hacía comentarios abiertos al personal, para que todo mundo escuchara, como los siguientes: “tengo el botón para destruirlos”, “me encanta que se orinen ante mis ojos”, “lo voy a hacer llorar como una marrana”, entre otros.
- Que en el área de producción le tocó ver cómo frecuentemente, en el espacio que ocupa *****, siempre presente y varios de sus colaboradores, unos cinco o seis, de los cuales no recuerda sus nombres y algunos, ni sus rostros, se tocaban las nalgas y los penes entre ellos, utilizando un lenguaje vulgar de índole sexual, como “pitos”, “nalgas”, “culos”, “puto”, “verga”; se encimaban unos con otros, por lo que cuando yo escuchaba o veía algo así, mejor se iba a mi coche a esperar la hora de inicio de mi noticiero.
 - Alguna vez se quejó con ***** del lenguaje soez que utilizaba ***** y le dijo que él lo iba a ver, pero ahora se pregunta ¿qué caso tuvo quejarme con *****, si a él siempre lo vió en ese tipo de juegos?
 - Varias veces se percató de que los servidores públicos salían llorando de la oficina de *****, por lo que antes de entrar a la misma, se persignaban.
 - A la hora del noticiero de las nueve, nunca hay nadie que pueda resolver algún problema con la información y, si pregunta dónde está ***** para comentar algún error, frecuentemente le decían que “en la cantina”.
 - Que la única vez que acudió a la oficina del citado *****, éste la recibió con los pies encima del escritorio y con su oficina oliendo a alcohol, incluso le dicen “El *****”.
 - Que una reportera de nombre ***** tuvo un incidente el veinte de noviembre de dos mil diez, ya que cometió un error en una transmisión en vivo, por lo que ella se quejó en una carta de la que desconoce

su destinatario, que ***** la había inducido a error, ya que no le había avisado que debía cubrir ese programa, además, se quejó de que éste le había tocado las nalgas.

- **Comparecencia de cuatro de marzo de dos mil quince, a cargo de ***** , en su carácter de Técnico Operativo de la Dirección General del Canal Judicial, en la que, en síntesis, sostuvo:**
 - Que ***** jugaba dominó con ***** y ***** , además bebían alcohol.
- **Comparecencia de veintitrés de febrero de dos mil quince, a cargo de ***** , como servidor público adscrito al Canal Judicial.**

“En el horario laboral, ***** organizaba torneos de *play station* o dominó en su oficina y en éstos algunas veces participaban ***** (sic), todos son mis compañeros en el Canal Judicial, ellos podían jugar toda la tarde. (...)”

- **Comparecencia de cuatro de marzo de dos mil quince, a cargo de ***** , en la que en síntesis, sostuvo que:**

“(....) ***** jugaba play station con ***** .”

Estas comparecencias o declaraciones, salvo las de ***** y ***** , ambas de fecha cuatro de marzo de dos mil quince, dieron lugar al inicio de la investigación respectiva que tuvo lugar en esa misma fecha, por “cualquier acto” que no implicara conducirse con buena conducta en el centro laboral, o bien, se tradujeran en el incumplimiento del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

Ahora bien, como quedó referido en los antecedentes y en el apartado anterior, las dos últimas comparecencias -las de ***** y ***** , ambas de fecha cuatro de marzo de dos mil quince, no deberán considerarse para efectos de resolver en el presente procedimiento.

En efecto, los hechos sobre los cuales se fijó la materia de la investigación, no incluyen los denunciados por tales servidores públicos, pues las dos comparecencias **se rindieron con posterioridad a que se iniciara la investigación**, como se aprecia de la revisión de los autos y de la lectura del cuadro de hechos con apoyo en los cuales se inició la indagatoria, el cual quedó transcrito en apartados anteriores.

La investigación sólo puede versar sobre hechos fijados en el auto de inicio de la misma, como lo establece de manera imperativa el artículo 30-B del Acuerdo General 9/2005, en el sentido de que el acuerdo que ordena **la investigación** deberá expresar las circunstancias que la justifiquen, **sin extenderse a hechos distintos a los señalados en dicho acuerdo.**

Se advierte que la razón lógica de esa disposición, es que cuando se inicia una investigación, se cuenta con suficientes datos de hecho para justificarla y sólo se requiere recabar pruebas para sustentar las denuncias o bien, declararlas improcedentes, como lo establece el artículo 32, tercer párrafo, del Acuerdo General 9/2005. De ahí que si se dicta un auto de inicio de investigación ya no es necesario continuar recibiendo más comparecencias, denuncias o

quejas y menos aún, recabar material probatorio para sustentarlas. De otro modo, el procedimiento de investigación se tornaría arbitrario y sería inútil toda motivación que se hubiere dado en el auto de inicio de la investigación para llevarla a cabo, lo cual trastocaría los principios de legalidad, debido procedimiento y seguridad jurídica.

Ahora bien, de la revisión de autos se aprecia que una vez dictado el auto de inicio de investigación de cuatro de marzo de dos mil quince, se siguieron recibiendo comparecencias de otros servidores públicos, como las de ***** y *****, refiriendo acontecimientos que si bien tienen relación con los juegos de dominó y *play station*, no son eventos concretos, sujetos a ciertas circunstancias de tiempo, modo y lugar, que deban ser investigados en términos del citado artículo 30 B del Acuerdo General 9/2005, so pena de violar las reglas del debido procedimiento. Por esa razón, no serán consideradas las dos comparecencias a las que se ha hecho referencia.

A continuación, se advierte que en las diversas comparecencias de veintitrés de febrero de dos mil quince, a cargo de *****, en su carácter de Técnico Operativo adscrita a la Dirección General del Canal Judicial; de veintisiete de febrero de dos mil quince, a cargo de *****, en su carácter de Profesional Operativo adscrito a la Dirección General del Canal Judicial y de veintisiete de febrero de dos mil quince, a cargo de *****, como talento de la Dirección General del Canal Judicial, **no se formuló imputación alguna** en contra de *****, *****, y *****, en el sentido de que jugaran dominó y *play station* en las instalaciones del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

En consecuencia, los hechos que refieren ***** y *****, como servidores públicos adscritos al Canal Judicial, deberán quedar acreditados con los respectivos medios de prueba cuya práctica ordenó el Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por cuestión de método, es necesario ocuparse del medio de prueba consistente en la copia certificada de la testimonial de catorce de enero de dos mil dieciséis, rendida por *****, en su carácter de Profesional Operativo adscrito al Canal Judicial, en el diverso cuaderno de investigación *****.

Esta medio de prueba no es pertinente para demostrar los hechos que se le imputan a *****, ***** y *****, consistentes en el indebido ejercicio del empleo, cargo o comisión, al realizar actividades ajenas al cumplimiento de la función, tales como jugar “play station” y dominó, por las razones que se exponen a continuación:

a.- Como se refirió en apartados anteriores, es factible que el Contralor de esta Suprema Corte incorpore a la investigación constancias que obran en otra investigación, pero para ello es menester que funde su determinación en el artículo 30 A, tercer párrafo, del Acuerdo General 9/2015 y, además, motive en el sentido de que la investigación ***** concluyó por no contar con elementos suficientes para advertir la probable existencia de alguna causa de responsabilidad administrativa y que no ha prescrito la facultad sancionadora por los hechos asentados en aquellas actuaciones.¹⁹⁹

¹⁹⁹ Dicha investigación se integró para abordar los hechos relacionados con el clorhidrato de cocaína y las bebidas embriagantes que se localizaron en el lugar de trabajo de *****, foja 1796 del Tomo II del expediente en el que se actúa.

Dicho medio de prueba fue agregado a los autos por la Directora General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial de la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "...en cumplimiento de lo ordenado en proveído de diez de febrero del año en curso",²⁰⁰ sin embargo, de la lectura de la citada actuación, del año dos mil dieciséis, dictada por el Contralor de esta Suprema Corte, no se aprecia esa instrucción. El auto al que se refiere la Directora General únicamente acusa de recibo la información que el Director General de Tecnologías de la Información le envió al Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como el requerimiento que le formuló para que brindara una explicación más detallada del tipo de análisis forense a realizar.²⁰¹ Por tanto, el medio de prueba que nos ocupa fue incorporado sin mediar autorización del Contralor, única autoridad facultada para hacerse llegar de los medios de prueba necesarios para enervar el principio de presunción de inocencia que asiste a los servidores públicos, en particular, **de la información o documentos recabados en una diversa investigación**, como lo dispone el artículo 30 A del Acuerdo General 9/2005.

En adición, aún cuando el Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hubiere acordado agregar a los autos la copia certificada que nos ocupa, no existe de por medio un auto en el que se funde y motive la determinación de agregarlas en los términos que lo exige el artículo 30 A, último párrafo, del Acuerdo General 9/2005, esto es, justificando que la investigación ***** había concluido en el sentido que no existen elementos suficientes para advertir la probable existencia de alguna causa de responsabilidad administrativa y que no ha prescrito la facultad sancionadora.

²⁰⁰ Foja 2249 del Tomo II.

²⁰¹ Fojas 2236 a la 2238 del Tomo II del expediente en el que se actúa.

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

b.- Por otro lado, de las constancias de autos se advierte que la investigación ***** se inició para investigar conductas de *****, por tanto, se desconoce si en su momento *****, ***** y ***** tuvieron intervención en tal investigación y pudieron ejercer el contradictorio respectivo.

c.- Sólo a mayor abundamiento, si se estimara que el medio de prueba en cuestión es una testimonial, entonces se advierte que también carece de la formalidad a la cual se refiere el artículo 176 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que carece de valor convictivo ofrecida como ese medio de prueba. A continuación se transcribe, en lo conducente, la diligencia de mérito:

En México, Distrito Federal, siendo las once horas con diez minutos del **catorce de enero de dos mil dieciséis**, en las oficinas que ocupa la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial de la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sito en el edificio Alterno ubicado en avenida 16 de Septiembre, número 38 (treinta y ocho), quinto piso, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc en el Distrito Federal, ante el licenciado *****, dictaminador I, y las testigas de asistencia licenciada ***** y licenciada *****, dictaminadora II y profesional operativa, todos adscritos a la mencionada Dirección General, quienes interienen de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de Acuerdo General Plenario 9/2005, se encuentran presentes (sic) el testigo ***** quien se identifica con licencia de conducir con número de licencia ***** expedida por la Secretaría de Transporte y Vialidad del Gobierno del Distrito Federal, la cual contiene una fotografía que coincide con los rasgos fisonómicos del compareciente, de la que se obtiene copia fotostática simple para que corra agregada a los autos y en este acto le es devuelta el original de dicha credencial. Lo anterior a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en acuerdo de diez de diciembre de dos mil quince, dictado en el cuaderno de investigación **C.I. *******, para recabar su testimonio en relación con los hechos materia de este cuaderno, relativos a la conducta que ***** observó en el Canal Judicial como servidor público del Alto Tribunal, en este momento ***** manifiesta que no llegó a las nueve de la mañana como se le había citado

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

poreque tuvo problemas en el tráfico, lo que le imposibilitó su llegada a la hora que se le señaló.

Acto seguido, se protesta a ***** para que se conduzca con verdad en esta diligencia y se le hace saber las penas a las que se pueden hacer acreedores aquéllos que se conducen con falsedad ante una autoridad distinta de la judicial, con fundamento en los artículos 247, fracción I, del Código Penal Federal y 23 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que se leen y se transcriben en la parte que interesa:

“Artículo 247.- Se impondrá de cuatro a ocho años de prisión y de cien a trescientos días multa:

I. Al que interrogado por alguna autoridad pública distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad”.

“Artículo 23.- Se levantará acta circunstanciada de todas las diligencias que se practiquen, teniendo la obligación de suscribirla quienes intervengan en ella, si se negaren a hacerlo se asentará dicha circunstancia en el acta. Asimismo, se les apercibirá de las penas en que incurrirán quienes falten a la verdad”.

Hecho lo anterior, ***** manifiesta: “sí protesto conducirme con verdad”. Refirió llamarse como ha quedado escrito, de treinta años de edad, estado civil soltero, con domicilio en *****, con último grado de estudios licenciatura en periodismo.

Acto seguido se le informa a ***** que es requerido en calidad de testigo, en términos de lo dispuesto en el artículo 165 del Código Federal de Procedimientos Civiles, para que emita su declaración en relación con los hechos anteriormente referidos, precepto que señala:

“Artículo 165. Todos los que tengan conocimiento de los hechos que las partes deben probar, están obligados a declarar como testigos”.

A continuación, personal de la Contraloría da lectura a ***** de un fragmento de la comparecencia de seis de noviembre de dos mil quince, de *****, en la que refirió de ***** lo siguiente (...)

c.- Si la declaración de ***** no se desahogó en este procedimiento administrativo **6/2015** bajo las formalidades de una testimonial, es decir, no fue citado, no compareció ni tampoco fue examinado de manera verbal por la Contraloría en el presente asunto el día catorce de enero de dos mil dieciséis, entonces se trata más bien de una prueba documental pública en la que se hace constar la declaración de un testigo en otro procedimiento. En este aspecto, el

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles dispone lo siguiente:

“ARTICULO 202.- Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado.

Las declaraciones o manifestaciones de que se trata prueban plenamente contra quienes las hicieron o asistieron al acto en que fueron hechas, y se manifestaron conformes con ellas. Pierden su valor en el caso de que judicialmente se declare su simulación.

También harán prueba plena las certificaciones judiciales o notariales de las constancias de los libros parroquiales, relativos a las actas del estado civil de las personas, siempre que se refieran a época anterior al establecimiento del Registro Civil. Igual prueba harán cuando no existan los libros de registro, original y duplicado, y cuando, existiendo, estén rotas o borradas las hojas en que se encontraba el acta.

En caso de estar contradicho su contenido por otras pruebas, su valor queda a la libre apreciación del tribunal.”

Por lo tanto, la copia certificada de la testimonial rendida por ***** que obra agregada a los presentes autos sólo prueba plenamente que ante la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se hicieron las declaraciones o manifestaciones a las que se refiere el citado servidor público, y estaban más bien relacionados con la investigación que se siguió en contra de *****, pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado. Ahora bien, como no se incorporaron de manera legal al procedimiento administrativo de responsabilidad 6/2015, no se les puede conceder valor indiciario alguno.

En cuanto a los restantes medios de prueba, se cuenta con las testimoniales desahogadas por ***** el día catorce de octubre de dos

mil quince, ***** el seis de noviembre de dos mil quince,²⁰² ***** el dieciséis de octubre de dos mil quince y ***** el catorce de octubre de dos mil quince.

Sin embargo, antes de proceder al análisis de su contenido y valor probatorio, es menester determinar si reúnen los requisitos y formalidades a los que se refiere el artículo 176 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y como ya quedó demostrado en el apartado anterior, de la revisión íntegra de las diligencias de desahogo respectivas, se advierte que no reúnen las formalidades a las que se alude el artículo de mérito.

Al respecto, se explicó que es esencial que los testigos manifiesten que guardan completa independencia e imparcialidad con respecto a los hechos y a la persona contra la cual deberán atestiguar. La exigencia a la que se refiere el artículo 176 del código procesal citado no es innecesaria, pues dada la naturaleza e importancia de la prueba testimonial, es menester asegurar que los hechos sobre los cuales se declarará estén lo más apegados posible a criterios de objetividad y veracidad. En esta ejecutoria han evidenciadas las dificultades que entraña la prueba testimonial, en el sentido de que ésta depende de la apreciación de los hechos que tiene cada persona y su facilidad de expresarlos adecuadamente, además de que en muchas ocasiones, no se cuenta con otros elementos para probar determinados sucesos, de tal manera que la doctrina sostiene que la prueba testimonial ha sido revestida, inclusive, de cierta solemnidad.

Bajo esta óptica es que debe entenderse la previsión contenida en el diverso artículo 198 de la misma codificación procesal, el cual dispone, de manera categórica, que **no tendrán valor legal alguno**

²⁰² Foja 2148 del expediente en el que se actúa.

las pruebas rendidas con infracción de lo dispuesto en los artículos precedentes del Título Cuarto, de ahí que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en respeto al principio de legalidad y del debido proceso, concluya que las testimoniales recabadas durante la investigación, en las cuales se sustenta el auto de inicio del procedimiento disciplinario, carecen de valor legal para incriminar a los servidores públicos a los cuales se refiere este apartado.

Por identidad de razones, resulta aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que este Tribunal Pleno comparte, que lleva por rubro: **“PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. SUPUESTOS EN QUE DEBE NULIFICARSE SU EFICACIA.”**

No es obstáculo para lo anterior el hecho de que el artículo 186 del Código Federal de Procedimientos Civiles prevea el derecho de las partes de atacar el dicho de un testigo cuando, por cualquier circunstancia, estimen que se afecta su credibilidad (tacha de testigos), pues ésta es una facultad que tienen las partes mas que una carga procesal que deban cumplir para descartar el valor probatorio del medio de prueba, además, la tacha es innecesaria si la propia ley de la materia exige que la prueba testimonial cumpla con determinadas formalidades, so pena de que, al incumplirlas, pierda todo su valor probatorio, lo cual puede ser determinado por el juzgador en ejercicio de la potestad a la cual se refiere el artículo 197 de la misma codificación, consistente en la amplia libertad que tiene para hacer el análisis de las pruebas rendidas, observando lo dispuesto por

la ley, en el caso concreto, los artículos 176 y 215, fracción IV, de la misma codificación.²⁰³

Si bien este último precepto resulta aplicable en un segundo nivel, es decir, en el de la valoración de la prueba que sí reúne las formalidades que exige la ley, es indicativo de la necesidad de que existan elementos formales para poder determinar si el testigo guarda independencia de su posición, con los cuales no se cuenta en el caso de las testimoniales en análisis.

Al respecto, es aplicable el criterio rector que orienta a las tesis de este Alto Tribunal, que llevan por rubros: “TESTIGOS, TACHAS DE LOS”, y “TESTIGOS, TACHA DE LOS (LEGISLACION DEL ESTADO DE PUEBLA)”, pues como ya quedó demostrado con anterioridad, de ellas se desprende que el juzgador cuenta con la más amplia facultad para determinar en la sentencia si existe algún elemento que pudiera afectar la credibilidad o imparcialidad de un testigo, cuando ello consta en autos, pese a que no se hubiere interpuesto el incidente de tacha de testigos. Lo anterior, porque es obligación del juzgador analizar las pruebas rendidas, lo cual debe hacerse de oficio.

En cuanto a las fotografías que exhibe *****, se advierte lo siguiente:

a.- En el acta de la comparecencia de veintitrés de febrero de dos mil quince rendida por *****, se hizo constar lo siguiente:

“Acto seguido, ***** refiere que las dos fotografías a las que hizo alusión en esta comparecencia se encuentran en un dispositivo USB, el cual en este momento nos proporciona, por lo que personal de la Contraloría resguarda los archivos electrónicos intitulados “*****” y

²⁰³ “**Artículo 215.-** El valor de la prueba testimonial quedará al prudente arbitrio del tribunal, quien, para apreciarla, tendrá en consideración: (...) IV.- Que, por su probidad, por la independencia de su posición o por sus antecedentes personales, tengan completa imparcialidad; (...)”

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

“*****”, en el equipo de cómputo con número de inventario SC-21834. A este respecto ***** manifiesta lo siguiente: “me deslindo de toda responsabilidad que pueda surgir de esas fotografías.”

De la reseña anterior se advierte que ***** no ofreció la impresión de dos fotografías, sino una evidencia tecnológica, consistente en un dispositivo USB, cuya información es la que pretende enervar la presunción de inocencia que asiste a los servidores públicos aquí imputados. Toda vez que la Contraloría no refiere si aplicó un protocolo en especial para resguardar la información de la USB y cómo se integró la cadena de custodia respectiva, no es factible brindarle valor probatorio alguno, pues ello es contrario a los derechos fundamentales del debido proceso y de legalidad, los cuales tutela el artículo 40, primer párrafo, del Acuerdo General 9/2005 de este Alto Tribunal.

Lo anterior es indispensable, pues no se trataba de la impresión de una actuación cualquiera, sino de un elemento incriminatorio, para lo cual es menester conocer y, en su caso, avalar el protocolo que se siguió para su obtención y ofrecimiento, según quedó demostrado en esta ejecutoria.

b.- Sólo a mayor abundamiento, se advierte que las impresiones del USB no arrojan algún indicio relacionado con los juegos de dominó y *play station*, pues en ellas sólo se observan un conjunto de personas, a quienes la compareciente identifica como ***** , ***** , ***** en la diligencia del veintiséis de febrero del dos mil quince, aparentemente en las instalaciones de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se observa una botella de cerveza abierta de la marca “Superior” sobre una mesa.

Finalmente, como ya se dejó sentado con anterioridad, sólo en las comparecencias de ***** y ***** , como servidores público adscritos al Canal Judicial, refirieron que ***** organizaba torneos de *play station*, y algunas veces participaban ***** y ***** , así como otro servidor público que no fue inculcado por esa infracción.

Esta imputación, sin medios de prueba pertinentes, idóneos y apegados a las formalidades esenciales del procedimiento, son insuficientes para determinar la existencia de la infracción administrativa y la correlativa responsabilidad, pues sería contrario a la naturaleza y estructura de la investigación y del procedimiento disciplinario brindar valor probatorio pleno a las comparecencias, ya que bastaría con su mera formulación para darles credibilidad y así evitar toda auditoría o investigación en la que se recaben pruebas para demostrar los extremos de tales aseveraciones. Dicho en otras palabras, bastaría con la existencia de comparecencias en el sumario, que inculcaran a los servidores públicos de este Alto Tribunal, para que resultara innecesaria toda labor de investigación, recabación de pruebas y el respeto al derecho de defensa de los gobernados, a fin de emitir la determinación definitiva correspondiente.

Las comparecencias, en términos del artículo 29, segundo párrafo, del Acuerdo General 9/2005, del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, sólo constituyen un medio para conocer de hechos que pudieran constituir responsabilidades administrativas de los servidores públicos de este Alto Tribunal, con apoyo en las cuales la Contraloría está facultada para practicar las investigaciones pertinentes,²⁰⁴ por lo tanto, no constituyen medios de prueba que por

²⁰⁴ “**Artículo 29.-** (...) La Contraloría, previo acuerdo del Presidente y notificación, en su caso, al titular de la ponencia respectiva, también está facultada para practicar investigaciones cuando por

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

sí solos sean suficientes para enervar la presunción de inocencia que les asiste a los imputados.

Las comparecencias, como su propio nombre lo indica, no se desahogaron bajo las formalidades de la prueba testimonial, por lo que más bien se trata de pruebas documentales públicas en las que se hacen constar declaraciones rendidas ante la autoridad competente. En este aspecto, el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles²⁰⁵ sólo permite concluir que las mismas prueban plenamente que ante la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se formularon las declaraciones o manifestaciones que motivaron el inicio de la investigación.

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que al servidor público imputado le asiste el derecho fundamental de presunción de inocencia, en los términos que fueron precisados en la presente ejecutoria. En consecuencia, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que no existen suficientes evidencias para considerar que *****, ***** y *****, incurrieron en la infracción consistente en jugar dominó y *play station* en las

cualquier medio tenga conocimiento de hechos que pudieran constituir responsabilidades administrativas de los servidores públicos de la Suprema Corte, con excepción de los Ministros.

²⁰⁵ **ARTICULO 202.-** Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado.

Las declaraciones o manifestaciones de que se trata prueban plenamente contra quienes las hicieron o asistieron al acto en que fueron hechas, y se manifestaron conformes con ellas. Pierden su valor en el caso de que judicialmente se declare su simulación.

También harán prueba plena las certificaciones judiciales o notariales de las constancias de los libros parroquiales, relativos a las actas del estado civil de las personas, siempre que se refieran a época anterior al establecimiento del Registro Civil. Igual prueba harán cuando no existan los libros de registro, original y duplicado, y cuando, existiendo, estén rotas o borradas las hojas en que se encontraba el acta.

En caso de estar contradicho su contenido por otras pruebas, su valor queda a la libre apreciación del tribunal.”

instalaciones del Canal Judicial de este Alto Tribunal, a la cual se refiere el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 8, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

(iv) Acoso laboral, que se materializó a través de maltrato físico, esto es, de la práctica del “manto sagrado”.

Esta infracción le fue imputada a ***** , ***** , ***** , ***** , ***** , ***** , ***** , ***** , ***** y ***** , la cual está prevista en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 8, fracción VI, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Por cuestión de método, será conveniente pronunciarse, en primer lugar, a la conducta que le fue atribuida a *****, pues este Alto Tribunal advierte que existe confesión expresa de su parte en el sentido de haber participado en la práctica denominada como “manto sagrado”. He aquí el texto expreso de su declaración rendida en la audiencia de defensas desahogada dentro del procedimiento disciplinario:²⁰⁶

“Que mediante el presente ocurso, vengo a rendir declaración por escrito respecto a los hechos que se me imputan al suscrito, siendo la participación en la práctica denominada “el manto sagrado”, manifestando bajo protesta de decir verdad, que mi participación en la misma, fue muy esporádica, dado que mi trabajo se desarrolla en un 90% fuera de las instalaciones del canal, (.....) y en las pocas ocasiones que participé en el mismo, lo hice obligado por el temor a represalias de mi jefe inmediato, *****, y del Director General, *****, y participé únicamente sujetando a la persona que se encontraba sentado en la silla, esto, para no tener que golpearlo, y sobre todo, para evitar que lo tiraran al suelo y ahí pudiesen golpearlo más duramente; ya que las pocas veces que estuve en la oficina cuando

²⁰⁶ Fojas 3534 y siguientes del Tomo II del expediente en el que se actúa.

PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 6/2015

se llevaba a cabo la práctica del “Manto sagrado” nunca participé por voluntad propia, siempre fue atendiendo órdenes de mi superior jerárquico, *****, quien me ordenaba que sujetara al compañero en turno para que no lo tiraran, (....).

Ahora bien, la responsabilidad administrativa que se imputa al suscrito, inobservancia de buena conducta en el empleo, en su vertiente maltrato físico, que se traduce en acoso laboral, se consideró probablemente acreditada con las pruebas aportadas, de las cuales solamente existen en mi contra:

1.- La declaración del suscrito, del veinticuatro de febrero de dos mil quince (foja 30 vuelta), donde manifesté: “quiero indicar que en dos mil nueve comenaron esta clase de acciones, el toqueteo, el “manto sagrado” (.....) Yo participaba sujetando a la persona que era elegida para no golpearla, pues no quería que me excluyeran del grupo, aunque no me tocaba a mí ser golpeado por la diabetes que padezco y mi propio carácter.”

2.- La declaración de *****, en fecha catorce de octubre de dos mil quince (foja 30 vuelta), quien señaló: “Recuerdo que quienes participaban en el “manto sagrado”, eran (....) y *****, este último solo lo vi sujetando a la persona que estaba en el “manto”.

Es menester aclarar que si el suscrito llegué a participar (muy esporádicamente, ya que mi trabajo era en la calle y muy pocas veces me encontraba en las oficinas, como se acredita con el archivo digital exhibido como anexo 1) en esta práctica, fue como señalé: “sujetando a la persona que era elegida para no golpearla” y sobre todo, para que no la tiraran de la silla y en el suelo pudiesen ser más duros con los golpes (.....) Igual me venía coaccionado a participar, dado el carácter e “influencias” que tenían el Director General ***** y el Subdirector General, *****; que solían tomar represalias contra quien se les oponía; (....)

Como se aprecia de la misma, el propio declarante reconoce de manera expresa, espontánea y libre de toda coacción, los siguientes hechos que le son propios: que pocas veces participó en la práctica consistente en el manto sagrado, que lo hacía sujetando en la silla a la persona que sufría los golpes y argumenta que ello era para evitar represalias de ***** y *****.

Esta declaración reúne las condiciones de una verdadera confesión, ya que es una declaración que contiene la admisión de que

determinados hechos propios son ciertos, la cual le vincula para efectos procesales y fue rendida durante la instrucción del procedimiento disciplinario que nos ocupa. En este punto, resulta aplicable el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual dispone que los hechos propios de las partes, aseverados en en cualquier acto del juicio (en este caso, del procedimiento administrativo), **harán prueba plena en contra de quien los asevere**, sin necesidad de ofrecerlos como prueba y sin que sea admisible prueba de descargo alguna, en términos del artículo 123 del mismo ordenamiento procesal.

Por tanto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación declara que está acreditada la infracción cometida por *****, consistente en inobservancia de buena conducta en el empleo, específicamente la realización de acoso laboral a través de maltrato físico a sus compañeros de trabajo, la cual está prevista en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 8, fracción VI, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, pues como quedó demostrado al aludir a la tipicidad de la conducta, el ejercicio de violencia física sobre los compañeros de trabajo no conlleva un trato respetuoso con respecto a las personas con las que tiene relación laboral, en su carácter de Técnico Operativo, rango C, de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Vale la pena mencionar que conforme a la hoja de control que expide la Secretaría Ejecutiva de Administración, Dirección General de Personal, las funciones principales de la plaza son las siguientes:

- Manejo de cámara en los principales formatos (BETACAM, DVCAM y XCAM).

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

- Grabación para transmisión en vivo en estudio y locación.
- Grabación de sesiones de las Señoras y Señores Ministros tanto de sesiones públicas como privadas.
- Iluminación y fotografía.
- Calificación y clasificación de las grabaciones.
- Levantamiento de imágenes de los diferentes inmuebles del Poder Judicial de la Federación y de cualquier evento que se les asigne.

No es obstáculo para la conclusión anterior el hecho de que el servidor público sostenga que participó en esa práctica para evitar represalias de sus superiores jerárquicos, pues el cumplimiento del deber al que se refiere el artículo 8, fracción VI, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos no establece como circunstancia de atipicidad o antijuridicidad el hecho de que un servidor público argumente que su actuar se debe al temor que le infunden sus superiores jerárquicos, no obstante, tales aseveraciones podrán ser valoradas al momento de individualizar la sanción respectiva.

A continuación, es menester pronunciarse con respecto a la infracción y responsabilidad que se les imputa a los restantes servidores públicos.

Con respecto a este punto, se advierte que la Presidencia de este Alto Tribunal se apoyó en el siguiente material probatorio:

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

- Comparecencia de veintitrés de febrero de dos mil quince, a cargo de *****, en su carácter de servidor público de la Dirección General del Canal Judicial.
- Comparecencia de veintisiete de febrero de dos mil quince, a cargo de *****, como Técnico Operativo del Canal Judicial.
- Comparecencia de veintiséis de febrero de dos mil quince, a cargo de *****, ex servidor de la Dirección General del Canal Judicial.
- Comparecencia de dos de marzo de dos mil quince, a cargo de *****, en su carácter de entonces Coordinador Administrativo del Canal Judicial.
- Testimonial de trece de octubre de dos mil quince, a cargo de *****, quien se ostentó como camarógrafo.
- Testimonial de catorce de octubre de dos mil quince, por parte de *****.
- Testimonial de quince de octubre de dos mil quince, de *****.
- Testimonial de dieciséis de octubre de dos mil quince, a cargo de *****, en su carácter de Técnico Operativo del Canal Judicial.
- Testimonial de catorce de octubre de dos mil quince, a cargo de *****, servidor público de la Dirección General del Canal Judicial.
- Comparecencia de veinticuatro de febrero de dos mil quince, a cargo de *****, Técnico Operativo del Canal Judicial.
- Testimonial de diecisiete de octubre de dos mil quince, a cargo de *****, Técnico Operativo del Canal Judicial.

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

- Comparecencia de *****, de seis de septiembre de dos mil trece, en el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa *****. ²⁰⁷

En primer lugar, es menester conocer cuáles son los hechos denunciados en las comparecencias que motivaron el inicio de la investigación:

- Comparecencia de veintitrés de febrero de dos mil quince, a cargo de *****, en su carácter de servidor público de la Dirección General del Canal Judicial.

(...) “***** al parecer abusó de su posición (...) ellos realizaban varios juegos, como (...) hasta nombre le pusieron a uno le decían el manto sagrado que consistía en que sentaban a una persona en una silla, lo tapaban con una mantada negra, podían cubrir a cualquiera que perteneciera a su área, como camarógrafos o gente de producción, y hacía como un circulo alrededor de la persona que estaba tapada, y lo golpeaba al que se encontraba cubierto con patadas y manotazos o puñetazos, en donde callera (sic) el golpe, llegué a ver hasta doce personas participando en ese juego, en éste también participó el director general ***** que al igual que ***** sólo participaba golpeando al que se encontraba sentado, ninguno de los dos nunca se puso la manta, yo sé que el director general estaba enterado de todos los juegos que he mencionado, pues todo esto sucedía a lado de su oficina, y como dije en ocasiones participaba en el manto sagrado, estoy seguro que veía todo porque el utilizaba el baño de la oficina de *****, y muchas veces entró cuando los juegos estaba (sic) sucediendo”. (...).

- Comparecencia de veintisiete de febrero de dos mil quince, a cargo de *****, como Técnico Operativo del Canal Judicial:

(...) “En otro aspecto, recuerdo que desde que llegó *****, empezaron con la práctica de que con motivo del cumpleaños de alguno de los

²⁰⁷ Foja 1857 vuelta y 1858 del Tomo II del procedimiento en el que se actúa.

compañeros, a un lado de la oficina de *****, al festejado lo llamaban y lo sentaban en una silla y una vez allí le ponían una manta cubriéndolo, apagaban la luz y comenzaban a pegarle con las manos o con los pies, recuerdo que quienes participaban en esa práctica eran *****, *****, *****, *****, *****, *****, cuyos apellidos no recuerdo pero sé que ahorita está en el área de edición y otras personas cuyos nombres no recuerdo, tengo conocimiento de lo que acabo de decir porque las personas que sufrieron lo que referí, hacían comentarios sobre ello, pero sí me daba cuenta que en esos casos, en dos ocasiones, ***** llegaba, se asomaba por la puerta que es de vidrio y luego se iba, como a mí me veía cerca me llegó a decir “cuidado, el que se ríe se lleva”; quiero precisar que *****no participaba en esa actividad. También mi hijo *****me comentó que “una vez también a mí me tocó”, refiriéndose al maltrato indicado, pero no sé en qué fecha sucedió eso, no me quiso decir para que no me molestara” (...)

- Comparecencia de veintiséis de febrero de dos mil quince, a cargo de ***** , ex servidor de la Dirección General del Canal Judicial.

(...) “La verdad, después de que llegaron ***** y ***** , el Canal Judicial se volvió un “cochiner”; el ambiente del canal era muy nocivo, por ejemplo, en ocasiones se realizaba un “juego” con una cortina negra como las que se utilizan en los estudios, que consistía en tapar a alguien, a quien lo golpeaban con patadas, “manazos” y golpes en la cabeza, a veces tiraban a la persona que tapaban al piso y ahí lo golpeaban, participaban en ese “juego” la mayoría de los compañeros, entre los que estaban ***** , ***** , “*****”, el compañero al que le decían “el *****”, de quien no recuerdo su nombre. Recuerdo que ***** se prestaba a ese tipo de juegos” (...) [fojas 181 vuelta y 182].

- Comparecencia de dos de marzo de dos mil quince, a cargo de ***** , en su carácter de entonces Coordinador Administrativo del Canal Judicial

“ (...) En otro aspecto, quiero manifestar que el ambiente de trabajo que se vivía durante el tiempo que yo laboré en el Canal Judicial era hostil e indisciplinado y poco profesional en el comportamiento, ya que los directivos tenían prácticas adquiridas en medios de comunicaciones privados y que no correspondían a la seriedad de la investidura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por citar un ejemplo, realizaban una actividad llamada “el manto sagrado”, por lo regular en el área de la dirección de producción, a cargo de ***** , en la cual cubrían por lo regular a uno de los camarógrafos o asistentes

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

con una sábana o cualquier tipo de ropa y acto seguido se disponían a pegarle a la persona en cuestión con todo tipo de golpes, a diferentes partes del cuerpo, incluso, tocando y golpeando partes íntimas de las personas; en varias ocasiones, ***** decidía y ordenaba a quién tenían que realizarle esta práctica, incluso, él llegaba a participar en los golpes, en los empujones, aventándose contra el agredido; en esas prácticas, también vi que participó ***** y algunos camarógrafos y productores del área, quiero señalar que yo nunca participé en esos juegos, pero eran cotidianos, ya que incluso en los cumpleaños se celebraba el “manto sagrado”. (...)”

- Comparecencia de veinticuatro de febrero de dos mil quince, a cargo de *****, Técnico Operativo del Canal Judicial.²⁰⁸

(...) “el manto sagrado que consiste en sentar en una silla a la persona cubrirla con una franela negra y acto seguido ser golpeada por varios compañeros incluidos ***** quien era el principal promotor de este hecho y el director del canal ***** quien llegó a participar en varias ocasiones empleando algún instrumento para golpear con fuerza desmedida al compañero en turno” (...) [foja 94].

- Comparecencia de *****, de seis de septiembre de dos mil trece, en el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa ***** (Foja 1857 vuelta y 1858 del Tomo II):

“(...) pero el hecho de hoy me hizo recordar, por ejemplo, que cada que había un cumpleaños, sacaban una manta negra, cubrían al festejado y todos los hombres participaban, lo pateaban, tomaban objetos y se los arrimaban en sus partes íntimas, en esta ocasión no supe qué los motivó a hacerlo porque traía mis audífonos y no escuchaba nada, pero ya se están presentando otra vez las bromas de índole sexual entre los hombres (...) [foja 1857 vuelta].

El acoso laboral al cual se refieren estas comparecencias, le es atribuido a *****, *****, ***** y *****, por lo que su participación en la

²⁰⁸ Foja 88 vuelta y 89 del Tomo I del expediente en el que se actúa.

práctica del “manto sagrado” deberá estar acreditada con los respectivos medios de prueba, cuya práctica ordenó el Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En este punto, es importante aclarar que en el auto de diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, el Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que no se contaba con el nombre completo de “*****” a quien se refieren algunos denunciantes, pero que de la consulta de la estructura ocupacional de la Dirección General del Canal Judicial se obtenía que se trataba de *****.²⁰⁹ Por tanto, si en el auto de inicio del procedimiento disciplinario se vinculó a este último servidor público por la conducta que aquí se analiza, y ***** , en su comparecencia, hace alusión a una persona llamada “*****”, es posible inferir que está aludiendo al ahora inculcado.

Por su parte, es de destacarse que en las comparecencias consideradas en el auto de inicio del procedimiento disciplinario no existe imputación en contra de ***** , ***** , ***** , ***** , ***** y ***** , motivo por el cual no ha lugar a atribuir participación alguna de tales servidores públicos en el acoso laboral materia de este apartado.

Los medios de prueba con los que se busca sostener la responsabilidad administrativa de ***** , ***** , ***** y ***** , son las testimoniales desahogadas por ***** el día trece, ***** el día catorce, ***** el día quince, ***** el día dieciséis, ***** el día catorce y ***** el día diecisiete, todos del mes de octubre de dos mil quince.

Sin embargo, antes de proceder al análisis de su contenido y valor probatorio, es menester determinar si reúnen los requisitos y formalidades a los que se refiere el artículo 176 del Código Federal de

²⁰⁹ Foja 1801 del Tomo II del expediente en el que se actúa.

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

Procedimientos Civiles, el cual, por su importancia, conviene reiterar a continuación:

Artículo 176.- Después de tomarse, al testigo, la protesta de conducirse con verdad, y de advertirlo de las penas en que incurre el que se produce con falsedad, se hará constar su nombre, edad, estado, lugar de residencia, ocupación, domicilio, **si es pariente consanguíneo o afín de alguno de los litigantes, y en qué grado; si tiene interés directo en el pleito o en otro semejante, y si es amigo íntimo o enemigo de alguna de las partes.** A continuación, se procederá al examen.

De la revisión íntegra de las testimoniales de mérito se advierte que no reúnen las formalidades a las que se refiere el artículo antes transcrito. Para ello, conviene transcribir la primera parte del acta en la que se hace constar el desahogo de cada una de ellas:

A.- ***:**

“En México, Distrito Federal, siendo las once horas con veinte minutos del trece de octubre de dos mil quince, en las oficinas que ocupa la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial de la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicadas en calle Dieciséis de Septiembre, número treinta y ocho, quinto piso, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad, ante la maestra ***** Subdirectora General del Responsabilidades Administrativas, y las testigos de asistencia, maestra *****, y licenciada ***** dictaminadoras II, todas con adscripción a dicha dirección general, en cumplimiento de lo ordenado en proveído de veintiuno de septiembre de dos mil quince, dictado en el cuaderno de investigación *****, hace constar que se encuentra presente *****, quien previamente quedó identificado en diversa acta del día de hoy. Lo anterior, a efecto de recabar su declaración como testigo en torno a hechos que se investigan en el expediente citado.

Acto seguido, se protesta a *****, para que se conduzca con verdad en esta diligencia y se le hace saber las penas a las que se pueden hacer acreedores aquéllos que se conducen con falsedad ante una

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

autoridad distinta de la judicial, en términos de los artículos 247, fracción I, del Código Penal Federal y 23 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que se leen y se transcriben en la parte que interesa:

“Artículo 247.- Se impondrá de cuatro a ocho años de prisión y de cien a trescientos días multa:

I. Al que interrogado por alguna autoridad pública distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad”.

“Artículo 23.- Se levantará acta circunstanciada de todas las diligencias que se practiquen, teniendo la obligación de suscribirla quienes intervengan en ella, si se negaren a hacerlo se asentará dicha circunstancia en el acta. Asimismo, se les apercibirá de las penas en que incurrirán quienes falten a la verdad”.

Hecho lo anterior, ***** manifiesta: “sí protesto conducirme con verdad”. Refirió llamarse como ha quedado escrito, de treinta y ocho años de edad, estado civil casado, con domicilio en *****, con último grado de estudios tercer trimestre de la licenciatura en periodismo. Acto seguido se le informó a ***** que es requerido en calidad de testigo, en términos de lo dispuesto en el artículo 165 del Código Federal de Procedimientos Civiles, para que emita su declaración en relación con los hechos anteriormente referidos, precepto que señala:

“Artículo 165.- Todos los que tengan conocimiento de los hechos que las partes deben probar, están obligados a declarar como testigos.”

En este momento, personal de la Contraloría da lectura al testigo ***** de un fragmento de la comparecencia de *****, de diecinueve de febrero de dos mil quince, en la que señaló: “8. Foja diez, sexto párrafo, quiero precisar que los compañeros (...) ***** (...9 son testigos de que (...).”

B.- *****

“En México, Distrito Federal, siendo las nueve horas con treinta y cinco minutos del catorce de octubre de dos mil quince, en las oficinas que ocupa la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial de la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicadas en calle Dieciséis de Septiembre, número treinta y ocho, quinto piso, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad, la maestra ***** Subdirectora General de Responsabilidades Administrativas, y las testigos de asistencia, maestra *****, y licenciada ***** dictaminadoras II, todas con adscripción a dicha dirección general, en cumplimiento de lo ordenado en proveído de veintiuno de septiembre de dos mil quince, dictado en el cuaderno de investigación *****, hace constar que se encuentra presente *****, quien previamente quedó identificado en diversa acta del día de hoy. Lo anterior, a efecto de recabar su declaración como testigo en torno a hechos que se investigan en el expediente citado.

Acto seguido, se protesta a *****, para que se conduzca con verdad en esta diligencia y se le hace saber las penas a las que se pueden hacer acreedores aquéllos que se conducen con falsedad ante una

PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 6/2015

autoridad distinta de la judicial, en términos de los artículos 247, fracción I, del Código Penal Federal y 23 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que se leen y se transcriben en la parte que interesa:

“Artículo 247.- Se impondrá de cuatro a ocho años de prisión y de cien a trescientos días multa:

I. Al que interrogado por alguna autoridad pública distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad”.

“Artículo 23.- Se levantará acta circunstanciada de todas las diligencias que se practiquen, teniendo la obligación de suscribirla quienes intervengan en ella, si se negaren a hacerlo se asentará dicha circunstancia en el acta. Asimismo, se les apercibirá de las penas en que incurren quienes falten a la verdad”.

También se le hace de conocimiento el contenido del artículo 165 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia de responsabilidades, que establece:

“Artículo 165. Todos los que tengan conocimiento de los hechos que las partes deben probar, están obligados a declarar como testigos”.

Hecho lo anterior, ***** manifiesta: “sí protesto conducirme con verdad”. Refirió llamarse como ha quedado escrito, de cincuenta y cinco años de edad, estado civil casado, con domicilio en ***** , con último grado de estudios preparatoria.

En este momento, se hace del conocimiento de ***** , cuales son los hechos por los que se le llamó a declarar como testigo en este cuaderno de investigación, para lo cual se transcribe un fragmento de la comparecencia de ***** de veinticuatro de febrero de dos mil quince, en la que señaló: (...)”

C.- *****

“En México, Distrito Federal, siendo las nueve horas con veinticinco minutos del quince de octubre de dos mil quince, en las oficinas que ocupa la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial de la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicadas en calle Dieciséis de Septiembre, número treinta y ocho, quinto piso, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad, la maestra ***** Subdirectora General del Responsabilidades Administrativas, y las testigos de asistencia, maestra ***** , y licenciada ***** , dictaminadoras II, todas con adscripción a dicha dirección general, en cumplimiento de lo ordenado en proveído de veintiuno de septiembre de dos mil quince, dictado en el cuaderno de investigación ***** , hace constar que se

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

encuentra presente *****, quien previamente quedó identificado en diversa acta del día de hoy. Lo anterior, a efecto de recabar su declaración como testigo en torno a hechos que se investigan en el expediente citado.

Acto seguido, se protesta a *****, para que se conduzca con verdad en esta diligencia y se le hace saber las penas a las que se pueden hacer acreedores aquéllos que se conducen con falsedad ante una autoridad distinta de la judicial, en términos de los artículos 247, fracción I, del Código Penal Federal y 23 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que se leen y se transcriben en la parte que interesa:

“Artículo 247.- Se impondrá de cuatro a ocho años de prisión y de cien a trescientos días multa:

I. Al que interrogado por alguna autoridad pública distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad”.

“Artículo 23.- Se levantará acta circunstanciada de todas las diligencias que se practiquen, teniendo la obligación de suscribirla quienes intervengan en ella, si se negaren a hacerlo se asentará dicha circunstancia en el acta. Asimismo, se les apercibirá de las penas en que incurrirán quienes falten a la verdad”.

También se le hace de conocimiento el contenido del artículo 165 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia de responsabilidades, que establece:

“Artículo 165. Todos los que tengan conocimiento de los hechos que las partes deben probar, están obligados a declarar como testigos”.

Hecho lo anterior, ***** manifiesta: “sí protesto conducirme con verdad”. Refirió llamarse como ha quedado escrito, de cuarenta y dos años de edad, estado civil casado, con domicilio en ***** con último grado de estudios cuarto semestre de bachillerato.

En este momento, se hace del conocimiento de *****, cuales son los hechos por los que se le llamó a declarar como testigo en este cuaderno de investigación, para lo cual se transcribe un fragmento del escrito que ***** presentó en comparecencia de dos de marzo de dos mil quince, en el que adujo: “(...) Solicito de la manera más atenta, se pueda incluir a los siguientes testigos del acoso laboral que he vivido: ***** (...) les consta la cantidad de trabajo que me asignan (...)” [foja 264].

En relación con este hecho, ***** manifestó (...)”

D.- *****

“En México, Distrito Federal, siendo las nueve horas con veinticinco minutos del dieciséis de octubre de dos mil quince, en las oficinas que ocupa la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial de la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicadas en calle Dieciséis de Septiembre, número treinta y ocho, quinto piso, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad, la maestra ***** Subdirectora General del Responsabilidades Administrativas, y las

PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 6/2015

testigos de asistencia, maestra *****; y licenciada *****; dictaminadoras II, todas con adscripción a dicha dirección general, en cumplimiento de lo ordenado en proveído de veintiuno de septiembre de dos mil quince, dictado en el cuaderno de investigación *****; hace constar que se encuentra presente *****; quien previamente quedó identificado en diversa acta del día de hoy. Lo anterior, a efecto de recabar su declaración como testigo en torno a hechos que se investigan en el expediente citado.

Acto seguido, se protesta a *****; para que se conduzca con verdad en esta diligencia y se le hace saber las penas a las que se pueden hacer acreedores aquéllos que se conducen con falsedad ante una autoridad distinta de la judicial, en términos de los artículos 247, fracción I, del Código Penal Federal y 23 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que se leen y se transcriben en la parte que interesa:

“Artículo 247.- Se impondrá de cuatro a ocho años de prisión y de cien a trescientos días multa:

I. Al que interrogado por alguna autoridad pública distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad”.

“Artículo 23.- Se levantará acta circunstanciada de todas las diligencias que se practiquen, teniendo la obligación de suscribirla quienes intervengan en ella, si se negaren a hacerlo se asentará dicha circunstancia en el acta. Asimismo, se les apercibirá de las penas en que incurrirán quienes falten a la verdad”.

También se le hace de conocimiento el contenido del artículo 165 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia de responsabilidades, que establece:

“Artículo 165. Todos los que tengan conocimiento de los hechos que las partes deben probar, están obligados a declarar como testigos”.

Hecho lo anterior, ***** manifiesta: “sí protesto”. Refirió llamarse como ha quedado escrito, de cuarenta y dos años de edad, estado civil casado, con domicilio en *****; ocupación camarógrafo, con último grado de estudios carrera técnica en ciencias de la comunicación.

En este momento, se hace del conocimiento de *****; cuales son los hechos por los que se le llamó a declarar como testigo en este cuaderno de investigación, para lo cual se da lectura a un fragmento de la comparecencia de ***** de veintitrés de febrero de dos mil quince, en la que señaló: (...).”

E.- ***.**

“En México, Distrito Federal, siendo las diez horas con veinte minutos del catorce de octubre de dos mil quince, en las oficinas que ocupa la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial de la Contraloría de la Suprema Corte de

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

Justicia de la Nación, ubicadas en calle Dieciséis de Septiembre, número treinta y ocho, quinto piso, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad, la maestra ***** Subdirectora General del Responsabilidades Administrativas, y las testigos de asistencia, maestra ***** y licenciada ***** dictaminadoras II, todas con adscripción a dicha dirección general, en cumplimiento de lo ordenado en proveído de veintiuno de septiembre de dos mil quince, dictado en el cuaderno de investigación ***** , hace constar que se encuentra presente ***** , quien previamente quedó identificado en diversa acta del día de hoy. Lo anterior, a efecto de recabar su declaración como testigo en torno a hechos que se investigan en el expediente citado.

Acto seguido, se protesta a ***** , para que se conduzca con verdad en esta diligencia y se le hace saber las penas a las que se pueden hacer acreedores aquéllos que se conducen con falsedad ante una autoridad distinta de la judicial, en términos de los artículos 247, fracción I, del Código Penal Federal y 23 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que se leen y se transcriben en la parte que interesa:

“Artículo 247.- Se impondrá de cuatro a ocho años de prisión y de cien a trescientos días multa:

I. Al que interrogado por alguna autoridad pública distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad”.

“Artículo 23.- Se levantará acta circunstanciada de todas las diligencias que se practiquen, teniendo la obligación de suscribirla quienes intervengan en ella, si se negaren a hacerlo se asentará dicha circunstancia en el acta. Asimismo, se les apercibirá de las penas en que incurrirán quienes falten a la verdad”.

También se le hace de conocimiento el contenido del artículo 165 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia de responsabilidades, que establece:

“Artículo 165. Todos los que tengan conocimiento de los hechos que las partes deben probar, están obligados a declarar como testigos”.

Hecho lo anterior, ***** manifiesta: “sí protesto conducirme con verdad”. Refirió llamarse como ha quedado escrito, de treinta y nueve años de edad, estado civil soltero, con domicilio en ***** , código postal ***** , México, Distrito Federal, con último grado de estudios licenciatura trunca en administración de empresas.

En este momento, se hace del conocimiento de ***** , cuales son los hechos por los que se le llamó a declarar como testigo en este cuaderno de investigación, para lo cual se transcribe un fragmento de la comparecencia de ***** de veinticuatro de febrero de dos mil quince, en la que señaló: (...)”

F.- *****

“En México, Distrito Federal, siendo las catorce horas con cinco minutos del dieciséis de octubre de dos mil quince, en las oficinas que ocupa la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial de la Contraloría de la

PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 6/2015

Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicadas en calle Dieciséis de Septiembre, número treinta y ocho, quinto piso, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad, la maestra ***** Subdirectora General del Responsabilidades Administrativas, y los testigos de asistencia, maestra ***** dictaminadoras II, todas con adscripción a dicha dirección general, en cumplimiento de lo ordenado en proveído de veintiuno de septiembre de dos mil quince, dictado en el cuaderno de investigación ***** , hace constar que se encuentra presente ***** , quien se identifica con credencial expedida por el Alto Tribunal, con número de expediente ***** , la cual contiene fotografía que coincide con los rasgos fisionómicos del mismo y de la que se obtiene copia para agregarla a esta acta. Lo anterior, a efecto de recabar su declaración como testigo en torno a hechos que se investigan en el expediente citado.

Acto seguido, se protesta a ***** , para que se conduzca con verdad en esta diligencia y se le hace saber las penas a las que se pueden hacer acreedores aquéllos que se conducen con falsedad ante una autoridad distinta de la judicial, en términos de los artículos 247, fracción I, del Código Penal Federal y 23 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que se leen y se transcriben en la parte que interesa:

“Artículo 247.- Se impondrá de cuatro a ocho años de prisión y de cien a trescientos días multa:

I. Al que interrogado por alguna autoridad pública distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad”.

“Artículo 23.- Se levantará acta circunstanciada de todas las diligencias que se practiquen, teniendo la obligación de suscribirla quienes intervengan en ella, si se negaren a hacerlo se asentará dicha circunstancia en el acta. Asimismo, se les apercibirá de las penas en que incurrirán quienes falten a la verdad”.

También se le hace de conocimiento el contenido del artículo 165 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia de responsabilidades, que establece:

“Artículo 165. Todos los que tengan conocimiento de los hechos que las partes deben probar, están obligados a declarar como testigos”.

Hecho lo anterior, ***** manifiesta: “sí protesto conducirme con verdad”. Refirió llamarse como ha quedado escrito, de cuarenta y dos años de edad, estado civil casado, con domicilio en ***** , ocupación técnico operativo de la Dirección General del Canal Judicial, con último grado de estudios preparatoria.

En este momento, se hace del conocimiento de ***** , cuales son los hechos por los que se le llamó a declarar como testigo en este cuaderno de investigación, para lo cual se da lectura a un fragmento de la comparecencia de ***** de veinticuatro de febrero de dos mil quince, en la que señaló: (...)”

Como ya quedó explicado en páginas precedentes, es esencial que los testigos manifiesten que guardan completa independencia e imparcialidad con respecto a los hechos y a la persona contra la cual deberán atestiguar. La exigencia a la que se refiere el artículo 176 del código procesal citado no es innecesaria, pues dada la naturaleza e importancia de la prueba testimonial, es menester asegurar que los hechos sobre los cuales se declarará estén lo más apegados posible a criterios de objetividad y veracidad. En un considerando anterior quedaron evidenciadas las dificultades que entraña la prueba testimonial, en el sentido de que ésta depende de la apreciación de los hechos que tiene cada persona y su facilidad de expresarlos adecuadamente, además de que en muchas ocasiones, no se cuenta con otros elementos para probar determinados sucesos, de tal manera que la doctrina sostiene que la prueba testimonial ha sido revestida, inclusive, de cierta solemnidad.

Bajo esta óptica es que debe entenderse la previsión contenida en el diverso artículo 198 de la misma codificación procesal, el cual dispone, de manera categórica, que **no tendrán valor legal alguno las pruebas rendidas con infracción de lo dispuesto en los artículos precedentes del Título Cuarto**, de ahí que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en respeto al principio de legalidad y del debido proceso, concluya que las testimoniales recabadas durante la investigación, en las cuales se sustenta el auto de inicio del procedimiento disciplinario, carecen de valor legal para incriminar a los servidores públicos a los cuales se refiere este apartado.

Por identidad de razones, resulta aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que este Tribunal Pleno comparte, que es del siguiente tenor:

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

“PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. SUPUESTOS EN QUE DEBE NULIFICARSE SU EFICACIA.” La eficacia de las pruebas en el procedimiento penal debe nulificarse en los casos en que la norma transgredida establezca: (i) garantías procesales, (ii) la forma en que se practica la diligencia, o bien, (iii) derechos sustantivos en favor de la persona. Por su parte, las pruebas derivadas (aunque lícitas en sí mismas) deben anularse cuando aquellas de las que son fruto resultan inconstitucionales. Así, los medios de prueba que deriven de la vulneración de derechos fundamentales no deben tener eficacia probatoria, pues de lo contrario se trastocaría la garantía de presunción de inocencia, la cual implica que nadie puede ser condenado si no se comprueba plenamente el delito que se le imputa y la responsabilidad penal en su comisión, circunstancia que necesariamente implica que las pruebas con las cuales se acreditan tales extremos, deben haber sido obtenidas lícitamente.²¹⁰

No es obstáculo para lo anterior el hecho de que el artículo 186 del Código Federal de Procedimientos Civiles prevea el derecho de las partes de atacar el dicho de un testigo cuando, por cualquier circunstancia, estimen que se afecta su credibilidad (tacha de testigos), pues ésta es una facultad que tienen las partes mas que una carga procesal que deban cumplir para descartar el valor probatorio del medio de prueba, además, la tacha es innecesaria si la propia ley de la materia exige que la prueba testimonial cumpla con determinadas formalidades, so pena de que, al incumplirlas, pierda todo su valor probatorio, lo cual puede ser determinado por el juzgador en ejercicio de la potestad a la cual se refiere el artículo 197 de la misma codificación, consistente en la amplia libertad que tiene para hacer el análisis de las pruebas rendidas, observando lo dispuesto por la ley, en el caso concreto, los artículos 176 y 215, fracción IV, de la misma codificación.²¹¹

²¹⁰ “Décima Época, Registro: 160500, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, Materia(s): Constitucional, Penal, Tesis: 1a./J. 140/2011 (9a.), Página: 2058.

²¹¹ “**Artículo 215.-** El valor de la prueba testimonial quedará al prudente arbitrio del tribunal, quien, para apreciarla, tendrá en consideración: (...)”

Si bien este último precepto resulta aplicable en un segundo nivel, que es el de la valoración de aquella prueba que sí reúne las formalidades que exige la ley, es indicativo de la necesidad de que existan elementos formales para poder determinar si el testigo guarda independencia de su posición, con los cuales no se cuenta en el caso de las testimoniales en análisis.

Al respecto, es aplicable el criterio rector que orienta a las tesis de este Alto Tribunal, que llevan por rubros: "TESTIGOS, TACHAS DE LOS",²¹² y "TESTIGOS, TACHA DE LOS (LEGISLACION DEL ESTADO DE PUEBLA)",²¹³ pues de ellas se desprende que el juzgador cuenta con la más amplia facultad para determinar en sentencia si existe algún elemento que pudiera afectar la credibilidad o imparcialidad de un testigo, cuando ello consta en autos, pese a que no se hubiere interpuesto el incidente de tacha de testigos. Lo anterior, porque es obligación del juzgador analizar las pruebas rendidas, lo cual debe hacerse de oficio.

IV.- Que, por su probidad, por la independencia de su posición o por sus antecedentes personales, tengan completa imparcialidad; (...)"

²¹² "El artículo 371 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Distrito Federal, previene que en el acto del examen de un testigo, o dentro de los tres días siguientes, pueden las partes atacar el dicho de aquél, por cualquiera circunstancia que, en su concepto, afecte su credibilidad, cuando la misma no haya sido ya expresada en sus declaraciones, sustanciándose la petición de tachas en forma sumaria, por cuerda separada, y reservando su resolución para la sentencia definitiva. De los términos de este precepto se advierte que **la sustanciación de la tacha sólo puede realizarse cuando la circunstancia que afecta la credibilidad del testigo, no consta en autos, pues si consta, lo único que tienen que hacerse es tomarse en cuenta al dictar la sentencia definitiva.**(Quinta Época, Registro: 356259, Instancia: Tercera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo LVIII, Materia(s): Civil, Página: 639).

²¹³ "**Si el juzgador, al valorar la prueba testimonial rendida en juicio civil, toma en consideración tachas de los testigos, no obstante que no se hayan hecho valer mediante el incidente que la ley concede para el efecto, no incurre en violación del principio de que la jurisdicción civil se ejerce a petición de parte, porque es obligación del juzgador analizar las pruebas rendidas. Ese análisis y la valoración correspondiente debe hacerse de oficio, porque el artículo 286, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, ordena, que el Juez "estimaré el valor de las pruebas fijando los principios en que se apoya, para admitir o desechar aquéllas cuya calificación deja la ley a su juicio..."**", y el artículo 276 del mismo código dispone: " El Juez nunca repelerá de oficio al testigo. Aunque de autos aparezca alguna tacha, se recibirá su declaración, pero se tendrá en cuenta el impedimento, para su calificación en la sentencia." (Época: Sexta Época, Registro: 271140, Instancia: Tercera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen XLIV, Cuarta Parte, Materia(s): Civil, Página: 154)

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

En cuanto a las comparecencias que se consideraron para dar inicio tanto a la investigación como al procedimiento administrativo de responsabilidades, las cuales refieren que *****, *****, ***** y ***** participaban en la práctica del “manto sagrado”, se advierte que las mismas, sin medios de prueba pertinentes, idóneos y apegados a las formalidades esenciales del procedimiento, son insuficientes para determinar la existencia de la infracción administrativa y la correlativa responsabilidad, pues sería contrario a la naturaleza y estructura de la investigación y el procedimiento disciplinario brindar valor probatorio pleno a las comparecencias, ya que bastaría con su mera formulación para darles credibilidad y así evitar toda auditoría o investigación en la que se recaben pruebas para demostrar los extremos de tales aseveraciones. Dicho en otras palabras, bastaría con la existencia de comparecencias en el sumario, que incriminaran a los servidores públicos de este Alto Tribunal, para que resultara innecesaria toda labor de investigación, recabación de pruebas y el respeto al derecho de defensa de los gobernados, a fin de emitir la determinación definitiva correspondiente.

Las comparecencias, en términos del artículo 29, segundo párrafo, del Acuerdo General 9/2005, del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, sólo constituyen un medio para conocer de hechos que pudieran constituir responsabilidades administrativas de los servidores públicos de este Alto Tribunal, con apoyo en las cuales la Contraloría está facultada para practicar las investigaciones

pertinentes,²¹⁴ por lo tanto, no constituyen medios de prueba que por sí solos sean suficientes para enervar la presunción de inocencia que les asiste a los imputados.

Las comparecencias, como su propio nombre lo indica, no se desahogaron bajo las formalidades de la prueba testimonial, por lo que más bien se trata de pruebas documentales públicas en las que se hacen constar declaraciones rendidas ante la autoridad competente. En este aspecto, el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles²¹⁵ sólo permite concluir que las mismas prueban plenamente que ante la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se formularon las declaraciones o manifestaciones que motivaron el inicio de la investigación.

[illegible]

²¹⁴ Artículo 29.- (...) La Contraloría, previo acuerdo del Presidente y notificación, en su caso, al titular de la ponencia respectiva, también está facultada para practicar investigaciones cuando por cualquier medio tenga conocimiento de hechos que pudieran constituir responsabilidades administrativas de los servidores públicos de la Suprema Corte, con excepción de los Ministros.

215 “**ARTICULO 202.-** Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente
afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones
de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente
que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no
prueban la verdad de lo declarado o manifestado.

Las declaraciones o manifestaciones de que se trata prueban plenamente contra quienes las hicieron o asistieron al acto en que fueron hechas, y se manifestaron conformes con ellas. Pierden su valor en el caso de que judicialmente se declare su simulación.

También harán prueba plena las certificaciones judiciales o notariales de las constancias de los libros parroquiales, relativos a las actas del estado civil de las personas, siempre que se refieran a época anterior al establecimiento del Registro Civil. Igual prueba harán cuando no existan los libros de registro, original y duplicado, y cuando, existiendo, estén rotas o borradas las hojas en que se encontraba el acta.

En caso de estar contradicho su contenido por otras pruebas, su valor queda a la libre apreciación del tribunal.”

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

cual se refiere, previa interpretación legal, el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 8, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

No es obstáculo para alcanzar la conclusión anterior el hecho de que las conductas imputadas en el auto de inicio del procedimiento disciplinario hayan sido calificadas como de acoso laboral, práctica que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha decidido afrontar y, en su caso, considerarla grave para efectos de responsabilidades, pues ni en el Acuerdo General III/2012 ni en el respectivo Manual de Buenas Prácticas para investigar y sancionar el acoso laboral en la Suprema Corte de Justicia de la Nación establecieron prescindir de las cargas probatorias necesarias para enervar el principio de presunción de inocencia que asiste al servidor público imputado, ni de las formalidades que exige la legislación procesal aplicable para ofrecer, desahogar y valorar el material probatorio tendente a acreditar las referidas prácticas.

Resultan aplicables, en lo conducente, los criterios rectores de las tesis aisladas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que este Tribunal Pleno comparte, que llevan por rubros: “ACOSO LABORAL (MOBBING). LA PERSONA ACOSADA CUENTA CON DIVERSAS VÍAS PARA HACER EFECTIVOS SUS DERECHOS, SEGÚN LA PRETENSIÓN QUE FORMULE”²¹⁶ y “ACOSO LABORAL

²¹⁶ “La persona que sufre daños o afectaciones derivadas del acoso laboral (mobbing) cuenta con diversas vías para ver restablecidos los derechos transgredidos a consecuencia de esa conducta denigrante. Al respecto, se parte de la base de que la verificación de ese tipo de comportamiento genera daños y afectaciones en el trabajador acosado, quien posee una serie de soluciones o alternativas legales para demandar lo que estime necesario, las cuales se traducen en diferentes acciones que la ley prevé como mecanismos para garantizar el acceso a la justicia y el recurso

(MOBBING). CARGA PROBATORIA CUANDO SE DEMANDA LA INDEMNIZACIÓN POR DAÑO MORAL EN LA VÍA CIVIL”²¹⁷, pues de ellos se desprende que la persona que aduce sufrir daños o afectaciones derivadas del acoso laboral cuenta con diversas vías para ver restablecidos los derechos transgredidos a consecuencia de esa conducta, y que cada uno de esos procedimientos dará lugar a una distribución de cargas probatorias distintas, según la normativa sustantiva y procesal aplicable al caso específico, a la que el actor deberá sujetarse una vez que opte por alguna de ellas. En este caso, es menester que esta Suprema Corte se ciña a las previstas en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Asimismo, de tales criterios se desprende que si el reclamo se rige por las normas civiles es menester que el solicitante asuma la carga de la prueba de los elementos esenciales de la acción y, en el caso concreto, si bien esta

judicial efectivo a que se refieren los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10 de la Ley General de Víctimas, según lo que el afectado pretenda obtener. Así, por ejemplo, si pretende la rescisión del contrato por causas imputables al empleador -sustentadas en el acoso laboral (mobbing)- ese reclamo debe verificarse en la vía laboral; si, por otro lado, sufre una agresión que pueda considerarse como delito, tendrá la penal para lograr que el Estado indague sobre la responsabilidad y, en su caso, sancione a sus agresores; asimismo, podrá incoar la vía administrativa si pretende, por ejemplo, que se sancione al servidor público que incurrió en el acto ilícito, o la civil, si demanda una indemnización por los daños sufridos por esa conducta; **de ahí que cada uno de esos procedimientos dará lugar a una distribución de cargas probatorias distintas, según la normativa sustantiva y procesal aplicable al caso específico, a la que el actor deberá sujetarse una vez que opte por alguna de ellas.** (Décima Época, Registro 2006869, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Julio de 2014, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a. CCL/2014 (10a.), Página: 138)

²¹⁷ “Cuando la persona que ha sufrido el acoso laboral (mobbing) opte por demandar el pago de una indemnización por daño moral, está obligada a demostrar los elementos propios de esa acción en la vía civil, con la carga de probar los siguientes elementos: i) el objetivo de intimidar, opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocional o intelectualmente al demandante, con miras a excluirlo de la organización o satisfacer la necesidad, por parte del hostigador, de agredir, controlar y destruir; ii) que esa agresividad o el hostigamiento laboral ocurra, bien entre compañeros del ambiente del trabajo, o por parte de sus superiores jerárquicos; iii) que esas conductas se hayan presentado sistemáticamente, es decir, a partir de una serie de actos o comportamientos hostiles, pues un acto aislado no puede constituir acoso; y, iv) que la dinámica en la conducta hostil se desarrolle según los hechos relevantes descritos en la demanda. De ahí que cuando queda demostrada la conducta de acoso laboral (mobbing), existe la presunción ordinaria sobre la afectación del valor moral controvertido; sin que sobre este elemento se requiera de mayor acreditación, pues no puede dudarse la perturbación que producen en el fuero interno de un individuo las conductas apuntadas, ya que el reclamo de una reparación por esos actos da noticia de que la víctima se sintió afectada en sus sentimientos. Así, la conducta ilícita de la demandada es susceptible de demostrarse, ya sea por alguna resolución judicial en la que se haya declarado la ilicitud en su forma de proceder, o bien, mediante las pruebas necesarias que acrediten los hechos relevantes de la demanda” (Décima Época, Registro: 2006868, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 8, Julio de 2014, Tomo I, Materia(s): Civil, Tesis: 1a. CCLI/2014 (10a.), Página: 137)

PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 6/2015

fue asumida por la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no existe el suficiente material incriminatorio para desvirtuar la presunción de inocencia que le asiste a los servidores públicos incriminados.

(v) **Juegos de naturaleza sexual entre los servidores públicos y formulación de expresiones de naturaleza sexual inapropiada (acoso sexual ambiental).**

Esta infracción administrativa está prevista en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 8, fracción VI, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y es imputada a ***** , ***** , ***** , ***** , ***** , ***** y ***** .

Los medios de prueba con los cuales se dio vista a los servidores públicos presuntamente responsables, son los siguientes:

- Comparecencia de veinticuatro de febrero de dos mil quince, a cargo de *****, Técnico Operativo de la Dirección General del Canal Judicial.
- Testimonial de catorce de octubre de dos mil quince, a cargo de *****.
- Testimonial de catorce de octubre de dos mil quince, a cargo de *****, servidor público del Canal Judicial.
- Testimonial de trece de octubre de dos mil quince, a cargo de *****.

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

- Testimonial de catorce de octubre de dos mil quince, a cargo de *****.
- Comparecencia de veinte de febrero de dos mil quince, a cargo de *****.
- Comparecencia de veintitrés de febrero de dos mil quince, a cargo de *****.
- Comparecencia de veintiséis de febrero de dos mil quince, a cargo de *****.
- Declaración de ***** , de dos de marzo de dos mil quince, entonces Coordinador Administrativo.
- Declaración de veintisiete de febrero de dos mil quince, a cargo de ***** , Talento de la Dirección General del Canal Judicial.
- Comparecencia de cuatro de marzo de dos mil quince, a cargo de ***** , en su carácter de Técnico Operativo del Canal Judicial.
- Comparecencia de veintisiete de febrero de dos mil quince, a cargo de ***** , Técnico Operativo del Canal Judicial.
- Testimonial de ***** , de diecinueve de octubre de dos mil quince, Técnico Operativo de la Dirección General del Canal Judicial.
- Copia certificada de la testimonial de ocho de febrero de dos mil trece, de ***** , dentro del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa ***** (fojas 1808 vuelta, 1809 a 1811 del Tomo II).
- Comparecencias de ***** , rendidas el tres y ocho de abril de dos mil trece, en el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa ***** (Tomo II, fojas 1820, 1821 y 1835).

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

- Diversa comparecencia de *****, de seis de septiembre de dos mil trece, en el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa ***** (fojas 1855 y 1856 del Tomo II)
- Comparecencias de doce de diciembre de dos mil doce y diecisiete de enero de dos mil trece, a cargo de *****, en el cuaderno de investigación ***** (Fojas 1849 vuelta y 1850 del Tomo II)

En primer lugar debe dejarse sentado que la comparecencia de ***** de cuatro de marzo de dos mil quince no deberá considerarse para efectos de resolver en el presente procedimiento. En efecto, los hechos sobre los cuales se fijó la materia de la investigación, no incluyen los denunciados la referida servidora pública, pues **se rindió con posterioridad a que se dictara el auto por el cual inició la investigación**, como se aprecia de la revisión de los autos y de la lectura del cuadro de hechos con apoyo en los cuales se inició la referida indagatoria.

La investigación sólo puede versar sobre los hechos fijados en el auto de inicio de la misma, como lo establece de manera imperativa el artículo 30-B del Acuerdo General 9/2005, el cual dispone que el acuerdo que ordena **la investigación** deberá expresar las circunstancias que la justifiquen, **sin extenderse a hechos distintos a los señalados en dicho acuerdo.**

Se advierte que la razón lógica de esa disposición, es que cuando se inicia una investigación ya se cuenta con suficientes datos de hecho para justificarla y sólo se requiere recabar pruebas para

sustentar las denuncias, como se infiere del artículo 32, tercer párrafo, del Acuerdo General 9/2005. De ahí que si se dicta un auto de inicio de investigación ya no es necesario continuar recibiendo más comparecencias, denuncias o quejas y menos aún, recabar material probatorio para sustentarlas. De otro modo, el procedimiento de investigación se tornaría arbitrario y sería inútil toda motivación que se hubiere dado en el auto de inicio de la investigación para llevarla a cabo, lo cual trastocaría los principios de legalidad, debido procedimiento y seguridad jurídica.

No obstante, de la revisión de autos se advierte que una vez dictado el auto de inicio de investigación de cuatro de marzo de dos mil quince, se siguieron recibiendo comparecencias de otros servidores públicos, como la de *****, en la que refirió acontecimientos que si bien tienen relación con juegos de naturaleza sexual entre los servidores públicos adscritos a la Dirección General del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,²¹⁸ no son eventos concretos, sujetos a ciertas circunstancias de tiempo, modo y lugar, que deban ser investigados en términos del citado artículo 30 B del Acuerdo General 9/2005, so pena de violar las reglas del debido procedimiento. Por esa razón, no será considerada la comparecencia a la que se ha hecho referencia.

En cuanto a las comparecencias de *****, rendidas el tres y ocho de abril de dos mil trece, en el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa *****; la rendida por la misma servidora pública el día seis de septiembre de dos mil trece, en el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa ***** (fojas 1855 y 1856 del Tomo II); y

²¹⁸ Su declaración, en lo que interesa, consiste en lo siguiente: "(...) pero también permitía ver lo que sucedía ahí, como los toqueteos entre el personal, especialmente, recuerdo a *****, del cual no tengo presente en este momento su apellido, pero es el único con ese nombre, quien provocaba un ambiente vulgar al hablar con gorserías y efectuar tocamientos en los genitales de otros compañeros, a quienes detenía por la espalda o de frente o "sándwich" (...)" Foja 383 vuelta del Tomo I A del expediente en el que se actúa.

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

las comparecencias de doce de diciembre de dos mil doce y diecisiete de enero de dos mil trece, a cargo de *****, se tiene lo siguiente:

De la revisión de autos se advierte que el Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el auto de diecisiete de agosto de dos mil quince, autorizó que se agregaran a la investigación las copias certificadas de mérito, bajo el argumento de que estaban relacionadas con los hechos materia de la investigación; sin embargo, el artículo 30 A, tercer párrafo, del Acuerdo General 9/2005, establece en qué casos deberán agregarse actuaciones de otras investigaciones. Dicho precepto dispone:

Artículo 30 A. (...)

Si en el dictamen se concluye que no existen elementos suficientes para advertir la probable existencia de alguna causa de responsabilidad administrativa, la información o documentos recabados en esa investigación podrán valorarse en una posterior, siempre y cuando lo autorice el órgano que ordenó la nueva investigación y no haya prescrito la facultad sancionadora.

Esto quiere decir que el auto de diecisiete de agosto de dos mil quince, debió considerar dentro de su motivación lo siguiente:

- a) Que las investigaciones *****, ***** y ***** habían concluido en el sentido que no existen elementos suficientes para advertir la probable existencia de alguna causa de responsabilidad administrativa; y,
- b) Que no ha prescrito la facultad sancionadora.

Esa indebida motivación se traduce en una trasgresión al principio de legalidad y de debido procedimiento, motivo por el cual no deben considerarse para efectos de resolver este procedimiento.

Ahora bien, los hechos a los cuales se refieren las restantes comparecencias son las siguientes:

- **Comparecencia de veinticuatro de febrero de dos mil quince, a cargo de *****, Técnico Operativo de la Dirección General del Canal Judicial.**

“Los primeros indicios de acoso se dieron cuando me negué a tomar bebidas alcohólicas, a ser toqueteado en mis partes nobles por parte del Subdirector de producción *****, acción que era común entre él y los demás compañeros, (...)”

1. Foja 1, párrafo primero, los hechos a los que me refiero en relación a la ingesta de bebidas alcohólicas y a los juegos sexuales acontecieron en el año de dos mil nueve. En ese tiempo ya se venían dando ese tipo de sucesos con los demás compañeros, es decir, *****, subdirector de producción, llegaba a agarrarle las nalgas y el pene, a la gente que era de su área, por lo regular, a los camarógrafos que tenía asignados. Cuando salían los viernes a bares yo los acompañaba pero no tomaba porque sufro de diabetes, motivo por el cual ***** me refería que era una lástima que no participara en esas dinámicas y al no participar, me excluyeron del grupo. Por otra parte, quiero referir que las personas que advirtieron cuando ***** me tocaba las nalgas, al tiempo que refería “¿cómo estás gordo?”, en varias ocasiones, fueron *****, *****, *****, todos ellos servidores públicos que desempeñan también las actividades de camarógrafos. En algún momento ***** llegó a hacerlo delante de la señorita *****, todo esto durante varios meses en dos mil nueve. Esta situación traté de evitarla, pues le dije a ***** que no me gustaba que me tocara así, pero él me contestaba “no seas puto cabrón, déjate”, y ahí quedaba todo. Estas situaciones al principio me parecieron un juego y por eso lo dejé pasar, pero con el tiempo y la constancia con que se presentaba decidí rechazarlas, incluso cuando ***** se acercaba a mí, yo me daba la vuelta y lo saludaba, él con el tiempo se fue alejando y dejó de hacerlo. A quien sabía que no se le acercaba para tratarlo así fue a *****, porque él reaccionaba de manera brusca. Esto nunca lo hice del conocimiento de un superior para denunciar por miedo a perder mi trabajo, pues sabía que lo más sano era “llevar la fiesta en paz”, además porque ***** era amigo del Director General del Canal Judicial y no iba a hacer nada, por eso nadie señaló esta conducta, incluso esto se venía dando hasta hace poco.

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

Otra práctica de ***** consistía en “hacerle como perro copulando”, se ponían atrás de uno y lo empujaba, incluso lo llegó a hacer delante de las compañeras secretarias, sobre todo frente a ***** , pues era quien estaba ubicada afuera de su oficina. (...)”

- **Comparecencia de veinte de febrero de dos mil quince, a cargo de *****.**

“(....) consideré necesario acudir a esta Contraloría para proporcionar cuatro fotos que ***** me envió a mi celular, por whatsapp, aproximadamente en agosto o septiembre de dos mil trece, cuando yo todavía laboraba en la Dirección General del Canal Judicial, en una foto aparece el rostro de ***** sin lentes, en otra, aparece tomándose una foto con su celular con el torso desnudo, en las dos siguientes aparece un torso desnudo y también muestra su pene, pero no su rostro. Cuando me mandó esas fotos, yo fotografié la pantalla de mi celular y como tenía mi dispositivo conectado al “icloud”, las fotos se subieron a dicha aplicación o nube y allí permanecieron guardadas incluso a la fecha. Ayer, busqué en mis imágenes de “icloud” y las bajé a mi computadora para enviarlas a mi correo electrónico personal para poder exhibirlas en esta diligencia. Quiero manifestar que las fotos que me envió ***** no las presenté a esta Contraloría en esa fecha, porque tenía mucho miedo a las represalias, a perder mi trabajo y a que afectara el proceso de acoso sexual que se seguía en contra de otro servidor público. En ese momento, también mi abogado me dijo que no era conveniente que las mencionara porque todavía estaba pendiente la resolución del proceso administrativo P.R.A. ***** y del proceso penal que se instauró contra ***** , entonces me explicó que si quería ejercer alguna acción legal lo hiciera con posterioridad a las resoluciones respectivas ya que de no ser así, podría incidir de manera negativa en el ambiente de trabajo en el que en ese entonces me desenvolvía y que se podía complicar más, por tanto, deseo aclarar que con motivo de la nota periodística que referí, me sentí obligada a exhibir dicho material fotográfico para los efectos legales a que haya lugar. Además, como lo declaré en su momento tanto en el procedimiento de responsabilidad administrativa P.R.A. ***** como en un diverso cuaderno de investigación cuyo número desconozco; estas fotografías ejemplifican la manera de conducirse de ***** y corroboran el ambiente que se vivía y se sigue viviendo en el Canal Judicial y que se caracterizó por “juegos” con connotación sexual que realizaban los servidores públicos varones, entre ellos, recuerdo a ***** , ***** , ***** , ***** , ***** y una persona cuyo nombre no recuerdo pero sé que se apellida “*****”, aproximadamente de cuarenta y cinco años, en los que simulaban sostener relaciones sexuales entre

ellos en distintas posiciones, con tocamientos, como por ejemplo, uno de ellos se paraba detrás de otro, acercando su cuerpo, en específico el área donde se localiza su pene, a las nalgas del otro y hacían movimientos frotándose entre ellos, como si estuvieran teniendo relaciones sexuales, a tal grado que incluso vestidos, en ocasiones, se alcanzaba a notar como si sus penes estuvieran erectos, situación que sé porque ellos se burlaban cuando eso sucedía expresando cosas como “ay, este ya se emocionó”. En otra ocasión me tocó ver que uno estaba sentado y otro llegaba, le alzaba la pierna al tiempo que se “le echaba encima” inclinándose hacia el otro de manera que los penes de ambos se frotaran entre sí, todo esto sin quitarse la ropa. Por ese motivo, considero importante proporcionar las fotografías que me envié *****. Siendo todo lo que deseo manifestar”.

- Comparecencia de veintitrés de febrero de dos mil quince, a cargo de *****.

(...) “en horario laboral ***** organizaba torneos de play station o dominó en su oficina y en éstos algunas veces participaban *****”, ***** , todos son mis compañeros del Canal Judicial, (...), estas conductas las realizaba y las fomentaba con su grupo cercano que estaba formado con los compañeros que ya señalé, ellos realizaban varios juegos, como tocarse entre ellos sus genitales y darse nalgadas ” (...) [fojas 53 y vuelta].

- Comparecencia de veintiséis de febrero de dos mil quince, a cargo de *****.

(...) “Recuerdo que ***** se prestaba a ese tipo de juegos y se llevaba con algunos de los camarógrafos a “mentadas de madre”, quienes además tenían la costumbre de agarrarse las nalgas, los penes y testículos, en ocasiones se decían entre ellos “cada día estas más bueno”, quiero precisar que yo no participaba en esos juegos.” (...) [foja182].

- Declaración de *****, de dos de marzo de dos mil quince, entonces Coordinador Administrativo:

“ (...) Por otro lado, también era una práctica recurrente abrazarse y realizar tocamientos en las nalgas y en los penes entre los directivos, como por ejemplo, ****, **** y ****, a manera de juego, delante de quien fuera, en ocasiones, **** se subía encima de sus compañeros camarógrafos y simulaba tener relaciones sexuales con ellos. (...)”

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

- Declaración de veintisiete de febrero de dos mil quince, a cargo de *****, Talento de la Dirección General del Canal Judicial.

“En el área de producción me tocó ver cómo frecuentemente, en el espacio que ocupa *****, siempre presente y varios de sus colaboradores, unos cinco o seis, de los cuales no recuerdo sus nombres y algunos, ni sus rostros, se tocaban las nalgas y los penes entre ellos, utilizando un lenguaje vulgar de índole sexual, como “pitos”, “nalgas”, “culos”, “puto”, “verga”; se encimaban unos con otros, por lo que cuando yo escuchaba o veía algo así, mejor me iba a mi coche a esperar la hora de inicio de mi noticiero.”

- Comparecencia de veintisiete de febrero de dos mil quince, a cargo de *****, Técnico Operativo del Canal Judicial.

(...) “Por otra parte, quiero manifestar que aproximadamente a fines del año pasado, cuando caminaba cerca de ***** y al quedar de espaldas a él, estiró una de sus manos y me rozó las “nalgas”, situación que ha pasado continuamente, no sé con precisión cuantas veces ha ocurrido, pero la última vez que lo hizo fue la semana pasada, pese a que desde la primera vez le reclamé su conducta, señalándole que no me gusta que me agarren. Además, una vez recuerdo que “*****” fue a mi casa a hacer una nota con mi hijo *****, allí conoció a mi hija, más adelante un compañero, no recuerdo quién fue, me comentó que “*****” decía entre los compañeros de la oficina que ya se había “cogido” a mi hija, situación por la que le reclamé a este último, quien me dijo que era broma, yo le reiteré que no me gustaba que ofendieran a mi hija sin motivo alguno y desde entonces no le volví a dirigir la palabra y me limité a saludarlo.” (...) [foja 203].

Como se aprecia de las declaraciones transcritas, éstas no incriminan a *****, motivo por el cual no ha lugar a analizar si dicho servidor público incurrió en las prácticas que son consideradas acoso sexual ambiental que sí se le atribuyen a *****, *****, *****, *****, ***** y *****.

Dichas imputaciones deberán ser acreditadas con los respectivos medios de prueba, cuya práctica ordenó el Contralor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los medios de prueba son las testimoniales desahogadas por *****, *****, los tres el día catorce, ***** el día trece y ***** el día diecinueve, todos del mes de octubre de dos mil quince, así como la copia certificada de la testimonial de ocho de febrero de dos mil trece, de *****, dentro del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa *****.

Por cuestión de método, es menester referirse, en primer lugar, las testimoniales precisadas en el auto de inicio del procedimiento disciplinario, y para ello es necesario determinar si reúnen o no los requisitos y formalidades a los que se refiere el artículo 176 del Código Federal e Procedimientos Civiles, el cual, por su importancia, conviene reiterar a continuación:

Artículo 176.- Después de tomarse, al testigo, la protesta de conducirse con verdad, y de advertirlo de las penas en que incurre el que se produce con falsedad, se hará constar su nombre, edad, estado, lugar de residencia, ocupación, domicilio, si es pariente consanguíneo o afín de alguno de los litigantes, y en qué grado; si tiene interés directo en el pleito o en otro semejante, y si es amigo íntimo o enemigo de alguna de las partes. A continuación, se procederá al examen.

De la revisión íntegra de las testimoniales de mérito se advierte que no reúnen las formalidades a las que se refiere el artículo antes transcrito. Para ello, conviene transcribir la primera parte del acta en la que se hace constar el desahogo de cada una de ellas:

A.- ***.**

PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 6/2015

“En México, Distrito Federal, siendo las nueve horas con treinta y cinco minutos del catorce de octubre de dos mil quince, en las oficinas que ocupa la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial de la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicadas en calle Dieciséis de Septiembre, número treinta y ocho, quinto piso, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad, la maestra ***** Subdirectora General del Responsabilidades Administrativas, y las testigos de asistencia, maestra ***** y licenciada ***** dictaminadoras II, todas con adscripción a dicha dirección general, en cumplimiento de lo ordenado en proveído de veintiuno de septiembre de dos mil quince, dictado en el cuaderno de investigación ***** , hace constar que se encuentra presente ***** , quien previamente quedó identificado en diversa acta del día de hoy. Lo anterior, a efecto de recabar su declaración como testigo en torno a hechos que se investigan en el expediente citado.

Acto seguido, se protesta a ***** , para que se conduzca con verdad en esta diligencia y se le hace saber las penas a las que se pueden hacer acreedores aquéllos que se conducen con falsedad ante una autoridad distinta de la judicial, en términos de los artículos 247, fracción I, del Código Penal Federal y 23 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que se leen y se transcriben en la parte que interesa:

“Artículo 247.- Se impondrá de cuatro a ocho años de prisión y de cien a trescientos días multa:

I. Al que interrogado por alguna autoridad pública distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad”.

“Artículo 23.- Se levantará acta circunstanciada de todas las diligencias que se practiquen, teniendo la obligación de suscribirla quienes intervengan en ella, si se negaren a hacerlo se asentará dicha circunstancia en el acta. Asimismo, se les apercibirá de las penas en que incurrirán quienes falten a la verdad”.

También se le hace de conocimiento el contenido del artículo 165 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia de responsabilidades, que establece:

“Artículo 165. Todos los que tengan conocimiento de los hechos que las partes deben probar, están obligados a declarar como testigos”.

Hecho lo anterior, ***** manifiesta: “sí protesto conducirme con verdad”. Refirió llamarse como ha quedado escrito, de cincuenta y cinco años de edad, estado civil casado, con domicilio en ***** , con último grado de estudios preparatoria.

En este momento, se hace del conocimiento de ***** , cuales son los hechos por los que se le llamó a declarar como testigo en este cuaderno de investigación, para lo cual se transcribe un fragmento de

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

la comparecencia de ***** de veinticuatro de febrero de dos mil quince, en la que señaló: (...)"

B.- *****:

"En México, Distrito Federal, siendo las diez horas con veinte minutos del catorce de octubre de dos mil quince, en las oficinas que ocupa la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial de la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicadas en calle Dieciséis de Septiembre, número treinta y ocho, quinto piso, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad, la maestra ***** Subdirectora General del Responsabilidades Administrativas, y las testigos de asistencia, maestra ***** , dictaminadoras II, todas con adscripción a dicha dirección general, en cumplimiento de lo ordenado en proveído de veintiuno de septiembre de dos mil quince, dictado en el cuaderno de investigación ***** , hace constar que se encuentra presente ***** , quien previamente quedó identificado en diversa acta del día de hoy. Lo anterior, a efecto de recabar su declaración como testigo en torno a hechos que se investigan en el expediente citado.

Acto seguido, se protesta a ***** , para que se conduzca con verdad en esta diligencia y se le hace saber las penas a las que se pueden hacer acreedores aquéllos que se conducen con falsedad ante una autoridad distinta de la judicial, en términos de los artículos 247, fracción I, del Código Penal Federal y 23 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que se leen y se transcriben en la parte que interesa:

"Artículo 247.- Se impondrá de cuatro a ocho años de prisión y de cien a trescientos días multa:

I. Al que interrogado por alguna autoridad pública distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad".

"Artículo 23.- Se levantará acta circunstanciada de todas las diligencias que se practiquen, teniendo la obligación de suscribirla quienes intervengan en ella, si se negaren a hacerlo se asentará dicha circunstancia en el acta. Asimismo, se les apercibirá de las penas en que incurrir quienes falten a la verdad".

También se le hace de conocimiento el contenido del artículo 165 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia de responsabilidades, que establece:

"Artículo 165. Todos los que tengan conocimiento de los hechos que las partes deben probar, están obligados a declarar como testigos".

Hecho lo anterior, ***** manifiesta: "sí protesto conducirme con verdad". Refirió llamarse como ha quedado escrito, de *** años de edad, estado civil soltero, con domicilio en ***** , con último grado de estudios licenciatura trunca en administración de empresas.

En este momento, se hace del conocimiento de ***** , cuales son los hechos por los que se le llamó a declarar como testigo en este cuaderno de investigación, para lo cual se transcribe un fragmento de la comparecencia de ***** de veinticuatro de febrero de dos mil quince, en la que señaló: (...)"

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

C.- *****.

“En México, Distrito Federal, siendo las trece horas del catorce de octubre de dos mil quince, en las oficinas que ocupa la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial de la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicadas en calle Dieciséis de Septiembre, número treinta y ocho, quinto piso, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad, la maestra ***** Subdirectora General del Responsabilidades Administrativas, y las testigos de asistencia, maestra ***** y licenciada ***** dictaminadoras II, todas con adscripción a dicha dirección general, en cumplimiento de lo ordenado en proveído de veintiuno de septiembre de dos mil quince, dictado en el cuaderno de investigación ***** , hacen constar que se encuentra presente ***** , quien previamente quedó identificado en diversa acta del día de hoy. Lo anterior, a efecto de recabar su declaración como testigo en torno a hechos que se investigan en el expediente citado.

Acto seguido, se protesta a ***** , para que se conduzca con verdad en esta diligencia y se le hace saber las penas a las que se pueden hacer acreedores aquéllos que se conducen con falsedad ante una autoridad distinta de la judicial, en términos de los artículos 247, fracción I, del Código Penal Federal y 23 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que se leen y se transcriben en la parte que interesa:

“Artículo 247.- Se impondrá de cuatro a ocho años de prisión y de cien a trescientos días multa:

I. Al que interrogado por alguna autoridad pública distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad”.

“Artículo 23.- Se levantará acta circunstanciada de todas las diligencias que se practiquen, teniendo la obligación de suscribirla quienes intervengan en ella, si se negaren a hacerlo se asentará dicha circunstancia en el acta. Asimismo, se les apercibirá de las penas en que incurrirán quienes falten a la verdad”.

También se le hace de conocimiento el contenido del artículo 165 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia de responsabilidades, que establece:

“Artículo 165. Todos los que tengan conocimiento de los hechos que las partes deben probar, están obligados a declarar como testigos”.

Hecho lo anterior, ***** manifiesta: “sí protesto conducirme con verdad”. Refirió llamarse como ha quedado escrito, de cuarenta y un años de edad, estado civil casado, con domicilio en ***** , con último grado de estudios preparatoria.

En este momento, se hace del conocimiento de ***** , cuáles son los hechos por los que se le llamó a declarar como testigo en este cuaderno de investigación, para lo cual se transcribe un fragmento de

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

la comparecencia de ****, de veinticuatro de febrero de dos mil quince, en la que señalo: (...)"

D.- ***:**

"En México, Distrito Federal, siendo las nueve horas con treinta y cinco minutos del trece de octubre de dos mil quince, en las oficinas que ocupa la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial de la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicadas en calle Dieciséis de Septiembre, número treinta y ocho, quinto piso, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad, la maestra ***** Subdirectora General del Responsabilidades Administrativas, y las testigos de asistencia, maestra ***** dictaminadoras II, todas con adscripción a dicha dirección general, en cumplimiento de lo ordenado en proveído de veintiuno de septiembre de dos mil quince, dictado en el cuaderno de investigación *****, hacen constar que se encuentra presente *****, quien previamente quedó identificado en diversa acta del día de hoy. Lo anterior, a efecto de recabar su declaración como testigo en torno a hechos que se investigan en el expediente citado.

Acto seguido, se protesta a *****, para que se conduzca con verdad en esta diligencia y se le hace saber las penas a las que se pueden hacer acreedores aquéllos que se conducen con falsedad ante una autoridad distinta de la judicial, en términos de los artículos 247, fracción I, del Código Penal Federal y 23 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que se leen y se transcriben en la parte que interesa:

"Artículo 247.- Se impondrá de cuatro a ocho años de prisión y de cien a trescientos días multa:

I. Al que interrogado por alguna autoridad pública distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad".

"Artículo 23.- Se levantará acta circunstanciada de todas las diligencias que se practiquen, teniendo la obligación de suscribirla quienes intervengan en ella, si se negaren a hacerlo se asentará dicha circunstancia en el acta. Asimismo, se les apercibirá de las penas en que incurrirán quienes falten a la verdad".

También se le hace de conocimiento el contenido del artículo 165 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia de responsabilidades, que establece:

"Artículo 165. Todos los que tengan conocimiento de los hechos que las partes deben probar, están obligados a declarar como testigos".

Hecho lo anterior, ***** manifiesta: "sí protesto conducirme con verdad". Refirió llamarse como ha quedado escrito, de cincuenta y cuatro años de edad, estado civil casado, con domicilio en *****, con último grado de estudios preparatoria.

(...)

Continuando con la diligencia, se hace del conocimiento de ***** cuáles son los hechos por los que se le llamó a declarar como testigo en este cuaderno de investigación, para lo cual se transcribe un fragmento de la comparecencia de diecinueve de febrero de dos mil

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

quince, en la que se señaló: “8.- Foja diez, sexto párrafo, quiero precisar que los compañeros ***** (....) son testigos (....)”

E.- ***:**

“En México, Distrito Federal, siendo las trece horas del diecinueve de octubre de dos mil quince, en las oficinas que ocupa la Dirección General de Responsabilidades Administrativas y de Registro Patrimonial de la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicadas en calle Dieciséis de Septiembre, número treinta y ocho, quinto piso, colonia Centro, delegación Cuauhtémoc, en esta Ciudad, la maestra *****, Subdirectora General del Responsabilidades Administrativas, y los testigos de asistencia, licenciados *****, profesionales operativos todos con adscripción a dicha dirección general, en cumplimiento de lo ordenado en proveído de dos de octubre de dos mil quince, dictado en el cuaderno de investigación *****, hace constar que se encuentra presente *****, quien se identifica con credencial para votar número *****, expedida por el Instituto Federal Electoral, la cual contiene fotografía que coincide con los rasgos fisionómicos del mismo y de la que se obtiene copia para agregarla a esta acta. Lo anterior, a efecto de recabar su declaración como testigo en torno a hechos que se investigan en el expediente citado.

Acto seguido, se protesta a *****, para que se conduzca con verdad en esta diligencia y se le hace saber las penas a las que se pueden hacer acreedores aquéllos que se conducen con falsedad ante una autoridad distinta de la judicial, en términos de los artículos 247, fracción I, del Código Penal Federal y 23 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que se leen y se transcriben en la parte que interesa:

“Artículo 247.- Se impondrá de cuatro a ocho años de prisión y de cien a trescientos días multa:

I. Al que interrogado por alguna autoridad pública distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad”.

“Artículo 23.- Se levantará acta circunstanciada de todas las diligencias que se practiquen, teniendo la obligación de suscribirla quienes intervengan en ella, si se negaren a hacerlo se asentará dicha circunstancia en el acta. Asimismo, se les apercibirá de las penas en que incurrir quienes falten a la verdad”.

También se le hace de conocimiento el contenido del artículo 165 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia de responsabilidades, que establece:

“Artículo 165. Todos los que tengan conocimiento de los hechos que las partes deben probar, están obligados a declarar como testigos”.

Hecho lo anterior, ***** manifiesta: “sí protesto”. Refirió llamarse como ha quedado escrito, de cincuenta y dos años de edad, estado

civil casado, con domicilio en ***** ocupación técnico operativo adscrito a la Dirección General del Canal Judicial bajo un contrato de prestación de servicios profesionales por honorarios, con último grado de estudios de secundaria y con estudios en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la Universidad Nacional Autónoma de México.

En este momento se hace del conocimiento de *****, cuáles son los hechos por los que se le llamó a declarar como testigo en este cuaderno de investigación, para lo cual se da lectura de un fragmento de la comparecencia de *****, en la que señaló: “(....)”

Como ya quedó explicado en páginas precedentes, es esencial que los testigos manifiesten que guardan completa independencia e imparcialidad con respecto a los hechos y a la persona contra la cual deberán atestiguar. La exigencia a la que se refiere el artículo 176 del código procesal citado no es innecesaria, pues dada la naturaleza e importancia de la prueba testimonial, es menester asegurar que los hechos sobre los cuales se declarará estén lo más apegados posible a criterios de objetividad y veracidad. En un considerando anterior quedaron evidenciadas las dificultades que entraña la prueba testimonial, en el sentido de que ésta depende de la apreciación de los hechos que tiene cada persona y su facilidad de expresarlos adecuadamente, además de que en muchas ocasiones, no se cuenta con otros elementos para probar determinados sucesos, de tal manera que la doctrina sostiene que la prueba testimonial ha sido revestida, inclusive, de cierta solemnidad.

Bajo esta óptica es que debe entenderse la previsión contenida en el diverso artículo 198 de la misma codificación procesal, el cual dispone, de manera categórica, que **no tendrán valor legal alguno las pruebas rendidas con infracción de lo dispuesto en los artículos precedentes del Título Cuarto**, de ahí que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en respeto al principio de legalidad y del debido proceso, concluya que las testimoniales recabadas durante la investigación, en las cuales se sustenta el auto de inicio del

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

procedimiento disciplinario, carecen de valor legal para incriminar a los servidores públicos a los cuales se refiere este apartado.

Por identidad de razones, resulta aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que este Tribunal Pleno comparte, que es del siguiente tenor:

“PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. SUPUESTOS EN QUE DEBE NULIFICARSE SU EFICACIA.” **La eficacia de las pruebas en el procedimiento penal debe nulificarse en los casos en que la norma transgredida establezca:** (i) garantías procesales, (ii) **la forma en que se practica la diligencia**, o bien, (iii) derechos sustantivos en favor de la persona. Por su parte, las pruebas derivadas (aunque lícitas en sí mismas) deben anularse cuando aquellas de las que son fruto resultan inconstitucionales. Así, los medios de prueba que deriven de la vulneración de derechos fundamentales no deben tener eficacia probatoria, pues de lo contrario se trastocaría la garantía de presunción de inocencia, la cual implica que nadie puede ser condenado si no se comprueba plenamente el delito que se le imputa y la responsabilidad penal en su comisión, circunstancia que necesariamente implica que las pruebas con las cuales se acreditan tales extremos, deben haber sido obtenidas lícitamente.²¹⁹

No es obstáculo para lo anterior el hecho de que el artículo 186 del Código Federal de Procedimientos Civiles prevea el derecho de las partes de atacar el dicho de un testigo cuando, por cualquier circunstancia, estimen que se afecta su credibilidad (tacha de testigos), pues ésta es una facultad que tienen las partes mas que una carga procesal que deban cumplir para descartar el valor probatorio del medio de prueba, además, la tacha es innecesaria si la propia ley de la materia exige que la prueba testimonial cumpla con determinadas formalidades, so pena de que, al incumplirlas, pierda

²¹⁹ “Décima Época, Registro: 160500, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, Materia(s): Constitucional, Penal, Tesis: 1a./J. 140/2011 (9a.), Página: 2058.

todo su valor probatorio, lo cual puede ser determinado por el juzgador en ejercicio de la potestad a la cual se refiere el artículo 197 de la misma codificación, consistente en la amplia libertad que tiene para hacer el análisis de las pruebas rendidas, observando lo dispuesto por la ley, en el caso concreto, los artículos 176 y 215, fracción IV, de la misma codificación.²²⁰

Si bien este último precepto resulta aplicable en un segundo nivel, que es el de la valoración de aquella prueba que sí reúne las formalidades que exige la ley, es indicativo de la necesidad de que existan elementos formales para poder determinar si el testigo guarda independencia de su posición, con los cuales no se cuenta en el caso de las testimoniales en análisis.

Al respecto, es aplicable el criterio rector que orienta a las tesis de este Alto Tribunal, que llevan por rubros: "TESTIGOS, TACHAS DE LOS",²²¹ y "TESTIGOS, TACHA DE LOS (LEGISLACION DEL ESTADO DE PUEBLA)",²²² pues de ellas se desprende que el juzgador

²²⁰ **Artículo 215.-** El valor de la prueba testimonial quedará al prudente arbitrio del tribunal, quien, para apreciarla, tendrá en consideración: (...)

IV.- Que, por su probidad, por la independencia de su posición o por sus antecedentes personales, tengan completa imparcialidad; (...)"

²²¹ "El artículo 371 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Distrito Federal, previene que en el acto del examen de un testigo, o dentro de los tres días siguientes, pueden las partes atacar el dicho de aquél, por cualquiera circunstancia que, en su concepto, afecte su credibilidad, cuando la misma no haya sido ya expresada en sus declaraciones, sustanciándose la petición de tachas en forma sumaria, por cuerda separada, y reservando su resolución para la sentencia definitiva. De los términos de este precepto se advierte que **la sustanciación de la tacha sólo puede realizarse cuando la circunstancia que afecta la credibilidad del testigo, no consta en autos, pues si consta, lo único que tienen que hacerse es tomarse en cuenta al dictar la sentencia definitiva.**(Quinta Época, Registro: 356259, Instancia: Tercera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo LVIII, Materia(s): Civil, Página: 639).

²²² **"Si el juzgador, al valorar la prueba testimonial rendida en juicio civil, toma en consideración tachas de los testigos, no obstante que no se hayan hecho valer mediante el incidente que la ley concede para el efecto, no incurre en violación del principio de que la jurisdicción civil se ejerce a petición de parte, porque es obligación del juzgador analizar las pruebas rendidas. Ese análisis y la valoración correspondiente debe hacerse de oficio, porque el artículo 286, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, ordena, que el Juez "estimaré el valor de las pruebas fijando los principios en que se apoya, para admitir o desechar aquéllas cuya calificación deja la ley a su juicio..."**, y el artículo 276 del mismo código dispone: " El Juez nunca repelerá de oficio al testigo. Aunque de autos aparezca alguna tacha, se recibirá su declaración, pero se tendrá en cuenta el impedimento, para su calificación en la sentencia." (Época: Sexta Época, Registro: 271140, Instancia: Tercera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen XLIV, Cuarta Parte, Materia(s): Civil, Página: 154)

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

cuenta con la más amplia facultad para determinar en sentencia si existe algún elemento que pudiera afectar la credibilidad o imparcialidad de un testigo, cuando ello consta en autos, pese a que no se hubiere interpuesto el incidente de tacha de testigos. Lo anterior, porque es obligación del juzgador analizar la idoneidad de las pruebas rendidas, lo cual debe hacerse de oficio.

Finalmente, en cuanto a la copia certificada de la testimonial rendida por ***** en diverso procedimiento disciplinario, se tiene que este medio probatorio, por sí mismo, y sin estar robustecido por algún otro medio probatorio, no puede ser considerado en el presente procedimiento administrativo para efectos de brindarle algún valor, por las razones que se exponen a continuación.

a.- Como se refirió en apartados anteriores, es factible que el Contralor de esta Suprema Corte incorpore a la investigación constancias que obran en otra investigación, pero para ello es menester que funde su determinación en el artículo 30 A, tercer párrafo, del Acuerdo General 9/2015 y, además, motive en el sentido de que el procedimiento disciplinario ***** concluyó por no contar con elementos suficientes para advertir la probable existencia de alguna causa de responsabilidad administrativa y que no ha prescrito la facultad sancionadora por los hechos asentados en aquellas actuaciones.

Sin embargo, dicha motivación no se aprecia en el auto de diecisiete de agosto de dos mil quince, por el cual se ordenó su

incorporación,²²³ lo cual es relevante porque constituye una transgresión a los principios de legalidad, seguridad jurídica y debido procedimiento, motivo por el cual no deben ser considerados para efectos de la presente determinación.

b.- En adición, en el auto de diecisiete de agosto de dos mil quince no se precisa en contra de qué servidor público se siguió el procedimiento de responsabilidad administrativa *****. De acuerdo con el auto de inicio de investigación de cuatro de marzo de dos mil quince, se infiere que se instauró en contra de *****, persona que no está vinculada con el presente procedimiento. Por tanto, se desconoce si en su momento *****, *****, *****, *****, ***** y ***** tuvieron intervención en tal investigación y pudieron ejercer el contradictorio respectivo.

c. La declaración de ***** no se desahogó en este procedimiento administrativo **6/2015** bajo las formalidades de una testimonial, es decir, no fue citada, no compareció ni tampoco fue examinada de manera verbal por la Contraloría en el presente asunto, por lo que entonces se trata más bien de una prueba documental pública en la que se hace constar la declaración de un testigo en otro procedimiento. En este aspecto, el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles dispone lo siguiente:

“ARTICULO 202.- Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado.

Las declaraciones o manifestaciones de que se trata prueban plenamente contra quienes las hicieron o asistieron al acto en que fueron hechas, y se manifestaron conformes con ellas. Pierden su valor en el caso de que judicialmente se declare su simulación.

²²³ Foja 1801 vuelta del Tomo II del expediente en el que se actúa.

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

También harán prueba plena las certificaciones judiciales o notariales de las constancias de los libros parroquiales, relativos a las actas del estado civil de las personas, siempre que se refieran a época anterior al establecimiento del Registro Civil. Igual prueba harán cuando no existan los libros de registro, original y duplicado, y cuando, existiendo, estén rotas o borradas las hojas en que se encontraba el acta.

En caso de estar contradicho su contenido por otras pruebas, su valor queda a la libre apreciación del tribunal.”

Por lo tanto, la copia certificada de la testimonial rendida por ***** que obra agregada a los presentes autos sólo prueba plenamente que ante la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se hicieron las declaraciones o manifestaciones a las que se refiere la citada ex servidora pública, y estaban más bien relacionadas con el procedimiento que se siguió en contra de *****, pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado por la referida testigo en contra de *****, *****, *****, *****, ***** y *****, y no se cuenta con mayores indicios para brindarle algún valor probatorio. Lo más importante es que dicha documental se incorporó de manera ilegal, sin respetar las reglas procedimentales contenidas en el Acuerdo General 9/2005.

En cuanto a las comparecencias que se consideraron para dar inicio tanto a la investigación como al procedimiento administrativo de responsabilidades, las cuales refieren que ***** tocaba las nalgas y los penes de sus compañeros de trabajo, que tenía la práctica de ponerse atrás de sus compañeros “como perro copulando” incluso frente a las secretarías, que dicho servidor público y *****, ***** e ***** llevaban a cabo llevaban a cabo juegos de connotación sexual, en los que simulaban sostener relaciones sexuales, que ***** y ***** realizaban varios juegos, como tocarse entre ellos sus genitales y darse nalgadas, y que ***** se refirió inapropiadamente a la hija de *****, al

afirmar que la había “cogido”, se tiene que sin medios de prueba pertinentes, idóneos y apegados a las formalidades esenciales del procedimiento, son insuficientes para determinar la existencia de la infracción administrativa y la correlativa responsabilidad, pues sería contrario a la naturaleza y estructura de la investigación y el procedimiento disciplinario brindar valor probatorio pleno a las comparecencias, ya que bastaría con su mera formulación para darles credibilidad y así evitar toda auditoría o investigación en la que se recaben pruebas para demostrar los extremos de tales aseveraciones. Dicho en otras palabras, bastaría con la existencia de comparecencias en el sumario, que incriminaran a los servidores públicos de este Alto Tribunal, para que resultara innecesaria toda labor de investigación, recabación de pruebas y el respeto al derecho de defensa de los gobernados, a fin de emitir la determinación definitiva correspondiente.

Las comparecencias, en términos del artículo 29, segundo párrafo, del Acuerdo General 9/2005, del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, sólo constituyen un medio para conocer de hechos que pudieran constituir responsabilidades administrativas de los servidores públicos de este Alto Tribunal, con apoyo en las cuales la Contraloría está facultada para practicar las investigaciones pertinentes, por lo tanto, no constituyen medios de prueba que por sí solos sean suficientes para enervar la presunción de inocencia que les asiste a los imputados.

Por lo tanto, las comparecencias, en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, sólo prueban plenamente que ante la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se formularon las declaraciones o manifestaciones que motivaron el inicio de la investigación que se siguió en contra de ***** , ***** , ***** , ***** , ***** y ***** , con respecto al acoso sexual ambiental.

PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 6/2015

Finalmente, debe remarcarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que al servidor público imputado le asiste el derecho fundamental de presunción de inocencia, en los términos que se han dejado sentados a lo largo de esta ejecutoria; en consecuencia, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que no existen suficientes evidencias para considerar que ***** , ***** , ***** , ***** , ***** y ***** , incurrieron en el acoso sexual ambiental al cual se refiere el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 8, fracción VI, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

No es obstáculo para alcanzar la conclusión anterior el hecho de que las conductas imputadas en el auto de inicio del procedimiento disciplinario hayan sido calificadas como acoso sexual ambiental, práctica que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha decidido afrontar y, en su caso, considerarla grave para efectos de responsabilidades, pues ni en el Acuerdo General III/2012 ni en el respectivo Manual de Buenas Prácticas para investigar y sancionar el acoso sexual en la Suprema Corte de Justicia de la Nación establecieron prescindir de las cargas probatorias necesarias para enervar el principio de presunción de inocencia que asiste al servidor público imputado, ni de las formalidades que exige la legislación procesal aplicable para ofrecer, desahogar y valorar el material probatorio tendente a acreditar las referidas prácticas. Para demostrar lo anterior, es menester referir el contenido de los citados instrumentos, en lo conducente.

De acuerdo con el artículo 2º, fracción II, del Acuerdo General de Administración III/2012, el acoso sexual puede definirse como el conjunto de actos o comportamientos de índole sexual, en un evento o en una serie de ellos, que atentan contra la autoestima, la salud, la integridad, la libertad y la seguridad de las personas; entre otros: contactos físicos indeseados, insinuaciones u observaciones marcadamente sexuales, exhibición no deseada de pornografía, o exigencias sexuales verbales o de hecho.

El acoso sexual puede ser ambiental y consistir en acercamientos corporales u otras conductas de naturaleza sexual indeseadas u ofensivas para quien las recibe, o bien, la utilización de expresiones o imágenes de naturaleza sexual que razonablemente resulten humillantes u ofensivas para quien las recibe.

Ahora bien, para efectos de su investigación y demostración en un procedimiento disciplinario, el Iproipo Acuerdo General III/2012, el artículo 3º dispone que se deberá proceder del siguiente modo: (i) analizar la conducta denunciada como acoso sexual con la finalidad de determinar la modalidad, esto es, si corresponde a un chantaje sexual o ambiental; (ii) determinar el ámbito espacial en el que ocurrió para caracterizarlo como sucedido en el ámbito de trabajo; (iii) evaluar razonablemente la ausencia de consentimiento libre y voluntario por parte de la víctima respecto de la conducta de contenido sexual materia de la queja; (iv) aplicar el estándar de “persona razonable” como mecanismo de interpretación respecto del significado de ciertas conductas y su aptitud para generar intimidación, exclusión, ofensa, presión, humillación, miedo o inseguridad sexual; (v) establecer qué elementos acreditarían la intencionalidad de quien sea probable

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

responsable; y, (vi) evaluar las relaciones de poder, formales o informales entre las personas involucradas.

Sin embargo, en términos del artículo 5º del mismo Acuerdo General, la evaluación de los tópicos anteriores requiere de medios de prueba idóneos obtenidos durante la investigación, en la inteligencia de que en cuanto a la valoración de la declaración de la parte afectada, serán relevantes los criterios establecidos por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de las personas que resultan víctimas de delitos de índole sexual.²²⁴

En el caso concreto, el material probatorio recabado por la Contraloría de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no reúne las formalidades necesarias para tener valor probatorio en términos de la legislación aplicable, de tal modo que las denuncias, declaraciones o comparecencias deben ser valoradas con apoyo en los criterios que ha sostenido este Alto Tribunal para efectos de demostrar los delitos de índole sexual.

Al respecto, ha sido criterio reiterado de este órgano colegiado que en los ilícitos de esa índole, la declaración de la víctima adquiere un papel preponderante, ya que en general esas infracciones se cometen *sin testigos*; **sin embargo, ello no implica que se prescinda de la valoración de algún otro medio de prueba que arroje algún**

²²⁴ “**Artículo 5.-** Durante la investigación, el órgano competente deberá considerar cuáles son los medios de prueba idóneos y procurar hacerse de ellos de manera oficiosa, sin esperar a que sea la persona denunciante quien los ofrezca o promueva.
En cuanto a la valoración de la declaración de la parte afectada, serán relevantes los criterios establecidos por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de las personas que resultan víctimas de delitos de índole sexual.
(...)”

indicio que corrobore la declaración. Lo anterior se desprende de las tesis que llevan por rubros: “VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LA MUJER. REGLAS PARA LA VALORACIÓN DE SU TESTIMONIO COMO VÍCTIMA DEL DELITO”,²²⁵ “DELITOS SEXUALES, VALOR DE LA DECLARACION DE LA OFENDIDA EN LOS”,²²⁶ “ESTUPRO, VALOR DE LA DECLARACION DE LA OFENDIDA”,²²⁷ “OFENDIDA,

²²⁵ “De acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, el Estado debe establecer procedimientos legales, justos y eficaces para que las mujeres puedan acceder efectivamente a la justicia, pues las mujeres víctimas de violencia, en especial la de tipo sexual, enfrentan barreras extraordinarias cuando intentan ejercer este derecho. Por lo tanto, con el objeto de remover esas barreras, los testimonios de las víctimas de la totalidad de delitos que involucren actos de violencia sexual contra la mujer, deben ser valorados con una perspectiva de género a fin de evitar afirmaciones, insinuaciones y alusiones estereotipadas, que generen en el ánimo del juzgador una inadecuada valoración que reste credibilidad a la versión de las víctimas. Esas reglas de valoración fueron sostenidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver los casos Fernández Ortega y Rosendo Cantú y por el Pleno de esta Suprema Corte en la tesis P. XXIII/2015 de rubro: “TORTURA EN SU VERTIENTE DE VIOLACIÓN SEXUAL. EL ANÁLISIS PROBATORIO RELATIVO DEBE REALIZARSE CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.”, las cuales deben ser observadas por las personas impartidoras de justicia en este tipo de casos, que incluyen, al menos, los siguientes elementos: a) se debe considerar que los delitos sexuales son un tipo de agresión que, en general, se producen en ausencia de otras personas más allá de la víctima y la persona o personas agresoras, por lo que requieren medios de prueba distintos de otras conductas. En razón de lo anterior no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho. Asimismo, al analizar la declaración de la víctima se debe tomar en cuenta que las agresiones sexuales corresponden a un tipo de delito que la víctima no suele denunciar por el estigma que dicha denuncia conlleva usualmente; b) se debe tener en cuenta la naturaleza traumática de los actos de violencia sexual. En razón de ello se debe entender que es usual que el recuento de los hechos pueda presentar algunas inconsistencias o variaciones en cada oportunidad que se solicita realizarlo; c) Se deben tomar en cuenta algunos elementos subjetivos de la víctima, como su edad, condición social, pertenencia a un grupo vulnerable o históricamente discriminado, entre otros; d) **se debe analizar la declaración de la víctima en conjunto con otros elementos de convicción**, recordando que la misma es la prueba fundamental. Entre esos otros elementos se pueden encontrar dictámenes médicos psiquiátricos, **testimonios**, exámenes médicos, pruebas circunstanciales, indicios y presunciones; y e) las pruebas circunstanciales, indicios y presunciones, deben ser utilizadas como medios de prueba siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos. (Décima Época, Registro: 2015634, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Penal, Tesis: 1a. CLXXXIV/2017 (10a.), Página: 460)

²²⁶ “Los delitos de carácter sexual, por su naturaleza, se ejecutan fuera de toda posibilidad de ser presenciados por testigos, razón por la cual debe aceptarse como fuerte indicio presuntivo, la declaración de la ofendida, si es corroborada por otros elementos de prueba que induzcan a la certeza de los hechos imputados y contribuyan a la convicción judicial. (Época: Sexta Época, Registro: 259372, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen XCIV, Segunda Parte, Materia(s): Penal, Página: 18)

²²⁷ “La declaración de la ofendida tiene determinado valor en proporción del apoyo que le presten otras pruebas, pues aisladamente sólo constituye un indicio. En los delitos sexuales la declaración de la ofendida le da mayor fuerza a ese indicio, sin ser bastante para ser prueba plena; pero relacionado con otro, como la confesión del acusado, de haber sostenido relaciones de noviazgo con su víctima, que era señorita (cosa que estuvo negando hasta la diligencia de careo en que convino haberla desflorado), y haber excitado su sensibilidad sexual por medio de caricias y vencido el último reducto de su resistencia con la promesa de hacerla su esposa, tal conjunto de elementos constituyen la prueba circunstancial en que la ordenadora fundó su sentencia.” (Sexta Época, Registro: 260674, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen LII, Segunda Parte, Materia(s): Penal, Página: 44)

VALOR DE LA DECLARACION DE LA, EN LOS DELITOS SEXUALES”²²⁸ y “DELITOS SEXUALES”.²²⁹

En este sentido, fue correcto que la Contraloría de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación estimara que tratándose del acoso sexual ambiental, una prueba pertinente para demostrarlo era la testimonial, pues de las comparencias se advierte que a los servidores públicos vinculados al presente procedimiento les fue imputada la conducta consistente en que durante la jornada de trabajo y en su área de labores, habitual continuamente y **públicamente**, llevaban a cabo juegos de naturaleza sexual entre ellos, formularon expresiones de naturaleza sexual inapropiada, de ahí que era factible considerar que dichas infracciones **no se llevaran a cabo en lo oculto**; sin embargo, ya quedó demostrado a lo largo de esta ejecutoria el valor probatorio ineficaz que tienen las testimoniales cuando se infringe la formalidad prevista en el artículo 176 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

(vi) Omitir realizar la supervisión de los servidores públicos que se encontraban bajo su dirección, con el fin de que cumplieran con sus obligaciones legales.

²²⁸ “La Primera Sala de la Suprema Corte ha sustentado el criterio de que los delitos de carácter sexual, por su naturaleza, se ejecutan fuera de toda posibilidad de ser presenciados por testigos, razón por la cual debe aceptarse como fuerte indicio presuntivo, la declaración de la ofendida, si está corroborada por otros elementos, como un certificado médico relativo a la verosimilitud de los hechos, y cualquier otro que pueda contribuir al fincamiento de la convicción judicial.” (Quinta Época, Registro: 292695, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXXXI, Materia(s): Penal, Página: 16).

²²⁹ “Los delitos de carácter sexual, por su naturaleza, se ejecutan fuera de toda posibilidad de ser presenciados por testigos, razón por la cual debe aceptarse como fuerte indicio presuntivo la declaración de la ofendida, si está corroborada por otros elementos, como certificado médico relativo a la verosimilitud de los hechos y cualquier otro puede contribuir al fincamiento de la convicción judicial. (Quinta Época, Registro: 295431, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo CXXI, Materia(s): Penal, Página: 1108).

Finalmente, con respecto a la conducta consistente en omitir realizar la supervisión de los servidores públicos que se encontraban bajo su dirección, con el fin de que cumplieran con sus obligaciones legales, debe formularse una precisión preliminar.

De las consideraciones desarrolladas hasta este momento, se advierte que sólo está demostrada la responsabilidad administrativa de ***** y ***** , por haber introducido u ordenado introducir, respectivamente, bebidas alcohólicas a las instalaciones de la Dirección General del Canal Judicial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos del artículo 131, fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 8, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, actualmente abrogada. Asimismo, quedó acreditado que ***** participó en una práctica de acoso laboral denominada “manto sagrado”, prevista en el artículo 131, fracción XI de la misma ley orgánica, en relación con el artículo 8, fracción VI, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, actualmente abrogada.

Por lo tanto, debe partirse de la base de que la conducta atribuida a ***** , ***** y ***** , a la cual se refiere este apartado, sólo podría tener relación con las dos infracciones referidas con anterioridad.

La descripción típica que se contiene en el artículo 8, fracción XVII, que se les atribuye a los citados servidores públicos, es la siguiente:

“Artículo 8.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

(...)

XVII.- Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las disposiciones de este artículo.

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, el verbo supervisar tiene el siguiente significado:

supervisar

De super- y visar.

tr. Ejercer la **inspección** superior en trabajos realizados por otros.

Por tanto, la conducta típica consiste en no ejercer inspección sobre la actuación de los inferiores jerárquicos, a fin de que cumplan con las obligaciones previstas en todas las fracciones del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Este tipo administrativo tiene sentido para efectos de su aplicación en el presente procedimiento en la medida en la que, a juicio del Presidente de este Alto Tribunal, están acreditadas las infracciones a los artículos I, III y VI del precepto 8º, cometidas por los inferiores jerárquicos de los servidores públicos imputados y que ello denota falta de supervisión sobre su actuar durante el desempeño del servicio público.

En este orden de ideas, en primer lugar se analizará la responsabilidad administrativa de ***** y *****.

En atención al principio de presunción de inocencia que ha quedado explicado a lo largo de esta ejecutoria, la carga de la prueba con respecto a la comisión de la infracción le corresponde a la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, dicho órgano no ofreció algún medio de prueba idóneo para

enervar la presunción que le asiste a los dos citados servidores públicos, pues más bien sostiene argumentos jurídicos que no comparte este Tribunal Pleno o bien, aplica presunciones humanas que parten de hechos que no quedaron demostrados en este procedimiento de responsabilidades administrativas.

En efecto, la primera premisa de la cual arranca el auto de nueve de mayo de dos mil dieciséis es que ***** era Director General del Canal Judicial y ***** era subdirector, pero que ambos participaron en las conductas materia del presente procedimiento. Al respecto, debe decirse que, en principio, ocupar un cargo de alta jerarquía dentro de la cadena de mando, por sí mismo, es insuficiente para demostrar que los citados servidores públicos no supervisaban que sus inferiores cumplieran con las obligaciones a las cuales se refiere el artículo 8 de la ley de la materia.

Ahora bien, si se demuestra que un subordinado cometió una infracción administrativa de las comprendidas en el citado numeral, ello no integra de manera concluyente un vínculo de atribuibilidad en perjuicio del superior jerárquico en el sentido de que no supervisó a su inferior. Sostener esta afirmación traería consigo que en todos los procedimientos administrativos en los que la Contraloría demuestre que un servidor público infringió el mencionado artículo 8º, entonces, de manera inmediata y sin mayor demostración, se debería sancionar al superior jerárquico con apoyo en la fracción XVII en estudio.

Por tanto, es importante considerar que la Contraloría de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación necesitó integrar su presunción con un hecho que estimaba suficientemente acreditado, y que consistía en que ambos servidores públicos *estaban presentes* mientras sus subalternos infringían la ley o, inclusive, participaron de

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

ellas, las cuales, en el caso, consisten en la introducción de bebidas alcohólicas por parte de ***** y ***** , así como la participación en la práctica de acoso laboral por parte de *****. Sin embargo, esta afirmación no se acompaña de material probatorio alguno para demostrarla.

En efecto, tratándose de ***** , sólo existe la inferencia de que conocía o convalidaba la actuación de ***** , su subalterno conforme a la estructura ocupacional de la Dirección General del Canal Judicial que obra a foja 1804 a 1806 del expediente, sin que en este apartado la Contraloría haga referencia a algún medio de prueba de los reconocidos por la ley para demostrar ese conocimiento o consentimiento, además, en este procedimiento administrativo quedó demostrado que no se cuenta con suficientes elementos incriminatorios para demostrar que ***** participaba de las prácticas de acoso laboral a las que se refiere este expediente.

En el caso de ***** sólo se pretendió enervar el principio de presunción de inocencia con apoyo en las siguientes comparecencias:

- Comparecencia de veintitrés de febrero de dos mil quince a cargo de ***** , en su carácter de Técnico operativo del Canal Judicial.

(...) si bien el licenciado ***** no ingería alcohol, al menos públicamente, sí solapaba que el personal bebiera dentro de las oficinas de la redacción (....)

- Comparecencia de dos de marzo de dos mil quince, a cargo de *****, en su carácter de entonces Coordinador Administrativo adscrito a la Dirección General del Canal Judicial.

“Finalmente, sobre todo en la oficina de *****, era una práctica común y de todos conocida, que él estuviera consumiendo alcohol, por lo regular, tequila, situación que sabía y permitía *****, ya que en diversas ocasiones llegaron a comentarlo como queja en la Dirección General.”

- Comparecencia de cuatro de marzo de dos mil quince a cargo de *****.

“(...) quiero aclarar que ***** jugaba “play station” con *****; esta circunstancia era conocida por ***** (...)”

Es menester descartar la comparecencia de cuatro de marzo de dos mil quince a cargo de *****, pues como quedó demostrado a lo largo de esta ejecutoria. Por lo tanto, la comparecencia de ***** se refiere a hechos que no deben ser considerados dentro del procedimiento disciplinario, so pena de infringir los principios de legalidad y el debido procedimiento.

En cuanto a las restantes comparecencias, éstas constituyen más bien imputaciones que, sin medios de prueba pertinentes, idóneos y apegados a las formalidades esenciales del procedimiento, son insuficientes para determinar la existencia de la infracción administrativa y la correlativa responsabilidad, pues sería contrario a la naturaleza y estructura de la investigación y del procedimiento disciplinario brindar valor probatorio pleno a las comparecencias, ya que bastaría con su mera formulación para darles credibilidad y así

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

evitar toda auditoría o investigación en la que se recaben pruebas para demostrar los extremos de tales aseveraciones.

Las comparecencias, en términos del artículo 29, segundo párrafo, del Acuerdo General 9/2005, del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, sólo constituyen un medio para conocer de hechos que pudieran constituir responsabilidades administrativas de los servidores públicos de este Alto Tribunal, con apoyo en las cuales la Contraloría está facultada para practicar las investigaciones pertinentes, por lo tanto, no constituyen medios de prueba que por sí solos sean suficientes para enervar la presunción de inocencia que les asiste a los imputados.

Las comparecencias, como su propio nombre lo indica, no se desahogaron bajo las formalidades de la prueba testimonial, por lo que más bien se trata de pruebas documentales públicas en las que se hacen constar declaraciones rendidas ante la autoridad competente. En este aspecto, el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles sólo permite concluir que las mismas prueban plenamente que ante la Contraloría de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se formularon las declaraciones o manifestaciones que motivaron el inicio de la investigación que se siguió en contra de ***** y *****.²³⁰

²³⁰ **ARTICULO 202.-** Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado.

Las declaraciones o manifestaciones de que se trata prueban plenamente contra quienes las hicieron o asistieron al acto en que fueron hechas, y se manifestaron conformes con ellas. Pierden su valor en el caso de que judicialmente se declare su simulación.

También harán prueba plena las certificaciones judiciales o notariales de las constancias de los libros parroquiales, relativos a las actas del estado civil de las personas, siempre que se refieran a época anterior al establecimiento del Registro Civil. Igual prueba harán cuando no existan los libros

Como ya se mencionó, en el auto de inicio del procedimiento disciplinario se concluyó que ambos servidores públicos omitieron cumplir con su deber de supervisión sobre sus subordinados porque no sólo no evitaron estas irregularidades, lo cual exige demostrar que tenían pleno conocimiento de ellas, sino que también participaron directamente en la comisión de algunas. Esta inferencia no resulta aplicable para imputar responsabilidad por falta de supervisión o inspección a ***** y *****, pues como ya quedó demostrado en esta ejecutoria, no existe material probatorio idóneo para acreditar su participación en alguna de las infracciones y por ende, que conocían de las conductas imputadas a sus subalternos.

Finalmente, es menester señalar que en el auto de inicio del procedimiento administrativo, se integró el tipo administrativo previsto en el artículo 8, fracción XVII, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores públicos, con las conductas consistentes en **omitir la implementación de acciones de prevención y aplicar medidas de corrección**, lo cual, a juicio de este Tribunal Pleno, entraña un problema de violación al principio de tipicidad.

En efecto, la infracción prevista en ley consiste en no supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las disposiciones del artículo 8, y para determinar que ésta se acredita es menester subsumir los hechos en el supuesto de la norma, pero evitando integrar los supuestos de la infracción.

de registro, original y duplicado, y cuando, existiendo, estén rotas o borradas las hojas en que se encontraba el acta.

En caso de estar contradicho su contenido por otras pruebas, su valor queda a la libre apreciación del tribunal.”

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

Como se sostuvo en su oportunidad, en aras del principio de tipicidad, a la autoridad sancionadora se le prohíbe interpretar de manera extensiva la infracción, pues ello sería fuente de creación de tipos infractores en contra de la seguridad jurídica. Así, el aplicador sólo debe sancionar aquellos comportamientos que reúnan todos los requisitos que configuran el tipo infractor aplicado.

Por tanto, si al servidor público se le finca responsabilidad por omitir la implementación de acciones de *prevención* en la comisión de infracciones, esto es, por no accionar algún mecanismo para anticiparse a su ejecución,²³¹ se le estaría sancionado por una conducta que no está prevista en ley, diversa a la mera labor de supervisión o inspección del cumplimiento de las obligaciones, y que, por tanto, no pudo prever con la suficiente anticipación para normar su conducta y así evitar la pena estatal. Lo mismo debe decirse de la integración de la infracción consistente en *aplicar medidas de corrección*, las cuales, más bien, corresponden al ámbito del derecho disciplinario y a los órganos competentes para ello, cuestión que no se desprende con claridad del deber de supervisar que los subalternos se apeguen a los deberes previstos en el artículo 8 de la ley de la materia.

²³¹ El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define el vocablo “prevención”, del siguiente modo:

Del lat. *praeventio*, -ōnis.

1. f. Acción y efecto de prevenir.

2. f. Preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar algo.

3. f. Provisión de mantenimiento o de otra cosa que sirve para un fin.

4. f. Concepto, por lo común desfavorable, que se tiene de alguien o algo.

5. f. Puesto de policía o vigilancia de un distrito, donde se lleva preventivamente a las personas que han cometido algún delito o falta.

6. f. Mil. Guardia del cuartel, que cела el orden y policía de la tropa.

7. f. Mil. Lugar donde está la prevención (ll guardia).”

Por las razones expuestas, no se cuenta con material probatorio suficiente para demostrar que ***** y ***** incurrieron en la infracción consistente en no supervisar que sus subalternos cumplieran con las obligaciones previstas en el artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, prevista en la fracción XVII de ese mismo numeral.

A continuación se procede a determinar si ***** incurrió en la infracción señalada.

A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las acciones demostradas en esta ejecutoria a cargo de ***** denotan que omitió ejercer supervisión sobre su subalterno *****.

Para arribar a esta conclusión, en primer lugar es menester señalar cuáles son los hechos comprobados que permiten inferir la comisión de la conducta ilícita a cargo de ***** . Éstos consisten en que dicho servidor público instruyó a su subalterno ***** para que en algunas ocasiones adquiriera bebidas alcohólicas y las ingresara a las oficinas de la Dirección General del Canal Judicial, sin que existiera alguna razón institucional para ello o alguna justificación demostrada en autos que no fuera incompatible con las funciones de impartición de justicia de este Alto Tribunal. El segundo elemento de hecho es que de acuerdo con la estructura ocupacional que obra en las fojas 1804 a 1806 del expediente en el que se actúa, ***** ocupaba la Subdirección General de Contenidos del Canal Judicial y tenía sujeto a su dirección, como profesional operativo, a ***** .

La instrucción expresa y conciente de ***** girada a su subalterno para infringir el artículo 8, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, denota

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

que excepcionó a ***** del régimen de supervisión que exigía el caso, supuesto que sanciona la fracción XVII a la que se refiere este apartado. En este sentido, ***** no sólo no evitó la infracción del artículo 8 a cargo de su subalterno, sino que la incitó.

Los hechos demostrados permiten invocar en contra del servidor público la presuncional humana que se integra en términos de los artículos 190, fracción II, y 192, del Código Federal de Procedimientos Civiles,²³² medio de prueba que con otras palabras se ofreció en el auto de inicio de responsabilidad administrativa de fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis.

Esta conclusión no implica que a ***** se le incremine dos veces por la misma conducta, porque la infracción consistente en girar instrucciones para introducir bebidas alcohólicas entraña una conducta de acción, la cual, una vez acreditada, es útil para demostrar la comisión de una diversa, que consiste en no ejercer una auténtica labor de inspección sobre dicho subordinado al excepcionarlo de la supervisión a la que se encontraba sujeto.

Por lo tanto, con los elementos que obran en autos, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene por demostrado que ***** es administrativamente responsable de la infracción prevista en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 8, fracción XVII, de la Ley

²³² **ARTICULO 190.-** Las presunciones son:

I.- Las que establece expresamente la ley, y

II.- Las que se deducen de hechos comprobados.

ARTICULO 192.- La parte que alegue una presunción sólo debe probar los supuestos de la misma, sin que le incumba la prueba de su contenido.”

Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, actualmente abrogada.

SEXTO.- Individualización de las sanciones. En este considerando se procederá a fijar la sanción que corresponda imponer a ***** y *****, por las conductas consistentes en introducir bebidas alcohólicas a las instalaciones de la Dirección General del Canal Judicial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, las cuales constituyen una infracción al artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 8, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos actualmente abrogada. Asimismo, se procederá a fijar la sanción de ***** por participar en conductas que propician el acoso laboral, en particular, la práctica denominada “manto sagrado”, en infracción al artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 8, fracción VI, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, actualmente derogada.

(i) *****.

***** ocupa el cargo de Profesional Operativo, Rango E, puesto de Base, adscrito a la Dirección General del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir del primero de diciembre de dos mil siete.²³³

A juicio del Pleno de este Alto Tribunal debe imponérsele ***** la sanción de amonestación pública, prevista en el artículo 135, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, tomando en consideración al efecto los elementos a que alude el artículo 14 de la

²³³ Foja 117 del cuaderno de pruebas 14 del procedimiento de responsabilidad administrativa en el que se actúa.

PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 6/2015

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, por remisión expresa del artículo 136 de la Ley Orgánica antes citada:

Servidor público	*****
Gravedad de la infracción	La conducta consistente en introducir bebidas alcohólicas a las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual no está calificada como grave por el artículo 136 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, sin embargo, es conveniente suprimir esa práctica en este Alto Tribunal..
Nivel jerárquico	Profesional Operativo, Rango E, puesto de Base
Antigüedad	Diez años un mes, por lo que cuenta con suficiente experiencia para normar su conducta conforme a las fuciones de su cargo.
Condiciones exteriores de ejecución	El servidor público aduce que cometió la infracción cuatro o cinco veces, en un lapso no mayor de dos meses, sin interferir en sus labores y ello fue por instrucciones de su superior jerárquico, ***** , lo cual fue corroborado por este último en su comparecencia de ley.
Circunstancias socioeconómicas del servidor público	Percibe un total anual bruto de \$654,828.00 M.N., con un Impuesto Sobre la Renta retenido de \$112,007.00 M.N., lo cual da un total anual neto de \$542,821.00 M.N. ²³⁴
Reincidencia	No hay constancia que hubiere sido sancionado anteriormente por motivos iguales o similares.
Monto del beneficio obtenido	No lo hay, puesto que la infracción administrativa cometida no implica un daño patrimonial a este Alto Tribunal.
Antecedentes del infractor	Ninguno que resulte relevante para este procedimiento disciplinario.

(ii) *****.

²³⁴ http://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2017/docs/03/r03_apgcd.pd.

***** ocupó el cargo de Subdirector General, puesto de confianza, rango “A”, adscrito a la Dirección General del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.²³⁵

A juicio del Pleno de este Alto Tribunal debe imponérsele a ***** la sanción de **inhabilitación para ocupar cargos públicos por un año**, prevista en el artículo 135, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Lo anterior porque si bien las infracciones cuya comisión se demostró en esta ejecutoria no están consideradas como graves por la ley, ***** ya no labora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que impide sancionarlo con un apercibimiento, amonestación, suspensión o destitución del puesto, pues estas sanciones administrativas persiguen reprimir al servidor público en funciones y, en el caso, se trata de un ex servidor público. Tampoco cabe la sanción económica, pues para que ésta proceda se exige el beneficio o lucro del ex servidor público, a expensas de un perjuicio o daño causado al Estado, con motivo de la comisión de la falta administrativa, extremo éste que tampoco se actualiza en la especie.

Resulta aplicable, en lo conducente, el criterio de la Segunda Sala de este Alto Tribunal que el Pleno comparte:

INHABILITACIÓN TEMPORAL PARA DESEMPEÑAR EMPLEOS, CARGOS O COMISIONES EN EL SERVICIO PÚBLICO. EL ARTÍCULO 53, FRACCIÓN VI, DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE LA ESTABLECE COMO SANCIÓN POR FALTAS ADMINISTRATIVAS, NO VIOLA LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 13 DE MARZO DE 2002 EN EL ÁMBITO FEDERAL, AÚN EN VIGOR EN EL DISTRITO FEDERAL). Las referidas garantías contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no

²³⁵ Fojas 391 y siguientes del cuaderno de pruebas 1 del procedimiento de responsabilidad administrativa en el que se actúa.

PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 6/2015

exigen que el legislador establezca en el mismo artículo, el procedimiento para regular cada una de las relaciones que se entablen entre las autoridades y los gobernados, pues basta que contenga los elementos mínimos para que la autoridad y el afectado conozcan la norma aplicable, sus alcances y consecuencias, que impidan a la autoridad actuar de manera arbitraria. Por tanto, la fracción VI del artículo 53 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, al disponer que la inhabilitación temporal es para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, sin precisar en qué ámbito surtirá efectos dicha sanción, no vulnera las garantías de legalidad y seguridad jurídica mencionadas, en virtud de que la referida inhabilitación constituye una sanción acorde al sistema de responsabilidades administrativas previsto constitucional y legalmente, que genera certidumbre sobre las consecuencias jurídicas de esa sanción en todos los órdenes de gobierno; esto último se corrobora con los artículos 109, 110 y 113 constitucionales, los cuales prevén un sistema que regula la actuación de los servidores públicos bajo los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que deben observar las personas en el desempeño de sus funciones, y los procedimientos para la aplicación de sanciones, en caso de inobservancia, entre otras, las de carácter administrativo. Esto es, la sanción impuesta a servidores públicos del Distrito Federal, con fundamento en el precepto legal indicado, **no se restringe o limita en función del ámbito de gobierno donde la persona prestaba sus servicios, ni por la competencia de la autoridad que la sancionó, en virtud de que la inhabilitación guarda relación directa e inseparable con la esfera personal del servidor público, independientemente del lugar donde desempeñe sus servicios, pues la sanción de que se trata consiste en la incapacidad absoluta para obtener o ejercer cargos públicos, con la finalidad de proteger el servicio público prestado por la persona a la sociedad**, considerando aquél como un concepto unitario autónomo del nivel de gobierno en que se preste, pues los principios que se busca tutelar no se encuentran restringidos o limitados en función del ámbito de gobierno; por tanto, la sanción administrativa consistente en la "inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público", rige para todos los puestos públicos y en todos los niveles de gobierno.²³⁶

Para efectos de la individualización de la sanción, se tomarán en cuenta los elementos a que alude el artículo 14 de la Ley Federal de

²³⁶ Época: Novena Época, Registro: 173915, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Noviembre de 2006, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: 2a. LXXXV/2006, Página: 335

PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, por remisión expresa del artículo 136 de la Ley Orgánica antes citada:

Servidor público	*****
Gravedad de las infracciones	Las conductas consistentes en ordenar que se introdujeran bebidas alcohólicas a las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y omitir supervisar a su subordinado ***** , no están calificadas como graves en términos del artículo 136 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, sin embargo, es menester suprimir este tipo de prácticas en este Alto Tribunal.
Nivel jerárquico	Subdirector General, puesto de confianza, rango A, el cual le exigía respetar de manera escrupulosa las reglas del servicio público.
Antigüedad	Del primero de enero de dos mil diez al 9 de marzo de dos mil quince (baja por renuncia)
Condiciones exteriores de ejecución	El servidor público aduce que cometió la infracción consistente en ordenar la introducción de bebidas alcohólicas, bajo la circunstancia de que le pedía un favor personal a su subalterno, fuera de su horario de trabajo, para ofrecer regalos a las personas ajenas a la institución que facilitaban su trabajo. Estas justificaciones le generan perjuicio, porque abusó de su poder jerárquico para inducir a un tercero a cometer la infracción de introducir materialmente las bebidas; en un segundo plano, el servidor público tiene proscrito realizar conductas que atenten contra la independencia de este Poder, como aceptar o ejercer presiones, debiendo conducirse con profesionalismo y dignidad, en términos del artículo 131, fracciones I y VIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, lo cual no queda revelado al ofrecer regalos para desempeñar su función de Subdirector General en el Poder Judicial de la Federación.
Circunstancias socioeconómicas del servidor público	Conforme a su expediente personal, sueldo mensual bruto de \$127,303.06 M.N.
Reincidencia	No hay constancia que hubiere sido sancionado anteriormente por motivos iguales o similares.

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

Monto del beneficio obtenido	No lo hay, puesto que la infracción administrativa cometida no implica un daño patrimonial a este Alto Tribunal.
Antecedentes del infractor	Ninguno que resulte relevante para este procedimiento

(iii) *****

***** ocupa el cargo de Técnico Operativo, rango C, adscrito a la Dirección General del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.²³⁷

A juicio del Pleno de este Alto Tribunal debe imponérsele a ***** la sanción de suspensión en el ejercicio de su cargo por un periodo de seis meses, prevista en el artículo 135, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior porque si bien la infracción por sí misma no es grave en términos del artículo 136 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el presente procedimiento se radicó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con motivo de la concurrencia de dos conductas que a este Alto Tribunal le interesa evitar y suprimir, que consisten tanto en el acoso sexual ambiental como en el acoso laboral, de tal modo que hicieron que se surtiera la competencia en favor de este Pleno.

Para efectos de la individualización de la sanción, se tomarán en cuenta los elementos a que alude el artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, por remisión expresa del artículo 136 de la Ley Orgánica antes citada:

²³⁷ Foja 290 del cuaderno de pruebas 14 del procedimiento de responsabilidad administrativa en el que se actúa.

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

Servidor público	*****
Gravedad de la infracción	La conducta consistente en participar activamente en el acoso laboral, a través de sostener la silla de la persona sujeta a la práctica denominada “manto sagrado” (la cual a su vez consistía en cubrir la cabeza de la víctima, con una sábana, cortina o manta negra, sentarla en una silla, para después propinársele múltiples golpes), fue considerada grave para efectos de iniciar el presente procedimiento administrativo, por constituir acoso laboral.
Nivel jerárquico	Técnico Operativo, Rango C.
Antigüedad	Diez años con tres meses, por lo que cuenta con suficiente experiencia para normar su conducta conforme a las fuciones de su cargo.
Condiciones exteriores y medios de ejecución	El servidor público aduce que cometió la infracción por presiones de sus superiores jerárquicos, lo cual no constituye una causa de justificación de la conducta ilícita, por no desprenderse así de la ley o de su interpretación. Afirma que su participación se limitaba a sujetar a la persona que se encontraba sentada en la silla para que no se cayera y evitar mayores agresiones sobre la víctima. Toda vez que la confesión es la única prueba que existe en su contra, ²³⁸ le benefician las manifestaciones que denotan cierto grado de interés por proteger a la víctima, en términos del artículo 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles .
Circunstancias socioeconómicas del servidor público	Total anual bruto de \$646,581.00, con un Impuesto Sobre la Renta retenido de \$109,276.00, lo cual da un total anual neto de \$537,305.00 ²³⁹
Reincidencia	No hay constancia que hubiere sido sancionado anteriormente por motivos iguales o similares.
Monto del beneficio obtenido	No lo hay, puesto que la infracción administrativa cometida no implica un daño patrimonial a este Alto Tribunal.
Antecedentes del infractor	Intervino compareciendo a este

²³⁸ Si bien ***** testificó que el hoy sancionado “no participaba mucho” en esa práctica, dicho medio de prueba carece de valor probatorio por no reunir las formalidades a las que se refiere el artículo 176 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

²³⁹ http://www.pef.hacienda.gob.mx/work/models/PEF2017/docs/03/r03_appcd.pdf

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

	procedimiento administrativo en la etapa de investigación ²⁴⁰ y confesó su participación en la conducta infractora.
--	--

Por lo expuesto y fundado, es de resolverse,

PRIMERO.- *****, *****, *****, ***** y *****, no son administrativamente responsables de la infracción administrativa establecida en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 8º, fracción III, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, actualmente abrogada.

SEGUNDO.- ***** y *****, son administrativamente responsables de la infracción administrativa establecida en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 8º, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, actualmente abrogada, en la modalidad de introducir bebidas alcohólicas a este Alto Tribunal.

TERCERO.- *****, ***** y *****, no son administrativamente responsables de la infracción administrativa establecida en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 8º, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, actualmente abrogada, en

²⁴⁰ Foja 87 del Tomo I del Procedimiento en el que se actúa.

la modalidad de introducir bebidas alcohólicas en este Alto Tribunal.

CUARTO.- *****, *****, *****, ***** y *****, no son administrativamente responsables de la infracción administrativa establecida en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 8º, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, actualmente abrogada, en la modalidad de ingerir bebidas alcohólicas en este Alto Tribunal.

QUINTO.- *****, ***** y *****, no son administrativamente responsables de la infracción administrativa establecida en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 8º, fracción I, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, actualmente abrogada, en la modalidad de realizar actividades ajenas a sus funciones.

SEXTO.- *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, ***** y *****, no son administrativamente responsables de la infracción establecida en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 8º, fracción VI, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, actualmente abrogada.

SÉPTIMO.- ***** es administrativamente responsable de la infracción establecida en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 8º, fracción VI, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

Públicos, actualmente abrogada.

OCTAVO.- ***** y ***** no son administrativamente responsables de la infracción establecida en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con la obligación establecida en el artículo 8°, fracción XVII, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, actualmente abrogada.

NOVENO.- ***** es administrativamente responsable de la infracción establecida en el artículo 131, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con la obligación establecida en el artículo 8°, fracción XVII, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, actualmente abrogada.

DÉCIMO. Se impone a ***** la sanción consistente en amonestación pública, prevista en el artículo 135, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación

DÉCIMO PRIMERO. Se impone a ***** la sanción consistente en la inhabilitación para ocupar cargos públicos por un año, prevista en el artículo 135, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

DÉCIMO SEGUNDO. Se impone a ***** la sanción de suspensión en el ejercicio de su cargo por un periodo de seis meses, prevista en el

artículo 135, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

DÉCIMO TERCERO.- Remítase copia autorizada de la presente resolución a la Dirección General de Personal y a la Contraloría de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de que realicen los trámites correspondientes.

Notifíquese personalmente esta determinación a las personas sujetas al presente procedimiento, por conducto de la Secretaría Ejecutiva de la Contraloría del Alto Tribunal; y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido.

Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de nueve votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Luna Ramos, en contra de las consideraciones, Franco González Salas, en contra de algunas consideraciones, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Piña Hernández, en contra de la responsabilidad administrativa que se finca a ***** y ***** y, por ende, en contra de las sanciones contenidas en los puntos resolutivos décimo y décimo primero, Medina Mora I., en contra de algunas consideraciones y precisando reservas en cuanto a las cargas probatorias en los procedimientos de responsabilidad administrativa y Laynez Potisek, en contra de algunas consideraciones. Los señores Ministros Cossío Díaz y Pardo Rebolledo reservaron su derecho para formular sendos votos concurrentes. Votaron en contra los señores Ministros Pérez Dayán y Presidente Aguilar Morales. El señor Ministro Presidente Aguilar Morales reservó su derecho para formular voto particular.

**PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA 6/2015**

El señor Ministro Presidente Aguilar Morales hizo la declaratoria correspondiente.

Firman el señor Ministro Presidente Luis María Aguilar Morales y el señor Ministro Ponente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, con el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.

**PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA
NACIÓN**

MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES

PONENTE

MINISTRO ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA.

CCR/mgp

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL SEÑOR MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, RESPECTO DE LA RESOLUCIÓN PRONUNCIADA POR EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 6/2015.

En esta resolución se determinó, en lo conducente, desestimar el acreditamiento de la responsabilidad atribuida a diversos servidores públicos. Para arribar a esa decisión, en el considerando cuarto se fijan los principios legales para determinar la idoneidad y pertinencia del valor probatorio, lo cual posteriormente sirvió de base para resolver en el sentido señalado; sin embargo, respetuosamente difiero sustancialmente del criterio mayoritario en relación con estas premisas fijadas como aspecto previo en el fallo y, en consecuencia, tampoco coincido con la conclusión a la que se arriba en relación con el no acreditamiento de la responsabilidad de dichos servidores públicos, por las razones que a continuación expongo:

Los procedimientos de responsabilidad administrativa respecto de servidores públicos de la Suprema Corte tienen la particularidad de que son instruidos por integrantes del propio órgano al que pertenece el probable responsable, lo que supone que los actos que realiza la entidad habilitada como órgano investigador (Contraloría) parten de una base de confianza y buena

**VOTO PARTICULAR EN EL PROCEDIMIENTO
DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 6/2015**

fe que los hace inequívocos a un proceso penal o civil. En el momento en que la Contraloría tiene noticia de un hecho probablemente infractor, lo primero que debe ordenar es la práctica de diligencias tendientes a comprobar, inicialmente, si existe la conducta y, subsecuentemente, si éstas pueden traducirse en infracciones administrativas y si su comisión puede ser atribuible a un servidor público; por lo cual, desahogadas tales diligencias, es cuando jurídicamente se está en aptitud real, no sólo de saber si los hechos denunciados son infractores, sino también, si a las personas señaladas se les puede atribuir su comisión.

Dada esa circunstancia es que durante la integración de la investigación no debe ser exigible agotar las formalidades legales que al menos para la declaración de personas exige el Código Federal de Procedimientos Civiles, como lo planteó la decisión mayoritaria, pues es evidente que durante esa incipiente etapa no se tiene certeza, incluso, de la existencia del hecho ni de las personas involucradas, así como del resultado de la indagatoria. Cabe señalar que esa condición puede encontrarse en múltiples casos en los que la normatividad aplicable reconoce valor a las pruebas obtenidas durante la fase de investigación de un procedimiento, aun cuando en determinada prueba no se actualicen todas las formalidades legales o en su obtención no se desarrolle o siga un protocolo específico, dependiendo del tipo de prueba. Así, por ejemplo, en materia fiscal, tratándose de las facultades de comprobación, así como en la diversa de competencia económica, respecto de la investigación de prácticas monopólicas, en las que no se resta valor probatorio a las diligencias practicadas durante esas etapas, que cumplen con las formalidades mínimas

**VOTO PARTICULAR EN EL PROCEDIMIENTO
DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 6/2015**

establecidas por la ley aplicable, precisamente por tratarse de una fase previa a sus respectivos procedimientos, quedando a salvo el derecho de defensa del imputado. Así, incluso, lo ha sostenido la Segunda Sala de esta Suprema Corte en diversos precedentes, como el que dio origen a la tesis de rubro: *COMPETENCIA ECONÓMICA. EL ARTÍCULO 31, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, VIGENTE HASTA EL 6 DE JULIO DE 2014, NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE NO AUTOINCRIMINACIÓN.*

Derivado de lo anterior, considero que a la obtención de pruebas en una etapa de investigación no le resulta aplicable la observancia estricta de aquello que sucede en un proceso, como son los civiles o el penal acusatorio, sin que esa circunstancia constituya un impedimento para fincar responsabilidad administrativa a un servidor público con base en esas pruebas pues, de estimarlo así y negar *a priori* eficacia demostrativa a la narrativa de víctimas o testigos, dificultaría de sobremanera el enjuiciamiento y propiciaría que esas conductas quedaran impunes. Adicionalmente, tampoco puede pasarse desapercibido que este tipo de procedimientos, por su naturaleza, el bien jurídico tutelado no se relaciona con derechos fundamentales como son la vida, la seguridad y la integridad de las personas, como sucede en materia penal, sino que tienen como objeto principal garantizar la eficiencia en la prestación del servicio público.

**VOTO PARTICULAR EN EL PROCEDIMIENTO
DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 6/2015**

Realizadas estas precisiones preliminares en relación con el valor probatorio de las pruebas recabadas por la Contraloría, a continuación expongo brevemente los motivos por los cuales, contrariamente a lo decidido por la mayoría, a mi juicio se acredita plenamente la responsabilidad de los servidores públicos involucrados, respecto de cada una de las conductas que les fueron atribuidas.

Por cuanto hace a la infracción consistente en la **utilización de recursos informáticos para fines diversos a los que estaban afectos**¹, el material probatorio existente, concatenado con la circunstancia de que no existe algún indicio de que haya sido alterado durante el proceso de obtención y custodia, es indicativo de que existen pruebas suficientes para acreditar dicha infracción y la responsabilidad de los servidores públicos imputados.

En este sentido, en contraposición al criterio mayoritario, considero que la atención y seguimiento que se dio a la evidencia² se ajusta a lo dispuesto en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, al haberse precisado e implementado suficientemente las medidas necesarias y pertinentes para preservar integralmente las pruebas obtenidas mediante herramientas tecnológicas, lo cual basta para otorgar presunción de veracidad a las pruebas obtenidas; lo anterior, aunado a que en el expediente no obra alguna prueba de la que se advierta, al menos de forma indiciaria, que la evidencia obtenida con apoyo en la tecnología se encuentre viciada o haya sido manipulada

¹ Atribuida a *****

² Es decir, la evidencia consistente en información obtenida con apoyo de la tecnología.

**VOTO PARTICULAR EN EL PROCEDIMIENTO
DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 6/2015**

indebidamente en su proceso de obtención ni durante el tiempo que estuvo en custodia de la Contraloría, por lo que subsiste la presunción de veracidad respecto de tal información por lo que, en su caso, tendría que demostrarse la imparcialidad o impericia de los técnicos que participaron en su manipulación o que hubo un indebido manejo de las pruebas, para concluir que éstas no merecen valor probatorio, lo cual no ocurrió.

A lo anterior debe sumarse que la ausencia de un protocolo específico para la obtención de información por la vía electrónica en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos de la Suprema Corte, no puede operar en perjuicio del órgano investigador ni desacredita en forma automática el valor probatorio de la información obtenida sino que, en su caso, sólo tiene como consecuencia que sea al órgano decisorio al que le corresponda valorar si los medios utilizados para la obtención y custodia de la información se ajustó a los requerimientos mínimos reconocidos en la ley aplicable³ y, de ese modo, se determine el valor probatorio de esa información.

Por cuanto hace a las infracciones derivadas de **la introducción y consumo de bebidas alcohólicas al interior de la Dirección General del Canal Judicial⁴**, así como de **realizar actividades ajenas al cumplimiento de la función, tales como**

³ De conformidad con los artículos 210-A y 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se advierte que la valoración de la prueba queda al prudente arbitrio del resolutor, valorando la fiabilidad del método utilizado al obtener las pruebas.

⁴ Respecto de *****

jugar “play station” y dominó, difiero en relación con que no existen medios de prueba con suficiente valor probatorio para considerar que se incurrió en dichas infracciones. Contrario a lo decidido por la mayoría, con los diversos testimonios que obran en el expediente se acredita el consumo de bebidas alcohólicas en las instalaciones de la Dirección General del Canal Judicial por parte de diversos servidores públicos, así como la realización de actividades de entretenimiento ajenas a su función.

Es por eso que considero inexacto que se hayan desestimado diversas pruebas con base en que fueron ofrecidas con posterioridad a que se dictara el auto de inicio de la investigación⁵, en razón de que el Acuerdo General 9/2005 no establece que las pruebas ofrecidas después del inicio de la investigación no tengan valor probatorio. Asimismo, estimo que debió reconocerse valor a las dos fotografías ofrecidas, en tanto que, más allá de que tuvieran un dispositivo USB, también obraban en el expediente las 2 fotografías impresas y, por tanto, se les tuvo que haber reconocido valor probatorio.

Por cuanto hace a las infracciones consistentes en **Acoso laboral, que se materializó a través del maltrato físico, esto es, de la práctica del “manto sagrado”,** así como la relativa a **juegos de naturaleza sexual entre los servidores públicos y formulación de expresiones de naturaleza sexual inapropiada (acoso sexual ambiental)**, se considera que existen pruebas suficientes para acreditar que los servidores públicos, en su actuar dentro de las instalaciones de la Dirección General del Canal

⁵ Es el caso de las comparecencias de ***** y *****

**VOTO PARTICULAR EN EL PROCEDIMIENTO
DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 6/2015**

Judicial y durante su jornada de trabajo, incumplieron con la obligación de conducirse con buena conducta en su cargo, ya que se dirigieron de manera continua sin respeto y con falta de rectitud entre ellos, al llevar a cabo de manera conjunta, juegos y expresiones verbales de naturaleza sexual, lo que provocó un ambiente de trabajo sexualizado que, inclusive, resultó ofensivo para sus compañeras, como se acredita con las comparecencias respectivas, lo que atenta contra un ambiente laboral digno y libre de violencia para cualquier persona en el ámbito de lo razonable, actualizando así la causa de responsabilidad administrativa en mención.

Sobre estas conductas, considero que las comparecencias utilizadas como base probatoria para dar inicio tanto a la investigación como al procedimiento respecto de estas conductas, debieron ser valoradas, en todo caso, como dato-indicio a fin de determinar el acreditamiento de tales infracciones, atendiendo a que no se trata de una, sino de varias declaraciones en el sentido de que los involucrados participaban en esas prácticas; de ahí que, aun cuando no se les reconozca a esas comparecencias el carácter de prueba testimonial, lo cierto es que no se debió desestimar totalmente su valor probatorio.

Por cuanto hace a la infracción consistente en **omitir realizar la supervisión de los servidores públicos que se encontraban bajo su dirección, con el fin de que se cumplieran sus obligaciones legales**, considero que de la concatenación de la

**VOTO PARTICULAR EN EL PROCEDIMIENTO
DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 6/2015**

totalidad de pruebas existentes se acredita en forma suficiente la comisión de dichas conductas.

En efecto, las pruebas existentes en el expediente son suficientes para concluir que en esa oficina existía un ambiente que fomentaba o, al menos, toleraba la realización de conductas inapropiadas por parte de los servidores públicos, como es el ingreso y consumo de alcohol, la realización de actividades ajenas a sus funciones, así como la utilización sistemática de juegos y expresiones verbales de naturaleza sexual entre los compañeros. Consecuentemente, el notorio ambiente de distensión generalizado que imperaba en esa oficina evidencia que se carecía de la más mínima supervisión por parte de los encargados de supervisar a los servidores públicos adscritos a su cargo, lo cual demuestra que, aun cuando no aprobaran expresamente la forma de conducirse de esos servidores, no se demostró que realizaran algún acto tendente a evitar que sucediera, lo cual es suficiente para tener por acreditada la conducta en mención, atribuida a ***** y ***** , la cual genera un impacto destacadamente negativo, primordialmente por ocasionar una vulneración al derecho a un trabajo digno y libre de violencia de los servidores públicos adscritos a la Dirección General del Canal Judicial.

Estas son las razones esenciales por las que respetuosamente no comparto la resolución mayoritaria.

**VOTO PARTICULAR EN EL PROCEDIMIENTO
DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 6/2015**

MINISTRO PRESIDENTE

LUIS MARÍA AGUILAR MORALES

OCHC

VOTO CONCURRENT E

QUE FORMULA EL MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO EN EL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 6/2015

1.- Antecedentes

En sesión privada de diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió por mayoría de nueve votos el procedimiento de responsabilidad administrativa 6/2015, en el que se determinó que un grupo numeroso de servidores públicos no eran administrativamente responsables de diversas infracciones que les fueron atribuidas, y sólo se determinó sancionar a tres servidores públicos por algunas de las faltas que les fueron imputadas.

Lo relevante, es que fue la valoración probatoria uno de los factores principales que llevó a la absolución de distintos servidores públicos, toda vez que distintos elementos probatorios se aportaron a la investigación, sin reunir las formalidades que al respecto señala la Ley, lo que impidió darles valor.

Durante la discusión del asunto, surgieron inquietudes con respecto a dicha valoración, tomando en cuenta la trascendencia e impacto que el criterio contenido en la resolución tendrá en lo sucesivo para la valoración de documentos de prueba recabados por la visitaduría judicial durante las investigaciones que realiza y que tienen carácter previo al inicio de los procedimientos disciplinarios.

Sobre ello, externé mi conformidad con la resolución, en tanto que estimo, como en ella se afirma, que no es posible conceder valor probatorio a evidencias que no satisfagan las exigencias de Ley.

Esto es, si pruebas testimoniales recabadas durante la etapa de investigación, no cumplieron los requisitos previstos en el artículo 176¹ del Código Federal de Procedimientos Civiles, me parece razonable que a las mismas, de conformidad a lo señalado por el artículo 198 del propio ordenamiento, se les reste valor, pues este último precepto es categórico al señalar que no tendrán valor legal alguno las pruebas rendidas con infracción de lo dispuesto en los artículos del Título Cuarto del propio Código.

2.- Disenso

En la misma sesión, manifesté mi intención de formular voto concurrente, puesto que, si bien coincido, en lo general, con el sentido del proyecto, me parece que habría convenido agotar en el mismo el estudio de la posibilidad de reponer el procedimiento, a efecto de que la autoridad instructora, recabare nuevamente, con las formalidades de ley, los testimonios que se estimaron inválidos y que habrían sido fundamentales para una mejor valoración de la responsabilidad de cada servidor público en los hechos investigados.

Lo anterior, atendiendo a la naturaleza grave de las conductas denunciadas, y a la existencia de posibles víctimas de, entre otras conductas, acoso sexual, siendo precisamente éstas las que motivaron que excepcionalmente, conociera este Tribunal Pleno del asunto en su etapa de resolución, como así lo dispone el artículo 24, segundo párrafo del Acuerdo General 9/2005 del Tribunal Pleno, relativo a los procedimientos de responsabilidades administrativas de los servidores públicos de este Alto Tribunal.

¹ “**ARTÍCULO 176.-** Después de tomarse, al testigo, la **protesta de conducirse con verdad**, y de advertirlo de las penas en que incurre el que se produce con falsedad, se hará constar su nombre, edad, estado, lugar de residencia, ocupación, domicilio, si es pariente consanguíneo o afín de alguno de los litigantes, y en qué grado; **si tiene interés directo en el pleito o en otro semejante, y si es amigo íntimo o enemigo de alguna de las partes.** A continuación, se procederá al examen”.

**VOTO CONCURRENT EN EL PROCEDIMIENTO
DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 6/2015**

Me parece que la regla contenida en el artículo 25 del Acuerdo General 9/2005, lo es la de que, salvo los casos graves, será el Presidente del Alto Tribunal quien emita resolución que ponga fin a los procedimientos diversos a los señalados en el artículo 24 referido, y que, precisamente, en estos casos no graves, existe la posibilidad de que los servidores públicos afectados, interpongan el recurso de inconformidad en contra de la resolución del Presidente que determine la existencia de una infracción administrativa y la responsabilidad del servidor público en su comisión, como así lo refiere el propio artículo 72 del mismo Acuerdo.

Lo relevante, es que resultan competentes para conocer del recurso de mérito, las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (artículo 74), y que en la resolución del mismo, las Salas podrán confirmar, revocar o modificar total o parcialmente la resolución impugnada, pero también, **ordenar la reposición del procedimiento**, conforme lo prevé el diverso artículo 79 del Acuerdo 9/2005.

En tales condiciones, me parece que por mayoría de razón, el Tribunal Pleno al conocer directamente de la resolución de un procedimiento, podría disponer la reposición del procedimiento si advierte oficiosamente o a instancia de parte, la existencia de violaciones o irregularidades durante la instrucción que impidan el debido dictado de una resolución, pues de otra forma, podría ocurrir, como en el caso, que a pesar de que se advierten errores cometidos en la investigación previa, pero que pudieron ser subsanados durante

**VOTO CONCURRENT EN EL PROCEDIMIENTO
DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 6/2015**

la instrucción, se corrigieren a efecto de formar una mejor convicción respecto del contenido de la litis.

Me parece que el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, conforme a lo dispuesto en el artículo 4º del Acuerdo 9/2005, permite a los juzgadores el ordenar la aportación de las pruebas que juzguen pertinentes para formar su convicción respecto del contenido de la litis, sin limitación, prohibición alguna ni límites temporales, por lo que no estimo que existiere imposibilidad jurídica para proceder en dicho sentido.

Desde luego, de haberse recabado nuevamente las testimoniales con las formalidades legales, ello no habría necesariamente derivado en otorgar valor pleno a dichas pruebas, pues podría impactar en las mismas el tiempo transcurrido entre los hechos y la declaración válida, pero cuando menos, no se habría nulificado en su totalidad el grupo de testimonios que en el caso era pilar fundamental de las denuncias que dieron lugar al procedimiento disciplinario en cuestión.

A la vez, otros factores como prescripción y caducidad pudieron haber impactado una determinación como la derivada de una reposición del procedimiento, pero nada habría impedido separar las presuntas infracciones y los procedimientos, de tal manera que la reposición sí se dictare sobre aquello en lo que era evidente que pruebas fundamentales, no podrían ser tomadas en cuenta dada la falta de cumplimiento de las formalidades de ley.

El problema, es que en un asunto como el que nos ocupa, no existen medios de impugnación, lo que impide acudir al artículo 79 del

**VOTO CONCURRENT EN EL PROCEDIMIENTO
DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 6/2015**

Acuerdo General 9/2005; cuestión que invita a valorar la pertinencia de seguir suprimiendo dicha posibilidad en casos graves, ya que, con mayor razón, es en estos casos donde debería existir recurso.

Pero en lo que a este asunto se refiere, lo cierto es que, cuando menos, me parece que el Acuerdo General 9/2005, podría tener una interpretación que lleve a concluir que si el Tribunal Pleno, advierte errores en la instrucción, o la necesidad de pruebas que se estimen indispensables para formar su convicción sobre la litis, cuando menos debería de tener la posibilidad de devolver los autos al área instructora, a efecto de que las recopile o subsane.

En un procedimiento sancionatorio, podría llegar a pensarse que ello vulneraría los derechos del servidor público presuntamente responsable, pero me parece que el juzgador no debe tener límites para el conocimiento de la verdad, y que además, ello cobra mayor fuerza en asuntos en los que existen víctimas de la posible conducta del servidor público sujeta a investigación.

El principal motivo de mi disenso, es que cuando menos, el fallo que nos ocupa debió haber hecho una valoración con respecto a la posibilidad que existía de devolver los autos al área instructora, para reponer el procedimiento e intentar recabar con las formalidades de ley, las testimoniales de personas que eran fundamentales para confirmar o no los hechos que dieron lugar al procedimiento disciplinario iniciado.

**VOTO CONCURRENT EN EL PROCEDIMIENTO
DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 6/2015**

En cualquier caso, compartí el sentido del fallo, pues finalmente, aunque no se valoró la posibilidad de que el Tribunal Pleno devolviera los autos al área instructora, lo cierto es que dicha área tuvo la oportunidad de recabar mayores elementos de prueba y no lo hizo.

Esto es, el área instructora, estuvo en la posibilidad de haber determinado por sí sola la práctica de nuevas diligencias probatorias, a fin de fortalecer la validez de testimonios rendidos en el procedimiento de investigación, por lo que al no haber ocurrido ello, sin duda, el Tribunal Pleno, de tener que resolver con los elementos probatorios existentes en autos, no podría haber llegado a un sentido distinto al que aprobó la mayoría.

Por lo anterior, aunque en lo general comparto el sentido de la **resolución emitida en el procedimiento de responsabilidad administrativa 6/2015**, me aparto de la omisión de haber estudiado en la misma la posibilidad de haber ordenado la reposición del procedimiento o la devolución al área instructora, para que desahogara diligencias probatorias que podrían haber generado mayor convicción sobre el resultado de este fallo, entre ellas, en especial, el recabar nuevamente aquellas testimoniales que fueron fundamentales para el inicio del procedimiento disciplinario y que durante la etapa previa de investigación no se desahogaron con todas las formalidades que exige la ley.

MINISTRO

JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA

Esta hoja corresponde al voto concurrente en el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 6/2015. Fallado el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho. Conste.

GPLA